CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017

	PROCESO LEGISLATIVO
01	**1)** 02-12-2013 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115 de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Sonia Mendoza Díaz (PAN). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Diario de los Debates, 2 de diciembre de 2013.
	2) 05-12-2013 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Diario de los Debates, 5 de diciembre de 2013.
	3) 09-09-2014 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley General de Víctimas, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil**.** Presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández (PAN). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Básica. Gaceta Parlamentaria, 9 de septiembre de 2014.
	4) 14-10-2014 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 bis y 87 ter de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández (PAN). Se turnó a las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates, 14 de octubre de 2014.
	5) 27-11-2014 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. Diario de los Debates, 27 de noviembre de 2014.
	6) 19-02-2015 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Víctimas. Presentada por la Senadora Arely Gómez González (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 19 de febrero de 2015.
	7) 12-03-2015 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 12 de marzo de 2015.
	8) 29-09-2015 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo (S/P). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 12 de marzo de 2015.

PROCESO LEGISLATIVO	
	9) 08-09-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. Diario de los Debates, 8 de septiembre de 2016.
	10) 08-09-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. Gaceta Parlamentaria, 8 de septiembre de 2016.
	11) 14-04-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.** Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; Derechos Humanos, de Justicia y de Estudio Legislativos. Gaceta Parlamentaria, 14 de abril de 2016.
	12) 14-09-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 bis y 39 bis a la Ley General de Víctimas**.** Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. Diario de los Debates, 14 de septiembre de 2016.
02	04-11-2016 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 78 votos en pro, 9 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates, 25 de octubre de 2016. Discusión y votación, 4 de noviembre de 2016.
03	08-11-2016 Cámara de Diputados. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se turnó a la Comisión Justicia. Gaceta Parlamentaria, 8 de noviembre de 2016.
04	14-12-2016 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de las Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones dela Ley General de Víctimas. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 323 votos en pro, 41 en contra y 34 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 8 de diciembre de 2016. Discusión y votación 14 de diciembre de 2016.
05	03-01-2017 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017.

1) 02-12-2013
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115 de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Sonia Mendoza Díaz (PAN).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Diario de los Debates, 2 de diciembre de 2013.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 7 Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 02 de Diciembre de 2013

(Presentada por las CC. Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

"Las que suscriben, Senadora **SONIA MENDOZA DIAZ** y Senadora **ADRIANA DAVILA FERNANDEZ**, senadoras de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO SEPTIMO Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS**, *con la finalidad de establecer el derecho de las víctimas a su propia imagen y prohibir la difusión pública de las imágenes de las víctimas dado que resultan violatorias de su dignidad y su derecho a la privacidad*; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una parte fundamental de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal fue la tutela de los derechos de las víctimas o el ofendido, mismos que se encuentran contenidos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya fracción V, para efectos de la reforma que se plantea se cita a continuación:

Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Y precisa que

“El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación[…]”

Destaca que la redacción del texto constitucional en cita, busca proteger la identidad de las víctimas en la comisión de algunos delitos para garantizar su integridad personal, pero no podemos olvidar que no solamente el riesgo fundado es motivo suficiente para garantizar los derechos de las víctimas, sino que es necesario además, entre otros tantos aspectos, garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las víctimas y en el caso de todos los delitos. En este tenor, hay una añeja práctica en algunos medios de comunicación, particularmente impresos, de publicar una gran cantidad de datos personales, así como imágenes explícitas e incluso oprobiosas de las víctimas fatales de hechos presumiblemente delictivos, o bien de acontecimientos trágicos como los atentados contra la propia vida o algún accidente. Si aceptamos que la imagen es un componente esencial de los derechos de personalidad como se probará más adelante, podemos anticipar que esta praxis quebranta lo consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

dado que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

No obstante, en el caso que se utiliza como ilustrativo, la vulnerabilidad extrema de quien perdiendo la vida no puede oponerse a la toma de una fotografía y su consecuente exposición pública, no significa que ése derecho por esa condición no pueda ser exigido, y mucho menos que deba tolerarse por considerarse inevitable.

El vocablo imagen del latín imago, imaginis, significa según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “figura, representación, semejanza, apariencia de una cosa”.Por su parte, al abundar sobre el derecho a la imagen, el jurista español Costea de Castro y Bravo clasifica los llamados bienes de la personalidad de la siguiente manera:

I. Bienes esenciales de la personalidad.

i. Vida.

ii. Libertad corporal.

iii. Libertades.

II. Bienes sociales e individuales de la personalidad.

i. Bienes individuales y sociales (honor y fama)

ii. Bienes corporales y psíquicos (intimidad personal, y reproducción de la imagen).

De tal manera, que coincidiendo con lo que precisa el jurista ibérico Vicente Herce de la Prada: “La lesión del derecho de la imagen puede abarcar desde el mínimo abuso de la exposición no consentida al abuso máximo de la publicación del retrato ajeno en circunstancias tales de ofender el honor, el decoro y la reputación de la persona retratada”. Como en el caso que ha si puesto en referencia en la página que antecede.

Abundando, el derecho a la propia imagen es considerado un derecho subjetivo privado en tanto se le regule por el ordenamiento jurídico, pero si no constituye el objeto de tal regulación será reputado

Como base natural. El derecho a la propia imagen no comienza a existir hasta el momento en que se produzca una intromisión o vulneración del mismo como consecuencia de una reproducción o difusión no consentida de las imágenes de una persona o un grupo de personas.

Si coincidimos en que en algunos países de Europa la legislación de los derechos de personalidad ha llegado a tan extraordinario nivel como la regulación del derecho a la propia imagen y sus distintas implicaciones, jurídicas y económicas, no es admisible consentir que de forma abierta, pública y reiterativa, se vulnere la dignidad de las personas a través de la difusión de la imagen de las víctimas de delitos o sucesos trágicos, en una condición a la que no pueden resistirse y por parte de empresas de comunicación, cuya finalidad ulterior a la publicidad de las mismas es obtener un lucro económico a partir de la explotación comercial de esas gráficas.

Desde nuestro punto de vista, ello violenta de forma flagrante el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que consagra que:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

También contraviene el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que al abundar sobre el derecho de las personas ala Protección de la Honra y de la Dignidad, establece que:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Como ha quedado de manifiesto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la proyección de los mismos debe favorecer a todas las personas en su protección más amplia, pero además, en el caso que se refiere, respecto de los derechos de las víctimas, es evidente y notorio que estos instrumentos normativos internacionales no se están respetando por parte de algunos empresarios de comunicación, y que tampoco el Estado mexicano está tomando medida algunaque los garantice de forma efectiva. Aún y cuando la Ley General de Víctimas y sus reformas recientemente aprobadas definen con mucha claridad que el primer principio preceptuado es la dignidad humana, la cual es definida de la siguiente manera:

"La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

Encualquier caso, todanorma, institución oactoquesedesprenda delapresente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona."

Por otra parte, al analizar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 7 de la misma norma se establece que las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

"A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección desuintimidad contra injerencias ilegítimas, asícomo derecho acontar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos […]"

Deteniéndonos a observar los extremos que establece el dispositivo, veremos que la difusión pública de las imágenes de las víctimas con un fin de lucro, es el ejemplo idóneo de injerencia ilegítima en virtud de que si por ejemplo, el derecho a la propia imagen pueden contener una posible rentabilidad patrimonial cuando una persona decide comercializar los derechos desu imagen, en este caso esa, esa explotación económica ocurre por parte de la empresa de comunicación que sin consentimiento las difunde y bajo el supuesto argumento de dar a conocer una información, al dar las imágenes a la luz con un sentido abusivamente explícito, la noticia misma carece de relevancia, y más gravemente, se hace sin reparar en la divulgación de datos personales y pasando por encima de la dignidad humana de las personas, contribuyendo a hacer más traumático y doloroso el proceso de victimización que viven los familiares y amigos de la víctima.

La exposición cruda de los cuerpos inertes, desnudos o semidesnudos, destrozados, torturados, mutilados, y cualquier tipo de huellas de violencia extrema suele ser publicada en las portadas de algunos periódicos y por ende, suelen ser vistos por hijas e hijos, padres y madres, familiares, amigos, parientes y conocidos, acto cruel e inhumano que hace aún más hondo el dolor y por ende, complicado el proceso de rehabilitación.

Aquí viene a bien recordar que el artículo 4to. De la Ley define que *"son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella".* En modo tal que bien pude afirmarse que al publicitar las imágenes desus familiares víctimas, los familiares son nuevamente victimizados por la divulgación de ésas imágenes.

Además de no observar los tratados y convenios internacionales signados por nuestro país,esta grave situación pone en entredicho lo establecido en el artículo 115 de la Ley en cita, que al enumerar las obligaciones del Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional, lo constriñe en sus fracciones VIII y IX a lo siguiente:

VIII. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

IX. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

Ante la vulneración cotidiana de los derechos de las víctimas en lo tocante a la publicidad de sus imágenes, particularmentecuando han perdido la vida en condiciones verdaderamente trágicas, es visible que estas fracciones poseen un carácter meramente enunciativo en virtud de que bajo el amparo del ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión (que en realidad se subsume en el de libertad comercial), se consiente la extinción del derecho de las víctimas y sus familiares a ser respetados en su dignidad humana.

Creemos que esto ocurre porque no se ha legislado de forma clara, precisa e inequívoca sobre el derecho de personalidad que tienen las víctimas sobre el uso de su imagen y las restricciones manifiestas que deben prevalecer a la libertad de prensa respecto de la cobertura de noticias en las que se da cuenta de acontecimientos en los que hay víctimas trágicas. A partir de esta argumentación, resulta factible y necesario reformar la legislación en materia de víctimas para establecer la prohibición de difundir en medios de comunicación electrónicos, impresos u *on line*, las imágenes de las víctimas, máxime cuando un hecho trágico les arrebató la existencia y no pueden resistir en modo alguno la captura, ni difusión de la misma, pues ello vulnera gravemente la dignidad de las personas y su honor.

El jurista italiano Paolo Vercellone dice que en la relación del derecho a la propia imagen y el derecho al honor existe la posibilidad de que se presenten distintas situaciones, me permito referir la que ilustra de forma clara el supuesto jurídico que pretende legitimar la presente iniciativa:

"Que la publicación del retrato se realice también sin consentimiento del retratado y constituyendo al mismo tiempo un perjuicio al honor, decoro o reputación del retratado. Entonces habrá simultáneamente violación del derecho a la propia imagen y del derecho al honor, en cuanto veda las ofensas a los mencionadosaspectos de la personalidad del individuo; y si la legislación pone diferentes medios al servicio de uno y otro de dichos derechos subjetivos, el perjudicado podrá acudir a ellos alternativa o acumulativamente para hacer cesar la lesión, sancionar al ofensor y ser resarcido por los daños".

De tal manera que las acciones civiles que podría ejercer un particular como el daño moral, no ocurren en virtud del fallecimiento, y suele pasar que las familias tampoco las reclamen, ante el dolor y el duelo que no les permite reaccionar ante el atropello. Más lo que se debe regular de inmediato es, no la materia civil que de una u otra forma puede excitarse, sino la protección inmediata de los derechos humanos de las víctimas, y de sus familias en tanto víctimas indirectas de los hechos.

Vicente Herce de la Prada lo define de mejor manera en los siguientes términos:

"La legitimación para proteger la imagen -y el honor y e intimidad- del fallecido por las personas que familiarmente están unidos a él por vínculos de parentesco resulta lógica, puesto que toda intromisión en alguno de estos derechos alcanza de forma directa e indirecta a su familia, y, en este sentido, puede decirse que se conserva un interés legítimo, digno de tutela jurídica en defensa de la imagen, honor e intimidad del difunto".

Hemos visto que con las reformas constitucionales en materia de justicia penal, el nombre de los indiciados menores de edad por ejemplo, se mantiene a resguardo, y si observamos que la presunción de inocencia, y la política de seguridad pública implementada por el actual gobierno ha mostrado particular cautela sobre la forma en que losposibles delincuentes son presentados antela opinión pública, cuidando en todo momento la reserva de ciertos datos e imágenes, resulta inconcebible que en esta materia las víctimas sigan siendo el último eslabón que se protege o si se prefiere, nuevamente la parte más vulnerable del fenómeno delictivo que estamos viviendo.

Este es el momento de volver a dar un paso adelante en la protección efectiva de los derechos de las víctimas. La tutela del derecho a su propia imagen es una reforma sustancial que modificaría de forma radical las prácticas, pautas y códigos deontológicos con los que los medios de comunicación informan a la ciudadanía. Así ocurre sin mayor dilema en algunos países que como España o Italia, han llevado la defensa de la intimidad, el honor y los derechos de personalidad a su expresión más amplia y sin otro afán que asegurar la vigencia de los derechos humanos de las personas. Siguiendo a Herce de la Prada:

"Algunas legislaciones reconocen a los herederos el derecho a oponerse a la difusión del retrato del difunto. Responde tal criterio a un concepto admitido por muchos autores en el sentido de que son representantes de la personalidad del difunto.

En efecto, tal solidaridad entre éste y sus causahabientes exige que las ofensas dirigidas al difunto, mediante la publicación de la imagen, hieran los sentimientos de aquéllos que pretenden conseguir el cese de la perturbación reivindicando así la buena memoria del muerto".

Señoras y señores legisladores, hemos regulado en muchas ramas para evitar la "apología del delito" y su explotación comercial. Estoy convencida que de la misma manera pero con mayor urgencia, es necesario legislar en distintas materias para erradicar la "re victimización de la intimidad y el honor de las personas" y evitar el lucro económico con las imágenes de las víctimas.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO SEPTIMO Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PRIMERO. Se reforma la fracción VIII del artículo séptimo y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas, para quedar en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE VICTIMAS

TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VICTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. … ;

II. … ;

III. … ;

…

…

…

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección desuintimidad contra injerencias ilegítimas, **el derecho a su imagen,** asícomo derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

…

…

…

XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional:

I. … ;

II. … ;

III. … ;

…

…

VII. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas. **Los medios de comunicación electrónicos, impresos o por internet, en ningún caso podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que cuenten con su consentimiento expreso**;

VIII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

…

… y

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará las legislaciones que sean necesarias para hacerlas armónicas con la presente iniciativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. **Sonia Mendoza Díaz**.- Sen. **Adriana Dávila Fernández".**

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2) 05-12-2013
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRI).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Diario de los Debates, 5 de diciembre de 2013.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 05 de Diciembre de 2013

(Presentada por las CC. Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

"Quienes suscriben, Senadoras ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ y MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, de distintos Grupos Parlamentarios del Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, 164, fracción I, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día 8 de octubre del presente año, quienes suscribimos la presente, acompañadas por Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentamos una iniciativa de gran trascendencia para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de perfeccionarla para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de los diferentes delitos materia de la Ley, pero también en la protección y atención de la víctimas de éstos.

Dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, y se encuentra actualmente en un arduo y minucioso proceso de dictamen a fin de que este instrumento, necesario para el combate contra la trata y explotación de las personas en sus diferentes modalidades, resulte eficiente y eficaz para las personas operadoras del sistema de justicia, de manera que se puedan concretar las investigaciones, consignaciones, procesos y que se puedan obtener sentencias condenatorias contra quienes menoscaban o atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas de estos delitos. Es necesario que las descripciones típicas de las conductas prohibidas se hagan escrupulosamente, adicionando delitos para que ninguna persona que intervenga en el *íter críminis* pueda salir libre por no existir un tipo penal aplicable.

Es preciso establecer claramente los derechos de las víctimas y testigos de los delitos durante el proceso, las obligaciones de todas las y los servidores públicos y particulares que tienen contacto con las víctimas, además de determinar las medidas de protección que se ejecutarán a su favor.

Debido a que la Ley está siendo adecuada y reformada en su estructura, pero también en su contenido para garantizar que las víctimas sean resguardadas, atendidas, protegidas y asistidas, es indispensable vigilar que no se reduzca ningún derecho de las víctimas, por el contrario, se debe garantizar que no queden como una simple declaración de buenas intenciones, sino que se establezcan obligaciones y facultades expresas y se especifique quiénes son los entes responsables de que esos derechos puedan hacerse efectivos.

De la misma manera, teniendo en cuenta que la publicación de la Ley General de Víctimas y su reforma se hicieron de manera posterior a la entrada en vigencia de la ley en materia de trata de personas, es indefectible adecuar ambos ordenamientos para hacerlos concordantes y operantes.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas que hoy presentamos se inscribe en este propósito. En primer lugar, para garantizar que las víctimas del catálogo de delitos de trata y explotación de personas puedan acceder a la compensación subsidiaria que les otorgarán la Federación y las entidades federativas por el daño recibido.

En segundo lugar, adecuar la misma de manera que uno de los Comités que deberá formar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para lograr una especialización, atención integral y coordinación sea el Comité de Trata de Personas, distinguiendo este delito del de tráfico de personas, que sin demérito de la importancia que tiene la atención de las víctimas de éste último, debe de llevarse a cabo en un Comité distinto al de trata de personas, por ser conductas típicas con elementos y características disímbolas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 68 y 93; y se adiciona una fracción de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad o **al libre desarrollo de su personalidad**, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

La compensación subsidiaria a que se refiere el párrafo anterior será otorgada a las víctimas de los delitos considerados como graves en la ley en materia de trata de personas.

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

I. al II. ...

III. **Comité de trata de personas;**

IV. al VII. …

VIII. Comité interdisciplinario evaluador**;**

IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; **y,**

X. Comité de tráfico.

…

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 05 de diciembre de 2013.

Sen. **Angélica de la Peña Gómez**.- Sen. **Adriana Dávila Fernández**.- Sen. **Ma. Lucero Saldaña Pérez."**

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO CON LOS INCISOS A) AL H), SEGUNDO CON LOS INCISOS A), B) Y C), TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO A LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN VIII Y IX AL ARTÍCULO 18, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE PRESENTA LA SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

La suscrita, **Adriana Dávila Fernández**, Senadora de la República perteneciente a la LXII Legislatura **del** Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos primero con los incisos a) al h), segundo con los incisos a), b) y c), tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la fracción XXXIII del artículo 88 de la Ley General de Víctimas; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 65 de la Ley de Asistencia social; y se adicionan la fracción XIV al artículo 7 y la fracción VIII y IX al artículo 18, ambos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El objetivo de la presente iniciativa **es** establecer un mecanismo de acreditación y supervisión para las instituciones de asistencia pública y asociaciones civiles que presten servicios de atención y protección a las víctimas del delito. De esta manera, sólo aquellas acreditadas podrán tener acceso a los apoyos que otorga la administración pública federal, de conformidad con la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La dinámica social actual y su complejidad hacen que la sociedad civil organizada preste atención a personas vulnerables y víctimas del delito.

No es posible que las instituciones gubernamentales actúen solas contra los problemas que nuestro país enfrenta. Debe haber un estado de cooperación permanente entre la administración pública y aquellos grupos sociales organizados que tienen vocación de servicio, a favor de los sectores más vulnerables.

La sociedad civil organizada, con su experiencia y conocimientos, coadyuva a la evolución de los programas y políticas públicas que tienden al bienestar social.

En México, desde hace años se ha construido y fortalecido la operación de la sociedad civil, en dos vertientes: las instituciones de asistencia social, que desarrollan actividades con base en la Ley General de Salud, y las asociaciones civiles, que prestan servicios de atención a víctimas de delitos, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades, y está dirigida a los más desfavorecidos. Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Al respecto, la Ley General de Salud establece lo siguiente:

> **Artículo 167.**- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Asistencia Social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
>
> **Artículo 168.**- Son actividades básicas de Asistencia Social:
>
> **I.** La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
>
> **II.** La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;
>
> **III.** La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud;
>
> **IV.** El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
>
> **V.** La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos y personas con discapacidad sin recursos;
>
> **VI.** La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social;
>
> **VII.** La promoción de la participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio;
>
> **VIII.** El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socioeconómicas, y
>
> **IX.** La prestación de servicios funerarios

La prestación de servicios para brindar asistencia social se encuentra regulada por la Ley de Asistencia Social, la cual establece lo siguiente:

> **Artículo 4.**- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:
>
> **I.** Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:
>
> **a)** Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados, y

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.
Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes;

b) En situación de maltrato o abandono, y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables

Como es posible apreciar, son numerosos los sujetos que tienen derecho a la asistencia social. Vale la pena señalar que se trata de grupos vulnerables y precisamente por esa condición, se requiere que las instituciones privadas garanticen ciertas condiciones para poder cumplir con sus fines.

En ese sentido, la misma ley establece en el artículo 51, la posibilidad de que las instituciones privadas de asistencia social reciban recursos públicos para el apoyo de sus actividades.
El artículo 9 dispone que el DIF y la Secretaría de Salud deben certificar los servicios que presten las instituciones del sector privado, siempre que cumplan con lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas.

Además, se señala en el artículo 52 que las instituciones en cita deben estar inscritas en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social.

Lo que no se estipula es un mecanismo de supervisión de las actividades de estas instituciones, ni que, en caso de incumplimiento, les sean cancelados los recursos públicos recibidos.

En razón de ello, se propone establecer en el artículo 65 de la Ley de Asistencia Social que para supervisar y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar un informe trimestral sobre las obligaciones cumplidas.

Además, el DIF evaluará anualmente a las instituciones de asistencia social que ya se encuentren acreditadas y en caso de que no cumplan con las obligaciones establecidas para contar con dicha acreditación, ésta les será cancelada y no podrán tener acceso a los recursos públicos que les han sido destinados.

El DIF realizará el número de visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados, el cual no podrá ser menor a tres por año. En caso de que el Organismo se percate de hechos que constituyan la comisión de algún delito, inmediatamente hará la denuncia correspondiente.

El DIF notificará dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación de la acreditación, al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre dicha cancelación, para los efectos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ley General de Víctimas

La atención a las víctimas del delito en México es un tema de alta prioridad que no puede quedar en manos de cualquier institución, en especial de aquellas que carecen de sentido humano.

La atención a las víctimas debe ser integral y especializada. Por lo que el gobierno debe acreditar y supervisar-a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta actividad.

En razón de ello, se propone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acredite a aquellas organizaciones que comprueben contar con personal especializado en atención y orientación a víctimas de delitos y que cuenten con título profesional en las siguientes áreas:

a) Médicos cirujanos;
b) Psiquiatras;
c) Psicólogos;
d) Trabajo social;
e) Ginecología;
f) Abogados;
g) Enfermeras, y
h) Aquellas que se requieran para la atención de las víctimas.

Además de lo anterior, en el caso de los refugios, albergues y casas de transición deberán contar con lo siguiente:

a) Un espacio temporal que brinde alojamiento seguro y digno, atendiendo al nivel del riesgo y las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación;
b) Los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos alimentación, vestido y calzado, y
c) En su caso, programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de sus derechos.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar un informe trimestral, con los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizará el número de visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente. El cual no podrá ser menor a tres por año. En caso de que la Comisión se percate de hechos que constituyan la comisión de algún delito, inmediatamente hará la denuncia correspondiente.

Anualmente, la Comisión evaluará a las organizaciones de la sociedad civil que ya se encuentren acreditadas y en caso de que no cumplan con las obligaciones establecidas para contar con la acreditación, ésta les será cancelada y no podrán brindar ninguno de los servicios correspondientes.

La Comisión notificará, dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación de la acreditación, al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de dicha cancelación, para los efectos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Los resultados de las evaluaciones y visitas deberán ser incluidos en el informe anual que la Comisión rinda ante el Sistema.

Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil asigna a las organizaciones una Clave Única de Inscripción -denominada CLUNI- y con ello, el derecho de acceder a apoyos y estímulos públicos; a gozar de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos; a recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables; a acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de convenios o tratados internacionales, y a recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto

y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades, entre otros.

Lo cierto es que no se deben brindar recursos económicos a las instituciones privadas de asistencia social y de atención a víctimas sólo por el cumplimiento de una serie de requisitos burocráticos.

Después de cumplidos los procesos de acreditación y supervisión ya descritos en la presente iniciativa, se requiere reformar la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil de la siguiente manera:

a) En el caso de las instituciones privadas de asistencia social, deberán estar inscritas en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social y contar con la acreditación y supervisión que establece la Ley de Asistencia Social.
b) En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que presten servicios de atención a víctimas en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, deberán contar con el permiso y la acreditación que otorgue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Con este mecanismo, la asistencia y protección que se preste a las personas menos favorecidas y a las víctimas del delito, será efectiva y tendiente a garantizar su bienestar y su reintegración a la sociedad.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno del Senado de la República, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

PRIMERO: Se adicionan los párrafos primero con los incisos a) al h), segundo con los incisos a), b) y c), tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la fracción XXXIII del artículo 88 de la Ley General de Víctimas:

Artículo 88. ...

I. a **XXXII.** ...

XXXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;
La Comisión les otorgará una acreditación, siempre que comprueben contar con personal especializado en atención y orientación a víctimas de delitos y que cuenten con título profesional en las siguientes áreas:

a) Médicos cirujanos;
b) Psiquiatras;
c) Psicólogos;
d) Trabajo social;
e) Ginecología;
f) Abogados;
g) Enfermeras, y
h) Aquellas que se requieran para la atención de las víctimas.

En el caso de aquellas organizaciones de la sociedad civil que cumplan con su objeto mediante acuerdos con hospitales, solo se requerirá comprobar la existencia del acuerdo. Pero en todo caso, la Comisión tendrá el derecho de hacer revisiones a los hospitales en donde se preste la atención.

Además de lo anterior, en el caso de los refugios, albergues y casas de transición deberán contar con lo siguiente:

a) **Un espacio que brinde alojamiento temporal, seguro y digno, atendiendo al nivel del riesgo y las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación;**
b) **Los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos alimentación, vestido y calzado, higiene personal, y**
c) **En su caso, programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de sus derechos.**

Las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar un informe trimestral que contenga los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo.

La Comisión realizará el número de visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente. El número de visitas no podrá ser menor a tres por año. En caso de que la Comisión se percate de hechos que constituyan la comisión de algún delito, inmediatamente hará la denuncia correspondiente.

Anualmente, la Comisión evaluará a las organizaciones de la sociedad civil que ya se encuentren acreditadas y en caso de que no cumplan con las obligaciones establecidas para contar con la acreditación, ésta les será cancelada y no podrán brindar ninguno de los servicios correspondientes.

La Comisión notificará dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación de la acreditación, al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de dicha cancelación, para los efectos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Los resultados de las evaluaciones y visitas deberán ser incluidos en el informe anual que la Comisión rinda ante el Sistema.

XXXIV. a **XXXVI. ...**

SEGUNDO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 65 de la Ley de Asistencia social:

Artículo 65.- La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, corresponde a la Secretaría de Salud, a través del Organismo, y a las autoridades locales.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar un informe trimestral que contenga los datos relativos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.

Anualmente, el Organismo evaluará a las instituciones de asistencia social que ya se encuentren certificadas y en caso de que no cumplan con las obligaciones establecidas para contar con dicha acreditación, ésta les será cancelada y no podrán tener acceso a los recursos públicos destinados a la asistencia social.

El Organismo realizará el número de visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente. El número de vistas no podrá ser menor a tres por año. En caso de que el Organismo se percate de hechos que constituyan la comisión de algún delito, inmediatamente hará la denuncia correspondiente.

En su caso, el Organismo notificará dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación de la acreditación, al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de dicha cancelación, para los efectos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

TERCERO. Se adicionan la fracción XIV al artículo 7 y la fracción VIII y IX al artículo 18, ambos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil:

Artículo 7. ...

I. a XIII. ...

XIV. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que brinden atención a víctimas, deberán cumplir con la documentación que acredite los requisitos señalados en el artículo 18 de la presente ley.

Artículo 18. ...

I. a VII. ...

VIII. En el caso de las instituciones privadas de asistencia social, deberán estar inscritas en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social y contar con la acreditación y supervisión que establece la Ley de Asistencia Social.

IX. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que presten servicios de atención a víctimas en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, deberán contar con la acreditación que otorgue Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Transitorios

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Senadora Adriana Dávila Fernández

4) 14-10-2014
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 bis y 87 ter de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández (PAN).
Se turnó a las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Diario de los Debates, 14 de octubre de 2014.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 87, 88 Y 95 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 87 BIS Y 87 TER DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 14 de Octubre de 2014

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- **La C. Senadora Adriana Dávila Fernández:** Gracias, señor Presidente, con su permiso. Senadoras y Senadores:

Vengo hoy a proponer una reforma a la Ley General de Víctimas que propone algunas modificaciones para establecer con claridad aspectos que la ley no contempla o, de plano, son disposiciones ambiguas que están sujetas a interpretación por parte de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Víctimas.

La ley debe estipular que los servidores públicos, sin distinción alguna, rindan cuentas de sus actos y sean sometidos al régimen de responsabilidades y sanciones, porque así lo mandata nuestra Constitución para los servidores de alto nivel.

Además de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la ley debe ser universal para todos, incluidos los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Se propone establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna por ser la encargada de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Se propone, también, involucrar a la Cámara de Senadores en la rendición de cuentas, estrictamente en lo inherente a las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, relativas al cumplimiento general y del sistema, además de lo relativo a la operación del registro nacional de víctimas, dejando a la Cámara de Diputados lo referente al fondo.

Es necesario que el Senado de la República tenga información clara y oportuna sobre los trabajos que en esta comisión se llevan a cabo.

Destaco que con las propuestas de modificación se busca subsanar lagunas legales detectadas en las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en particular, de su Presidencia durante el ejercicio administrativo de su encargo.

La forma en que actualmente aborda casos como el mencionado, ha dado lugar a una serie de interpretaciones que más allá de evaluarlas o considerarlas equívocas o limitadas, sin duda han dañado la percepción y el trabajo interno de esta comisión.

Tal es el caso de la manera y las condiciones en las que se dio el cambio de la Presidencia de este órgano colegiado.

Formas quizás poco claras y transparentes que pudieran prestarse a irregularidades que se dieron a conocer por conductos ajenos a esta Soberanía.

Para evitar disputas estériles en detrimento de los objetivos de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, será la Cámara de Senadores la que nombre a la persona que considere tener el mejor perfil para representar y desempeñar las tareas propias e inherentes a las del Comisionado o Comisionada Presidenta y, bajo este mismo tenor, en caso de renuncia al cargo, ésta tendrá que ser ratificada por la misma Cámara.

Por cierto, actualmente la ley no prevé, y otras disposiciones son ambiguas al respecto, lo relativo al procedimiento de destitución de los comisionados, pues en un estado democrático que se aprecie de serlo, los servidores públicos, todos, sin distinción alguna, deben estar sometidos a un régimen de rendición de cuentas, pero también de responsabilidades y sanciones.

Por ello, se propone establecer un régimen de destitución y remoción de los comisionados o la Presidencia de la Comisión, en la que el mismo órgano encargado de designar a los Comisionados sea el que se encargue de substanciar alguna denuncia o hechos contra algún comisionado que amerite la remoción de la Presidencia o la destitución respectiva, siempre respetando los derechos y garantías que establece la Constitución como es el caso de la formalidad de ser escuchados, aportar pruebas y presentar sus alegatos.

Se plantea dotar de mayores atribuciones a la Presidencia para que sea ésta la que proponga a los titulares del fondo de la asesoría jurídica federal y del registro nacional, mientras que sea el Pleno de la Comisión Ejecutiva el que ratifique tales nombramientos.

Con lo anterior, se evitaría el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva y se dotaría de facultades a la misma Presidencia para que pueda actuar y hacer más operativa a la comisión.

Don Benito Juárez alguna vez manifestó que todos los hombres tenemos un círculo más o menos extenso de relaciones, tenemos afecciones también; pero antes que nada, debe estar el interés de corresponder a la confianza que se ha depositado en él, por lo que no debe de conocer más conducta que lo dicho por la ley y no hacer otra cosa que cumplir fríamente con su deber.

De ahí que el debate, con todo y críticas, debe ser el perfeccionamiento de la norma del marco jurídico para que la Comisión Ejecutiva cumpla con sus responsabilidades de manera objetiva y profesional y que proporcione certeza a las víctimas.

Es válido tener diferencias insoslayables con respecto a ópticas, programas o proyectos determinados, porque permite enriquecer la discusión y posibilitar puntos de acuerdo en beneficio de las personas afectadas.

Pero, bajo ninguna circunstancia, so pretexto de las diferencias, se puede aceptar la falta de entendimiento, la obstrucción por intereses particulares o de grupo, o la responsabilidad que no solamente se aceptó, sino que se comprometió y se juró al cargo.

La Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas no es una vitrina política, ni un escalón de ascenso con fines de lucro de ningún tipo. Es una responsabilidad de los comisionados libremente aceptada para dar seguimiento y supervisar la aplicación de los ordenamientos legales de la materia, lo que ayudará a aquellos que han sido lastimados, heridos o afectados.

Es una oportunidad para aplicar conocimiento y experiencia en estrategias y políticas públicas específicas que alivien el dolor humano.

Es, en términos modernos, el área de oportunidad para demostrar a la sociedad que se tiene vocación de servicio para diseñar y ejecutar mecanismos eficaces en el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar los artículos 87, 88 en su fracción XVIII, y 95 en su fracción VI, así como adicionar el artículo 87 bis, 87 ter, y un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 95, recorriéndose el texto de la actual fracción para pasar a ser la fracción XIV, todo de la Ley General de Víctimas.

Es por ello, Senadoras y Senadores, que solicito su voto favorable para que esta iniciativa de reforma que pretender dar certeza jurídica y así evitar interpretaciones, sea apoyada por todos ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

"La suscrita **Adriana Dávila Fernández**, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 87, 88, Y 95; Y ADICIONA LOS ARTICULOS 87 BIS Y 87 TER, DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS,** en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 9 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, legislación que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, entre otros derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de que México es parte.

Asimismo, esta ley establece las reglas para la coordinación de acciones que promuevan y garanticen el pleno respeto de los derechos de las víctimas, además de implementar esos mecanismos a través de los que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben prevenir, investigar, sancionar y lograr su reparación integral, incluyendo el efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso.

Otro de los aspectos que la ley prevé, son los deberes y las obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de toda persona que intervenga en procedimientos relacionados a las víctimas.

De esa forma, esta legislación establece al Sistema Nacional de Atención a Víctimas como una instancia superior de coordinación que formula políticas públicas, además de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas que deben implementarse para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, y a la verdad, así como a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El sistema nacional cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el ámbito federal, y de Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal, las que conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En el ámbito federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el órgano operativo del Sistema Nacional, con carácter colegiado, y que goza de autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La referida Comisión Ejecutiva, tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional, además de garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que refiere la ley general en materia de derechos integrales de las víctimas.

Además elaborar el proyecto del Programa de Atención Integral a Víctimas para presentárselo al Sistema, con el objeto de perfeccionar, las políticas públicas relativas a la atención a víctimas, por lo que se convierte en brazo ejecutor de las determinaciones que adopte el Sistema Nacional, máxima autoridad en materia de atención a las víctimas.

La relevancia de esta Comisión Ejecutiva es tal, que la misma Ley General establece el procedimiento selección de los comisionados que la integrarán, tomando en cuenta para eso a los colectivos, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas. El Ejecutivo presenta ternas para elegir a cada comisionado, integrándose de la siguiente forma: 4 comisionados especialistas en las ramas del derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes; 3 comisionados provenientes de colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.

Además del método de selección, la ley general establece incluso, cuáles serán las comisiones del Senado que realizarán el proceso de selección de los comisionados.

Sin embargo se han detectado lagunas legales en las facultades de la Comisión Ejecutiva y de su presidencia durante el ejercicio administrativo para la cual fue designada, lo que ha dado lugar a interpretaciones equívocas que por su naturaleza han dañado el trabajo interno de dicha comisión.

Tal es el caso de irregularidades que se presentaron en el cambio de presidencia de este órgano.

Es inconcebible que se presenten situaciones como ésta en la Comisión Ejecutiva, instancia que paradójicamente debería estar más ocupada en dar cumplimiento a la legislación y diseñar y ejecutar los mecanismos para hacer válido el ejercicio de los derechos de las víctimas, en vez de acuñar actos tendientes a quebrar el estado de derecho y deteriorar a las instituciones ante la opinión pública.

Derivado de lo anterior, es necesario establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva, que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna, por ser la encargada de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Un aspecto probado que se ha dado de forma sistemática y reiterada en los órganos colegiados similares a la conformación de la Comisión Ejecutiva, es que han aflorado disputas sobre la persona en la recaerá o recayó la presidencia, por lo que se plantea que sea la Cámara de Senadores aquella que nombre a la persona que considere tener el mejor perfil para representar y desempeñar las tareas propias e inherentes a las del Comisionado o Comisionada Presidenta, y bajo ese mismo tenor, en caso de renuncia al cargo de la presidencia, ésta tenga que ser ratificada por la misma Cámara.

Asimismo, se plantea dotar de mayores atribuciones a la presidencia, para que sea ésta la que proponga a los titulares del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal y del Registro Nacional, mientras que sea el pleno de la Comisión Ejecutiva, el que ratifique tales nombramientos.

Con lo anterior, se evita el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva y se dota de facultades a su presidente para que pueda actuar y hacer más operativa a la Comisión.

Se propone también involucrar a la Cámara de Senadores en la rendición de cuentas, estrictamente en lo inherente a las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva relativas al cumplimiento de la ley general y del Sistema, además de lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas, dejando a la Cámara de Diputados, lo referente al Fondo. Es incongruente que al Senado no se le rinda cuentas, cuando es precisamente esa Cámara la que nombra y realiza el proceso de selección de los comisionados.

Un aspecto que actualmente la ley no prevé, y otras disposiciones son ambiguas, es en el procedimiento de destitución de los Comisionados, pues en un estado democrático que se precie de serlo, los servidores públicos, todos sin distinción alguna, deben estar sometidos a un régimen de rendición de cuentas, pero también de responsabilidades y sanciones.

En el presente caso, la Ley General de Víctimas es omisa en establecer un régimen de responsabilidades y sanciones para los integrantes de la Comisión Ejecutiva, decimos lo anterior en base a dos argumentos sólidos; el primero es que la Constitución establece en ese rubro de sanciones previsto en el Titulo Cuarto, a los sujetos de juicio político, incluidos los servidores públicos de alto nivel jerárquico.

Al respecto, es pertinente recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene su naturaleza jurídica en el decreto publicado el 8 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se cambia el organismo descentralizado llamado PROVICTIMA, a la aludida Comisión.

Sin embargo, la Carta Magna establece como sujetos de juicio político para ser destituidos, a los "directores generales y sus equivalentes" de los organismos descentralizados, pero no a los integrantes del órgano de gobierno. Luego entonces, no pueden ser sujetos de juicio político para ser destituidos los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por otro lado, tenemos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que si bien establece responsabilidades, es el órgano interno de control el que impone la sanción, es decir el mismo ejecutivo, por lo que el mecanismo de control es intra-orgánico, y por tanto, improcedente para la naturaleza que tiene la Comisión, pues debemos no hay que olvidar que es el Senado quien elige y nombra a los integrantes de la Comisión, por lo que sería totalmente fuera de toda lógica administrativa que sea el Ejecutivo quien los destituya, debiendo ser por el contrario el mismo órgano que los designó, es decir la Cámara de Senadores.

Por lo anterior, propongo establecer un régimen de destitución y remoción de los Comisionados o la presidencia de la Comisión, en el que el mismo órgano encargado de designar a los Comisionados es decir el Senado, sea el que se encargue de substanciar alguna denuncia o hechos contra algún Comisionado, que amerite la remoción de la presidencia o la destitución respectiva, siempre respetando los derechos y garantías que establece la Constitución, como es el caso de las formalidades de ser escuchados, aportar pruebas y presentar sus alegatos.

Asimismo, y a efecto de que la presidencia de la Comisión Ejecutiva tenga mejores condiciones para desarrollar su trabajo y a la vez, y a la vez cuente con un mecanismo de control que evite la ejecución de maniobras poco claras y en detrimento de su buen funcionamiento, es que se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- ***Se reforman*** los artículos 87; 88, fracción XVIII; y 95 en su fracción VI; ***se adiciona*** el artículo 87 Bis; 87 Ter; y un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 95, recorriéndose el texto de la actual fracción para pasar a ser fracción XIV; todo de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 87. *La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado que será elegido por la Cámara de Senadores.*

Para ese efecto se desarrollará un proceso de consulta y entrevistas que en su caso, sirvan para definir al mejor perfil para ocupar el cargo, éste se desarrollaráa través de lasComisiones de Justicia y Gobernación del Senado; la elección deberá ser por las dos terceras partes de los Senadores presentes en la respectiva sesión de Pleno.

El comisionado presidente ejercerá sus funciones durante dos años, y podrá ser reelecto para un periodo más.

En caso de renuncia, ésta deberá ser presentada por escrito en sesión de la Comisión Ejecutiva, y en su caso, deberá ser ratificada por el Senado de la República; al mismo tiempo podrá desarrollarse el procedimiento de elección conforme al segundo párrafo del presente artículo.

Artículo 87 Bis. Los Comisionados y el Comisionado Presidente sólo podrán ser removidos de su cargo o destituidos por las causales siguientes:

I. Cuando en ejercicio de sus funciones transgredan o incumplan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente ley general, o incurra en alguna responsabilidad administrativa que amerite su sanción o destitución; en este caso la sanción o destitución deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado;

II. Cuando hayan sido condenados por un delito que merezca pena corporal, mediante sentencia ejecutoria.

Artículo 87 Ter. El Procedimiento para la sanción o destitución de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, por alguna de las causales establecidas en la fracción I del artículo anterior, se sujetará a las reglas siguientes:

I. Será iniciado a solicitud de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Senado, una quinta parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal;

II. Si es solicitud del Titular del Ejecutivo Federal o de los integrantes de la Cámara de Diputados, se hará del conocimiento al comunicarán al Senado remitiéndose las constancias respectivas para dar vista en su momento procesal, al Comisionado que se le impute la responsabilidad, conforme a la fracción siguiente;

III. Iniciado el procedimiento, la Cámara de Senadores citará al o a los Comisionados inculpados, para que comparezcan a desahogar su garantía de audiencia, en la que podrán formular alegatos y ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan.

Las Comisiones de Justicia y Gobernación del Senado se encargarán de sustanciar los actos procesales previstos en la presente fracción;

IV. Desahogada la garantía de audiencia, el Pleno del Senado determinará la responsabilidad del o de los inculpados, calificará la gravedad de la infracción, y resolverá, por las dos terceras partes de sus integrantes, si es el caso de proceder a la destitución, o en su caso la sanción de remoción del cargo de la presidencia.

V. Las sanciones podrán consistir en la destitución del cargo de comisionado, osi fuera el caso y así se haya sido solicitado, la remoción del cargo de presidente, lo anterior de acuerdo con las circunstancias del particular y la gravedad de los hechos expuestos y probados, independientemente de las sanciones penales y u otras de índole administrativa que le sean imputadas.

La resolución del Senado que determine la destitución de alguno o algunos de los Comisionados, será comunicado al Titular del Ejecutivo Federal para que sea éste el que presente las propuestas conforme al artículo 85 de la presente ley general.

En caso de que la resolución consista únicamente en la remoción del cargo de la presidencia, pero la persona permanezca Comisionada, el Senado procederá a realizar la elección de la persona que presidirá a la Comisión Ejecutiva conforme al artículo 87 de la presente ley.

En el supuesto de que el Senado resuelva que no es el caso de proceder a la destitución o sanción, se dará por terminado el procedimiento respectivo.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a XVII…

XVIII. *Ratificar* a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal *y del Registro a propuesta del Presidente*;

XIX. a XXXVI. …

Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

I. a V. …

VI. *Rendir cuentas cuando sea requerido a la Cámara de Diputados, sobre la operación y gasto del Fondo, y a la Cámara de Senadores sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva por esta ley general y el Sistema, en especial en lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas.*

VII. a XII. …

XIII. *Proponer al pleno de la Comisión Ejecutiva, para su ratificación, a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;*

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Transitorios

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. **Adriana Dávila Fernández**".

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Davila Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos.

5) 27-11-2014
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.
Diario de los Debates, 27 de noviembre de 2014.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 27 de Noviembre de 2014

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita **DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO**, senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS** al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las últimas dos décadas, en la mayoría de los países iberoamericanos se han realizado importantes reformas a nivel procesal penal, definiendo un modelo acusatorio con el que se pretende redimensionar la posición de la víctima y de sus derechos. Las reformas buscan corregir el olvido en el que se encontraban las víctimas de derechos humanos en los procesos penales. 1

De primera instancia, a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas (la "ONU") ha promovido diversos instrumentos para la protección y respeto de los derechos humanos. Mismos que han buscado el equilibrio en el ámbito interno de los Estados.

De este modo tenemos que la Declaración base de los Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) establece en su artículo 8 que:

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley."

Asimismo, el artículo 10 establece que:

"Toda personas tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece:

Artículo 2

1. […]

2. […]

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 7

1. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

En lo que se refiere a las víctimas, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, refiere en su artículo 14 que los Estados Parte velarán para que la legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada.

Al siguiente año es cuando la ONU define lo que es una “víctima” en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, (Resolución 40-34, 1985), entendiendo por éstas a:

“1. […] las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”

Asimismo, refiere que, en lo que versa sobre el acceso a la justicia y trato justo:

“4. **Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad**. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas."

Es importante mencionar que uno de los Tratados Internacionales más importantes de los últimos tiempos, es el Estatuto de Roma, el cual insta respecto a las víctimas lo siguiente:

"Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones.

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, **el género**, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, **en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños**. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias, establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo."

En el ámbito nacional, hasta hace muy poco fue que se creó una Ley General que tratara sobre el tema de las víctimas, esfuerzos que resultaron en la publicación, el 9 de enero de 2013, de la Ley General de Víctimas, ley que tiene como objeto, de conformidad con su artículo segundo:

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;

5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

De este modo, dentro del Título Segundo referente a los Derechos de las Víctimas, es que establece en su artículo 17 que:

"Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la **justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación**, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva."

Si bien la ley referida anteriormente es un gran avance para el país, también lo es que de acuerdo a la última reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011, el Estado está obligado a cumplir e incorporar dentro de su legislación nacional los tratados internacionales y convenciones de los que sea Parte.

Como es bien sabido, México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará", misma que protege el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

En ese tenor, el Estado Mexicano no sólo ha signado y ratificado estas convenciones internacionales sino que además ha trabajado al interior para crear leyes de aplicación general que protejan estos derechos. En esta materia podemos encontrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en un aspecto mucho más general, la anteriormente referida Ley General de Víctimas.

Así, como parte signante de la Convención Belém do Pará, tenemos que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) ha establecido en su Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención que:

"1.8 Prohibición expresa de la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial.

Aunque no formó parte del cuestionario de la Primera Ronda, en el Primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os notó con preocupación que varios estados reportaron contar con métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la víctima de violencia contra las mujeres, o exoneración de la pena para el agresor si contraía matrimonio con la víctima, o aplicación del principio de oportunidad.

Reiterando su análisis realizado durante la etapa de seguimiento de sus recomendaciones, **el Comité de Expertas/os encuentra que la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad.** La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que, **hacer este delito negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar**. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encontró que **este desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí**."2

Además delo anterior, se debe tomar en cuenta que, tal como lo menciona la ONU:

"10. **Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos**, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

VII. **Derecho de las víctimas a disponer de recursos**

11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuras los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

A) Acceso igual y efectivo a la justicia;

B) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;

C) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación."3

Si bien es cierto, que los medios alternativos de solución de controversia pueden ser muy útiles para algunos casos, en otras ocasiones pueden ser generadores de victimización secundaria.

Así, la doctrina nos señala que "La consecuencia inmediata de la necesaria consideración de la víctima, de su tutela y de la protección de sus derechos es la necesidad de establecer los cauces jurídicos adecuados para hacer valer estos derechos. En palabras de SANZ HERMIDA, "es preciso establecer los cauces jurídicos adecuados, no sólo para asegurar la efectividad del derecho a la reparación o resarcimiento de las víctimas", sino también en orden al logro de dos grandes objetivos no menos importantes**. De un lado, "la consideración de que el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la activación de su papel en el proceso pueden contribuir directamente a la recuperación de la víctima, al aumento de la eficacia del proceso penal y al sentido –individual y colectivo- de "justicia". De otro, evitar la victimización secundaria.** Esto es, "*el aumento innecesario del daño producido a la víctima como consecuencia del transcurso del tiempo y del propio desenvolvimiento del proceso penal".* Señalado esto, cabe añadir que **esa victimización secundaria también puede acontecer por otras causas como, por ejemplo, la justificación social del acto violento o de los daños padecidos o la ausencia de respuesta institucional (o respuesta institucional insuficiente) frente al crimen cometido.** En otras palabras el abandono institucional puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar sus efectos."4

Es por esto que el MESECVI abunda:

"El Comité de Expertas/os destaca nuevamente la contribución de las leyes integrales de violencia para lograr la prohibición de la conciliación, mediación u otros medios de solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, quedando pendiente la armonización de las normas procesales respecto a esta disposición. Ello es de particular importancia dado que, si bien un número importante de Estados han reportado diversas formas de evitar el uso de dichos métodos para casos de violencia contra las mujeres en la sección de legislación, algunos de ellos han incluido en la sección de información y estadísticas cifras sobre casos de violencia doméstica o familiar resueltos vía conciliación. Ello indica que dichos métodos siguen siendo utilizados en el Poder Judicial.

El Comité de Expertas/os **insiste en su recomendación de prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres.** En caso de que ya cuenten con dicha prohibición, recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. **Finalmente, en casos donde dicha prohibición se haya dado en casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, el Comité de Expertas/os recomienda la ampliación de dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres**, lo cual requiere como condición indispensable la incorporación de la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará y la penalización de otras formas de violencia contra las mujeres distintas a la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica."5

Es de conocimiento que el argumento que se ha utilizado en distintos países6 para prohibir la mediación y la conciliación cuando se trata de violencia familiar, es aquel que versa sobre la imposibilidad de que las partes se encuentren en igualdad. Sin embargo, no todos los tipos de violencia, ni todas las víctimas caen dentro de este supuesto. Es por eso que sólo cuando se trate de delitos graves, como es el caso de feminicidio, lesiones físicas graves, agresiones sexuales o que haya daño a menores de edad o discapacitados donde el bien jurídico tutelado es de la más alta estima, como lo es la vida, la integridad física o sexual, no debe ni puede caber la mediación y la conciliación.

Es por lo anterior, que en cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de los estándares internacionales más altos, como los establecidos en el Estatuto de Roma, la suscrita somete a su consideración la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimaspara quedar como sigue:

Artículo 17. …

…

En el caso de víctimas de delitos por violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 noviembre de 2014.

Sen. **Diva Hadamira Gastélum Bajo**".

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 17. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva**.**	Artículo 17. … … **En el caso de víctimas por delitos de violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.**

1 Tercera reunión preparatoria Cumbre Judicial Iberoamericana. Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Quito Ecuador. 2012.

2 MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012.

3 Resolución A/RES/60/147, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener Reparaciones. Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 2005.

4 FERNANDEZ DE CASAVANTE ROMANI, Carlos. Las víctimas y el Derecho Internacional, A.E.D.I. vol. XXV, 2009.

5 MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012

6 Es el caso de España, Portugal y Australia. Por su parte, Inglaterra y Alemania han optado por el uso de la jurisdicción civil como la primera de las respuestas para casos “leves” de violencia de género y países como Austria, prefieren intervenir de manera integral usando órdenes de protección civiles. Ver: Castillejo Manzanarez, Raquel; Torrado Tarrío, Cristina y Alonso Salgado, Salgado. Mediación en violencia de género. Revista de Mediación, año 4, no. 7, mayo de 2011. En el caso de Australia, se hace uso de las órdenes de protección y de la mediación solo en estos casos, pero no tratándose de personas que ya han sido detenidas después de haber recibido órdenes de protección ya que se considera “inadecuado, improductivo e inseguro” Ver: FamilyViolence. A National Legal Response (ALRC Report 114) en www.alrc.gov.au

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores
LXII Legislatura

P R E S E N T E

Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Senadoras de la República integrantes de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 junio de 2008, el Estado mexicano emprendió en su conjunto una de las transformaciones más importantes al sistema de justicia penal, que implicó la instauración del modelo procesal penal acusatorio y oral a nivel federal y estatal, estableciendo un procedimiento más expedito en el que se respeten sin excepción, todos los derechos, tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados, bajo

una perspectiva de justicia restaurativa, lo cual redunda en el fortalecimiento de los derechos que configuran el debido proceso.

Entre las principales disposiciones de la citada reforma destaca la ampliación a los derechos de la víctima u ofendido, a quienes se permite aportar pruebas y participar en el proceso, sin el requisito indispensable de la intermediación del Ministerio Público; solicitar directamente la reparación del daño; impugnar ante el juez las resoluciones y omisiones del representante social; solicitar al juzgador que dicte medidas de prevención o providencias que ayuden a su protección antes de que concluya el juicio, y ejercer la acción penal de manera directa ante el juez en los supuestos que establece la Ley.

Asimismo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el Poder Revisor de la Constitución aprobó la reforma en materia de derechos humanos, una de las más trascedentes enmiendas a nuestra Carta Magna que, debido a lo profundo de sus fundamentos, representó la creación de un nuevo paradigma en el actuar de todas las autoridades de todos los poderes y niveles del Estado mexicano.

Al momento en que el Constituyente decidió colocar a los derechos humanos (ya no “garantías individuales”) como la base y el objeto de las instituciones del Estado, señalando que todas las personas gozarán de aquéllos reconocidos (no otorgados) en la Constitución y en los tratados internacionales, y que tales derechos deben interpretarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro persona), resulta evidente que todos los temas que se relacionen con los derechos de las personas, desde ahora, deben ser vistos como prioridad y con una perspectiva lo más humanista posible.

Así, la decisión axiológica fundamental tomada por el Poder Revisor de la Constitución Mexicana en junio de 2011, consistente en colocar en el centro del Estado a la persona y sus derechos, no es otra cosa que un reconocimiento de que la dignidad humana es, y debe ser, vista como una realidad pre jurídica ubicada en un plano anterior, superior y exterior al propio Estado y a la sociedad que lo integra.

En tutela del principio de progresividad, todos los obligados por estas importantes reformas, tenemos la responsabilidad de procurar todos los medios posibles para la satisfacción de los derechos humanos en cada momento y garantizar con ello su adecuada defensa y protección, sin permitir cualquier retroceso o involución en esta tarea.

Fue precisamente en este nuevo marco constitucional, donde se gestó la Ley General de Víctimas, producto del impulso de la sociedad civil y su trabajo coordinado con las autoridades del Estado, misma que después de un complicado proceso legislativo fue publicada el 9 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de un ordenamiento de vanguardia en lo que se refiere a la protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del delito, el cual tiene entre sus objetivos garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto

cumplimiento de las reglas del debido proceso, así como establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con éstas.

Dicha Ley responde a un enfoque integral de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o del delito, tengan asegurado el acceso a su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, todo ello a través de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, su órgano operativo, desarrolla y emite las acciones y programas sustantivos para el reconocimiento de la víctima en todos sus ámbitos: individual, familiar y social.

Por tales motivos, la publicación de la Ley General de Víctimas representó una demostración del compromiso indeclinable del Estado, con la protección y respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito y violaciones a éstos.

Posteriormente a su publicación, la sociedad civil junto con este Poder Legislativo y el Gobierno Federal, llevamos a cabo un procedimiento de revisión de la Ley a fin de efectuar algunas precisiones a la misma con el fin de contar con ordenamiento eficaz en su aplicación. Derivado de lo anterior, el 3 de mayo de 2013 se publicó el Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del citado ordenamiento.

Entre las principales modificaciones efectuadas se incluyeron el adelgazamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Ejecutiva; la delimitación

de la responsabilidad del Estado en casos de violación de derechos humanos y en los casos de delitos graves; la clarificación de las competencias de los órganos cuya participación contempla la norma, así como el fortalecimiento presupuestal y de los recursos para financiar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Una vez publicadas las reformas, y para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el referida Ley General de Víctimas, el Gobierno Federal emitió la convocatoria para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 9 de mayo de 2013, procedimiento que concluyó con la toma de protesta de los Comisionados ante el Pleno de este H. Senado de la República el 10 de octubre de 2013.

Ya con la Comisión Ejecutiva integrada, el Ejecutivo Federal emitió un Decreto en el que se transformó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, en la Comisión Ejecutiva y se efectuó la primera sesión de instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

A partir del trabajo desarrollado por esta Comisión Ejecutiva, para la implementación y aplicación de la Ley General de Víctimas, se han podido advertir dentro de dicha norma la necesidad de replantear lo relativo a los requisitos para ser integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La Ley establece que su artículo 86 lo siguiente:

> **Artículo 86.** Para ser comisionado se requiere:

> **I.** Ser ciudadano mexicano;
>
> **II.** No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;
>
> **III.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y
>
> **IV.** No haber ocupado **cargo público** ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.
>
> En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
>
> Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Como se desprende de la fracción IV, uno de los requisitos es no haber ocupado cargo público dentro de los dos años previos a la designación.

Las proponentes consideramos que este impedimento debe ser eliminado de la Ley puesto que evita que servidores públicos que desempeñan sus actividades dentro de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o en otras dependencias o instituciones relacionadas a la atención de víctimas en los tres niveles de gobierno puedan acceder al cargo.

La profesionalización que una persona que ocupa un cargo público adquiere dentro de una materia o ámbito específico, no debe ser impedimento para acceder a un cargo en el que la experiencia y profesionalización resulta muy útil, sobre todo cuando se trata de un cargo público en el que naturalmente culmina esa labor. Estos

conocimientos no deben ser desechados ni desperdiciados al resultar en un impedimento para poder integrar el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

No debemos dejar de recordar, que ocupar un cargo público no coloca al servidor público en ventaja sobre otros aspirantes provenientes de otros sectores como el académico o de la sociedad civil puesto que las propuestas deben provenir de uno de estos dos sectores. En este sentido, el artículo 85 dispone que:

> **Artículo 85.** ...
>
> …
>
> Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:
>
> **I.** Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;
>
> **II.** Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.
>
> …
>
> …

Más aún, que una universidad pública, una organización no gubernamental o un organismo público de derechos humanos, proponga al Ejecutivo Federal a una persona que ocupa un cargo público, es reconocimiento que durante su

encargo se ha desempeñado con profesionalismo, eficiencia, honestidad, productividad, honradez y respeto a los derechos humanos; cualidades que muestra un perfil idóneo para ocupar el cargo de Comisionado dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ÚNICO: Se **REFORMA** el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

I. a III. …

IV. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

…

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 19 de febrero de 2015

Senadora Arely Gómez González

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo

Senadora Blanca Alcalá Ruiz

Senadora Graciela Ortiz González,

Senadora Marcela Guerra Castillo

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

Actualmente, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, se encuentra integrada por siete comisionados, quienes fueron designados por el Senado de la República, previo cumplimiento y desahogo de los requisitos que establecen los artículos 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, y que rindieron protesta el 10 de octubre de 2013, sin embargo, han quedado desde octubre del año pasado dos vacantes que no han sido cubiertas aun.

Esto ha permitido observar que en el desempeño de sus funciones, la reducción de dos comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha permitido un mejor ejercicio y optimización en la toma de decisiones, además de establecer una mejor administración en el manejo del gasto corriente. Esto no significa la reducción de las atribuciones que ejerce; mismas que pueden ser desarrolladas a cabalidad estando integrada por cinco comisionados, manteniendo la representación establecida en su ordenamiento legal.

Adicionalmente, eliminará obstáculos estructurales y operativos para brindar a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos un verdadero acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Por lo tanto, su reducción no causará un desequilibrio entre los actores que intervienen en la representación y participación directa de las víctimas y el ejercicio de las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables. Asimismo, permitirá asegurar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

Asimismo, constituir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y recepción de las propuestas de las y los comisionados, garantizará una perspectiva de derechos humanos en la decisión de la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, perspectiva indispensable para el cabal cumplimiento de las funciones de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por **cinco** comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

...

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

I. **Tres** comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;

II. **Dos** comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia, **Derechos Humanos** y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

...

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República a 10 de marzo de 2015.

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

8) 29-09-2015
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo (S/P).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria, 12 de marzo de 2015.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 29 de Septiembre de 2015

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita **Mónica TZASNA Arriola Gordillo**, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.**

Exposición de Motivos:

En el documento denominado "Principios Rectores sobre Desplazamientos Internos" presentado en las Naciones Unidas se define a los desplazados internos como a "*las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida".* Considerando que el listado *contenido* en los Principios referidos, no pretende ser exhaustivo, y puede haber otras causas posibles para ser considerado como desplazado interno1.

El desplazamiento interno es un fenómeno considerado tradicionalmente como exclusivo del dominio de los Estados; esto es, que sólo en los Estados donde ocurrían tenían incidencia directa en el fenómeno. Quizá esto explica por qué hasta la fecha no se cuenta con ningún instrumento internacional específico obligatorio en la materia. Sin embargo, dicha visión no corresponde con la evolución y el estado en el que actualmente se encuentra el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos. La ONU, a través de diversos organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, han señalado en repetidas ocasiones que las violaciones de los derechos humanos al interior de un Estado son del interés de la comunidad internacional; en algunas ocasiones llegan a ser consideradas, dependiendo de las circunstancias, como amenazas para la paz y la seguridad internacional.

Lo anterior no significa que no exista ningún instrumento jurídico respecto del desplazamiento: de hecho, su principal regulación se encuentra en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional Humanitario. Así, el desplazamiento forzado se encuentra sancionado en los Convenios de Ginebra de 1949 (por ejemplo, en el IV Convenio de Ginebra, artículo 49) y sus Protocolos adicionales de 1977 (por ejemplo, el Protocolo II, artículo 17), así como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 7 y 8). Lo anterior significa que el desplazamiento forzado, en ciertas circunstancias, puede llegar a constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra.

Subsidiariamente, los desplazados cuentan con la protección de todo el marco normativo e institucional del Derecho Internacional de los Derechos Humano; es decir, que se les deben respetar todos y cada uno de sus

derechos humanos, y en caso de violación de los mismos, se debe de reparar el daño ocasionado. En este sentido, el único instrumento específico sobre desplazados, no vinculante para los Estados, es el de Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas (1998). Si bien el documento no es obligatorio en sí mismo para los Estados, lo importante es que compila una serie de obligaciones proveniente del Derecho Internacional de los Refugiados, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todos los cuales deben respetar los Estados. Este instrumento consta de treinta principios que comprenden todas las fases del desplazamiento interno: prevención, protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno, el reasentamiento y la reintegración.

Los Principios Rectores estipulan que las personas tienen, entre otros, los siguientes derechos: acceso a necesidades básicas, protección contra ataque físico, el derecho a la educación, el derecho a recuperar sus bienes o recibir una indemnización, este instrumento es una especie de guía para los Estados en caso de desplazamiento. De hecho, en el ámbito internacional, diversos países ya cuentan con leyes en materia de desplazamiento, con diferentes grados de protección a estos grupos en situación de vulnerabilidad.

De manera general los Principios disponen lo siguiente2:

Todas las autoridades tienen el deber de atender las responsabilidades de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Así mismo, las autoridades y personas deben observar estos principios. En la interpretación de los mismos, se deberá de hacer en la forma más amplia.

Las personas desplazadas deben de gozar de la protección que les otorga el derecho nacional y el internacional. No deben ser objeto de discriminación en razón de su situación. La aplicación de los principios no debe afectar el derecho de solicitar y obtener asilo en otros países.

Los principios constituyen una obligación internacional, por tanto las autoridades deben respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional.

En la medida de sus posibilidades las autoridades deben de buscar las alternativas viables para evitar el desplazamiento, en caso de no ser posible, se tomarán todas las medidas para minimizar sus efectos. Deben buscarse condiciones mínimas de seguridad, alimentación, salud e higiene, a tener un nivel de vida adecuado, a no ser privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones y a que no se separe a los miembros de la misma familia.

Cuando se trate de desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma, los Estados deben tener especial cuidado. En el caso de niños desplazados no deberán ser alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en hostilidades.

Cualquier desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia a la dignidad y a la integridad física, mental o moral, a la libertad y a la seguridad personal. Tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos

De acuerdo con diversos especialistas, la legislación más completa en la materia es la de Colombia, la cual cuenta con tres importantes leyes que contribuyen a la protección de las personas desplazadas: la Ley 387 de 1997, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Estas leyes, más las instituciones y programas creados por éstas (por ejemplo, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el Plan y Programa Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y el Sistema Único de Registro de Desplazados), constituyen un marco de protección muy importante en la materia. Evidentemente, dicho marco normativo e institucional es resultado del largo conflicto que ha vivido Colombia, pero también de una voluntad política innegable para atender el problema. Es importante destacar que Colombia basa una buena parte de su legislación en los Principios Rectores de Naciones Unidas.

Asimismo, en el mismo continente americano también la República de Perú cuenta con legislación en la materia a través de su Ley 28223, publicada el 19 de marzo de 2004, misma que tiene como objetivo darle reconocimiento explícito al estatus de desplazado y establecer algunos de sus derechos; en ese mismo sentido,

Guatemala cuenta con el Decreto 73-95 de la Ley temporal de documentación personal de la población temporal desarraigada que, si bien no resuelve el problema de los desplazados, sí intenta atacar la problemática. En 2000, Guatemala emitió el Decreto 67-2000 con el que se reformó la Ley temporal de documentación personal. De esta manera, el Estado guatemalteco amplió la definición de "desplazado interno".

Otros países que también cuentan con legislación en materia de desplazados son Angola, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Croacia, España, Georgia, la India, Iraq, Montenegro, Reino Unido, Ruanda, Rusia y Serbia.

Del análisis de las legislaciones anteriores podemos concluir que la protección a los desplazados internos es muy disímbola. Si bien todas las legislaciones cuentan con una definición de desplazados o de desplazamiento interno, los parámetros de atención y protección varían radicalmente y, en muchos casos, se encuentran lejos de los estándares internacionales en la materia. Es muy probable que el hecho de no contar con instrumentos internacionales obligatorios haya dificultado su avance normativo al interior de los Estados.

Generalmente cuando se habla de desplazamiento interno de personas (o desplazamiento forzado) se piensa en ejemplos de los países africanos, del Medio Oriente, de Centro o Sudamérica que, como consecuencia de luchas internas o conflictos internacionales, obligan a grandes sectores de la población a dejar sus hogares. Cuando lo planteamos de esa manera, el fenómeno del desplazamiento interno en México no resulta tan distinto de lo que ocurre en otros países, de acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Noruego para Refugiados, a finales del 2013 había 33.3 millones de desplazados internos en todo el mundo –4.5 millones más que en 2012– el 63% de los cuales se concentraban en cinco países que padecen conflictos internos, tales son los casos de Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo y Sudán3. Esto es un indicativo que el problema de las personas que se ven obligadas a desplazarse sin importar la causa, lejos de disminuir, se incrementa a nivel global.

En México, el fenómeno del desplazamiento forzado ha existido desde hace mucho tiempo, sus causas son diversas y están profundamente ligadas a conflictos históricos en distinta regiones: disputas religiosas, luchas territoriales inter e intracomunitarias y conflictos político-militares. Como ejemplos de estos desplazamientos tenemos a Oaxaca, en la región de los Loxichas o de los triquis en la zona de la Mixteca; en Nayarit, con los wixárikas, o los huastecos de Hidalgo. Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento forzado empieza a hacerse evidente en los años setenta, específicamente en el estado de Chiapas. Antes de eso, la Revolución mexicana y la violencia que generó habían generado un gran número de desplazados internos a lo largo de todo el país; sin embargo, no existen cifras precisas al respecto.

Si bien es cierto que entre la Revolución mexicana y los conflictos intercomunitarios en Chiapas han existido otros conflictos armados en el país que han llevado al desplazamiento de personas, como por ejemplo el desplazamiento que resultó de la llamada Guerra Sucia (de los años sesenta a los años ochenta), y la lucha del gobierno por debilitar los movimientos sociales y los grupos insurgentes, en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde la militarización de estas zonas provocó un gran número de asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y como consecuencia que muchas familias huyeran de la región hacia otras entidades federativas. Ha sido el desplazamiento de personas con motivo del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 994; lo que derivó en un masivo desplazamiento de personas, sólo en el primer año del conflicto, 35 000 personas dejaron sus hogares.

Las regiones de Chiapas en donde se ha dado un mayor desplazamiento han sido, en un principio, las siguientes: San Juan Chamula, en donde se informó que alrededor de 33 000 chamulas, especialmente católicos, se desplazaron entre 1985 y 2005; asimismo, en los años ochenta, hubo importantes movimientos de personas desplazadas en las comunidades de Amatenango del Valle, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc y Zinacantán. Se calcula también que un total de 25000 personas huyeron a San Cristóbal de las Casas entre 1970 y 1990; a partir de estas expulsiones, San Cristóbal de las Casas se convirtió, desde los años setenta, en el municipio con más llegada de desplazados, en general, de acuerdo con fuentes citadas por el International DisplacementMonitoring Centre (IDMC), alrededor de 60000 personas fueron desplazadas como consecuencia del levantamiento zapatista.

Por otro lado, el IDMC informó que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 cerca de 8000 familias seguían en condiciones de desplazamiento como consecuencia del levantamiento zapatista, y había un gran número de desplazados en estados como Oaxaca y Guerrero por problemas comunitarios. Es importante mencionar que en esta cifra no están considerados los miles de desplazados que son consecuencia de la violencia actual en el país.

El desplazamiento interno producto del movimiento zapatista y de las acciones del gobierno en contra del mismo representó un parteaguas en el tratamiento del desplazamiento en México, no sólo debido al número masivo de desplazados, sino por la presión de organizaciones internacionales para atender este fenómeno.

A inicios de la administración del Presidente Calderón, el gobierno de México inició una lucha en contra del crimen organizado en el país. Esto provocó el enfrentamiento entre diversas bandas delincuenciales por el control de "plazas" para llevar a cabo sus operaciones criminales, así como enfrentamientos entre estos grupos y las distintas fuerzas del orden del Estado mexicano. El clima de violencia que se generalizo en diferentes zonas del país, tuvo impacto y provoco ataques contra la población civil, por lo que, miles de personas se vieron y se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En este contexto y de acuerdo con el IDMC, uno de los principales problemas al que se han tenido que enfrentar los desplazados internos producto de la violencia, es a la "falta de protección física y jurídica de sus viviendas, tierras y propiedades". Muchos de estos desplazados se ven en la necesidad de abandonar sus documentos oficiales o los pierden en el camino y, en consecuencia, no pueden acceder a servicios sociales, quedando aún más vulnerables.

En este contexto, La Comisión Interamericana de Derecho Humanos, señalaba que en 2010, México contaba con 3,290, 310 migrantes internos y de acuerdo con el informe preparado por el Consejo Noruego de Refugiados y avalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, las luchas por el control de rutas de los cárteles de la droga, habían generado un importante fenómeno de desplazamiento interno.

2010 fue precisamente un año paradigmático de las formas de ejercicio de la violencia, pues la del crimen organizado y de las fuerzas de seguridad en sus enfrentamientos alcanzó su cúspide (11,500 muertos), pero también la violencia de las autoridades, disfrazada de enfrentamientos intracomunitarios e instrumentada por grupos paramilitares, con el ataque a la caravana humanitaria al municipio autónomo de San Juan Copala en la zona indígena triqui baja, y la violencia delictiva contra los transmigrantes (72 centro-suramericanos y mexicanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas).

La ausencia de Estado de Derecho y la pérdida de control territorial por las instituciones políticas y de orden público provocó la "feudalización" de vastas zonas por parte de grupos delictivos y político-militares que aterrorizan a los habitantes, generando flujos, en especial en zonas rurales, de éxodo de su población, que se refugian en otro municipio o ciudad del mismo o en otro estado (desplazados internos), y, en ciertos casos, en Estados Unidos, donde son refugiados sin estatus de asilados.

Al fenómeno del desplazamiento interno por violencia, hay que agregar a comunidades enteras que como una estrategia de supervivencia frente a las condiciones de precariedad en las que viven, se trasladan de sus lugares de origen a otras partes de México para trabajar en campos agrícolas como jornaleros.

Es claro que México carece de un marco jurídico específico para la protección de desplazados internos. Dicho marco sería de gran utilidad para identificar responsabilidades concretas y exigir una mejor rendición de cuentas.

Un primer intento para legislar sobre la materia se llevó a cabo en 2004 con una propuesta para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos; en ella se señalaba la obligación del Estado mexicano de atender a dicho grupo. La propuesta no fructificó.

Como ya se mencionó, el único instrumento legal de protección a desplazados internos que está en vigor en México es la recién aprobada (febrero de 2012) Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Esta ley es de suma importancia, no sólo por ser la primera en la materia en todo el país, sino porque nace en un estado donde el problema del desplazamiento interno ha sido histórico. Es importante mencionar que esta ley surge de una propuesta de académicos y de miembros de la sociedad civil. La ley sigue los Principios Rectores de Naciones Unidas y en gran medida se encuentra al mismo nivel que la legislación colombiana en la materia.

La ley también establece la creación de una estructura institucional conformada por el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno. El Consejo será el encargado de crear el Registro Estatal de Población Desplazada, que funcionará como un mecanismo para identificar a la población desplazada y saber sus características. Este último artículo es importante, ya que al establecer un registro para la población desplazada, ya se va a contar con cifras oficiales provenientes del estado. Es la primera vez que se contaría en México con un registro de esta naturaleza.

La ley tiene como objetivo la prevención del desplazamiento interno, la asistencia y la aplicación de soluciones duraderas para su superación, y el establecimiento de un marco de atención de esta población. Una de las características positivas de esta ley es el reconocimiento del deber de las autoridades para garantizarles a los desplazados internos el goce de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene. Otra característica importante es el reconocimiento del carácter de víctima de los desplazados internos, por lo que tienen un derecho de restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad. Es importante reiterar que los desplazados internos son un grupo vulnerable cuya esfera de derechos humanos se ha visto violentada; por lo tanto, son candidatos a una reparación integral por la afectación sufrida.

Asimismo, la ley reconoce que: "[l]os desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, lo que genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria". Lo anterior resulta interesante debido a que la comunidad internacional ha desempeñado un papel fundamental para la atención y reconocimiento del fenómeno de desplazamiento interno en México.

En este sentido, el primer requisito para atender la problemática de los desplazados internos forzados es que adquieran visibilidad en la opinión pública, y para ello es necesario disponer de un censo confiable de los desplazados forzados en México, elaborado por los tres niveles de gobierno y por las asociaciones cívicas defensoras de los derechos humanos, pues hasta ahora sólo hay estimaciones muy variables.

En segundo lugar, es preciso fundamentar sus derechos y darles un sustento jurídico e incluso constitucional, en el marco de los avances que ya se han logrado en el derecho internacional humanitario y en la propia ONU; luego, es menester lograr que el Estado "sea corresponsable en los daños materiales y el daño social que es causado a los cientos de miles de desplazados producto de la 'guerra' contra el narco, y que asuma su responsabilidad"

El Estado mexicano debe tener una política de reparación de daños, en materia de presupuesto y acceso a servicios básicos [de los desplazados] en las nuevas comunidades de destino; también tiene que haber una campaña de sensibilización en las comunidades de origen, de tránsito y de destino para aminorar el shock social que representa el desplazamiento, para no revictimizar, porque esto podría abonar al mismo proceso de violencia.

Para lograr hacer realidad lo anterior, es vital que en la Ley de Víctimas que se aprobó a principios de la presente administración se contemple a los desplazados internos forzados, como víctimas, a efecto de que por medio de esta se promuevan las medidas tutelares que debe tomar el Estado para protegerlos y ese es precisamente el objeto de la presente iniciativa.

Con la reforma propuesta, se pretende que en la Ley de Víctimas se contemple para los desplazados medidas de carácter preventivo y así, evitar las situaciones que provoquen desplazamientos internos, pues "todo ser humano tiene derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios", explorando todas las alternativas viables.

De la misma manera, en un escenario de desplazamiento se garantizaría para los desplazados en los lugares de asentamiento un alojamiento adecuado, alimentación, salud, vestido, higiene y seguridad suficientes. Asegurando su libertad de circulación, manteniendo la unidad familiar y evitando las separaciones forzadas.

En lo que respecta a la asistencia para el regreso, reasentamiento e integración local, las autoridades deberán:

– Resarcir sus pérdidas mediante pago de indemnizaciones por el Estado, y castigo y reparación de daños a los culpables de su desplazamiento.

– Proporcionarles documentos que reconozcan su personalidad jurídica en caso de pérdida durante la salida.

– Fomentar y apoyar el regreso de los desplazados a sus lugares de origen, siempre y cuando estén restablecidas las condiciones de seguridad para los desplazados y puedan recuperar sus bienes en buen estado; para ello las autoridades deben restablecer condiciones de seguridad y de reposición de infraestructuras, así como garantizar la recuperación de los bienes de los desplazados, reconociendo sus derechos agrarios en caso de campesinos ejidales y comunales.

– En caso contrario, facilitar la reinstalación e integración de los desplazados en su nuevo lugar de residencia, dotándoles de vivienda o de materiales para autoconstrucción, de tierra o procurándoles un empleo estable o apoyando la creación de cooperativas de productores (artesanales, agroindustriales, de servicios, etc.) entre ellos. “En el caso de los indígenas, se deben satisfacer sus necesidades territoriales”. Es crucial la obtención de un solar para vivienda y de un terreno para sus cultivos. Hay que evitar a toda costa que caigan en la servidumbre subpagada o en la informalidad, donde pueden ser capturados por la trata o la delincuencia organizada, y para ello se requieren programas educativos y culturales, y proyectos de desarrollo acordes con su experiencia productiva y sus códigos culturales, coplaneados con ellos.

Estas medidas garantizarán la protección y la asistencia a los desplazados internos forzados en cuanto a su integridad física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos. Sin embargo, la solución a largo plazo tiene que pasar por la normalización de la situación de los desplazados internos forzados, lo que implica esfuerzos del gobierno por “fomentar y apoyar el regreso voluntario de los desplazados internos a sus lugares de origen” o, en caso contrario, “apoyo para reintegrarse y recuperar un modo de vida que les permita mantenerse, así como tener acceso a la tierra”. Esto es un aspecto crucial, pues los desplazados con frecuencia son campesinos indígenas, por lo que no pueden colocarse fácilmente en empleos urbanos, y que tienen mucho arraigo a la tierra y a la comunidad, bases de su cosmovisión.

El derecho a ser reinstalados en iguales condiciones en un lugar alternativo seguro adquiere más relieve cuando los desplazados internos forzados no quieren regresar a sus comunidades porque no hay condiciones de seguridad, y a veces se ven obligados a hacerlo por el recorte de la ayuda humanitaria que recibían en sus campamentos o por estrategias gubernamentales que buscan crear divisiones en las comunidades. Las mujeres y los niños son los más vulnerables en los desplazamientos forzados, ya que la violencia sexual es utilizada a menudo como táctica de guerra; del mismo modo, el desamparo en el que se encuentren las mujeres puede volverlas víctimas de delincuentes que buscan explotarlas con propósitos sexuales o económicos, por tanto, deben ser objeto de protección especial por parte de las autoridades, quienes deben considerar un enfoque de género en sus programas dirigidos a los desplazados internos forzados, que asegure un acceso igualitario de las mujeres a los servicios y su participación en los programas de asistencia, así como en las negociaciones de paz, en las decisiones de regreso, de planeación de actividades de recuperación y en la lucha contra la impunidad.

Sin embargo, es necesario constatar que las políticas públicas del gobierno mexicano hacia los desplazados internos forzados son casi inexistentes: “No existe ningún mecanismo para vigilar o informar sobre los desplazamientos forzados, garantizar la protección física y jurídica de la propiedad que abandonan los desplazados o proporcionarles apoyo para integrarse”.

Por ello, es urgente contar con un marco jurídico que ampare a los desplazados internos forzados y que les permita resarcir sus pérdidas en un nuevo centro de población o recuperar sus bienes en su lugar de origen, amparados por medidas de seguridad.

Si bien, a raíz de la movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el 10 de octubre de 2011 se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), como una instancia que debería proporcionar a los desplazados ayuda para encontrar empleo y vivienda, facilitar su recepción en otra entidad y su acceso a programas sociales, y exhortar a las procuradurías de los estados a dar seguimiento a los casos de los desplazados, lo cierto es que se le dotó de escaso presupuesto y personal para que pudiera tener oficinas en los estados más castigados por la violencia. Y aunque la actual administración promulgó finalmente una Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013, misma que contempla, en un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a las víctimas tanto de los órganos de seguridad como del crimen organizado, y prevé indemnizaciones de parte de los tres niveles del Estado y de los culpables del delito no contempla hasta ahora a los desplazados internos forzados que no hayan sido víctimas directas, es decir, no considera el miedo fundado como factor causante de agravio a la integridad moral y de destierro de las personas.

Creo que es urgente subsanar esa deficiencia en la Ley, con una reforma que de reconocimiento a los desplazados forzados como víctimas y los ampare con las garantías de respeto a sus derechos humanos contemplados en la Ley General de Víctimas, ese es el objeto de la presente iniciativa.

El desplazamiento forzado por sus características, es un fenómeno que se produce porque el Estado no pudo garantizar la protección de estas personas y prevenir su desplazamiento; es de carácter masivo por la cantidad de personas víctimas; es sistemático porque su ejecución ha sido sostenida en el tiempo; es complejo por la

vulneración múltiple tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales; y continuo, dado que la vulneración de los mismos persiste en el tiempo hasta que se logre su restablecimiento.

Por lo anterior, y de acuerdo con los principios y estándares internacionales, a la población desplazada, se le debe considerar como víctima que es, le deben ser reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En mi opinión, tal reparación deberá incluir medidas para la restitución (incluyendo la restitución de los bienes abandonados); la indemnización por los daños causados; la rehabilitación (incluyendo medidas de atención médica y psicológica); medidas de satisfacción general y las garantías de no repetición de los hechos que generaron el desplazamiento

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

UNICO. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 2; se reforma el artículo 4 y se adiciona un tercer párrafo de la Ley General de Víctimas.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, **desplazados internos forzados** y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II.…;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; **Garantizar la protección y la asistencia a los desplazados internos forzados en cuanto a su integridad física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos**

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas **y desplazados internos forzados;**

V.…

CAPÍTULO II
CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos, o derechos como consecuencia de la comisión de un delito, **desplazamiento forzado de su comunidad** o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

….

….

Son Víctimas los desplazados internos como personas que de manera forzada han huido de sus hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y los desastres naturales.

…..

…..

Transitorios

Único. El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de septiembre de 2015.

1 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Informe del Representante del Secretario General, DENG, Francis M. presentado con arreglo a la Resolución 1997/39. Adición: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 11 de febrero de 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2, Principio 6, en http://www.acnur. org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022

2 *Cfr*. *"Principios Rectores de los Desplazamientos Internos"* en http://www.acnur.org/t3/ fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022

3 *Cfr*. CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS, Observatorio sobre el Desplazamiento Interno en http://www.nrc.org.co/ y ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS en http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

9) 08-09-2016
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Diario de los Debates, 8 de septiembre de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 08 de Septiembre de 2016

(Presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez)

Quienes suscribimos, **ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ**, **LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ,** Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México sufre una crisis en materia de derechos humanos, así lo han referido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015 en su reciente visita. En efecto, la debilidad de las instituciones, la penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social.

Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido más acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias franjas del territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado una falla estructural del Estado de derecho.

Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales o sumarias perpetradas por la delincuencia, en muchas ocasiones en connivencia con servidores públicos del Estado mexicano, conlleva a una desviación de las instituciones y su consecuente descredito

Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.

La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el país. En efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una genuina aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y reparación del daño.

Sin embargo, la Expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de debates y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para

ser observada, derivado de las opiniones de quienes señalaban que para emitirse una “ley general” debería existir una disposición constitucional que lo determinase.

En fechas recientes, el 25 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Desde nuestra perspectiva, dicha reforma viene a superar el debate que se dio entre quienes sostienen que la Ley General de Víctimas -publicada en Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013- no tiene base constitucional para haber sido expedida, y quienes sostenían que si la había.

Al margen de lo anterior, podemos decir que con la expedición de esta reforma Constitucional no debe haber mayor pretexto o argumento alguno para que las entidades federativas de todo el país cuenten con sus respectivas comisiones de víctimas. Recordemos que actualmente existe una falta de claridad respecto de cuáles son las obligaciones de las entidades federativas, particularmente de sus competencias, para la conformación de las respectivas comisiones locales de víctimas, sin embargo, la asignación de dicha facultad legislativa permite homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de gobierno, así como precisar su actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia.

3. Actualmente la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir con los mandatos que le impone la Ley General de Víctimas, entre otras razones por esta falta de claridad constitucional y jurídica. Las entidades federativas no han dado una respuesta homogénea a la necesidad de crear una Comisión de Víctimas, sus formas de integración, los procedimientos establecidos para la reparación integral, no se cuenta con los esquemas generales de regulación para el registro estatal de víctimas, la defensoría jurídica así como el establecimiento de sus respectivos fondos, por lo que proponemos en esta iniciativa que las víctimas cuenten con un marco jurídico flexible y acorde a su calidad para que de manera inmediata puedan acceder a la ayuda, la asistencia y la reparación de manera rápida y accesible.

4. Uno de los problemas estructurales que enfrenta la actual Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) es el reclamo legítimo de muchas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de poder acceder a los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala para brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

De la información existente podemos señalar que entre finales de 2014 y enero de 2016 este Fondo contó con 1,536 millones de pesos pero sólo usó el 3% de esa bolsa. Este dinero se destinó para la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%)1. Sin embargo a marzo de este año 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas –cabe señalar que aun estando en dicho padrón no se garantiza dicho apoyo- y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

En ese sentido proponemos hacer una separación que permita distinguir entre los recursos que son destinados a la reparación integral mediante el Fondo de Reparación de aquellos que deben ser de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son los necesarios y los más urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual en la presente iniciativa hemos definido como *gastos de ayuda*, es decir que gastos como son alimentación, hospedaje, trasportación y que hoy de manera indivisible forman parte del Fondo de Reparación. Los *gastos de ayuda* deben ser gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

De aprobarse esta iniciativa, las entidades federativas deberán contar también con un fondo de reparación y sus respectivos gastos de ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de Reparación, cuando la entidad federativa lo solicite, sea omisa o no cuente en el momento de la disponibilidad de recursos, y en el caso de que estos recursos no sean resarcidos, la CEAV podrá ejercer el derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la entidad federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

En ese sentido es que proponemos facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las entidades para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas;

5. Por otra parte, un problema que ha sido observado por organizaciones defensoras de los derechos humanos es que la CEAV enfrenta la existencia de un pleno que se ha venido reduciendo. Si bien la ley establece que estará integrada por siete comisionados, en la actualidad solamente funciona con cuatro de ellos en virtud de la renuncia de tres de sus comisionados. Hoy, a tres años de su integración y haciendo un balance del funcionamiento observamos una pesada estructura administrativa que por su diseño institucional no contribuye suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la propia CEAV por lo que resulta urgente modificar su estructura, integración y funcionamiento.

La existencia de un pleno de la Comisión de víctimas con siete comisionados y comisionadas ha demostrado ser una estructura demasiado ineficaz tanto presupuestal como institucionalmente. Por tanto, proponemos que la CEAV, al ser el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, no sólo cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio, sino que además cuente con la autonomía presupuestal que le permita a la CEAV determinar por si misma el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo proponemos que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Presidente, para lo cual el Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública una terna y el Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes. La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas probas con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Una vez designado por el Senado de la República. Cabe señalar que el titular designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Al respecto es importante reiterar que la reforma constitucional del 25 de julio de 2016 estableció la concurrencia entre la Federación las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal manera que en todas las entidades federativas deberán de existir las Comisiones de Víctimas respectivas, con sus respectivos fondos y gastos de ayuda, así como la Asesoría Jurídica adscritas a ellas y su Registro respectivo. Sin embargo, es necesario establecer los supuestos mediante los cuales la CEAV podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden de las entidades federativas.

6. Aunque en la Ley General de Víctimas se establece que existe una obligación de las y los funcionarios para velar por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral a fin de no ser re victimizadas. Esta iniciativa propone incluir que “las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.

7. Por lo que se refiere a los principios que guían a los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley se incluye el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Lo anterior en virtud de que la Ley en citada establece en su artículo 49 los siguientes:

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

8. Por otra parte, esta iniciativa busca visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México (DFI). Esta terrible realidad está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando

drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y arraigos. Es posible interpretar el actual contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos en México como una situación que preocupa y debe ocupar a todas las autoridades mexicanas, pues estas situaciones, así como el DFI por proyectos de desarrollo, entre otras causas que se analizan en este informe, están provocando el surgimiento progresivo de víctimas de DFI en diferentes latitudes del territorio nacional2.

De acuerdo con la CNDH, el DFI de personas en México se ha generado por violencia, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad periodística3. En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta violencia no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las víctimas4.

De igual manera, se considera sumamente importante una mayor visibilidad a las personas migrantes víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en esta Ley. Las personas migrantes que transitan por México son principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Igual que muchos migrantes mexicanos, salen de sus comunidades por necesidad y corren riesgos grandes para cruzar la frontera con Estados Unidos. No existen datos confiables sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México, sin embargo son emblemáticos los casos de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, además todos hemos visto las madres centroamericanas que han organizado caravanas anuales para buscar a sus desaparecidos5.

La creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en la PGR es un paso importante para las personas migrantes víctimas de delitos en México y sus familiares6. Dicha Unidad, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, realizará la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigará delitos y coordinará acciones para reparar el daño7. Siendo la Ley General de Víctimas el ordenamiento especializado en materia de reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos se hace imprescindible que exista una coordinación entre el mecanismo y la Ley. Por ello, la importancia de que se les tome en cuenta al momento de generar los lineamientos, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante.

9. Esta propuesta busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para "procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral" podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

Parte importante para fortalecer la figura del asesor es que se propone que a su cargo estén la administración de los *gastos de ayuda* previstos que le permitan tramitar, supervisar o implementar las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley.

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual maneta y con la finalidad de evitar confusiones respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como son las procuradurías de las entidades federativa o dependencias análogas.

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, proponemos que se integra por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y, contará con un servicio civil de carrera que comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

En mérito de los expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta alta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECTO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo1; las fracciones I, III y VIII del artículo 6; la fracción XXX del artículo 7; los párrafos primero y cuarto del artículo 8; el quinto párrafo del artículo 21; los artículos 31, 39; 45, y 47; las fracciones I y VI del artículo 61; los párrafos primero y último del artículo 67; el primer párrafo del artículo 68; el primer y último párrafo del artículo 84; el artículo 85; la fracción IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; la fracción XIV del artículo 88; las fracciones I,III y VI del artículo 125; el artículo 131; los párrafos primero y segundo del artículo 132 y el artículo134. **Se derogan** los artículos 93 94 y139. **Se adiciona** los párrafos quinto y sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 5; la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 6; los párrafos quinto y sexto del artículo 8; un quinto párrafo al artículo 9; un tercer párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 34; dos últimos párrafos al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 68; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 81; los artículos 88 Bis; 125 Bis; 125 Ter y132 Bis; todos de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 **y 73 fracción XXIX-X,** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. **Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.**

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

…

…

…

Interés Superior de la Niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

…..

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Asesor Jurídico**:** Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas **adscritos a la Comisión Ejecutiva y** sus equivalentes en las Entidades Federativas;

II. …

III. Comisiones de víctimas: **Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**;

IV a V. …

VIII. Fondo: Fondo de Reparación Integral

IX. Gastos de Ayuda: Recursos para gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación en la presente Ley;

X. Hecho victimizante: …

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo **más no limitativo** y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I a XXIX. ..

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional **del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;**

XXXI a XXXIV. …

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida **del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda,** de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de **ayuda inmediata**, ayuda, asistencia, atención, **rehabilitación** y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones

públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias,** a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas otorgarán, con cargo a sus Gastos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

La Comisión Ejecutiva será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo a los Gastos de Ayuda, el cumplimiento de las medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en un plazo determinado; en caso de que los recursos de los Gastos de Ayuda no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Comisión Estatal y contra quienes hayan cometido el delito.

Artículo 9.…

…

…

…

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.

Artículo 21. …

…

…

…

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás legislación aplicable**, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

…

…

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Gastos de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 31. La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables **a los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.**

Artículo 34. ...

I. a VI.

...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo **o requiera trasladarse al mismo o a otra entidad con motivo de una diligencia de carácter judicial,** las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno **o, en su defecto, la Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda,** pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro, el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. y **que no le represente mayores cargas de comprobación.**

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; **desplazados internos forzados, migrantes,** adultos mayores y población indígena.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración.** La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 61. ...

...

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona**;

II. a V. ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;**

VII. a VIII. ...

...

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I. a VIII. …

…

…

En los casos de las fracciones VII y VIII cuando se hayan cubierto con los Gastos de Ayuda no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de víctimas de la entidad federativa, a través de la Asesoría Jurídica,** determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) …

b) …

…

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización, que** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, **su libre desarrollo de la personalidad** o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

La Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

Asimismo, promoverá convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas;

II a XVII. …

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, de gestión **y presupuestal.** El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

...

…

...

Las entidades federativas contarán con **un Fondo de Reparación, los Gastos de Ayuda,** una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva está a cargo del Comisionado Presidente. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública una terna para su nombramiento. El Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas con amplio reconocimiento nacional en la defensa y protección de los derechos humanos.

Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Senadores propondrán al Pleno el nombre de la persona que ocupara la presidencia de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

I. a III. …

IV. Contar con título profesional en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología o especialidades equivalentes.

V. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección **del titular de la Comisión,** deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El titular de la Comisión desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Presidente para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a XIII. …

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo **de Reparación Integral** y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas:

XV. a XXXVI. …

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables;

II. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, o

III. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y los Convenios de Colaboración.

Artículo 93. Se deroga

Artículo 94. Se deroga

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. **Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;**

II. …

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento **jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.**

Artículo 125 bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

Artículo 125 ter. La Asesoría Jurídica tendrá a su cargo administración de los Gastos de Ayuda previstos en la presente Ley, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la Asesoría Jurídica velara por la maximización del uso de los recursos de Gastos de Ayuda, bajo el criterio de priorización a los casos de mayor gravedad.

TÍTULO OCTAVO
FONDO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y GASTOS DE AYUDA

Artículo 131. Los apoyos para la ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos podrán otorgarse con cargo a los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de Comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, según corresponda.

Artículo 132. El Fondo **de Reparación integral** se conformará con:

I. …

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, **el cual no podrá ser disminuido.**

II. a VIII. …

…

…

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 10% del total monto del Fondo asignado anualmente por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egreso de la Federación.

Artículo 132 Bis. El Fondo de Reparación Integral y los Gastos de Ayuda en cada Entidad Federativa, se conformaran con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, deberá ser igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 20% del total monto del Fondo asignado anualmente en el Presupuesto de Egreso de la entidad respectiva.

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo **y de los Gastos de Ayuda,** las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 139. Se deroga.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales para que las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades Federativas se integren.

CUARTO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

QUINTO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva emitirá los lineamientos y disposiciones necesarias de operación, administración y funcionamiento de los recursos destinados a los Gastos de Ayuda, de conformidad con la presente Ley.

SEXTO.- En plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas deberá establecer las directrices para la celebración de los convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda.

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar sus reglamentos, manuales y reglas de operación a fin de cumplir con lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva para la adecuada implementación de las medida de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. **Angélica de la Peña Gómez**.-Sen. **Fernando Yunes Márquez**.- Sen. **Laura Angélica Rojas Hernández**.- Sen. **Armando Ríos Piter**.- Sen. **Alejandro Encinas Rodríguez.**

1 *El tortuoso camino de las víctimas en México*. Periódico El País, sección Internacional, 15 de marzo de 2016.

2 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH, Mayo 2016, pp.3. Disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

3 El único caso de conflicto armado con desplazamiento al que se hace referencia es en relación con los sucesos de 1994 en Chiapas. Citado en Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México**,** *Op. Cit***,** pp. 3.

4 *Idem*.

5 KNIPPEN, José, "Un primer paso hacia la justicia para víctimas migrantes", FUDAR, 23 de febrero de 2016. Disponible en Internet: http://fundar.org.mx/un-primer-paso-hacia-la-justicia-para-victimas-migrantes/

6 El pasado 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

7 *Idem.*

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

La que suscribe, **CRISTINA DÍAZ SALAZAR** Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) el 9 de enero de 2013 y su posterior reforma del 3 de mayo del mismo año, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta entonces, no habían sido debidamente reconocidos.

Esta transformación se entiende en un contexto de, por un lado, graves escenarios de violencia que condujeron a la victimización de numerosas personas y, por el otro, de una conquista y apropiación efectiva de derechos por parte de la sociedad civil.

La LGV constituyó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Este marco jurídico y el andamiaje institucional que puso en marcha, significaron una postura profundamente innovadora no sólo en el contexto mexicano sino a nivel internacional. La Ley tiene un carácter humanista y progresista, es armónica con los estándares internacionales de derechos humanos y pone en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas.

La LGV y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) constituyeron un parteaguas en México: la creación de una política de Estado en materia de atención a víctimas y la consolidación de un derecho victimal efectivo, colocando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como el órgano operativo y rector de dicha encomienda.

Sin embargo, como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de ella son perfectibles y sujetas de revisión y diagnóstico. A tres años de la entrada en vigor de la Ley y dos años de la puesta en operación de la CEAV, se ha identificado la existencia de disposiciones que dificultan aspectos fundamentales de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, obstaculizando los procesos de atención y reparación.

Este ejercicio legislativo parte del análisis de una ley que en su momento fue profundamente innovadora y atendió una necesidad impostergable, pero que a la luz del estudio de su implementación en la actualidad, se hace evidente la importancia de realizar modificaciones para fortalecer el marco jurídico de la operación institucional. No debe olvidarse que es responsabilidad

del Estado revisar y perfeccionar los instrumentos para proteger los bienes jurídicos que tutelan; en este caso, es menester garantizar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización.

Esta propuesta de reforma a la Ley replantea la relación del Estado con las víctimas mediante una institución más ágil, más cercana y más efectiva que les permita una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación de su proyecto de vida; condiciones imperativas para alcanzar un pleno Estado de derecho y paz social.

Regulación de la facultad de atracción

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la facultad de atender y reparar a las personas víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales. Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local.

Fuente: **Sistema Nacional de Seguridad Pública** (SNSP)

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Federal	**125,328**	**98,189**	**98,059**	**95,727**
Común	**1,704,915**	**1,681,077**	**1,590,331**	**1,500,897**
	1,830,243	1,779,266	1,688,390	1,596,624
Federal	6.8%	5.5%	5.8%	6.0%
Común	93.2%	94.5%	94.2%	94.0%

La LGV se publicó el 9 de enero de 2013 y se previó a los congresos locales un plazo de 180 días para armonizar sus respectivos ordenamientos jurídicos conforme a la ley, lo cual incluye el establecimiento de comisiones de atención a víctimas estatales. Empero, a febrero de 2016, tan solo once comisiones se encuentran funcionando, de las cuales únicamente seis cumplen con lo establecido en la Ley. En este sentido, un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la LGV.

A partir de este escenario, es imperativo y urgente establecer directrices puntuales a fin de que la CEAV pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local. Para esto, se pretenden fijar los supuestos en los cuales la CEAV podrá atraer un asunto en la norma adjetiva.

Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 mediante la cual se implementa en nuestro país el sistema de procesamiento penal acusatorio, estableció en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, como uno de sus principios generales el de reparar el daño a la víctima. Se otorgó a la víctima la facultad de solicitar directamente la reparación del

daño. Por otra parte, el apartado B de dicho artículo, reconoció los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se le haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incorporó como una de sus estrategias transversales para la consecución de un México en Paz, el proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas en el marco de la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Consecuencia de lo anterior, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible; de ahí, la necesidad de que reformar la Ley para que la CEAV cuente con mecanismos e instrumentos para brindar una atención y representación jurídica de primer nivel, que garantice el enfoque restaurativo del NSJP.

Participación de la sociedad en la política pública.

Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, resulta imprescindible que en la elaboración de la política pública participen en forma activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea lo más abierta y transparente posible.

La meta “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece como uno de sus ejes prioritarios el fortalecimiento de las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con todos los actores de la sociedad. Es por ello que la participación de la sociedad en las políticas públicas es necesaria para que las acciones en materia de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas sean realmente efectivas.

Una de las estrategias transversales del PND es la implementación de un Gobierno Cercano y Moderno. Esto significa que para que las acciones y políticas gubernamentales incidan de manera directa en la calidad de vida de las personas, es indispensable que el gobierno sea más eficiente, que optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde la visión del PND, un gobierno cercano y moderno impulsa la congruencia y consistencia del orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre jurídica. Del mismo modo, es obligación del gobierno impulsar acciones que den mayor eficacia a la justicia en los estados y en la Ciudad de México y promover el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, es responsabilidad del gobierno garantizar que las víctimas puedan acceder de manera ágil a los recursos previstos por la ley para resolver sus necesidades inmediatas derivadas

del hecho victimizante y también, a los destinados a la reparación integral. Para conseguir lo anterior, resulta también apremiante el adelgazamiento de los mandos altos y la implementación de mecanismos que permitan a las víctimas dar seguimiento eficaz a sus asuntos.

Por otro lado, la participación de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia en la elaboración de la política tendiente a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de víctima es fundamental. Si bien, la redacción actual de la Ley General de Víctimas establece que la sociedad civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar activamente en la elaboración de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral así como en la implementación de la política pública, la realidad es que, actualmente, no se prevén en la ley mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los destinatarios de la Ley en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cabe destacar que uno de los compromisos firmados por México en materia de participación ciudadana y que constituye un importante referente a nivel internacional, es la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). La AGA es una iniciativa internacional cuyo propósito es proveer una plataforma internacional para facilitar que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

Tras la suscripción de los acuerdos de la Alianza por el Gobierno Abierto, México elaboró el Plan de Acción 2013 – 2015 en donde se comprometió, entre otras cosas a la implementación de un gobierno centrado en la ciudadanía y la elaboración de políticas destinadas al empoderamiento y la participación ciudadana.

En la actualidad, la participación de la ciudadanía en la política sobre la atención a las víctimas no debe limitarse a la consulta, tal y como lo establece la actual redacción de la LGV en donde se prevé la asistencia de la sociedad civil a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNV); por el contrario, debe ampliarse en la ley para garantizar una participación real, en donde sean las víctimas y la sociedad civil quienes participen en con poder de decisión en el ciclo completo de las políticas públicas; es decir, en su formulación, instrumentación, control y evaluación.

En el ámbito de la Administración Pública Federal, México cuenta con experiencias claras sobre la forma en que la sociedad civil participa de manera real en el ciclo completo de las políticas públicas. Para ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su título sexto, la creación de una Asamblea Consultiva, misma que se encuentra conformada por *"no menos de diez ni más de veinte personas representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 por ciento de personas del mismo sexo".* La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) cuenta con atribuciones de opinión y asesoría sobre la elaboración y la implementación de la política pública de igualdad y no discriminación y tiene la obligación de designar un representante ante la Junta de Gobierno de la Institución, de tal forma que queda

garantizada la participación de la sociedad civil no sólo en la opinión, sino también en la toma de decisiones.

La actual conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no necesariamente garantiza la participación de la sociedad a pesar de los requisitos solicitados a los Comisionados. Para ello, la figura de una Asamblea o un Consejo Consultivo resulta de mayor utilidad en términos de la incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación de la política pública.

Atención más ágil para las víctimas

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso la justicia, a la verdad y a la reparación de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, según lo establece el artículo 79 de la LGV. Esto significa que el SNAV es una instancia deliberativa y de toma de decisiones.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo del SNAV, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del Sistema Nacional. Desde esta perspectiva, resulta innecesario que el órgano operativo cuente con un órgano deliberativo como lo es el Pleno de los Comisionados pues ello significa que las decisiones deben someterse a criterios que van más allá de lo operativo.

Si bien la LGV concibió al Pleno de los Comisionados como un órgano de discusión de la política pública de atención a víctimas en la actualidad, el Pleno de la CEAV centra su actuación en temas de carácter adjetivo, función que puede ser delegable a un solo titular que sea auxiliado por las áreas administrativas correspondientes.

Según datos obtenidos a partir de las resoluciones que el Pleno de la Comisión Ejecutiva ha emitido desde su primera sesión, el 17 de octubre de 2013, al 31 de octubre de 2015, se ha identificado que durante el primer año de sesiones del Pleno, se aprobaron 131 acuerdos, de los cuales 43% se refirieron a atención y reparación a personas víctimas, mientras que 19% se relacionaban con cuestiones operativas. Durante el segundo año de sesiones, los acuerdos referentes a la atención y reparación constituyeron el 31% de los 112 emitidos en total, mientras que los acuerdos referentes a la operación institucional representaron el 35%.

Esta tendencia decreciente en cuanto a acuerdos de atención y reparación se explica por el hecho de que la institución ha alcanzado una mayor madurez en cuanto a temas de atención que no requieren, per se, ser discutidos y aprobados en el Pleno. Por otra parte, los proyectos aprobados de reparación han sido votados de forma unánime.

Por lo anterior, se observa que el Pleno funciona, en los hechos, como un órgano operativo y no deliberativo en cuestiones de fondo, cuyas decisiones podrían ser tomadas y ejecutadas con mayor eficacia en un organismo unipersonal.

Ante esto, resulta necesario hacer una revisión de la estructura de la CEAV. La compactación y optimización en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas.

Propuesta de Reforma a la Ley General de Víctimas

Por lo anteriormente expuesto es que se proponen realizar las siguientes reformas a la Ley General de Víctimas:

En el artículo 6, se modifica la fracción III para homologar el término "Entidad federativa".

Asimismo se adiciona una fracción a fin de prever con claridad que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas cuenten con los tres elementos fundamentales de la LGV: El Registro, la Asesoría Jurídica y el Fondo.

La redacción actual de la LGV establece con claridad, que las entidades federativas deberán constituir sus respectivas comisiones estatales de atención a víctimas; sus registros de víctimas, y sus unidades de asesoría jurídica, no obstante, sólo señala de manera tangencial la existencia de los fondos locales en el art. 67:

> *"El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria* ***a cargo del fondo respectivo en términos de*** *la presente Ley o* ***la legislación local aplicable****, así como de las normas reglamentarias correspondientes…"*

Por lo anterior, se propone incluir en la LGV como obligación de las entidades federativas, a través de sus comisiones de atención a víctimas, la de constituir sus propios fondos de ayuda, asistencia y reparación integral, previendo recursos de origen en sus respectivos presupuestos.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:	**…**
I a II. …	I a II. **…**
III. Comisiones de Víctimas: Comisión Estatal **y del Distrito Federal** de Atención Integral a Víctimas;	**III**. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas **en cada entidad federativa**;
IV a VIII. **…**	IV a VIII. **…**

	VIII Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;
IX a XXII. **…**	IX a XXII. **…**

El artículo 8 de la Ley General de Víctimas se ajusta la redacción, en virtud de que el párrafo hace alusión a la exclusividad en el otorgamiento de apoyos, y más adelante en el mismo párrafo abre un caso de excepción.

Se adicionan dos párrafos al artículo a fin de facultar a la CEAV y a las comisiones locales, para que puedan otorgar apoyos económicos a las víctimas con cargo al Fondo, en las anotadas circunstancias, las víctimas tienen derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de sus derechos.

En este sentido, el presente artículo retoma que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades; entre otras, de alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos; durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Asimismo, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, se agrega un párrafo en donde se establece que en casos urgentes o de extrema necesidad, o en aquellos que las instituciones públicas no cuenten con capacidad para brindar la atención de las víctimas, se podrá recurrir a instituciones de carácter privado, con la utilización de los recursos del Fondo o de los Fondos estatales, según sea el caso.

Se adiciona un último párrafo al artículo 8 a fin de prever la facultad de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de Víctimas según corresponda, de participar en el otorgamiento de ayudas provisionales a fin de garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona a las víctimas, que les faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para su atención y asistencia.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 8. …	**Artículo 8....**

…	**…**
…	**…**
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán **exclusivamente** por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas **y** municipios, a través de los programas, mecanismos y servicioscon que cuenten**, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas**.	Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas o municipios **en el ámbito de sus competencias**, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten.
	En casos urgentes, de extrema necesidad o en aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.
	La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal que corresponda, medidas de ayuda, asistencia y atención, que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.
	Las medidas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas.

Se adiciona un último párrafo al artículo 27 para incluir como gastos con cargo al Fondo o a los Fondos estatales todos los conceptos de reparación integral y no sólo aquellos que tengan que ver con la compensación económica. Ello permitirá el ejercicio eficaz de los recursos del Fondo para el propósito por el cual fue constituido, consistente en otorgar la debida y oportuna ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

Con esta modificación se amplían los alcances del concepto de reparación integral con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Asimismo, se incluye que las medidas de reparación integral previstas en el artículo 27, podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:	**Artículo 27.** …
I. a VI. …	I. a VI. …
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.	…
	Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

Se adiciona el artículo 39 Bis a la LGV, para incluir como medidas de ayuda inmediata los apoyos de traslados, alimentación y hospedaje que requieran las víctimas y, sobre todo, definir un modelo de operación que haga posible a la CEAV cubrir dichas erogaciones de forma anticipada. Lo anterior, siempre que se acredite que el beneficio otorgado tiene la finalidad de dar viabilidad a la atención multidisciplinaria de las mismas y al efectivo ejercicio de sus derechos, asimismo se adiciona un último párrafo para realizar las acciones descritas con cargo al Fondo.

Esta modificación permitirá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a abordar uno de sus principales retos pues actualmente el otorgamiento de las medidas del artículo 39 bajo la legislación actual, se realiza bajo condiciones específicas y restrictivas, toda vez que están previstas

sólo mediante el proceso de reparación integral que llega en la etapa final del proceso de atención. Esto, coloca a las víctimas en una posición que hace nugatorio el ejercicio de múltiples derechos y provoca escenarios de revictimización.

De igual forma, en un último párrafo se prevé que las autoridades que generen el hecho victimizante sean quienes cubran los recursos correspondientes, para lo cual, en un plazo de 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal, la Comisión de Víctimas estatal deberá reintegrar los gastos que, en su caso, se hayan erogado con cargo al Fondo federal.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE	**MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO**
	Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:
	I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;
	II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;
	III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y
	IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.
	En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión

	Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.
	La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas el reintegro de los gastos a que se refiere el párrafo anterior en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley.
	Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado.

Se adiciona el artículo 61 bis a fin de especificar todos los conceptos de reparación integral y no sólo aquellos que tengan que ver con la compensación económica. De este modo se mejora el ejercicio de los recursos del Fondo para el propósito por el cual fue constituido, consistente en el otorgamiento de la debida y oportuna ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

Mediante esta modificación, se supera el concepto de reparación integral con cargo al Fondo que sólo contempla las medidas de compensación económica, sin considerar las medidas de reparación como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la de no repetición y las colectivas, que también pueden ser evaluables económicamente como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
TITULO QUINTO MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL	**…**
…	**Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el presente Título, cuando sean evaluables y viables económicamente, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.**

Se modifica el artículo 67 de la Ley General de Víctimas para armonizar las facultades del Pleno a la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que dará celeridad a la resolución de los casos de ayuda, asistencia, atención y reparación con cargo al Fondo, asimismo se ajusta la legislación toda vez que desaparece dicho órgano.

Se modifica el último párrafo del artículo 67 a efecto de que sea congruente con la reforma sobre la desindexación del salario mínimo en vigor en todo el país, colocando la unidad de medida y actualización como base para el cálculo de compensación subsidiaria.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 67. **El Pleno de la** Comisión Ejecutiva **correspondiente determinará** el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:	Artículo 67. **La** Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán** el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
a) …	**a)** …
b) …	**b)** …
La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.	…
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces **el salario mínimo mensual en el Distrito Federal,** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización**, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 79, para armonizarlo con la reforma constitucional sobre la Ciudad de México, asimismo se modifica el último párrafo del artículo 79 para establecer que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas tienen la obligación de atender y en su caso reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 79. …	**Artículo 79. …**

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **del Distrito Federa**l y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.	El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.
…	**…**
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva **Federal de Atención a Víctimasy Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal**, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.	Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una **Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas**, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Las Comisiones **Ejecutivas de atención a** víctimas **estatales y del Distrito Federal** tienen la obligación de **atender a las víctimas** de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. **Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.**	Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender**, asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
	Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutivacuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, **en términos de lo previsto por el Reglamento**.

Se modifica el artículo 83 para darle la facultad al Comisionado Ejecutivo de la CEAV de acordar las invitaciones a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a efecto de armonizarla con la nueva estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Articulo 83….	Artículo 83…
...	…
…	…
…	…
…	…
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Pleno** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.	Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.
…	…

Las siguientes propuestas de reforma se han hecho para modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de fortalecer su operatividad, permitiendo dar mayor celeridad a la toma de decisiones con respecto a la atención a las víctimas.

La modificación propuesta contempla también el adelgazamiento de la estructura de mando de la Comisión Ejecutiva y la eliminación de los Comités. Esto último contribuirá a eficientar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área.

Se agrega en el artículo 84, el objetivo y el domicilio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la homologación del término entidades federativas para armonizarla con las reformas a la Ley.

Se adicionan los artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, y 84 Octies en los que se señalan diversas disposiciones en sintonía con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

Se modifica el artículo 85 para que la Comisión esté a cargo de una sola persona titular que sea nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, sustituyendo así el actual

funcionamiento del Pleno de la CEAV, que ha centrado su actuación en temas de carácter adjetivo, función que será delegada a un solo titular que sea auxiliado por las áreas administrativas correspondientes. En este sentido, se derogan todas las disposiciones que contienen las atribuciones del Pleno de Comisionados.

Se adiciona el artículo 88 Bis para fijar en las atribuciones de la Comisión Ejecutiva para que pueda dictaminar la procedencia de conocer y definir la ruta de acción sobre casos de víctimas cuya competencia originaria corresponda al fuero local y así, asistir y, en su caso, reparar a víctimas del fuero local, lo que hemos llamado la "facultad de atracción" lo que agilizará el trato a las víctimas. Las fracciones adicionadas dan cuenta de los requisitos de procedencia de esta facultad, a fin de no hacerla discrecional, sino específica.

Lo anterior, sin menoscabo de los mecanismos de restitución que se diseñen para que las Comisiones de Víctimas de las entidades federativas devuelvan al Fondo federal los recursos erogados.

Se modifica el artículo 93 a fin de eliminar los comités especializados, con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en preparar las resoluciones de reparación al Pleno.
Se armonizan las disposiciones de la Ley General de Víctimas en concordancia con la reforma propuesta al artículo 88 Bis, motivo por el cual se adiciona al artículo 96 la excepción del orden local para el Registro Nacional de Víctimas.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es **el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas**, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. **El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.**	**Artículo 84.** La Comisión Ejecutiva es **un organismo descentralizado; no sectorizado;** con personalidad jurídica y patrimonio propios**; con** autonomía técnica y de gestión, **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna.**
	La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención

	a Víctimas y las demás que esta Ley señale.
	El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.
…	...
…	...
…	...
Las entidades federativas **y el Distrito Federal** contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable	Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.
	Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:
	I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;
	II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
	III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.
	Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.
	Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, y está integrada de la siguiente

	manera:
	I. El titular de la Comisión Ejecutiva;
	II. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:
	a) Gobernación, quién la presidirá;
	b) Hacienda y Crédito Público;
	c) Desarrollo Social;
	d) Educación Pública;
	e) Salud;
	f) Trabajo y Previsión Social, y
	g) Desarrollo <u>Agrario,</u> Territorial y Urbano.
	III. Un representante de la Procuraduría General de la República;
	IV. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, y
	V. El Presidente de la Asamblea Consultiva.
	Los integrantes a que se refieren las fracciones II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto.
	Cada integrante tendrá nivel de subsecretario o equivalente, el cual contará con un suplente con nivel mínimo de Director General Adjunto u Homólogo.
	La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, en términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
	Artículo 84 Quinquies.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces año y las extraordinarias que propondrá su Presidente o al menos 3 de sus miembros.
	Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de

	empate, el Presidente, tendrá voto de calidad.
	Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:
	I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;
	II. Aprobar las disposiciones normativas que la Comisión Ejecutiva emita en términos de la Ley y el Reglamento;
	III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;
	IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva en términos del artículo 89 de la Ley, y
	V. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos
	Artículo 84 Octies.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.
	La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes tendrán carácter honorífico.
	Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
	La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a

	los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
	Las facultades de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **integrada por siete comisionados**. **El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes**	**Artículo 85.** La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, cuyo mandato durará cuatro años sin posibilidad de reelección.**
Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.	**Durante su encargo no podrá desempeñar ningún otro trabajo o comisión remunerada, salvo la academia o la investigación.**
Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:	**Derogado.**
I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;	**I. Derogado.**
II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.	**II.Derogado.**
Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de	**Derogado.**

encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.	
En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.	**Derogado.**
Artículo 86. Para ser **comisionado se** requiere:	**Artículo 86.** Para ser Comisionado **Ejecutivo** se requiere:
I a **II. ...**	**I** a **II. ...**
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y	**III.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación,** y
IV. No haber **ocupado cargo público ni haber** desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.	**IV.** No haberdesempeñadocargodedirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación**.**
En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.	**Derogado.**
Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.	**Derogado.**
Artículo 87. **La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.**	**Artículo 87. Derogado.**
Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:	**Artículo 88. …**
I a **XXXIV. …**	**I** a **XXXIV. …**
XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir	**XXXV.** Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el

las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia**, y**	Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia**;**
	XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y
XXXVI. …	**XXXVI. …**
	Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:
	I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con Comisión de Víctimas;
	II. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables;
	III. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, o
	IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:
	a) Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;
	b) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;
	c) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, e
	d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de

	Gobernación, cuando el hecho constitutivo del delito revista trascendencia nacional.
	La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.
	Las Comisiones de Víctimas deberán restituir los recursos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado.
Artículo 90. …	Artículo 90. …
Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **de alguno de sus integrantes** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas	Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.
Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.	**Artículo 92. Derogado.**
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presente.	**Derogado.**
Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:	**Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, como el área responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el**

	Reglamento.
I. Comité de violencia familiar; **II. Comité de violencia sexual;** **III. Comité de trata y tráfico de personas;** **IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;** **V. Comité de personas víctimas de homicidio;** **VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;** **VII. Comité de detención arbitraria;** **VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y** **IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.**	**Derogado**
Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.	**Derogado**
Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad federativa también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.	**Artículo 94. Derogado.**
Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.	**Derogado.**
Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y elaboración de los diagnósticos, cuidando la información de carácter privado de las víctimas	**Derogado.**

Artículo 95. El Comisionado **Presidente** tendrá las siguientes facultades:	Artículo 95. El Comisionado **Ejecutivoademás de las que establece el artículo 59 la Ley Federal de las Entidades Paraestatales**, tendrá las siguientes facultades:
I. …	I. …
II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que **celebre laComisión Ejecutiva;**	II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que **realice la Junta de Gobierno**;
III. …	III. …
IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos **a través de las sesiones que se celebren;**	**IV.** Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos**;**
V a VIII. …	V a VIII. …
IX. **Proponeral Pleno de la Comisión Ejecutiva** los convenios de colaboración o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;	IX. **Suscribir** los convenios de colaboración, **coordinación o concertación** o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
X a XI. …	X a XI. …
XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, **y**	XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva**;**
	XIII. Determinar las medidas de ayuda, asistencia y atención, así como la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la asesoría de las Asamblea Consultiva, y
XIII. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.	**XIV.** Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Se armoniza la Ley General de Víctimas en concordancia con la adición propuesta al artículo 88 Bis, motivo por el cual se reforma el artículo 96 para prever la excepción del registro de víctimas del orden local en el Registro Nacional de Víctimas.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 96. …	**Artículo 96....**
...	**...**

EI Registro Nacional de Víctimas **será** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva **y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.**	EI Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.
El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.	El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal**, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.**
Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.	Las **entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.
El **Presidente de la Comisión Ejecutiva** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.	El **Comisionado Ejecutivo** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.
…	**…**

Se reforma el artículo 132 para prever que la Comisión Ejecutiva podrá solicitar recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de que el patrimonio del Fondo disminuya del 0.014% del gasto programable del ejercicio fiscal anterior.

Se ajusta el artículo 135 a fin de prever las erogaciones con cargo al Fondo de las medidas de ayuda provisional, en particular, los traslados de víctimas, previstas en la propuesta de reforma a los artículos 8 y 39 Bis.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 132. El Fondo se conformará con:	**Artículo 132.** …
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la	**I.**…

Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;	
El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.	**La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del año inmediato anterior, en cuyo caso la Comisión Ejecutiva podrá solicitar los recursos presupuestarios correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;**
II. a VIII. …	II. a VIII. …
…	…
…	…
Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá crear un fondo de emergencia **para los apoyos** establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.	**Artículo 135.** Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de medidas de ayuda provisional a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como para** los apoyos establecidos en el Título Tercero de **la misma**, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.
…	…

En el artículo 136 se preve un mecanismo de ayuda y asistencia ágil, efectiva y eficiente a las víctimas con cargo al Fondo, con la finalidad de garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata, así como su acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona, y que les faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para su atención y asistencia.

Por otra parte, los artículos 138 y 145 cambian su redacción para estar acorde a la nueva estructura de la CEAV facilitando así su actuación eficaz, motivo por el cual, se ha modificado el informe de la persona titular del Fondo que se llevará a cabo ante la Junta de Gobierno de la CEAV y para que sea por acuerdo del Comisionado Ejecutivo la determinación del apoyo o ayuda a la víctima.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 136. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de	**Artículo 136. …**

transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.	
	La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar por lo menos el setenta y cinco por ciento del ejercicio del monto, a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso.
Artículo 138. El titular del Fondo deberá:	**Artículo 138.** …
I a II. …	I a II. **…**
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva**, y	III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno**, y
IV…	IV. …
Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva **lo** turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la **propuesta que el comisionado presidente presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva para determinar el apoyo o ayuda** que requiera la víctima.	Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva **la** turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la **determinación del Comisionado Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y, en su caso, reparación** que requiera la víctima.

Se propone incluir un Capítulo V al Título Octavo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a fin de prever la constitución y conformación de los Fondos estatales de atención a víctimas, lo cual promueve una eficaz y oportuna atención a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos del orden estatal.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
TÍTULO OCTAVO **FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL**	**TÍTULO OCTAVO** **FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL**
CAPÍTULO I a IV **…**	**CAPÍTULO I a IV** **…**
	CAPÍTULO V **De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa**

	Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.
	Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
	La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
	La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.
	Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos Estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley.
	Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de

	recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y en las disposiciones correspondientes.

Se modifican los artículos relativos a la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal para agilizar su operación y hacerla acorde a la nueva estructura de la CEAV.

DISPOSICIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 166. ...	**Artículo 166. ...**
Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables	**Con independencia de lo anterior, la Asesoría Jurídica podrá contar con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley.**
Artículo 175. La Junta Directiva estará integrada por el Director General de la Asesoría Jurídica Federal, quien la presidirá, así como por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, nombrados por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director General.	**Artículo 175. Derogado.**
Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable y durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por otros tres.	**Derogado.**
Artículo 176. La Junta Directiva podrá sesionar con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto de calidad.	**Artículo 176. Derogado.**
Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada dos meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.	**Derogado.**

Artículo 177. Son facultades de la Junta Directiva:	**Artículo 177. Derogado.**
I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la Asesoría Jurídica de las Víctimas; **II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;** **III. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de Asesoría Jurídica Federal;** **IV. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, en temas como capacitación y apoyo;** **V. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de atención a víctimas;** **VI. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Federal;** **VII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Comisión Ejecutiva;** **VIII. Aprobar los lineamientos generales para la contratación de peritos y especialistas en las diversas áreas del conocimiento en que se requieran;** **IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal;** **X. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y**	**Derogado.**

XI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.	
Artículo 178. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal, será designado por el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Ejecutiva y durará tres años en su cargo, pudiendo ser reelecto hasta por tres años más.	**Artículo 178. Derogado.**
Artículo 180. El Director General de la Asesoría Jurídica Federal tendrá las atribuciones siguientes:	**Artículo 180. …**
I. a VIII. …	**I. a VIII. …**
IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto **que se someta a la consideración de la Junta Directiva, y**	**IX.** Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto**;**
	X. Llevar a cabo concesiones, permisos, contrataciones o cualquier otro medio idóneo con particulares para que ejerzan la función de asesor jurídico federal, en términos del artículo 121 de esta Ley, y
X. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.	**XI.** Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción III del artículo 6, el cuarto párrafo del artículo 8, la denominación del Capítulo III del Título Tercero, el primer y último párrafos del artículo 67, el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79, el párrafo sexto del artículo 83, el primer y último párrafos del artículo 84, el artículo 85, el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 86, la fracción XXXV del artículo 88, el segundo párrafo del artículo 90, el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX y XII del artículo 95, los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 96, la fracción I del artículo 132, el primer párrafo del artículo 135, la fracción III del artículo 138, el artículo 145, el segundo párrafo del 166, y la fracción IX del artículo 180. Se ADICIONAN la fracción VIII Bis al artículo 6, los tres últimos párrafos al artículo 8, un último párrafo al artículo 27, el artículo 39 Bis, el artículo 61 Bis, un sexto párrafo al artículo 79, un segundo y tercer párrafos al artículo 84 recorriéndose sus actuales segundo, tercero y cuarto párrafos como cuarto, quinto y sexto párrafos, los artículos 84 Bis,

84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, 84 Octies, la fracción XXXV Bis al artículo 88, el artículo 88 Bis, la fracción XIII al artículo 95 recorriéndose la actual fracción XIII a la XIV, un segundo párrafo al artículo 136, y la fracción X recorriéndose la actual X a XI del artículo 180. Se DEROGAN los dos últimos párrafos del artículo 86, los artículos 87, 92, 93, 94, los artículos 175, 176, 177 y 178, para quedar como sigue:

Artículo 6.…

I a II…

III. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas **en cada entidad federativa;**

IV a VIII. …

VIII. Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

IX a XXII….

Artículo 8. ...
...
…

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas o municipios **en el ámbito de sus competencias**, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal que corresponda, medidas de ayuda, asistencia y atención, que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas.

Artículo 27. …

I a VI…

…

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE **TRASLADO**

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas el reintegro de los gastos a que se refiere el párrafo anterior en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley.

Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado.

Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el presente Título, cuando sean evaluables y viables económicamente, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

Artículo 67. **La** Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán** el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) …

b) …

…

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización**, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 79. …

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

…

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una **Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas**, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender**, asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. **En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento**.

Artículo 83. …

…
…
…
…

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.
…

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es **un organismo descentralizado; no sectorizado;** con personalidad jurídica y patrimonio propios**; con** autonomía técnica y de gestión, **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna.**

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

…

…

…

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, y está integrada de la siguiente manera:

I. El titular de la Comisión Ejecutiva;
II. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:
  a) Gobernación quién la presidirá;
  b) Hacienda y Crédito Público;
  c) Desarrollo Social;
  d) Educación Pública;
  e) Salud;
  f) Trabajo y Previsión Social, y
  g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
III. Un representante de la Procuraduría General de la República;
IV. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, y
V. El Presidente de la Asamblea Consultiva.

Los integrantes a que se refieren las fracciones II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto.

Cada integrante tendrá nivel de subsecretario o equivalente, el cual contará con un suplente con nivel mínimo de Director General Adjunto u Homólogo.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, en términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 84 Quinquies.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces año y las extraordinarias que propondrá su Presidente o al menos 3 de sus miembros.

Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente, tendrá voto de calidad.

Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;
II. Aprobar las disposiciones normativas que la Comisión Ejecutiva emita en términos de la Ley y el Reglamento;
III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;
IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva en términos del artículo 89 de la Ley, y
V. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 84 Octies.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes tendrán carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

Las facultades de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, cuyo mandato durará cuatro años sin posibilidad de reelección.**

Durante su encargo no podrá desempeñar ningún otro trabajo o comisión remunerada, salvo la academia o la investigación.

Artículo 86. Para ser Comisionado **Ejecutivo** se requiere:

I a **II. ...**

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación,** y

IV.No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación**.**

Artículo 87. Derogado.

Artículo 88. …

I a XXXIV…

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia**;**

XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVI …

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con Comisión de Víctimas;

II. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables;

III. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, o

IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

b) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

c) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, e

d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo del delito revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

Las Comisiones de Víctimas deberán restituir los recursos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del plazo señalado.

Artículo 90. …

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, como el área responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. El Comisionado **Ejecutivoademás de las que establece el artículo 59 la Ley Federal de las Entidades Paraestatales**, tendrá las siguientes facultades:

I. …
II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que **realice la Junta de Gobierno**;
III. …
IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;
V a VIII ....

IX. **Suscribir** los convenios de colaboración, **coordinación o concertación** o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X a XI …

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva**;**

XIII. Determinar las medidas de ayuda, asistencia y atención, así como la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la asesoría de las Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 96. …
….

EI Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal**, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.**

Las **entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El **Comisionado Ejecutivo** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

…

Artículo 132. …
I.…

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del año inmediato anterior, en cuyo caso la Comisión Ejecutiva podrá solicitar los recursos presupuestarios correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. a VIII. …

…
…

Artículo 135.Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de medidas de ayuda provisional a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como para** los apoyos establecidos en el Título Tercero de **la misma**, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.
…

Artículo 136. …

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo. La víctima deberá comprobar por lo menos el setenta y cinco por ciento del ejercicio del monto, a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso.

Artículo 137. …

Artículo 138. …

I a II…

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno, y**

IV…

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva **la** turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la **determinación del Comisionado Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y, en su caso, reparación que requiera la víctima.**

TÍTULO OCTAVO
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

CAPÍTULO I a IV …

CAPÍTULO V
De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa

Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos Estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros o resque, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y en las disposiciones correspondientes.

Artículo 166. …

Con independencia de lo anterior, la Asesoría Jurídica podrá contar con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley.

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado.

Artículo 180. …

I. a VIII. …

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto**;**

X. Llevar a cabo concesiones, permisos, contrataciones o cualquier otro medio idóneo con particulares para que ejerzan la función de asesor jurídico federal, en términos del artículo 121 de esta Ley, y

XI. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva deberá realizar las reformas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, a los ciento ochenta días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

QUINTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva procederá a concluir la relación laboral con los Comisionados conforme a las disposiciones jurídicas en materia laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo Décimo Primero del presente régimen transitorio.

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octavus, de la Ley.

OCTAVO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

NOVENO.- Las entidades federativas en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar su normativa a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley por lo que respecta al reintegro y restitución de recursos que deban efectuar a la Comisión Ejecutiva.

DÉCIMO.- Las erogaciones que se generen a la entrada en vigor al presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales.

DÉCIMO PRIMERO.- En tanto el Presidente de la República nombre al Comisionado Ejecutivo y lo ratifique el Senado, el Comisionado Presidente en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

DÉCIMO SEGUNDO.-En las entidades federativas en las que no exista una Comisión de Víctimas a la entrada en vigor del presente Decreto, las instituciones públicas competentes de la entidad federativa deberán brindar la atención a víctimas conforme a lo establecido en la Ley.

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva solicitará la devolución de los recursos que haya erogado en términos de lo dispuesto en los artículos 39 Bis y 88 Bis del presente Decreto, a los titulares de las Secretarías de Finanzas de la entidad federativa correspondiente.

_____

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con **Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años recientes nuestro país ha sido escenario de múltiples formas de violencia, las cuales han experimentado un incremento en incidencia e impacto en la seguridad y los derechos humanos de las personas. En vistas de la situación, el Estado Mexicano ha adoptado diversas medidas para contrarrestar el fenómeno.

Aunque es innegable que aún falta mucho por hacer para consolidar una política efectiva de Estado que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en nuestro territorio, tampoco cabe duda de que, principalmente a partir de la iniciativa de la sociedad civil, se ha avanzado en la construcción de un marco normativo garantista que amplía los mecanismos de protección de toda persona contra la violencia, los abusos y la inseguridad.

Cuatro de las más relevantes propuestas normativas que se han adoptado en ese sentido, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008; la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013, primera disposición reglamentaria de los derechos victimales en materia de reparación de las primeras reformas constitucionales; y la reforma constitucional para crear las leyes generales de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 10 de julio de 2015, nacieron a partir de insumos presentados a esta soberanía por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos de la academia y grupos de víctimas.

En particular la Ley General de Víctimas nació y tomó forma desde 2011 a partir de la legítima demanda de miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que rompieron el silencio, así como de organizaciones de derechos humanos y personas solidarias, que se articularon en ese momento en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dio origen a referentes que se han convertido en colectivos en favor de la construcción de una cultura de la paz.

La Ley General de Víctimas es, sin duda, una de las más avanzadas y completas del mundo, y debe considerarse como un modelo de buena práctica en la armonización de la normatividad interna con respecto a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, justicia restaurativa y justicia transicional. Ese reconocimiento, particularmente hacia los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que contempla, viene no solamente de las y los legisladores o de los organismos internacionales de derechos humanos que así lo han externado en reiteradas ocasiones, sino sobre todo de miles de víctimas que, en lo individual o colectivo, ven plasmadas muchas de sus expectativas y demandas en este texto normativo.

Con todo, la forma que debe asumir la legislación siempre está condicionada a la eficacia y eficiencia que tenga en los hechos para atender la problemática que la motivó, y desde esta Legislatura, en atento diálogo con los grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, hemos observado de cerca los avances y desafíos que se han presentado ya en su plena implementación, advirtiendo que hay importantes áreas de oportunidad para que, a partir de la modificación del texto normativo, se faciliten y mejoren los trabajos para que los derechos de las víctimas se realicen y se dé la mayor satisfacción posible a aquellos por los que la legislación se creó.

En este sentido, una de las principales exigencias y preocupaciones externadas por las víctimas en foros legislativos, ante la opinión pública y en las oficinas de las instancias creadas por la Ley, es que las instituciones que ella estableció garanticen con efectividad sus derechos, con apego irrestricto al espíritu protector de la norma que perseguía desde su origen la eliminación de los obstáculos que, bajo la forma de requisitos y procedimientos burocratizados, fragmentarios y arbitrariamente extendidos incurrían en la victimización secundaria de las víctimas, esto es, que se convertían en una fuente de nuevos daños o agravaban los existentes.

Con todo, y pese a la buena fe de la norma, los hechos han vuelto evidente la necesidad de plantear modificaciones urgentes para rectificar aquellos aspectos que desde la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta la fecha están produciendo victimización secundaria y mayor dolor a quienes se acercan a esta institución.

Desde luego, se reconoce que la reforma normativa es una de muchas herramientas de política pública que deben impulsarse para que los derechos de las víctimas sean finalmente una realidad en el país; esto se lograrácuando las numerosas iniciativas para combatir efectivamente la impunidad, la corrupción y las causas estructurales de la violencia se concreten en el quehacer cotidiano, pues la crisis de violencia y humanitaria no tendrá solución con la simple adecuación del texto legislativo.

De la mano con las reformas que constituyen la presente Iniciativa deberán emprenderse esfuerzos serios desde todas las instituciones del Estado mexicano obligadas por la Ley General de Víctimas, especialmente aquellas que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y particularmente

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, tomando en cuenta las experiencias previas, permitan prevenir fenómenos de discrecionalidad, inmovilidad, improvisación o conflictividad interna institucional, y sobre todo, incurrir en negligencias, omisiones y, en suma, el incumplimiento de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

A tres años de publicada la Ley y dos de instalado su órgano operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los resultados esperados se han visto limitados e insatisfactorios, pues no se ha interpretado la ley con base en el principio constitucional pro persona.

Es indudable que la expectativa en la institución se elevó de modo dramático debido a que fue instalada teniendo como telón de fondo la emergencia victimal y la consternación pública por la incidencia constante y sistemática de casos dolorosos de violencia como los numerosos casos de desapariciones de personas, homicidios, tortura, secuestros, extorsiones, violencia sexual y feminicidios, trata de personas y muchos otros tipos de hechos victimizantes que se ventilan hace años en diversas instituciones públicas de fuero federal y común.

Las condiciones para el conjunto de las instituciones públicas en Méxicohan sido complejas por la desconfianza ciudadana y el colapso que muchas de ellas, sobre todo las de seguridad y procuración de justicia, han vivido; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas surge en medio de dicha complejidad, y no hubo la capacidad de comprender la trascendencia humana de su mandato, y pese a que se le dotó de importantes recursos públicos, especialmente para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quedó subsumida en la burocracia y, los obstáculos que su reglamentación e interpretación de la norma impusieron, generó un subejercicio mayor del 90%.

Las víctimas y sus familiares han vivido desde hace muchos años una situación de indefensión y orfandad, de maltrato, de condiciones indignas que profundizan su dolor; la Ley General de Víctimas, con todo y lo que pudiera haberse criticado válido o no, se construyó como instrumento del Estado mexicano para atenderlas y protegerlas, sin embargo, se convirtió en una institución más de la estructura del gobierno y no ha sido eficaz ni eficiente para cumplir con el propósito vital que le dio origen; por ello, sobra reiterar la importancia de asumir los cambios que se requieren y que, como una aportación al debate, se ponen a la consideración de esta soberanía.

Es importante destacar que en la presente iniciativa se recogen preocupaciones y propuestas que han surgido del propio entorno legislativo en el Senado y que se han visto expresadas en la interlocución constante con las víctimas y sus familiares, así como con las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

A lo largo de toda la ley se incorporan a las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes como sujetos de los derechos que otorga la presente Ley; así también se armoniza con la reforma constitucional que modifica el estatus jurídico del antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México y se utiliza Entidades Federativas para incorporar a los estados y a la Ciudad de México en las obligaciones establecidas por esta norma; en los artículos 84 y 79 se establece que ninguna norma de carácter inferior puede restringir ni disminuir los derechos establecidos por esta ley sustantiva; se incorporan elementos que estarán incluidos en las disposiciones de la ley en materia de desaparición de personas para mayor protección a las víctimas de este hecho delictivo; así también, en los artículos 64, 66, 67 y 69, se precisan los elementos para agilizar y hacer expedita la compensación a que tienen derecho las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En el artículo 1, se establece que la Ley General de Víctimas es la ley en materia de reparación de conformidad con los artículos 1°, tercer párrafo y 17, 20 y 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, en el cuarto párrafo, y a lo largo de toda la iniciativa de reforma, se modifica el concepto "compensación" por el de "indemnización", para evitar interpretaciones burocráticas.

En el artículo 2, se precisa todos los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y se ratifica el bloque constitucional que se ha creado a partir de la reforma en derechos humanos del 10 de junio de 2011.

En el artículo 4, se define con mayor precisión como se adquiere la calidad de víctimas y se recoge la demanda de los familiares de ser considerados también víctimas directas porque uno de los efectos de la victimización es su carácter múltiple de violación a derechos por la propia condición de víctimas, es decir, se les estigmatiza, se les criminaliza, se les tortura psicológicamente, se les maltrata en las instituciones, y en el caso de familiares de personas desaparecidas, delito pluriofensivo, también existe la tortura. La definición de víctima se recoge de la que, para estos efectos, ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así mismo, se incorpora mayor precisión para la protección de las víctimas potenciales.

En el artículo 5, en primer lugar, se organizan los principios en un formato de fracciones para poder citar con precisión el principio que se quiere referir, así también se precisan las definiciones para atender una implementación efectiva, en particular, se modifica en su totalidad el principio de mínimo existencial para incidir en el cambio cultural de los servidores públicos que atienden víctimas y que interpretan con una visión burocrática lo mínimo que deben ofrecer a las víctimas para tratarlas con respeto y dignidad.

En el artículo 6, el concepto de "compensación" representa internacionalmente la reparación en términos económicos que debe recibir una víctima desde la perspectiva de un derecho, se agrega en la fracción V, como lo obligado para la autoridad cuando se trate de la "compensación" a una víctima, la clarificación de que se trata de la reparación o indemnización económica a la que tiene derecho la víctima; actualmente, las autoridades que interpretan la ley han usado su incomprensión sobre el concepto "compensación" para obstaculizar la reparación; por ello, con el objetivo de que las

autoridades puedan identificar una definición que sigue presente en el entramado jurídico en cuanto a reparación del daño y no se utilice como pretexto para la victimización secundaria de las víctimas es que se propone incorporar en la definición de "compensación" que se trata de reparación o indemnización económica; se adiciona en la fracción VIII, la definición de desplazamiento interno forzado para poder proveer a las víctimas de este fenómeno creciente de los derechos que integralmente se protegen en esta ley, la experiencia ha sido que los comisionados de la Comisión Ejecutiva han desconocido a las víctimas del desplazamiento interno por no estar referido este hecho victimizante en la ley actual. Al adicionar esta definición en la fracción VIII, se recorren todas las fracciones.

La incorporación del fenómeno victimizante y de las víctimas de desplazamiento interno forzado se hace en los artículos 6, 8, 9, 28, 38, 41, 45, 47, 63, fracción XXX del 79, fracción IX del 93, fracción II del 101, fracción VIII del 118, fracción VI del 119, 131 y 150.

Se incorpora un nuevo párrafo a la nueva fracción XVIII con el objeto de definir con precisión la calidad de víctima con base en la definición propuesta por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En el artículo 7, se inhiben interpretaciones personales o reglamentarias que disminuyan los estándares protectores que se plantean en la ley sustantiva, se precisa en la fracción I que los derechos a una investigación eficaz se deriva del hecho victimizante; en las fracciones III y IV, se define con mayor precisión el derecho a la verdad y el derecho a la protección; en la XX, el derecho a la consulta sobre todos los procesos en los que participan;

En el artículo 8, se incorpora con claridad que independientemente de la competencia federal o de las entidades federativas, las víctimas tienen derechos, que no pueden ser soslayados bajo argumentos de jurisdiccionales.

En el artículo 9, se incorpora como derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos, desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, a la reintegración y a soluciones duraderas-

En los artículos 15 y 23, se incorpora el derecho de las víctimas a un perito independiente con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas.

En el artículo 21, se incluye que las organizaciones de víctimas u otras personas que representen a las víctimas puedan participar directamente en las exhumaciones, así como ajustarse en lo que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la legislación en materia de desapariciones, establecen en materia de pruebas científica, y se plantea no sólo en caso necesario, frase que se elimina, sino como una directriz normativa, que las autoridades no pueden autorizar ni ellas mismas realizar, cremación de cadáveres, hayan sido éstos identificados o no.

En el artículo 26, y a lo largo de toda la propuesta de reforma, se incorpora la previsión de que ningún ordenamiento de carácter inferior, como ha sucedido a partir de la creación del reglamento de ley, puede restringir ningún derecho ni medida de reparación que disminuya los estándares protectores y garantistas de la ley sustantiva.

En el artículo 27 fracción III, se aclara nuevamente que la compensación es una indemnización económica, en la fracción VI se agrega que debe ser un derecho de las víctimas, la reinserción y soluciones duraderas que permitan una real reparación integral.

En el artículo 28, al igual que en el artículo 6, se incorpora a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en esta ley. Mientras que en el artículo 29, se adiciona la obligación de la comisión nacional de víctimas de cubrir los gastos de atención médica de emergencia cuando no haya garantía de que las instituciones hospitalarias o la comisión de la entidad federativa de que se trate, puedan atender a la víctima.

En Iguala, Gro., la indiferencia en atender un caso de un joven, familiar de un desaparecido, pero víctima directa por haber sido objeto de agresión con arma de fuego, y no cubrir los gastos de emergencia, derivó en su muerte; y posteriormente, lo que nos lleva a la reforma al artículo 31, hubo una negativa inicial a cubrir los gastos funerarios; por ello, en este último artículo, se define con claridad que las autoridades, independientemente del fuero competencial, están obligadas a apoyar los gastos funerarios por el fallecimiento de una víctima.

En el artículo 34, se establece la prohibición de negar atención en los servicios médicos a personas víctimas, independientemente que estén fuera de su jurisdicción como derechohabientes

En el artículo 38, se incorporan a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en el sistema DIF, y se adiciona que el Sistema DIF deberá contar con recursos presupuestales específicamente asignados como partida emergente.

Un argumento recurrente para no apoyar a las víctimas con el pago de sus traslados es la confusión en la redacción del artículo 39, en el sentido de que no quedó claro que el apoyo se dará tanto para salir del lugar de residencia como para el regreso, de tal manera que la reforma en este artículo tiene como objetivo esa clarificación y dejar especificado que estos apoyos se cubren en diligencias de carácter federal o cuando se cumplan los supuestos del cuarto párrafo del artículo 79.

Incorpora, en el artículo 41, a las víctimas como sujetos de las medidas que otorgan otras normas como Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En el 61, se define con mayor claridad las medidas de restitución como el derecho a regresar a su lugar de origen y a ser restituidos en sus tierras, propiedades o posesiones o a ser indemnizado por la vulneración de estos derechos.

Para mayor claridad de que se compensa o repara económicamente, se incorpora en la fracción viii del artículo 64, que se pagan gastos de traslado a diligencias ministeriales o judiciales, además de las que ya están establecidas en esa fracción.

En el artículo 83, se precisa la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva y en el artículo 85, se propone una nueva estructura para la comisión Ejecutiva con un comisionado presidente y seis personas víctimas y expertos en el consejo directivo de la comisión ejecutiva; para la elección del comisionado presidente se señala que el Ejecutivo deberá convoca a consulta a los colectivos y organizaciones de víctimas, así mismo se establece el principio de máxima publicidad en cada etapa del proceso de selección de los comisionados.

Se establece que quienes participen en la Comisión Ejecutiva deberán tener experiencia acreditable como académicos con cinco años de experiencia en investigación o docencia especializada en atención

a víctimas y ser personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales con al menos cinco años de especialización en atención a víctimas.

En relación con el comisionado presidente, la terna que se envíe deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atender víctimas y haber sido postulados por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

Se establece que serán las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado las encargadas del desarrollo del proceso de elección, con ello, ya no sería la comisión de gobernación sino la de derechos humanos.

En el artículo 86, se plantean los requisitos para ser comisionado presidente o miembro del Consejo Directivo, específicamente en la fracción III se señala que sea obligado contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades relacionadas con atención a víctimas; se adiciona la fracción V para establecer que no haya sido objeto de recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente; así también se establece la obligación del Ejecutivo Federal y del Senado de garantizar el principio de enfoque diferencial y especializado, particularmente que haya un criterio de paridad y que los comisionados provengan de diferentes Entidades Federativas y ser personas destacadas en el ejercicio de actividades profesionales diversas, con esto se pretende que no sean sólo abogados sino que haya profesionales de diversas ramas de la ciencias.

Se señala que los integrantes del Consejo Directivo, así como el Comisionado Presidente se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección, y la regulación para que el Comisionado Presidente no tenga ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto en actividades docentes, científicas o de beneficencia ni puede participar o estar participando como representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes; lo mismo se señala para los integrantes del Consejo Directivo.

Los integrantes del Consejo Directivo tampoco podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas en lo particular ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Especialmente, y este es un aspecto fundamental de la reforma, se establece la revocación del mandato de los comisionados y del presidente del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva y se establecen los supuestos por lo que esta revocación puede ser ejercida por el Senado. Es importante mencionar que todos los supuestos se han presentado ya en la operación e implementación de esta Ley y por ello, se considera deben ser causales para ya no desempeñar el cargo, como un procedimiento efectivo de rendición de cuentas:

El subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual; el incumplimiento en el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas

en el Registro; la negativa a una víctima del delito o de violación de derechos humanos de apoyarle con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley, incluso si de la esta negativa, la víctima pierde la vida, se establece que podrá iniciarse además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; o incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

Por último se establece el procedimiento que deberán seguir las Comisiones Unidas para la revocación del mandato, lo cual se acompaña de una reforma al Reglamento del Senado de la República para dotar de facultades a las comisiones para realizar esta tarea.

En el artículo 87, se establece que el Comisionado Presidente durara en el encargo dos años, renovable por una ocasión y que será electo por el pleno de los comisionados integrantes del Consejo Directivo. Así también, se establecen las facultades de carácter administrativo, y se determina que en el cumplimiento del Título Quinto de la Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, con voto de exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.

En el artículo 88, además de incorporar a las víctimas migrantes y de desplazamiento forzado, se agrega un párrafo con varias fracciones para establecer las funciones del Consejo Directivo: establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y Emitir recomendaciones públicas al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.

Se reforman también los artículos 91 y 92 para que se precise que los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, se podrán realizar por iniciativa propia de la misma o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, incorporar la palabra de personas a la violación de derechos humanos de desaparición, y señalar que el presidente tendrá voto de calidad de conformidad con lo que se establece en el artículo 87 de la propia ley, respectivamente.

En el artículo 93, los comités temáticos se propone se conviertan en relatorías y quienes estén a cargo, sean designados por el Pleno de la Comisión a partir de una convocatoria pública con el objetivo de que las personas responsables de las relatorías, tengan conocimientos demostrables y sólidos en el campo de su mandato y se establecen sus funciones en las nueve fracciones que se proponen.

Las relatorías son equivalentes a los comités existentes, y se adiciona dos, una de ellas, sobre desplazamiento forzado y la otra sobre migrantes; al mismo tiempo se deroga el Comité Interdisciplinario Evaluador para darle una función de mayor alcance pues en la propuesta el Pleno de

la Comisión Ejecutiva se constituye en el Comité Interdisciplinario Evaluador que dictamine y apruebe los proyectos de reparación integral, con base en la proporcionalidad del daño en cada caso.

Con el objetivo de resolver la burocratización en el registro de víctimas que ha significado altos niveles de victimización secundaria, se incluye en el artículo 96 un párrafo que señala que las víctimas no requieren *para su inscripción* exhibir *ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.*

Además, se deberá contar con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales para hechos victimizantes de fuero federal y los de fuero común.

En el artículo 97 se adicionan dos párrafos para fortalecer las otras fuentes que alimentan la integración del Registro. En ellos se establece que aportarán de inmediato sus bases de datos las instituciones de protección de derechos humanos, procuración de justicia, poderes judiciales federal y de las entidades federativas con objeto de que se incorpore dicha información en el formato único de declaración; y que a partir de que el responsable del Registro turne los expedientes a la presidencia de la Comisión Ejecutiva, si ésta concluye la revisión de los casos, deberá turnar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión y aprobación al Pleno de la Comisión Ejecutiva; en caso de tratarse de un asunto de la competencia de la comisión de víctimas de una entidad federativa, se le turnará y exhortará para su inmediata atención.

En el artículo 101 se establece un plazo máximo de cinco días para el ingreso al registro de una solicitud y la obligación del servidor público de la Comisión Ejecutiva, una vez autorizada la inscripción al registro, informar sobre la misma, así como, expedir y entregar al solicitante un comprobante foliado que le acredite su inscripción. Se incluye también que ninguna autoridad podrá condicionar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a que se le presente el comprobante foliado. Se establece con precisión que no se le podrá exigir a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta ley ni que realice ninguna gestión relacionada con la obtención de información para el mismo.

Se adiciona un párrafo que rompa con la dinámica revictimizante de exigir a las víctimas más de lo que la ley establece:

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

El artículo 110 es uno de los más relevantes que se propone reformar, porque ahí ha descansado toda la errada interpretación de esta ley de protección a víctimas por parte de quienes están obligados a cumplirla. Por ello, se adicionan varios párrafos que marcan con claridad cómo se reconoce la calidad de víctima y se define con mayor amplitud qué autoridades lo determinan, para efectos de reparación integral.

La iniciativa establece que la calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos que se deriva de un hecho victimizante y hace referencia a lo que señala el artículo 4

de esta ley y que bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el dicho de la víctima para tener acceso a las medidas de ayuda inmediata que están reguladas en el Título Tercero de esta ley, mismas que deberán tomar la Comisión Ejecutiva y la comisión de las entidad federativa que corresponda, todo ello con base en el principio pro persona establecido en el artículo primero constitucional y los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y los demás aplicables; así mismo se señalan los casos de emergencia que deberán ser atendidos sin que medie requisito ni formalidad.

Los párrafos que se adicionan tienen como objetivo clarificar los distintos procesos para garantizar que se cumplan las medidas de ayuda inmediata, asistencia, apoyo, atención y de reparación integral que se han establecido en los diversos títulos del Tercero al Quinto. , todo ello para que las víctimas superen *su condición de victimidad y se reinserten lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.*

En lo que se refiere a la garantía de las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de las autoridades ya señaladas en esta ley, se adiciona a *las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.*

En el artículo 111, se señalan los efectos que tiene el reconocimiento de la calidad de víctima de conformidad con artículos 4 y 110 de la ley, y de manera importante, se establece que no se podrá invocar el reglamento para negar o restringir la garantía del cumplimiento de los derechos reconocidos por la ley.

En los artículo 118 y 119, se adiciona la creación de refugios seguros para víctimas de desplazamiento interno forzado y migrantes, así como el diseño y ejecución de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de promover la reinserción social y favorecer medidas de no repetición.

En el artículo 120, dada la experiencia de que servidores públicos de la propia institución responsable de operar la ley, han incumplido con ella y no ha sucedido nada, se adiciona una redacción que pueda ser un mecanismo de mayor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones en esta ley definidas a partir de que se especifica que quienes tengan responsabilidad institucional, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.

En el artículo 123, se adicionan dos fracciones como deberes del Ministerio Público, el de iniciar procedimientos de investigación y eventual sanción penal a los servidores públicos que incurran en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctima, así como otras sanciones que se establezcan en normas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

En el artículo 131, se señala que en las tareas del Pleno de la Comisión Ejecutiva como Comité Interdisciplinario Evaluador para definir las medidas de reparación desde el Título Tercero hasta el Título Quinto, realizará una evaluación integral del entorno y se incorpora que para dicha evaluación,

en el caso de victimas de desaparición y desplazamiento interno forzado, se atenderán las condiciones de extrema vulnerabilidad.

En el último párrafo del artículo 132, sobre todo considerando que el subejercicio en el 2015 del Fondo al que se refiere el mismo artículo fue por encima del 90 por ciento, se establece una excepción a que las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos correspondientes al ejercicio fiscal vigente cuando haya un subejercicio superior al 60 por ciento del mismo.

Se adiciona un nuevo Título Décimo Primero, Capítulo Único, De las Sanciones que adiciona los artículos del 190 al 197.

Para efectos de mayor claridad de las diversas disposiciones que se reforman se integra un comparativo con la ley vigente y las propuestas de modificación:

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.	**Artículo 1.** La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por **el** artículo 1o., párrafo tercero **en materia de reparación**, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73,**todos en materia de reparación del daño,**de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.
En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.	**[...]**
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.	**[...]**
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.	La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, **indemnización**, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:	Artículo 2. [...]
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución,	I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial **los derechos** a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integra**l** y **l**os demá**s** consagrados en **esta Ley**, en la Constitución, y **en las normas**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;	**sobre derechos humanos en**los Tratados Internacionales **d**e los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;	II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger **y** garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas**,** así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
III – V. [...]	III.- a V.- [...]
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.	**Artículo 4**. Se denominarán víctimas **las** personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro**,** lesión a sus bienes jurídicos **oanulación de sus** derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
	También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.
	En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya	Son víctimas potenciales las personas físicas cuya

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.	integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. **En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.**
[Artículo 4 párrafo cuarto] La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.	**La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.**
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.	[…]
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:	Artículo 5. […]
Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.	**I.** Dignidad.- **Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares** y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, **discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés** o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial	Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
de sus derechos.	
En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.	[...]
Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.	**II.-**Buena fe.- Las autoridades presumirán **en todo momento** la buena fe **de lo dicho y actuado por** las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, **ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.**
	Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.
Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.	**III.** Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.	Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas **conforme al principio de complementariedad** para alcanzar la integralidad que busca la reparación. **Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.
Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.	**IV. Debida diligencia**.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.	[...]
Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.	**V.** Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de	[...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.	
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.	[...]
Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.	**VI.** Enfoque transformador.- Las autoridades **encargadas de aplicar** la presente Ley, **en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para** que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, **marginación y violencia** que **fueran** causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. **Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.**
Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.	**VII**. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.
Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá	**VIII.** Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
fundarse en razones de enfoque diferencial.	fundarse en razones de enfoque diferencial.
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.	**IX.** Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.	[...]
Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.	**X.** Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.	[...]
Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.	**XI. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.**
No criminalización.- Las autoridades no deberán	**XII.** No criminalización.- Las autoridades no

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.	deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.	[...]
Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.	**XIII.No** victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.
Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.	**XIV. Participación conjunta.-** Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.	[...]
Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.	**XV.** Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.
Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las	**XVI.** Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, **adoptados en el marco de esta Ley,incluidos los que señalan los artículos 85 y**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
víctimas o las garantías para su protección.	**86**, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.	El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.
Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.	**XVII.** Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, **especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley,** que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.
Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.	**XVIII.** Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.	[...]
Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.	**XIX.** Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:	**Artículo 6**. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas; **II. Asesoría Jurídica:** Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas; **III. Comisiones de víctimas:** Comisión Estatal y del Distrito Federal de Atención Integral a Víctimas; **IV. Comisión Ejecutiva:** ComisiónEjecutiva de Atención a Víctimas;	**I. al IV. [...]**
V. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;	**V.** Compensación**: Reparación o indemnización** económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;
VI. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten; **VII. Delito:** Acto u omisión que sancionan las leyes penales;	VI.- y VII.- [...]
	VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado los límites de territorio nacional, o bien, personas o grupos de personas que hayan tenido que huir de México por los motivos previstos en la Ley de Refugiados y Protección complementaria. Es víctima de

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.
VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;	**IX. Fondo:** Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;
IX. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;	**X. Hecho victimizante:** Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
X. Ley: Ley General de Víctimas;	**XI. Ley:** Ley General de Víctimas;
XI. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;	**XII. Plan:** Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;
XII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;	**XIII. Programa:** Programa de Atención Integral a Víctimas;
XIII. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;	**XIV. Procedimiento:** Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
XIV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;	**XV. Registro:** Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;
XV. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;	**XVI. Reglamento:** Reglamento de la Ley General de Víctimas;
XVI. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;	**XVII. Sistema:** Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
XVII. Víctima: Persona física que directa o	**XVIII. Víctima:** Persona física queha sufrido **la**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;	**anulación, el** daño o el menoscabo de sus derechos **como consecuencia** deuna violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;
	También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.
XVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;	**[…] Se deroga**
XIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. **XX.** Se deroga. **XXI.** Se deroga. **XXII.** Se deroga.	XIX. a XXII.- […]
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las	**Artículo 7**. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.	leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, **por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.**
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:	[...]
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;	**I.** A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables **del hecho victimizante**, y a su reparación integral;
II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;	**II.**- […]
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;	**III.** A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los **hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública,** para lo cual la autoridad deberá informar **a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;**
IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;	**IV.** A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corpora**l, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;**
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;	**V.- [...]**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;	**VI.- […]**
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;	**VII. A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;**
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;	**VIII. Al** bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a **su** dignidad y privacidad, […] con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;
IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; **X.** A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; **XI.** A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas; **XII.** A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;	**IX.** a XIX.-[...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; **XIV.** A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten; **XV.** A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras; **XVI.** A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; **XVII.** A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; **XVIII.** A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; **XIX.** A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;	
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;	**XX.**- A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; **en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;**
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población	XXI.- a XXXII.- [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
indígena; **XXII.** A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; **XXIII.** A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; **XXIV.** A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; **XXV.** A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; **XXVI.** A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; **XXVII.** A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia; **XXVIII.** A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; **XXIX.** Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; **XXX.** A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; **XXXI.** A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
discapacidad auditiva, verbal o visual; **XXXII.** A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;	
XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y	**XXXIII.** A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
	XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;
	XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria,
	XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;
	XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima, y
XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.	**XXXVIII.** Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.	**Artículo 8**. Las víctimas **del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, eindependientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas,** recibirán **de la Comisión Ejecutiva federal** ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.	Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos **que atenten contra la vida,** contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno forzado,** recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que	[...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.	
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.	Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias,** a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.	**Artículo 9.** Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque **transversalrestaurativo**, t**ransformador**, de género y diferencial.
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.	Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para **superar su victimidad,** llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, **y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.** Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.	[...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.	Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la **indemnización** a que tuvieran derecho las víctimas.
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:	**Artículo 12**. [...]
I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;	I.-[...]
II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;	**II.-**A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se **refieren los artículos** 64 **al 72** de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;
III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la	III.-a XIII.- [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
presentación de denuncias o querellas; **IV.** A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; **V.** A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; **VI.** A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; **VII.** A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; **VIII.** A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; **IX.** A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; **X.** A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; **XI.** A que se les informe sobre la realización	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; **XII.** A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y **XIII.** En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.	
Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren.	**Artículo 15.** Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, **perito independiente acreditado por la víctima con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas** o la persona que consideren.
Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.	Artículo 21. [...]
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.	[...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.	[...]
Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.	Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos**, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas;** a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.
Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.	Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones,** la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.
En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna	[…]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.	
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.	[…]
Artículo23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.	**Artículo23.** Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, **así como peritajes independientes con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas,** con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.
CAPÍTULO VI **DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL**	**CAPÍTULO VI** **DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL**
Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.	**Artículo 26.** Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. **Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	medida de reparación integral protegidos por esta ley.
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:	**Artículo 27.** [...]
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; **II.** La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;	I. a II.- [...]
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la violación de derechos humanos;	**III.** La compensación, **indemnización económica,** ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la violación de derechos humanos;
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; **V.** Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;	IV. [...] V. [...]
VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las	**VI.** Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, **así como la reinserción y soluciones duraderas** que **reconozcan** la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
comunidades, grupos y pueblos afectados.	la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.	[...]
	Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.
Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.	**Artículo 28.** [...]
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.	Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores**, desplazados internos forzados** y población indígena.
Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.	**Artículo 29.** Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, **de las Entidades Federativa** y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas **del delito o de violaciones a derechos humanos** que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad**, fuero competencial, incorporación a un registro** y sin exigir **ninguna otra** condición previa para su admisión**. En caso de que no exista comisión de**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.
Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables.	**Artículo 31.** La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, **así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar** a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables**, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley**.
Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:	**Artículo 34.** [...]
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de	**I. a VI. [...]**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento; **II.** Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; **III.** Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar; **IV.** Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos; **V.** Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.	
	No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.
Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.	**Artículo 38.** El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o **en situación de desplazamiento interno forzado** por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. **Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.**
Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.	**Artículo 39.** Cuando la víctima **se traslade a** un lugar distinto **de su** lugar de residencia y **requiera** regresar al mismo, **las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad o se cumpliera el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 79 de esta ley**, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.
Artículo 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.	**Artículo 41.** Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. **Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.**
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y población indígena.	**Artículo 45**. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores**, desplazados internos forzados, migrantes** y población indígena.
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con	**Artículo 47.** Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente a quienes se**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.	**encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración**. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 57. La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.	**Artículo 57.** La Federación, los estados, **la Ciudad de México** y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.	**Artículo 61.** [...]
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:	[...]
I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada;	**I.-** Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona;**
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos; **III.** Restablecimiento de la identidad; **IV.** Restablecimiento de la vida y unidad familiar; **V.** Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;	**II.** a V. [...]
VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;	**VI.** Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones**;

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
VII. Reintegración en el empleo, y **VIII.** Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.	**VII.** a VIII. [...]
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.	**[...]**
Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará untrato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas	**Artículo 63.** Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará untrato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas**, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.**
CAPÍTULO III **MEDIDAS DE COMPENSACIÓN**	**CAPÍTULO III** **MEDIDAS DE COMPENSACIÓN**
Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:	**Artículo 64.** La compensación, **reparación económica**, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; **II.** La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios.	**I.** a VII. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; **III.** El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; **IV.** La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; **V.** Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos; **VI.** El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; **VII.** El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y	
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.	**VIII.** Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio **a diligencias ministeriales, judiciales** o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.	[...]
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento.	[…]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Artículo 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:	**Artículo 65.** Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos **exactos** que determine la resolución que emita en su caso:
a) Un órgano jurisdiccional nacional; **b)** Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México; **c)** Un organismo público de protección de los derechos humanos; **d)** Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.	a) a d). [...]
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.	[...]
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67.	[...]
Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.	**Artículo 66.** Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o **indemnización** a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a	**Artículo 67.Para efectos de otorgar la reparación económica a las víctimas del delito,** el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:	determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial;	**a)**y b) […]
	c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:
	i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;
	ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).
	Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.
La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.	**[...]**
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño	El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización, que** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
Artículo 69. La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:	**Artículo 69.** La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria **de una víctima que no haya sido reparada**cuando **obtenga**todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta **por**la Comisión. **La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas**, entre otros:
I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;	**I.** a III, […]
II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar;	
III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.	
	IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.
CAPÍTULO IV **MEDIDAS DE SATISFACCIÓN**	**CAPÍTULO IV** **MEDIDAS DE SATISFACCIÓN**
Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:	**Artículo 73.** Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de	**I. […]**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;	
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;	**II.** La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, **en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones**;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; **IV.** Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; **V.** La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y **VI.** La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.	**I.- a VI.- [...]**
CAPÍTULO V **MEDIDAS DE NO REPETICIÓN**	**CAPÍTULO V** **MEDIDAS DE NO REPETICIÓN**
Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: **I.** El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;	**Artículo 74.** [...] **I.- a IX.- [...]**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso; **III.** El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial; **IV.** La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos; **V.** La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos; **VI.** La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información; **VII.** La protección de los defensores de los derechos humanos; **VIII.** La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; **IX.** La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y	**X.** La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, [...]
XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.	**XI.** La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; **y**
	XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.
TÍTULO SEXTO **SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**TÍTULO SEXTO** **SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**
CAPÍTULO I **CREACIÓN Y OBJETO**	**CAPÍTULO I** **CREACIÓN Y OBJETO**
Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.	**Artículo 79.** [...]
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.	El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.
Para la operación del Sistema y el	Para la operación del Sistema y el cumplimiento

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.	de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las entidades federativas,** quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. **No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.**
Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado	Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las Entidades Federativas** tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva [...] de Atención a Víctimas cuando **no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente**; **si existiera y la víctima** no hubiere recibido respuesta dentro de los **quince** días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma **deficiente o** se hubiere negado **la misma.**
	Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.
	En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.
CAPÍTULO III **DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**CAPÍTULO III** **DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**
Artículo 83. Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se	**Artículo 83.** […]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.	
El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.	[…]
El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.	[…]
Corresponderá al Presidente del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.	[…]
El Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.	[…]
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.	Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.
El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.	**[…]**
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y	**Artículo 84.** La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
funciones de la Comisión Ejecutiva.	**no estarán subordinadas a autoridad alguna.** El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva **y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.**
	La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.
En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.	[...]
De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas.	[...]
A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.	[...]
	Se traslada al artículo 79
Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una asesoría jurídica y un registro	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.	
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.	**Artículo 85.** La Comisión Ejecutiva estará integrada por **un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención.** El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública **y consulta nacionalcon los colectivos y organizaciones de víctimas,tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente,** y tres propuestas por cada **miembro del Consejo Directivo,** a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.
Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.	**El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.**
Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:	Para garantizar que la Comisión Ejecutiva **representa a** colectivos de víctimas, especialistas y expertos que **hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:**
I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;	**I.Trespersonas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;**
II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de	**I.Trespersonas provenientes** de colectivos de víctima**spropuestas** por organizaciones no gubernamentale**s** registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, **especializadas en la defensa de los derechos humanos,** con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
derechos humanos.	cinco años.
	Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.
Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.	Para la elección **del Comisionado presidente y delos miembros del Consejo Directivo,** el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y **Derechos Humanos**, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.
En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes.	En **la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar** la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.**
Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:	**Artículo 86.** Para ser **Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva**, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano;	I. [...]
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;	II. [...]
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en	**III.Contar con experiencia acreditada y comprobable** en actividades profesionales, de

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y	servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley **con una antigüedad del al menos siete años;**
IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.	**IV.** No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación**; y**
	V.- No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.
En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios. que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial	En **la integración de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado,así como** representación de las diversas regiones geográficas del país **y** de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.**
Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.	**La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo,** se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, **el Comisionado Presidente** no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia**ni participar en ningún otro espacio de representación de sociedad civil derivado de otras leyes.**
	Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.
	El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:
	a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;
	b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;
	c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.
	Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y
	d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.
	El procedimiento para la revocación del

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.
	I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:
	II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;
	III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.
Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.	**Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años,** renovable por una ocasión y será elegido por **pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.**
Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:	**Artículo 88. El Pleno de la** Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema; **II.** Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su	I. a III. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
reincorporación a la vida social;	
III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;	
IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;	**IV.** Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas **[...]** de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema; **VI.** Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley; **VII.** Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo; **VIII.** Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad; **IX.** Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales; **X.** Establecer mecanismos para la	**V.** a XXIX. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; **XI.** Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal, y de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas; **XII.** Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir; **XIII.** Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley; **XIV.** Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas; **XV.** Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes; **XVI.** Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento; **XVII.** Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas; **XVIII.** Nombrar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro; **XIX.** Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
adiciones; **XX.** Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; **XXI.** Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral; **XXII.** Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación; **XXIII.** Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos; **XXIV.** Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia; **XXV.** Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal; **XXVI.** Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir; **XXVII.** Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro; **XXVIII.** Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas; **XXIX.** En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;	**XXX.** Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, **desplazamiento forzado interno, migrantes,** tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;
XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño; **XXXII.** Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que corresponda al Sistema Nacional de Atención a Víctimas; **XXXIII.** Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación; **XXXIV.** Implementar los mecanismos de	XXXI. a XXXVI. […]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes; **XXXV.** Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y **XXXVI.** Las demás que se deriven de la presente Ley.	
	El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:
	I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;
	II. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;
	III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;
	IV. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;
	V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos,

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y
	VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.
Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.	**Artículo 91.** Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva**, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil,** deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición **de personas**, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.	[...]
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.	[...]
Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres	**Artículo 92.** [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.	
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.	Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; **el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.**
Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:	**Artículo 93.** A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, **se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.**
	Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.
	Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:
	I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;
	II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;
	III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;
	IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.
	Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;
	V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
	VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;
	VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;
	VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y
	IX. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.
	La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:
I. Comité de violencia familiar;	**I.Relatoría Especial sobre** violencia familiar
II. Comité de violencia sexual;	**II.Relatoría Especial sobre** violencia sexual;
III. Comité de trata y tráfico de personas;	**III.Relatoría Especial sobre** trata y tráfico de personas;
IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;	**IV.**-- **Relatoría Especial sobre** personas desaparecidas;
V. Comité de personas víctimas de homicidio;	**V.Relatoría Especial sobre** personas víctimas de homicidio;
VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;	**VI.Relatoría Especial sobre** tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
VII. Comité de detención arbitraria;	**VII.Relatoría Especial sobre** detención arbitraria;
VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y	**[Se deroga]**
IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.	**VIII.- Relatoría Especial sobre** derechos económicos, sociales, culturales y ambientales**;**
	IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado; y
	X.- Relatoría Especial sobre migrantes.
Se podrán establecer también comités por grupo	**Se podrán establecer también relatorías**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.	**especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.**
	El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparación integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.
Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.	**Artículo 96.** [...]
El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.	[...]
	Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.
EI Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.	[...]
El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal.	[…]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.
Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.	**Las entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación **y las entidades federativas** estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal **y la conformación del Registro Nacional** estará**n** a cargo de la Comisión Ejecutiva.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.	[...]
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas.	[...]
Artículo 97. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes:	**Artículo 97**. [...]
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda; **II.** Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 99 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y	I.- a III.- [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.	
Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.	[…]
	Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.
	Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientesha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso,

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.
En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Nacional de Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.	[...]
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional de Víctimas.	[...]
Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.	Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro **en un plazo no mayor a cinco días hábiles**, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. **Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.**
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.	La Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas**de las Entidades Federativas**, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; **no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.	[...]
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.	[...]
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:	[...]
1.- Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente; **II.-** Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias; **III.-** La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución; **IV.-** Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y **V.-** Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.	I.- a V. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.
Artículo 108. ...	**Artículo 108.** ...
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social.	En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de **reinserción** social.
Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:	**Artículo 110.** La calidad de víctima **se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.**
	Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.
	En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.
	Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.
	Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.
El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades: **I.** El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; **II.** El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; **III.** El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar	Para **garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de** esta Ley, **además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación** de cualquiera de las siguientes autoridades:

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
que el sujeto es víctima; **IV.** Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y **V.** La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de: **a)** El Ministerio Público; **b)** La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; **c)** Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o **d)** Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. *Artículo reformado DOF 03-05-2013*	
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; **II.** El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; **III.** El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; **IV.** Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y	**I.** a IV. [...]
V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:	**V.** La Comisión Ejecutiva **considerará también** las determinaciones de:

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
a) El Ministerio Público;	**[...]**
b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;	**[...]**
c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o	**c)** Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, [...]
d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.	**d)** Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; **o**
	e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.
El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.	
Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:	**Artículo 111.** El reconocimiento de la calidad de víctima **a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley,** tendrá como efecto:
II.- El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y	**I.** [...]
II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus	**II.** En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad**,desplazamiento interno forzadoy** todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.	adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.
Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente	El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente **que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.**
Artículo 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:	**Artículo 118.** [...]
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas; **II.** Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley; **III.** Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; **IV.** Participar en la elaboración del Programa; **V.** Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas; **VI.** Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa; **VII.** Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su	**I.** a VII. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
calidad de vida;	
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;	**VIII.** Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, **así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración**;
IX. Promover programas de información a la población en la materia;	**[...]**
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;	**X.-Diseñar y ejecutar** programas **de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de** imputados **o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;**
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; **XII.** Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales; **XIII.** Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen; **XIV.** Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales; **XV.** Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; **XVI.** Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas; **XVII.** Impulsar reformas, en el ámbito de su	**XI.** a **XVIII.** [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y **XVIII.** Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.	
Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas.	[...]
Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:	**Artículo 119.** [...]
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas; **II.** Coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema; **III.** Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas; **IV.** Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;	**I.** a V. [...]
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;	**V. Diseñar y ejecutar** programas **de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de** imputados **o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;**
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;	**VI.** Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, **así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantesde manera que se**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas; **VIII.** Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y **IX.** Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.	VII. a IX. [...]
	Artículo 120. [...]
	I. a XX. [...]
	El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, **en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley,** será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, **de conformidad con la legislación aplicable.**
Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:	**Artículo 123.** […]
I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada; **II.** Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas; **III.** Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como	**I.** a IX. [...]

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
el ejercicio de otros derechos; **IV.** Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario; **V.** Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley; **VI.** Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio; **VII.** Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley; **VIII.** Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad; **IX.** Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;	
X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y	**X.** Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, **[...]**
XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.	**XI. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y**

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.
Artículo 131. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.	Artículo 131.Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo**en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley**, **el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará** una evaluación integral **del**entorno familiar y social**de las víctimas** con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; **en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.**
Artículo 132. El Fondo se conformará con:	Artículo 132. [...]
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;	I. a VIII. [...]
El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.	
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva; **III.** Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;	

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas; **V.** Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista; **VI.** Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo; **VII.** Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y **VIII.** Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.	
La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.	**[...]**
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.	Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, **excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo.** La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.	En el caso de las **indemnizaciones** por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial correspondiente.
Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de	Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, **indemnización** o reparación del daño tendrán el carácter de

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.	resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.
Artículo 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:	**Artículo 150.** [...]
I. La condición socioeconómica de la víctima; **II**. La repercusión del daño en la vida familiar; **III.** La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;	**I.** a III. [...]
IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y	**IV.** El número y la edad de los dependientes económicos**, [...]**
V. Los recursos disponibles en el Fondo.	**V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y**
	VI. Los recursos disponibles en el Fondo.
	TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
	CAPÍTULO ÚNICO **DE LAS SANCIONES**
	Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.
	Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.
	Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.
	Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.
	Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que

LEY VIGENTE	TEXTO DE LA INICIATIVA
	pudieran derivarse del caso.
	Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.
	Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.
	Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

Así también, se inserta un comparativo sobre la reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Senado que contiene el procedimiento propuesto para la revocación del mandato que se señala en la Iniciativa de Reforma a la Ley General de Víctimas:

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO	
TEXTO VIGENTE	**PROPUESTA DE REFORMA**
	ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado en materia de revocación del mandato de la Comisión Ejecutiva, para quedar como sigue:
Artículo 150.- **1.** Las decisiones en las comisiones se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes. **2.** Las votaciones sobre dictámenes o resoluciones requieren de la mayoría absoluta de los integrantes de la respectiva comisión.	**Artículo 150.-** **1.- a 2.- […]**
3. Los dictámenes y resoluciones que se producen bajo la modalidad de trabajo en comisiones unidas, son aprobados por la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones que participan.	**[…]**
	Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.
4. Las votaciones nominales se realizan a través del sistema electrónico.	**[…]**

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con **Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado de la República.**

ARTÍCULO PRIMERO. Se **reforman** el primer y cuarto párrafos del artículo 1; las fracciones I y II del artículo 2;el primer y el actual segundo párrafo del artículo 4; el segundo, tercer, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo del artículo 5; la fracción V del 6; el párrafo primero, las fracciones I, III, IV, VII, VIII, XX y XXXIII del 7; primer,segundo y cuarto párrafos del 8; primer, segundo y cuarto párrafos del 9; fracción II del 12; 15; cuarto y quinto párrafos del 21; 23; 26; fracciones III y VI del 27; segundo párrafo del 28; 29; 31; 38; 39; 41, 45; 47; 57; fracciones I y VI del 61; 63;primer párrafo y fracción VIII del 64; primer párrafo del 65; 66; primer y último párrafos del 67; primer párrafo del 69; fracción II del 73; fracciones X y XI del 74; segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos del 79; el quinto párrafo del artículo 83; primer párrafo del artículo 84, el quinto párrafo de este artículo se traslada al artículo 79; primer, segundo, tercero y sus fracciones I y II, sexto y séptimos párrafos actuales del 85; primer párrafo, las fracciones III y IV que corresponden al cuarto y quinto, el séptimo y octavo párrafos actualesdel 86; 87; primer párrafo y fracciones IV y XXX del 88; primer párrafo del 91; segundo párrafo del 92; primer párrafo y las actuales fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX que corresponden a los nuevos párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo tercero(la actual fracción VIII de este artículo que se deroga, se utiliza para numerar la fracción IX vigente) del 93; el actual quinto párrafo del 96; el primer y segundo párrafo del 101; el segundo párrafo del 108; primer párrafo y los actuales segundo, fracción V, incisos c) y d), que corresponden con los nuevos párrafos 6, 11, 14 y 15 del 110; primer, tercer párrafos que corresponde a la fracción II y cuarto párrafo del 111; fracciones VIII y X del 118; fracciones V y VI del 119; últimopárrafo del 120; actuales fracciones X, y XI del 123;131; el último párrafo del 132; actuales fracciones IV y V del 150 y 151; se **derogan**la actual fracción XVIII del artículo 6 y la fracción VIII que corresponde al noveno párrafo actual del 93 con lo que se recorre la numeración y la fracción IX actual se convierte en la fracción VIII del 93; y**se adicionan** un segundo y cuarto párrafos al artículo 4 con lo que se recorren los actuales; un segundo párrafo al actual párrafo quinto del artículo 5;la fracción VIII, con lo que se recorre la numeración de las actuales fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y un segundo párrafo a la nueva fracción XVIII del artículo 6; las fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, con lo que se recorre la numeración de la actual fracción XXXIV del 7; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo del 34; un inciso c) con numerales i) y ii) y un séptimo párrafo al 67; una fracción IV al 69; una fracción XII al 74; un quinto y sexto párrafos al 79; se adiciona un segundo párrafo al artículo 84, con lo que se recorre la numeración de los párrafos; un sexto párrafo, después de las fracciones I y II del tercero, con lo que se recorren los actuales sexto y séptimo del 85; una fracción V que corresponde al nuevo párrafo sexto, noveno, décimo, décimo primero que corresponde al inciso a), décimo segundo que corresponde al inciso b), un décimo tercero que corresponde al inciso c), un décimo cuarto, un décimo quinto que corresponde al inciso d), un décimo sexto, un décimo séptimo que corresponde a la fracción I, un décimo octavo que corresponde a la fracción II y un décimo noveno que corresponde a la fracción III todos del 86; un séptimo párrafo, un octavo párrafo que corresponde a la fracción I, un noveno párrafo que corresponde a la fracción II, un décimo párrafo que corresponde a la fracción III, un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción IV, un décimo segundo que corresponde a la fracción V y un décimo primer párrafo que corresponde a la fracción VI del artículo 88; nuevos segundo y tercer párrafos, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero que corresponden a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del nuevo tercer párrafo, y un décimo cuarto párrafo, todo ello del 93; nuevos tercer y sexto párrafos, con lo que se recorre la secuencia actual del artículo 96; un sexto y séptimo párrafos nuevos con lo que se recorre la secuencia de los párrafos del 97; un último párrafo al 101; los nuevos párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo sexto que corresponde al inciso e) de la fracción V del 110; una nueva fracción XI, con lo que se

recorre la actual fracción XI, al 123; una nueva fracción V con lo que se recorre la actual para quedar como VI del 150 y un Título Décimo Primero, Capítulo Uno, De las Sanciones, y de los artículos 190 al 197, para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Artículo **1.** La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por **el** artículo 1o., párrafo tercero **en materia de reparación**, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

[...]

[...]

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, **indemnización**, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. [...]

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial **los derechos** a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación **integral y los** demá**s** consagrados en **esta Ley**, en la Constitución, y **en las normas sobre derechos humanos en** los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger **y** garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas**,** así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III.- a V.- [...]

Artículo 4. Se denominarán víctimas **las** personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro**,** lesión a sus bienes jurídicos **oanulación de sus** derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el

cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas.

En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. **En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley.**

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

I.-Dignidad.- **Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares** y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, **discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés** o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares.

[…] Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a **considerarlas** y **tratarlas** como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

[...]

II.-Buena fe.- Las autoridades presumirán **en todo momento** la buena fe **de lo dicho y actuado por** las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, **ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos.**

Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.

III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las

víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas **conforme al principio de complementariedad** para alcanzar la integralidad que busca la reparación. **Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.**

IV. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

[...]

V. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

[...]

[...]

VI. Enfoque transformador.- Las autoridades **encargadas de aplicar** la presente Ley, **en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para** que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, **marginación y violencia** que **fueran** causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. **Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.**

VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

[...]

X. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

[...]

XI. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante.

XII. No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

[...]

XIII.No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

[...]

XV. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, **adoptados en el marco de esta Ley,incluidos los que señalan los artículos 85 y 86**, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible.

XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, **especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley,** que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

[...]

XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

Artículo 6. […]

I. al IV.- [...]

V. Compensación**: Reparación o indemnización** económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

VI.- [...]

VII.- [...]

VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

IX. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVI. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XVIII. Víctima: Persona física queha sufrido **la anulación, el** daño o el menoscabo de sus derechos **como consecuencia** deuna violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.

XVIII. Se deroga

XIX. a XXII.- […]

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, **por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.**

[...]

I.-A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables **del hecho victimizante**, y a su reparación integral;

II.- […]

III.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los **hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública,** para lo cual la autoridad deberá informar **a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia;**

IV.- A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corpora**l, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren;**

V.- y VI.- […]

VII.- A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral;

VIII.- Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a **su** dignidad y privacidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;

IX.- a XIX.- […]

XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; **en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;**

XXI.- a XXXII.- [...]

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;

XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria;

XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;

XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima.

XXXVIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas **del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, eindependientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas,** recibirán **de la Comisión Ejecutiva federal** ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos **que atenten contra la vida,** contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno forzado,** recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

[…]

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias,** a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

[...]

Artículo 9.Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque **transversalrestaurativo**, t**ransformador**, de género y diferencial.

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para **superar su victimidad,** llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, **y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.** Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

[...] .

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de

atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la **indemnización** a que tuvieran derecho las víctimas.

Artículo 12. [...]

I.- [...]

II.-A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se **refieren los artículos** 64 **al 72** de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III.- a XIII.- [...]

Artículo 15.- Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, **perito independiente acreditado por la víctima, con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas,** o la persona que consideren.

Artículo 21. [...]

[...]

[...]

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos**, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas;** a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones,** la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

[…]

[…]

Artículo23.Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, **así como peritajes independientes a cargo de los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas,** con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

CAPÍTULO VI
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 26.Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. **Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.**

Artículo 27.[...]

I.- a II.- [...]

III.-La compensación, **indemnización económica,** ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la violación de derechos humanos;

IV.- [...]

V. [...]

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, **así como la reinserción y soluciones duraderas** que **reconozcan** la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

[...]

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 28. [...]

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores**, desplazados internos forzados** y población indígena.

Artículo 29.Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, **de las Entidades Federativa** y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas **del delito o de violaciones a derechos humanos** que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad**, fuero competencial, incorporación a un registro** y sin exigir **ninguna otra** condición previa para su admisión**. En caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.**

Artículo 31**.** La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, **así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar** a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables**, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley**.

Artículo 34. [...]

I. a VI. [...]

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 38.El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o **en situación de desplazamiento interno forzado** por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que

la víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. **Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.**

Artículo 39.Cuando la víctima **se traslade a** un lugar distinto **de su** lugar de residencia y **requiera** regresar al mismo, **las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad, o se cumpliera el supuesto establecido en el cuarto párrafo del artículo 79 de esta ley**, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

Artículo 41.Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad. **Las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor, conforme a los principios y derechos plasmados en esta Ley y las necesidades específicas del caso, las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.**

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores**, desplazados internos forzados, migrantes** y población indígena.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración**. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 57.La Federación, los estados, **la Ciudad de México** y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 61. [...]

[...]

I.- Reestablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona;**

II. a V. [...]

VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones**;

VII. a VIII. [...]

[...]

Artículo 63.Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará untrato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas**, y a víctimas de desplazamiento interno forzado.**

CAPÍTULO III
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Artículo 64. La compensación,**reparación económica,** se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I. a VII. [...]

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio **a diligencias ministeriales, judiciales** o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

[...]

[…]

Artículo 65.Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos **exactos** que determine la resolución que emita en su caso:

a) a d). [...]

[...]

[...]

Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o**indemnización** a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Artículo 67. **Para efectos de otorgar la indemnización a las víctimas del delito,** el Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) y b)[...]

c) Un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos:

i) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda;

ii) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en cualquiera de las fracciones a) y b).

Los plazos a los que se refiere el ii) de la fracción c) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa.

[...]

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización, que** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 69.La Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria **de una víctima que no haya sido reparada**cuando **obtenga**todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta **por**la Comisión. **La Comisión Ejecutiva deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas**, entre otros:

I. a III. […]

IV.- Lo establecido en el inciso c) del artículo 67.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

I.-[...]

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad, **en los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones**;

I.- a VI.-[...]

CAPÍTULO V
MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Artículo 74. [...]

I.- a IX.-[...]

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, [...]

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; **y**

XII.- En el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.

TÍTULO SEXTO
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I
CREACIÓN Y OBJETO

Artículo 79. [...]

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las entidades federativas,** quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. **No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.**

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las Entidades Federativas** tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva [...] de Atención a Víctimas cuando **no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente**; **si existiera y la víctima**no hubiere recibido respuesta dentro de los **quince** días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma **deficiente o** se hubiere negado **la misma.**

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Artículo 83. […]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

[…]

Artículo 84.La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en**

términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva **y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.**

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

[...]

[...]

[...]

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por **un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención.** El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública **y consulta nacionalcon los colectivos y organizaciones de víctimas,tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente,** y tres propuestas por cada **miembro del Consejo Directivo,** a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

Para garantizar que la Comisión Ejecutiva **representa a** colectivos de víctimas, especialistas y expertos que **hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:**

II.Trespersonas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;

I.Trespersonas provenientes de colectivos de víctima**spropuestas** por organizaciones no gubernamentale**s** registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, **especializadas en la defensa de los derechos humanos,** con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco año**s**.

Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

Para la elección **del Comisionado presidente y delos miembros del Consejo Directivo,** el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y **Derechos Humanos**, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

En **la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar** la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.**

Artículo 86. Para ser **Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivode la Comisión Ejecutiva**, se requiere:

I. [...]

II. [...]

III.Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley **con una antigüedad del al menos siete años;**

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación**; y**

V.- No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

En **la integración de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado,así como** representación de las diversas regiones geográficas del país **y** de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.**

La persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, **el Comisionado Presidente** no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia **ni ser representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes**

Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimasante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a

Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:

a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;

b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;

c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.

Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y

d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:

II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;

III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.

Artículo 87.**El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años,** renovable por una ocasión y será elegido por **el pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.**

Artículo 88. **El Pleno de la** Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a III. [...]

IV. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas **[...]** de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

V. a XXIX. [...]

XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, **desplazamiento forzado interno, migrantes,** tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;

XXXI. a XXXVI.

El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;

II. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;

III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;

IV. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; y

V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.

Artículo 91.Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva**, por iniciativa propia o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil,** deberán ser situacionales y focalizados a

situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición **de personas**, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

[...]

[...]

Artículo 92. [...]

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes; **el presidente tendrá voto de calidad en los supuestos establecidos en el artículo 87 de esta Ley.**

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, **se establecen las Relatorías Especiales, las cuales contarán con una asignación suficiente de recursos para la realización de consultas, eventos de difusión y publicación de análisis, informes y demás información pertinente derivada de su mandato, así como plenas garantías de independencia para realizar su labor.**

Las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, debiendo contar con una destacada trayectoria, conocimientos sólidos y demostrables en los temas materia de su mandato, así como una buena reputación y credibilidad entre las víctimas y sus colectivos. La sesión en la cual se discuta y designe a una relatora o un relator especial deberá ser pública.

Serán atribuciones de las relatorías especiales, las siguientes:

I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;

II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales;

III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes;

IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como contribuir a la garantía del derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

Los diagnósticos nacionales deberán publicarse durante el primer trimestre de cada año y reflejar las

cifras de atención, registro, cumplimiento de medidas de reparación y, en general, todas las relativas a las actividades de acompañamiento adoptadas a favor de las víctimas en el marco de esta Ley en relación con al mandato temático de la Relatoría de que se trate, durante el año inmediato anterior al de su publicación, así como recomendaciones dirigidas a instituciones públicas u otras que pudieran ser relevantes, a fin de garantizar la transformación de las causas estructurales de la victimización;

V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas;

VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley;

VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización, aplicando para ello los principios contenidos en esta Ley, especialmente el de enfoque transformador, y

IX. Emitir opinión sobre los proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático, procurando en todo momento que en la adopción de las medidas de reparación se cumpla con los principios de complementariedad, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, máxima protección, progresividad y demás aplicables.

La Comisión Ejecutiva contará al menos con las siguientes Relatorías Especiales:

I.Relatoría Especial sobre violencia familiar

II.Relatoría Especial sobre violencia sexual;

III.Relatoría Especial sobre trata y tráfico de personas;

IV.-- **Relatoría Especial sobre** personas desaparecidas;

V.Relatoría Especial sobre personas víctimas de homicidio;

VI.Relatoría Especial sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII.Relatoría Especial sobre detención arbitraria;

VIII.- Se deroga […]

VIII.- Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales**;**

IX.- Relatoría Especial sobre desplazamiento interno forzado, y

X.- Relatoría Especial sobre migrantes.

Se podrán establecer también relatorías especiales por grupo de víctimas, determinados casos cuyo impacto social, gravedad o complejidad lo requieran, o, en general, las que determine el Pleno de la Comisión.

El Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparaciónón integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, el cual deberá someter a la votación del Pleno de la Comisión para su aprobación, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.

Artículo 96. [...]

El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley**.**

Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.

[...]

[…]

El registro contará con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales, a saber: un archivo para los hechos victimizantes de fuero federal, y otro para los de fuero común.

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación **y las entidades federativas** estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal **y la conformación del Registro Nacional** estará**n** a cargo de la Comisión Ejecutiva.

[...]

[...]

Artículo 97. [...]

I.- a III.- [...]

[…]

Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, las instancias de procuración de justicia y los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos que obren en su poder y que permitan reunir la información precisada en el formato único de declaración adoptado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de que la información en todos los expedientes en su poder en los cuales haya víctimas como partes en los procedimientos de su competencia, sean incorporados al Registro.

Por cada uno de los expedientes que se generen, las instituciones obligadas por este artículo deberán remitir de inmediato la información necesaria para nutrir el formato único de declaración. La Dirección del Registro deberá turnar los nuevos expedientes a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva para que se determinen las medidas a adoptar en cada caso. Si la revisión de expedientesha concluido, el Presidente de la Comisión Ejecutiva deberá presentar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión, y en su caso, aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Si se trata de un caso que corresponda a una Comisión Ejecutiva de una entidad federativa, se le turnará con un exhorto para su inmediata atención.

[...]

[...]

Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro **en un plazo no mayor a cinco días hábiles**, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. **Al validarse la inscripción, la Comisión Ejecutiva, a través del área encargada del Registro, deberá informar al solicitante que fue inscrito, expedir y entregarle el comprobante foliado que la acredite como una víctima inscrita en el Registro, con todos los efectos legales correspondientes. Ninguna autoridad condicionará el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley para con las víctimas a la exhibición del comprobante foliado.**

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas**de las Entidades Federativas**, podrán solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles; **no podrán exigirse a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta Ley ni la realización de gestiones relacionadas con la obtención de la información para su registro.**

[...]

[...]

[...]

I.- a V. [...]

Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le

entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley.

Artículo 108. ...

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de **reinserción** social.

Artículo 110. La calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 párrafo cuarto de esta Ley.

Para efectos del acceso de las víctimas a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley, bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el simple dicho de la víctima para que de inmediato las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, incluyendo la Comisión Ejecutiva o la comisión de víctimas que por su jurisdicción corresponda, adopten las medidas que sean necesarias, sin exigir mayores requisitos a las víctimas, atendiendo en todo momento a los principios pro persona, de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y demás aplicables.

En casos de emergencia médica o psicológica, o de que la vida, integridad o libertad de las víctimas corra riesgo por cualquier causa, toda persona, sea autoridad pública o no, está obligada a prestarles auxilio y solicitar a las autoridades competentes la atención especializada a que tienen derecho sin que medien mayores formalidades o requisitos, en los términos del Título Tercero Capítulos I y IV de esta Ley.

Cualquier persona puede notificar de los hechos a cualquier autoridad, indistintamente de su jurisdicción o competencia. En todo caso, la primera autoridad que tenga noticia de los hechos deberá garantizar de inmediato que tengan lugar las medidas previstas en el párrafo anterior y tan pronto como ello hubiera ocurrido, dar aviso a la Comisión Ejecutiva o comisión de víctimas correspondiente; la cual deberá adoptar todas las gestiones necesarias para entrar en comunicación con la víctima o sus representantes, inscribirla en el Registro, asignarle un asesor jurídico y que se le garantice la adopción de todas las medidas y el respeto de todos los derechos reconocidos por esta Ley, desde el momento en que la Comisión de mérito tenga conocimiento de los hechos hasta que, por medio del efecto conjunto de las medidas que se adopten en su beneficio, supere su condición de victimidad y se reinserte lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida.

Por lo que hace al acceso a las medidas contempladas en el Título Cuarto de esta normatividad, bastará con la inscripción de la víctima al Registro, sin que ninguna autoridad deba exigir a las víctimas ningún requisito adicional.

Para efectos de **garantizar las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de** esta Ley, **además de la inscripción de la víctima al Registro, deberá contarse con la determinación** de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. a IV. [...]

V. La Comisión Ejecutiva **considerará también** las determinaciones de:

[...]

[...]

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, [...]

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; **o**

e) Las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado.

Artículo 111.El reconocimiento de la calidad de víctima **a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley,** tendrá como efecto:

I. [...]

II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad**,desplazamiento interno forzadoy** todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente **que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.**

Artículo 118. [...]

I. a VII. [...]

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, **así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración**;

[...]

X.-Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

XI. a XVIII. [...]

[...]

Artículo 119. [...]

I. a V. [...]

V. Diseñar y ejecutar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como promover la reinserción social tanto de víctimas como de imputados o personas liberadas después de purgar una condena penal, con el fin de favorecer a la no repetición de hechos de violencia;

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, **así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrantesde manera que se garantice su derecho a un nivel de vida adecuado;**

VII. a IX. [...]

Artículo 120. [...]

I. a XX. [...]

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, **en especial quienes tengan la responsabilidad institucional de cumplir con esta Ley,** será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal, **de conformidad con la legislación aplicable.**

Artículo 123.[…]

I. a IX. [...]

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia,

[...]

XI. Iniciar procedimiento de investigación y, eventual sanción penal, al servidor público que incurra en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas; y

XII. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

Artículo 131.Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo**en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley**, **el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará** una evaluación integral **del**entorno familiar y social**de las víctimas** con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; **en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.**

Artículo 132. [...]

I. a VIII. [...]

[...]

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, **excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo.** La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

Artículo 150. [...]

I.- a III.- [...]

IV.- El número y la edad de los dependientes económicos, [...]

V.-Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración**, y**

VI.- Los recursos disponibles en el Fondo.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SANCIONES

Artículo 190. Para lo no dispuesto en esta Ley se aplicará de manera supletoria para el desarrollo del procedimiento y la fijación de las sanciones que correspondan, la legislación en materia de justicia administrativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

Artículo 191. Al servidor público que actúe de manera omisa, negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente Ley, se le sancionará con amonestación administrativa y, en caso de reincidencia, será destituido de su cargo. Asimismo, en caso de que, derivado de la omisión, falta de debida diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiera sufrido un nuevo daño, o éste se hubiera empeorado, se le sancionará con multa de entre quinientos y mil salarios mínimos e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades penales a las que se hicieran acreedores.

Artículo 192. Al servidor público que maltrate emocional o verbalmente a las víctimas mediante ofensas, humillaciones o cualquier falta de respeto que implique la inobservancia de los principios de actuación previstos en el artículo 5 de esta Ley, se le destituirá de inmediato de su cargo.

Artículo 193. Al servidor público que imponga cualquier tipo de costa, gravamen o requiera de las víctimas una contraprestación de cualquier índole por la prestación de servicios o medidas a las que tienen derecho, se les sancionará con la destitución inmediata de su puesto, así como se le obligará a la devolución íntegra de lo pretendido cuando se tratara de bienes materiales, en caso de haberlo cobrado, así como con sanción pecuniaria hasta por tres veces el valor de lo cobrado, e inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier función pública, sin menoscabo de las responsabilidades penales que se desprendieran del caso.

Artículo 194. En caso de que se demuestre que el responsable de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 191 y 192 de esta Ley hubiera actuado motivado por discriminación en razón de la edad, el sexo, la condición social o económica, el origen nacional, la orientación sexual, el tipo de hecho victimizante, o cualquiera otra, la sanción aplicable consistirá en multa hasta por quinientos salarios mínimos, destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse del caso.

Artículo 195. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas mediante intimidación o amenazas, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

Artículo 196. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por filtrar informaciones derivadas de su acceso al expediente a terceras personas, sean particulares u otros servidores públicos, incluyendo a quienes sean señalados como responsables de los hechos victimizantes, o con un tercero implicado que amenace o dañe la vida, integridad personal o libertad de una víctima, se le sancionará con una pena de entre cuatro y diez años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por trece años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

Artículo 197. Al servidor público que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas por omitir o actuar negligentemente en la adecuada y pronta implementación de las medidas de protección contempladas en esta Ley, siempre que el riesgo se verifique efectivamente, se le sancionará con una pena de entre tres y siete años de prisión, multa de entre quinientos y mil salarios mínimos, así

como inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por siete años posteriores a la conclusión de la pena corporal, sin menoscabo de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Senado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO, para quedar como sigue:

Artículo 150.-

1.- a 2.- […]

[…]

Para efectos de la revocación del mandato de un Comisionado o Comisionados establecida en la Ley General de Víctimas, se aprobará con las dos terceras partes de los integrantes presentes de las comisiones unidas competentes.

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá armonizarse con la presente reforma en un plazo máximo de 180 días siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor.

CUARTO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente reforma a la Ley.

QUINTO.- Si en el plazo señalado en el transitorio anterior, los Congresos locales no hubieran armonizado sus ordenamientos relacionados con la presente reforma a la Ley, estarán a lo que señala esta Ley General para el cumplimiento de la misma.

SEXTO. En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

SÉPTIMO. Para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 38 relativo a la asignación de una partida presupuestal emergente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Ejecutivo Federal enviará un rubro presupuestal incorporado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a la Cámara de Diputados.

OCTAVO.- En un plazo no superior a los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo federal y el Senado realizarán las acciones establecidas en esta Ley para nombrar a la

totalidad de los integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.No serán elegibles las personas que hubieran laborado previamente en la Comisión Ejecutiva u otras instancias gubernamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 fracción IV de esta Ley.

En tanto se cumple con lo señalado en el párrafo anterior, seguirán en funciones quienes detentan actualmente la responsabilidad de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

12) 14-09-2016
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 bis y 39 bis a la Ley General de Víctimas**.**
Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Diario de los Debates, 14 de septiembre de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 8 Y 95 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 8 BIS Y 39 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 14 de Septiembre de 2016

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

El pasado 29 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la conformación de una comisión plural que le diera seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, y se conformó por Diputados y Senadores de esta misma comisión.

Como parte del programa de trabajo, los integrantes de la comisión solicitamos diferentes informes relacionados con los hechos ocurridos en Nochixtlán. También realizamos reuniones con autoridades federales, con autoridades estatales, autoridades municipales, con los pobladores e incluso con los policías lesionados.

Derivado de esas reuniones y de los informes que logramos obtener, pudimos conocer acciones muy concretas que realizaron diversas instituciones; entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esta Comisión Ejecutiva que atendió a 172 víctimas, realizó 172 acompañamientos, 36 traslados a la casa de alojamiento y a diferentes hospitales, atendió a 673 personas en temas de traslado, hospedaje, alimentación; aprobó también un fondo de emergencia de 2 millones de pesos, el cual fue ampliado a 10 millones para el pago de ayudas inmediatas, entre muchas otras cosas que hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cuando nos reunimos con el presidente de esta comisión, el señor Jaime Rochín, nos informó sobre algunas dificultades que ha estado enfrentando esta institución para poder atender de manera eficaz, de manera eficiente a las víctimas y a sus familiares.

Por ejemplo, el tema de prever que la comisión y las comisiones en las diferentes entidades federativas estén facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.

O también prever que en casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones en cada una de las entidades, estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en dichos supuestos, puedan acudir a instituciones privadas de atención médica, y para cubrir los gastos médicos con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.

Podría seguir enumerando muchos de los puntos que lamentablemente la comisión se ha visto con dificultades, y señalaban que la misma ley le ponía demasiados candados o más bien le pone demasiados candados para poder dar la atención adecuada cuando ocurre una tragedia, como lo que pasó en Nochixtlán, Oaxaca.

Compartirles que muchas de estas deficiencias, quiero señalar una importante, que es la parte de especificar que los pagos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, realicen con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente, puedan hacer por anticipado el pago, y que las víctimas puedan también comprobar el ejercicio de los recursos para fines correspondientes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determine la comisión, para que se pueda atender al caso en concreto.

Con todo esto, lo que quiero compartirles es que estamos presentando una iniciativa, una propuesta de reforma y adición de los artículos 6, 8, 95, 8 Bis y 39 Bis de la Ley General de Víctimas, para que quienes sean vulnerados en su persona o en sus bienes, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, puedan acceder al Fondo de Atención a Víctimas sin necesidad de presentar facturas fiscales para comprobar los recursos, para que puedan tener acceso a la atención hospitalaria en las instituciones privadas, para que la Comisión Ejecutiva pueda erogar los traslados, hospedajes y alimentación de las víctimas, así como otorgar facultades a la Comisión Ejecutiva de atracción para cuyos casos sea competencia de las entidades federativas, así como inscribir víctimas del fuero común cuya calidad sea reconocida por alguna autoridad ministerial, judicial o protector de derechos humanos en el Registro Nacional de Víctimas.

Con esto, lo que buscamos desde el Senado de la República, es dar una muestra clara de sensibilidad ante las dificultades incluso revictimización de las personas que tienen la calidad de víctimas por procesos administrativos que entorpecen una atención inmediata por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Queremos que a la gente se le atienda de manera inmediata y, por ejemplo, en el caso concreto de Nochixtlán, Oaxaca, que tuvieron las familias que pagar los velorios y las fiestas que se hicieron en esos momentos para recordar a sus muertos, bueno pues tuvieron que desembolsar una buena cantidad de dinero familias de escasos recursos, y desafortunadamente tuvo que pasar mucho tiempo para que se les diera este reembolso.

Y aquí compartirles, pues resulta muy complicado si van a comprar flores o si van a tener eventos durante 7 días o 10 días, dependiendo de las costumbres de cada familia, resulta muy difícil que puedan pedir un recibo fiscal.

Con esto quiero decirles, que a los Senadores integrantes de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, se han sumado a este esfuerzo la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, el Senador Ismael Hernández Deras, el Senador Juan Carlos Romero Hicks y el Senador Benjamín Robles, se están sumando a este esfuerzo.

Esperemos que hechos como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, no se vuelvan a dar; pero conscientes de que muchas veces se le tiene que atender a víctimas y desafortunadamente por tener leyes tan complicadas, no se les da la atención correspondiente.

Quiero decirles que después de visitar Nochixtlán, nos comprometimos con integrantes del Comité Social y del Comité de Víctimas para presentar esta iniciativa de ley.

Nos comprometimos a que entre todos haríamos este esfuerzo y más adelante estaremos también presentando dos puntos de Acuerdo que tienen que ver con peticiones concretas de presupuesto para solicitar recursos para la ampliación del hospital, por un lado, y también para solicitar recursos y que sea previsto tanto por el gobierno federal como por nuestros Diputados, para que puedan tener los jóvenes de Nochixtlán una escuela técnica en donde estudiar.

Es cuanto, compañeros Senadores.

Iniciativa

Los suscritos, **MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA**, **FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS**, Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164

numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 8 Y 95 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 8 BIS Y 39 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS**, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El miércoles 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, expedida por el Congreso de la Unión sin contar con facultades legislativas expresas conferidas por nuestra Constitución para expedir una ley general que desarrollara los principios y bases en materia de atención a víctimas, aplicables a todos los niveles de gobierno.

Apenas el 25 de julio de este año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, por la que se facultó expresamente al Congreso de la Unión, en la fracción XXIX-X, para expedirla ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios ylas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

Así, recién a partir de la publicación de la reforma del 25 de julio de 2016, los mínimos previstos en la Ley General de Víctimas son el piso que tienen las legislaturas de las entidades federativas para legislar sobre la materia en el ámbito local, conforme lo dispone el sistema de distribución de competencias previsto en los artículos 122 y 124 de la Constitución (régimen de facultades implícitas).

Lamentablemente, la Ley General de Víctimas no ha sido adecuada a las necesidades actuales, ni ha sido reformada atendiendo a las experiencias de diversos casos de violaciones graves de derechos humanos.

La última reforma a esta importantísima ley, data del 03 de mayo de 2013, hace más de tres años. Desde esa única reforma que tuvo la ley, la sociedad mexicana ha vivido una crisis de seguridad pública y de protección a los derechos humanos, lo cual ha sido incluso reconocido por organismos internacionales protectores de derechos humanos. Durante estos más de tres años de vigencia de la Ley General de Víctimas, la sociedad civil organizada ha levantado la voz en diversas ocasiones para demandar una adecuación por parte del Congreso de la Unión a dicha Ley General, para adecuarla a la realidad que viven las víctimas en nuestro país. Lamentablemente, sus palabras no se han traducido en siquiera alguna reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Presidente de la República.

El objeto de la Ley General de Víctimas es garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas (tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos), por lo que su falta de actualización a las necesidades reales y actuales de las víctimas, contraviene el espíritu mismo de la propia ley.

Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Asimismo, conforme lo prevé el artículo 84 de dicha ley, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (la "CEAV") es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y de ella dependen tanto el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como el Registro Nacional de Víctimas, además de encargarse de la asesoría jurídica federal de atención a víctimas.

Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar seguimiento a tales hechos.

A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (en lo sucesivo, la "Comisión de Seguimiento") en el que se estableció que sus actividades serían "*la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos*".

En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y se señaló que la vigencia de la Comisión de Seguimiento sería "*hasta que se considere atendido el objetivo para el que fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades*".

A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento visitaron el lugar de los hechos y sostuvieron diversas entrevistas con pobladores de Nochixtlán, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité Social, así como con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

A lo largo de la existencia de la Comisión de Seguimiento, los legisladores integrantes sostuvieron diversas reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del gobierno del estado de Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Así, en el marco de las actividades de dicha Comisión de Seguimiento, la Presidenta de dicha Comisión, el 06 de julio de 2016 solicitó a la CEAV un informe sobre su actuación y seguimiento de los mencionados hechos, así como del estado que guardaba la atención de las víctimas por parte de la CEAV. A efecto de dar seguimiento a la información que recibió la Comisión de Seguimiento por parte de la CEAV, el martes 26 de julio de 2016, los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento, sostuvieron una reunión de trabajo con el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV, a fin de que ampliara la información sobre cuáles habían sido las acciones que la CEAV había realizado en relación con los mencionados hechos, así como para que nos relatara su participación a fin de dar una debida atención a las víctimas.1 Como puede consultarse en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento2, la CEAV informó que se inscribieron a 89 personas lesionadas y 7 fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas.

En la mencionada reunión de trabajo con el Comisionado Presidente de la CEAV, y en comentarios posteriores por parte de la CEAV, en relación con las dificultades que enfrentó dicha institución para garantizar los derechos que la Ley General de Víctimas otorga a las víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, se encuentran una multiplicidad de obstáculos normativos previstos en la Ley General de Víctimas, que dificultan la operación de la propia CEAV, los cuales impiden una debida atención de las víctimas y el otorgamiento de la reparación a la que tienen derecho conforme a la ley.

Así, como se concluyó en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento, es necesario reformar la Ley General de Víctimas, a fin de que la CEAV pueda cumplir con su misión de una manera más efectiva.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé reformar la Ley General de Víctimas, a fin de adecuarla en los siguientes rubros:

• Prever que la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;

• Prever que, en casos urgentes o de extrema necesidad, la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en dichos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención médica, y para cubrir los gastos médicos con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;

• Incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, a los gastos previstos para su reembolso en el Fondo Federal o en los fondos de las entidades federativas;

• Prever la facultad de atracción de la CEAV, para casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas, y se de alguno de los siguientes supuestos:

1. Que la entidad federativa no cuente con una comisión de atención a víctimas;

2. Que la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del hecho victimizante;

3. Tratándose de violaciones graves de derechos humanos; o

4. Cuando el caso sea de trascendencia nacional.

• Especificar que los pagos que la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, realicen con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente, se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, atendiendo al caso concreto.

• Flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas y prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 6, 8 y 95 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

“Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. y II. …

III. **Comisiones de Víctimas**: la comisión de atención integral a víctimas de cada Entidad Federativa;

IV. a VIII. …

VIII Bis. **Fondo Local: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas que cada entidad federativa debe constituir**;

IX. a XIX. …”

“Artículo 8.-…

…

…

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y de los municipios, **en el ámbito de sus competencias**, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten.

En casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, podrán autorizar que la víctima que se encuadre en dichos supuestos, acuda a instituciones privadas de atención médica, con cargo al Fondo o al Fondo Local, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en el ámbito de sus facultades, podrán otorgar de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo o al Fondo Local, según corresponda, en tanto la víctima requiera dichas medidas para superar las condiciones de necesidad surgidas como consecuencia del Hecho victimizante.

Los pagos que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas realicen con cargo al Fondo o a los Fondos Locales, respectivamente, se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, atendiendo al caso concreto."

"Artículo 95.- El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

I. a VII. …

VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones. **La Comisión podrá inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante organismo protector de los derechos humanos.**

IX. a XIII. …"

SEGUNDO.- Se adicionen los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos:

"**Artículo 8 Bis.- La Comisión Ejecutiva, de oficio o a petición de la víctima, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas, en los siguientes supuestos:**

I. Cuando la Entidad Federativa no cuente formal y materialmente con una Comisión de Víctimas en los términos que establece la presente ley;

II. Cuando la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas facultades, hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del Hecho victimizante;

III. En tratándose de violaciones graves de derechos humanos; y

IV. Cuando el caso sea de trascendencia nacional.

Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el presente artículo, la Comisión Ejecutiva deberá fundar y motivar su determinación, y notificar el ejercicio de la facultad de atracción tanto a la víctima como a la Comisión de Víctimas de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la determinación de la Comisión Ejecutiva.

En todos los supuestos del presente artículo, los pagos hechos por la Comisión Ejecutiva con cargo al Fondo, deberán ser reintegrados por la Comisión de Víctimas correspondiente, o por la Tesorería de la entidad federativa en el supuesto de la fracción I del presente artículo, dentro de los sesenta días naturales siguientes al requerimiento del reintegro."

"**Artículo 39 Bis.- Los gastos derivados del traslado de las víctimas para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, también deberán ser cubiertos por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, con cargo al Fondo o a los Fondos Locales, respectivamente**."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

TERCERO.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán reformar sus leyes locales a efecto de adecuarlas al texto de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a suentrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 14 de septiembre de 2016.

Sen. **Mariana Gómez del Campo Gurza**.- Sen. **Fidel Demédicis Hidalgo**.- Sen. **María Hilaria Domínguez Arvizu**.- Sen. **Ismael Hernández Deras**.- Sen. **Juan Carlos Romero Hicks**.

1 El video de dicha reunión de trabajo y su versión estenográfica están disponibles para su consulta y reproducción en los siguientes vínculos:

http://goo.gl/D2U2Ikhttp://goo.gl/dm4xfV

2 El Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento está disponible para su consulta y descarga gratuita en el micro sitio que se habilitó en el sitio de Internet del Senado de la República, específicamente en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Dictamen de primera lectura)

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen precedente, diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, presentadas por diversos Senadores de la LXII y LXIII Legislatura.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las iniciativas en cuestión y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de emitir el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las Iniciativas referidas, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado de **"ANTECEDENTES"**, se deja constancia del inicio del proceso legislativo con la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas.

II. En el apartado relativo al **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS"**, se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de iniciativas materia de nuestro estudio.

III. En el apartado de **"CONSIDERACIONES"**, se expresan las razones que sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las iniciativas que nos ocupan, relativa a las reformas, adiciones y derogaciones en la Ley General de Víctimas

IV. En el apartado relativo a **"PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO"**, se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.

I. ANTECEDENTES

1. El día 8 de septiembre de 2016, la Senadora Cristina Díaz Salazar presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P2A.-453, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1324, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

2. El día 8 de septiembre de 2016, los Senadores Angélica de la Peña, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P2A.-431, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1324, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

3. El día 2 de diciembre de 2013, las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P2A.-5243, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

4. El día 5 de diciembre de 2013, las Senadoras Angélica de la Peña, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P2A.-5464, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones

Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

5. El día 9 de septiembre de 2014, la Senadora Adriana Dávila Fernández presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley General de Víctimas, La Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En la misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

6. El día 14 de octubre de 2014, la Senadora Adriana Dávila Fernández presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

7. El día 27 de noviembre de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha mediante oficio número DGPL-1P3A.-5286, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

8. El día 19 de febrero de 2015, las Senadoras Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha mediante oficio número DGPL-2P3A.-1099, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

El 26 de febrero de 2015, mediante oficio número DGPL-2P3A.-1631, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de

Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

9. El día 12 de marzo de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha mediante oficio número DGPL-2P3A.-2328, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

10. El día 29 de septiembre de 2015, la Senadora Mónica Arriola Gordillo presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

El 14 de abril de 2016, mediante oficio número DGPL-2P1A.-3365, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1118, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para que dar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

11. El día 14 de abril de 2016, el Senador Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha mediante oficio número DGPL-2P1A.-3260, la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1324, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

12. El día 14 de septiembre de 2016, los Senadores Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas.

En la misma fecha mediante oficio número DGPL-1P2A.-833, la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechoa Humanos.

El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-1324, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

En fecha 18 de octubre del año 2016, se citó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, a celebrar reunión extraordinara a efecto de analizar y en su caso deliberar el proyecto de Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; inciada la sesión y una vez recibidas diversas observaciones y propuestas de modificación al texto del Decreto, la Presidencia de las Comisiones Unidas declararon sesión permanente y decretaron un receso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento del Senado.

En fecha 25 de octubre del año 2016, se reanuda la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas, y previa discusión del Proyecto de Dictamen, se realizaron modificaciones a diversos artículos del Decreto, mismos que se integran debidamente al presente Dictamen. En este sentido los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, aprobamos en términos del Reglamento del Senado el presente Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. La Iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar con proyecto de Decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, propone:

- Se reforma la *fracción III del artículo 6* en la cual se indica que las Comisiones de Víctimas se encuentran en cada entidad federativa. También se adiciona la *fracción VIII Bis*, la cual define el Fondo Estatal como el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa.

- Se reforma el *cuarto párrafo del artículo 8* el cual señala que las medias de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas o municipios en el ámbito de sus competencias.

  También se adiciona que, en casos urgentes, de extrema necesidad o cuando las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención requerida, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán

autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal aprobado por la Junta de Gobierno.

Así mismo se adiciona que la Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas, podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal, medidas de ayuda, asistencia y atención, que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad.

Por último, se agrega que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas.

- Se adiciona un *último párrafo al artículo 27* en el cual se menciona que las medidas de reparación integral podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales.

- Se *reforma la denominación del Capítulo III* del Título Tercero, quedando como "Medidas en Materia de Traslado".

- Se *adiciona el artículo 39 Bis*, el cual establece que las autoridades competentes cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación. Lo anterior sólo se podrá cuando la víctima tenga que trasladarse para formular denuncia o querella, para desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad, para solicitar medidas de seguridad o protección de las autoridades, y para recibir atención especializada o de tratamiento, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

  También se señala que en caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva podrá brindar la ayuda con cargo al Fondo, solicitando a las Comisiones de Víctimas el reintegro de los gastos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que no realice el pago en ese plazo, deberá cubrir el monto principal actualizado más los intereses que el pago hubiera generado.

- Se *adiciona el artículo 61 Bis*, el cual establece que las cuando las medidas sean evaluables y viables económicamente, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo o a los Fondos estatales.

- Se *reforman el primer y último párrafos del artículo 67*. En el primero se adiciona que tanto la Comisión Ejecutiva como las Comisiones de Víctimas determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo. En el último párrafo se añade que el monto de dicha compensación será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, la cual ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido.

- Se reforman el *segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79*.

  En el segundo párrafo se adiciona que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México.

  En el cuarto párrafo se agrega que, para la operación del SNAV y el cumplimiento de sus atribuciones, contará con Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia. También adiciona que las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

  En el quinto párrafo se agrega que las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva la cual podrá otorgar medidas de atención inmediata cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los siguientes treinta días naturales o de lo contrario se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado.

- Se reforma el *párrafo sexto del artículo 83*, en el cual se agrega que el Titular de la Comisión Ejecutiva emitirá un acuerdo que contenga las instituciones nacionales o extranjeras que deberán participar como invitados a las sesiones del SNAV o de las comisiones.

- Se *reforman el primer y último párrafos del artículo 84*. En el primer párrafo se adiciona que la Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado; no sectorizado; con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía

técnica y de gestión, así mismo se menciona que dicha Comisión contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación y que las medidas y reparaciones que dicte no estarán subordinadas a autoridad alguna.

También se añade que la Comisión Ejecutiva se desempeñará como el órgano operativo del SNAV y tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.

Por último, se agrega que el domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

En el último párrafo se agrega que las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo estatal.

- Se *adiciona el artículo 84 Bis* el cual establece que el patrimonio de la Comisión Ejecutiva se va a integrar con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, con los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y con los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

- Se *adiciona el artículo 84 Ter* el cual señala que la Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

- Se *adiciona el artículo 84 Quáter* en el cual se establece que la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la cual está integrada de la siguiente manera:

I. El titular de la Comisión Ejecutiva;
II. Un representante de las siguientes secretarías de Estado: a) Gobernación quién la presidirá; b) Hacienda y Crédito Público; c) Desarrollo Social; d) Educación

Pública; e) Salud; f) Trabajo y Previsión Social, y g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
III. Un representante de la Procuraduría General de la República;
IV. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, y
V. El Presidente de la Asamblea Consultiva.
Los integrantes de las fracciones II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto.

Por último, se adiciona que cada integrante tendrá nivel de subsecretario o equivalente, el cual contará con un suplente con nivel mínimo de Director General Adjunto u Homólogo y que la Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, en términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

- Se *adiciona el artículo 84 Quinquies*, el cual establece que La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces año y las extraordinarias que propondrá su Presidente o al menos 3 de sus miembros.

- Se *adiciona el artículo 84 Sexies*, en el cual se menciona que la Junta de Gobierno sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. También, los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

- Se *adiciona el artículo 84 Septies*, el cual establece que la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones de aprobar y modificar su reglamento de sesiones y las disposiciones normativas de la Comisión Ejecutiva. También podrá definir los criterios, prioridades y metas que proponga el Comisionado Ejecutivo y conocer los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva.

- Se *adiciona el artículo 84 Octies*, en el cual se señala que la Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

  También establece que estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificadas por un período igual.

Además, agrega que la elección de los miembros será a través de la emisión de una convocatoria pública de la Comisión Ejecutiva que deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a la Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

- Se *reforma el artículo 85*, en el cual se adiciona que La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, cuyo mandato durará cuatro años sin posibilidad de reelección. Se establece que durante su encargo no podrá desempeñar ningún otro trabajo remunerado, salvo la academia o la investigación.

- Se *reforma el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 86*, en el cual se agrega que para ser Comisionado Ejecutivo requiere haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la Ley, por lo menos en los dos años previos a su designación.

- Se *deroga el artículo 87*.

- Se *adiciona la fracción XXXV Bis al artículo 88*, la cual agrega que la Comisión Ejecutiva deberá conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley.

- Se *adiciona el artículo 88 Bis* en el cual se establece que la Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

  I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con Comisión de Víctimas

  II. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción.

  III. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano.

IV. Cuando la Comisión Ejecutiva determine que se trata de violaciones graves de derechos humanos, que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima, cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, o a solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho revista trascendencia nacional.

También se adiciona que la Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal, y en caso de que no realicen el pago dentro del plazo, deberán cubrir el monto principal actualizado más los intereses que el pago hubiera generado.

- Se *adiciona el segundo párrafo del artículo 90* el cual agrega que los programas podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta del Comisionado Ejecutivo cuando se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

- Se *deroga el artículo 92.*

- Se *adiciona el artículo 93*, el cual establece que la Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, como el área responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y la compensación.

- Se *deroga el artículo 94.*

- Se *reforman el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX y XII del artículo 95.*

  En el primer párrafo se agrega que el Comisionado Ejecutivo tendrá las facultades enumeradas en el artículo además de las que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

  En la fracción II se agrega que podrá convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno.

En la fracción IV se menciona que deberá notificar a los integrantes del SNAV los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos.

En la fracción IX señala que deberá suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

En la fracción XII se establece que podrá recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva.

En la fracción XIII se agrega que además podrá determinar las medidas de ayuda, asistencia y atención, así como la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la asesoría de las Asamblea Consultiva.

Por último, la fracción XIV establece que puede desempeñar todas las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

- *Se reforman los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 96.* En el párrafo tercero y cuarto se agrega que El Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley.

  En el párrafo quinto se adiciona que las entidades federativas contarán con sus propios registros y en el sexto se agrega que el Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas.

- Se *reforma la fracción I del artículo 132*, la cual agrega que la aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del año inmediato anterior, en cuyo caso la Comisión Ejecutiva podrá solicitar los recursos presupuestarios correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Se *reforma el primer párrafo del artículo 135*, en el cual se añade que se podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de medidas de ayuda provisional a que se refiere el artículo 8 de la Ley, así como para los apoyos establecidos en el Título Tercero de la misma.

- Se *adiciona un último párrafo al artículo 136* el cual establece que la Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo, y la víctima deberá comprobar por lo menos el setenta y cinco por ciento del ejercicio del monto, a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso.

- Se *reforma la fracción III del artículo 138*, en la cual se agrega que se deberán presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno.

- Se *reforma el artículo 145* el cual agrega que cuando la Comisión Ejecutiva reciba una solicitud, deberá turnarla al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y reparación que se requiera.

- Se *adiciona el Capítulo V* llamado de los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa, el cual contiene los siguientes artículos:

  Artículo 157 Bis: establece que el Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas.

  Artículo 157 Ter: menciona que la suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, la cual calculará con base en un factor poblacional con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También establece que la aportación anual se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa, a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter: adiciona que se deberá mantener una reserva del 20% de los recursos que constituyan el patrimonio de Fondos Estatales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley.

Artículo 157 Quinquies: añade que la constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas y que el acceso a los recursos no podrá ser superior a los límites establecidos en la Ley.

- Se *reforma el segundo párrafo del artículo 166* el cual establece que la Asesoría Jurídica podrá contar con el servicio de particulares.

- Se *derogan los artículos 175, 176, 177, 178 y 180*.

- Se *reforma la fracción X del artículo 180* en la cual se establece que se podrán llevar a cabo concesiones, permisos, contrataciones con particulares para que ejerzan la función de asesor jurídico federal.

- Se *adicionan los siguientes Artículos Transitorios*:
- PRIMERO. La entrada en vigor del Decreto es al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

- SEGUNDO. Se establece la derogación de todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

- TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

- CUARTO. La Comisión Ejecutiva deberá realizar las reformas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, a los ciento ochenta días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

- QUINTO. La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

- SEXTO. La Comisión Ejecutiva procederá a concluir la relación laboral con los Comisionados.

- SÉPTIMO. La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octavus, de la Ley.

- OCTAVO. La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Decreto.

- NOVENO. Las entidades federativas en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar su normativa a fin de dar cumplimiento a los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley.

- DÉCIMO. Las erogaciones que se generen a la entrada en vigor al presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado.

- DÉCIMO PRIMERO. En tanto el Presidente de la República nombre al Comisionado Ejecutivo y lo ratifique el Senado, el Comisionado Presidente en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

- DÉCIMO SEGUNDO. En las entidades federativas en las que no exista una Comisión de Víctimas, las instituciones públicas competentes deberán brindar la atención a víctimas. La Comisión Ejecutiva solicitará la devolución de los recursos que haya erogado a los titulares de las Secretarías de Finanzas de la entidad federativa.

2. La iniciativa presentada por los Senadores Angélica de la Peña, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, propone:

- *En el Articulo 1. se adiciona al artículo 73 fracción XXXIX-X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* Refiriendo que en términos de los dispuesto por dicho artículo y otros referidos en la ley, la presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional. Dicho artículo establece que el congreso tiene la facultad, de expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

  Por otra parte, en el párrafo tercero del mismo artículo, se adiciona que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

- *En el artículo 5. Se adiciona el termino Interes Superior de la niñez y se adiciona un segundo parrafo en este principio.* Este articulo establece que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando diversos principios, antecediendo al principio de Máxima Protección, se adiciona el principio; Interés superior de la Niñez, en el cual, se adiciona establece que este principio, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

  Ademas se adiciona un segundo parrafo que establece que, cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

- *En el artículo 6. Se reforma la fraccion I, fraccion III, fraccion VIII y se adiciona la fraccion XI.*

  I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de atención a Víctimas donde se adiciona que estos deben estar adscritos a la comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades Federativas.

II. Comisiones de víctimas, entendidas como la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas.

VIII. Fondo, contemplado como fondo de reparación integral y finalmente.

IX. Gastos de Ayuda, se adiciona esta fraccion y seentiende como los recursos para gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación en la presente Ley; recorriendo de esta manera las fracciones posteriores a está.

- *Por su parte en el artículo 7. Se adiciona un termino al primer parrafo y reforma la fraccion XXX.*

El presente artículo establece que los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y se adiciona la palabra, más no limitativo; además establece que las víctimas tendrán, derechos que establecen en las fracciones:

I... a XXIX...

XXX. En la presente fraccion se adiciona, que se les otorgue como un derecho a la victima, la ayuda provisional del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;

XXXI... a XXXIV...

- *Se reforma el primer parrafo y el cuarto parrafo y se adicina el parrafo quinto y sexto del artículo 8.*

En este articulo se establece que las victimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, adicionando en este apartado que la ayuda provisional será del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En el párrafo cuarto de este mismo artículo, se adicionan las palabras ayuda inmediata, rehabilitación, las cuales de acuerdo a lo establecido en el presente artículo se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipios y se adiciona en el ámbito de sus competencias.

Posteriormente se adicionan a este artículo el párrafo quinto y sexto en su totalidad, los cuales establecen los siguiente:

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas otorgarán, con cargo a sus Gastos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

La Comisión Ejecutiva será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo a los Gastos de Ayuda, el cumplimiento de las medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en un plazo determinado; en caso de que los recursos de los Gastos de Ayuda no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Comisión Estatal y contra quienes hayan cometido el delito.

- *Se adiciona un parrafo quinto al artículo 9.*

El cual establece que las victimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, en este aspecto se adiciona un párrafo quinto, a este artículo, el cual establece lo siguiente: La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.

- *Posteriormente se reforma el parrafo quinto del artículo 21.*

El cual hace referencia a que es el Estado, quien a través de las autoridades respectivas tiene la obligación de iniciar, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas; en este sentido el párrafo quinto del presente artículo, establece que una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, se adiciona que también deben estar establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la demás legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares.

- *Se adiciona el parrafo terecero al artículo 28.*

  El cual hace referencia a que la gravedad del daño que sufra la víctima, determinara la prioridad en su asistencia, en este aspecto se agrega un párrafo tercero a este artículo, el cual establece los siguiente; Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

- *Se reforma el artículo 31.*

  Estableciendo que la federación, adicionando a las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyaran a las víctimas indirectas con los gastos funerarios, adicionando también que en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. En cuanto al pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se adiciona que estos se gestionarán conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, adicionando en el mismo artículo que los apoyos económicos, tendrán que ser gestionados por los gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

- *En el artículo 34. Se adiciona un parrafo finalizando las fracciones I… a VI…*

  El articulo establece que toda victima contará con los derechos establecidos por la Ley General de Salud y tendrá diversos derechos adicionales, que establecen las fracciones I. a VI, del mismo artículo.

  En este sentido se adiciona un párrafo al término de la fracción VI, el cual establece que: no podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

- *Posteriormente se reforma el artículo 39.*

  Establece que cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo o requiera trasladarse al mismo o a otra entidad con motivo de una diligencia de carácter judicial, se adiciona que

además de ser las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, quienes paguen los gastos de transporte, lo hagan también la Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda, que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. y también se adiciona que no le represente mayores cargas de comprobación.

- *Se reforma el artículo 45.*

  Adcionando a los desplazados internos forzados y a los migrantes como prioridad o enfoque diferencial de atención; a quienes se deberán tomar en cuenta sus principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante por diversos organismos.

- *Se reforma artículo 47.*

  Donde se hace mención de los dos conceptos anteriores, en el mismo sentido; es decir dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en situación de desplazamiento interno forzado o migración, en el tema educativo, donde se deberá promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito se interrumpen sus estudios.

- *En el artículo 61, se reforma la fraccion I y la fraccion VI.*

  El articulo establece que las victimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos, así como en sus bienes y propiedades si hubiere sido despojadas, es por ello, que las medidas de restitución comprenden en sus ocho fracciones, el restablecimiento de diversos asuntos.

  En este sentido se reforman las fracciones:

  I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición reformándo la palabra, de persona; y

  II... a V...

  VI. Regreso digno y seguro al lugar, adicionando original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;

VII. a VIII...

- *En el artículo 64. Se adicionan dos parrafos finales.*

  Hacen referencia a las compensaciones, tales que serán otorgadas por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos. Después de las ocho fracciones referidas. Se adicionan dos párrafos que establecen los siguiente: En los casos de las fracciones VII y VIII cuando se hayan cubierto con los Gastos de Ayuda no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

  La Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

- *Se reforma el parrafo primero y el ultimo parrafo del artículo 67.*

  Los cuales hacen referencia a que será, la Comisión Ejecutiva; y además se adiciona o las Comisiones de víctimas de la entidad federativa, a través de la Asesoría Jurídica, quienes determinaran el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable; además se adiciona que será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha der ser por gravedad del daño sufrido.

- *Se reforma el artículo 68, y se adiciona un parrafo segundo al mismo articulo.*

  Se establece que la Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad y se adiciona el término a su libre desarrollo de la personalidad.

  Además, se adiciona un párrafo segundo al mismo artículo, el cual establece lo siguiente: La Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la

Comisión de Víctima de la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

- *Se adiciona un segundo parrafo a la fraccion I. del artículo 81.*

El titulo sexto, de esta Ley, habla acerca del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en este sentido, el presente artículo hace mención que, para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá diversas atribuciones, que se encuentran contenidas en sus diecisiete fracciones, en este sentido se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, la cual establece lo siguiente:

I...

Asimismo, promoverá convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas;

II a XVII...

- *Se reforma el parrafo primero y el parrafo quinto del artículo 84.*

Adicionando que las entidades federativas contarán con un Fondo de Reparación, los Gastos de Ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

- *Se reforma en su totalidad el artículo 85.*

Se reforma en su totalidad y establece lo siguiente: La Comisión Ejecutiva está a cargo del Comisionado Presidente. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública una terna para su nombramiento. El Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas con amplio reconocimiento nacional en la defensa y protección de los derechos humanos.

Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Senadores propondrán al Pleno el nombre de la persona que ocupara la presidencia de la Comisión Ejecutiva.

- *En el artículo 86, se adiciona la fraccion IV y se recorre una fraccion V y se reforman los dos ultimos parrafos al termino de las fracciones.*

  En la dicion de la fracción IV, se establece como requisito para ser comisionado, contar con título profesional en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología o especialidades equivalentes.

  En este sentido, los siguientes dos párrafos, reforman, de la siguiente manera: reformando, la elección del titular de la Comisión, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

  En el mismo sentido este párrafo se reforma por el titular de la Comisión, quien desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

- *Se reforma en su totalidad el artículo 87.*

  Se reforma en su totalidad, estableciendo lo siguiente: El Comisionado Presidente para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

- *Se reforma la fraccion XIV del artículo 88.*

  Hace referencia a las funciones y facultades que tiene la Comisión Ejecutiva:

  I... a XIII...

XIV. En este sentido se adiciona a la fracción XIV. El Fondo de Reparación Integral, una de las facultades que tiene la comisión ejecutiva es administrar y vigilar el adecuado ejercicio de dicho fondo; garantizando su optimo y eficaz funcionamiento.

XV. a XXXVI. ...

- *Se adiciona un artículo 88 Bis.*

El cual establece y dispone lo siguiente: La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables;

II. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, o

III. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y los Convenios de Colaboración.

- *En este sentido los artículos 93. Y 94. Se derogan.*
- *Se reforma la fraccion I y VI, se adiciona una fraccion III, recorriendo de esta manera las fracciones posteriores; es decir IV… a VI… al artículo 125.*

Se hace referencia a las atribuciones que le corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:

En la fracción I. al Asesor Jurídico le corresponde procurar los derechos y garantías de la víctima, en este sentido se adiciona que el Asesor Jurídico podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;

II…

Se adiciona la fracción III. en su totalidad para delegar al Asesor Jurídico, la responsabilidad de Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

La Fracciones posteriores se recorren; es decir la fracción antes III, pasa a ser IV. La cual establece lo siguiente: Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; el mismo caso para la fracción,

V. Formular denuncias o querellas;

VI. En este sentido, en la fracción VI. se adiciona que se debe representar a la víctima en todo en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

- *Posteriormente, se adiciona en su totalidad el artículo 125 bis.*

Es una adición en su totalidad, la cual establece lo siguiente: La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso,

adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

- *Se adiciona en totalidad el artículo 125 ter.*

Establce que la Asesoría Jurídica tendrá a su cargo administración de los Gastos de Ayuda previstos en la presente Ley, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la Asesoría Jurídica velara por la maximización del uso de los recursos de Gastos de Ayuda, bajo el criterio de priorización a los casos de mayor gravedad.

- *El título Octavo de la presente Ley se modifica, denominándose, Fondo de Reparación Integral y Gastos de Ayuda.*
- *Posteriormente, el artículo 131, se modifica y adiciona en su totalidad.*

Establece lo siguiente: Los apoyos para la ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos podrán otorgarse con cargo a los Gastos de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de Comisiones de víctimas de las entidades federativas, según corresponda.

- Se reforma el artículo 132, adicionando, al Fondo de Reparación integral; ádemas se adiciona un segundo parrafo a la farccion I, se adicionan cuatro parrafos posteriores a los existentes al termino de las fracciones I... a VIII...

I. ...

En el párrafo segundo de la Fracción I, se adiciona que el monto no podrá ser disminuido.

II. a VIII. ...

Se adicionan cuatro parrafos al final de los dos ya existentes, al final de las fracciones, el cual establece lo siguiente: El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 10% del total del monto del Fondo asignado anualmente por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egreso de la Federación.

- *Se adiciona el artículo 132 Bis.*

  En su totalidad, para establecer lo siguiente: El Fondo de Reparación Integral y los Gastos de Ayuda en cada Entidad Federativa, se conformarán con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

  La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, deberá ser igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

  El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 20% del total monto del Fondo asignado anualmente en el Presupuesto de Egreso de la entidad respectiva.

- *Se reforma el artículo 134.*

  Se adiciona que para el funcionamiento del fondo y del gasto de ayuda, la Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias.

- *Posteriormente, el artículo 139, Se deroga.*
- Finalmente, se expone el régimen transitorio de la ley, el cual abarca de Transitorio Primero a Transitorio Séptimo;

En el transitorio primero. se menciona que el presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación. En el transitorio segundo. Se otorga un plazo de 90 días para que las entidades federativas, realicen las modificaciones legislativas y presupuestales. El Transitorio Tercero. Se otorga un plazo de 90 días para que las legislaturas de las entidades federativas, realicen las modificaciones legislativas y presupuestales para que las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades Federativas se integren. En el Transitorio cuarto. Se menciona que en un plazo 180 días, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto. El Transitorio Quinto. Establece un plazo de 90 días, para que la Comisión Ejecutiva emita los lineamientos y disposiciones necesarias de operación, administración y funcionamiento de los recursos destinados a los Gastos de Ayuda. El transitorio Sexto. Establece un plazo de 90 días para que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas establezca las directrices para la celebración de los convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas

para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Finalmente, el Transitorio Séptimo. Establece un plazo de 180 días, para que los organismos del orden federal, de las entidades federativas de los sectores obligados; así como los municipios que cuenten con la capacidad, deberán adecuar sus reglamentos, manuales y reglas de operación a fin de cumplir con lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva para la adecuada implementación de las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

3. La Iniciativa presentada por las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández con proyecto de Decreto reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas.

- *En principio se pretende reformar la fracción VIII del artículo 7.*

Para mencionar que las víctimas tendrán el derecho a que el Estado las proteja, incluyendo expresamente el derecho a su imagen.

- *Por otro lado, se reforma la fracción VIII del artículo 115.*

para estipular que los medios de comunicación electrónicos, impresos o por internet, en ningún caso podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que cuenten con su consentimiento expreso.

4. La Iniciativa presentada por las Senadoras Angélica de la Peña, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, pretende reformar el artículo 68, Reformar el articulo 93, reformar la fraccion III, y adicionar la fraccion X del mismo articulo.

- *Se reforma el articulo 68, para incluir el termino, Libre desarrollo de su personalidad.*

Expresamente, el libre desarrollo de la personalidad, en los casos en que la Federación y las entidades federativas compensen de forma subsidiaria el daño

causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia.

- *Se reforma el articulo 93 en su totalidad, se reforma la fraccion III, y se adiciona la fraccion X del mismo articulo.*

  Se reforma el artículo 93 para establecer que, a fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley.

  Se reforma la fracción III de este artículo para establecer el Comité de trata de personas, y

  Se adiciona una fracción X para establecer un Comité de tráfico.

5. La Iniciativa presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández con proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley General de Víctimas, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, pretende adicionar los párrafos primero con los incisos a) al h), segundo con los incisos a), b) y c), tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la fracción XXXIII, del artículo 88 de la Ley General de Víctimas:

- *Se adiciona un primer párrafo a la fracción XXXIII, con los incisos a) al h), posteriormente al termino de los incisos se adicionan los párrafos segundo con los incisos a), b) y c), para finalizar con la adición de los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a la misma fracción XXXIII, del artículo 88.*

  El artículo 88. Se refiere a las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva.

  I. a XXXII...

  XXXIII. la presente fracción, se refiere al apoyo que se brinda a las organizaciones de la sociedad civil, que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas; lo cual es facultad de la Comisión Ejecutiva.

En este sentido, se pretende adicionar un párrafo, posterior al término de la fracción XXXIII de este mismo artículo, el cual establece: que la Comisión les otorgara una acreditación siempre que comprueben contar con personal especializado en atención y orientación a víctimas de delitos y que cuentes con título profesional en las siguientes áreas: y a continuación se describen las áreas en una adición de incisos que van de la letra a) a h):
De esta manera se adicionan:

a) Médicos Cirujanos,
b) Psiquiatras,
c) Psicólogos,
d) Trabajo Social,
e) Ginecología,
f) Abogados,
g) Enfermeras, y
h) Aquellas que se requieran para la atención de las víctimas.

Posteriormente en el mismo artículo, se adiciona un segundo párrafo con incisos a), b) y c). este segundo párrafo establece que, en el caso de aquellas organizaciones de la sociedad civil que cumplan con su objeto mediante acuerdos con hospitales, solo se requerirá comprobar la existencia del acuerdo. Pero en todo caso, la comisión tendrá el derecho de hacer revisiones a los hospitales en donde se preste la atención.

Además de lo anterior, en el caso de los refugios y casas de transición deberán contar con lo siguiente:

a) Un espacio temporal, que atienda las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación.
b) Suministros necesarios durante el alojamiento.
c) Programas reducativos de capacitación para el trabajo.
Finalmente se adicionan el párrafo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo que establecen lo siguiente:

El párrafo tercero, menciona que las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar un informe trimestral. El párrafo cuarto, establece que la comisión la comisión realizará el número de visitas para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados antes. El párrafo quinto, establece que la comisión evaluara

a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren acreditadas. Mientras el párrafo sexto, establece que la comisión notificara dentro de los tres días hábiles siguientes a la cancelación de la acreditación, al Registro Federal de Fomento de la sociedad civil de dicha cancelación. Finalmente, en el párrafo séptimo se menciona que los resultados de las evaluaciones y visitas deberán ser incluidas en el informe anual que la comisión rinda ante el sistema.

6. La Iniciativa de la la Senadora Adriana Dávila Fernández con proyecto de Decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley General de Víctimas, pretende reformar los artículos 87; 88, fracción XVIII; y 95 en su fracción VI y XIII; se adiciona el artículo 87 Bis; 87 ter; de la Ley General de Victimas.

- Se reforma el artículo 87.

  En la reforma al artículo 87, se pretende que la Comisión Ejecutiva, sea presidida por un comisionado que sea elegido por la cámara de Senadores.

  Posteriormente se menciona, que, para dicho efecto, se desarrollará un proceso de consulta y entrevistas, que sirvan para elegir al mejor perfil a ocupar el cargo; establece que será a través de la comisión de justicia y Gobernación del Senado y con voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Se establece que el comisionado presidente ejercerá sus funciones durante dos años y podrá ser reelecto para un periodo más. En el caso de la renuncia, tendrá que ser presentada por escrito en sesión de la comisión ejecutiva

- *Posteriormente, se adiciona el artículo 87 Bis.*

  En el cual se establece que los comisionados y el comisionado presidente solo podrán ser removidos de su cargo o destituidos por diversas causales, que son descritas en las siguientes fracciones:

  I. Cuando en el ejercicio de sus funciones transgredan o incumplan en forma grave, las disposiciones de la constitución.

  II. Cuando hayan sido condenadas por un delito que merezca pena corporal.

- *Se adiciona el artículo 87 Ter.*

Establece que el procedimiento para la sanción o destitución de los integrantes de la comisión ejecutiva, por alguna de las causales establecidas en la fracción I del artículo anterior, se sujetara a las reglas siguientes: y establecen las fracciones
I...a V...
Posteriormente establecen tres párrafos en los que se habla que, de ser removido de su cargo, se notificara a la comisión ejecutiva, para que estos envíen las propuestas.

- *Se reforma la fracción XVIII del artículo 88.*

Se establecen las funciones y facultades de la comisión ejecutiva: donde se reforman la fracción:

XVIII. El cual establece que ratificar a los titulares del fondo, asesoría jurídica federal y del registro a propuesta del presidente.

- *Finalmente se reforma la fracción VI y XIII del artículo 95.*

El cual hace referencia a las facultades del comisionado presidente: primeramente,

VI. Establece que una de las facultades de Comisionado Presidente, es rendir cuentas cuando así lo requiera la cámara de diputados, sobre la operación y gasto del fondo; y la cámara de senadores sobre sus funciones. Mientras la fracción;

XIII. Establece proponer al pleno de la comisión Ejecutiva, para su ratificación, a los titulares del fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro.

7. La Iniciativa de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas, pretende como tal, adicionar un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Victimas.

- *Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17.*

El artículo 17, establece que las victimas tendrán derecho a optar por las soluciones de conflicto, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de partes y las medidas de no repetición.

En este sentido, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley general de Victimas, el cual establece que, en el caso de víctimas de delitos por violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.

8. La Iniciativa presentada por las Senadoras Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, propone que se reformen la fracción IV del artículo 86.

- *Se reforma la fraccion IV del articulo 86.*

  En el primer párrafo se establece que para ser comisionado se deberán seguir los requisitos establecidos en las fracciones posteriores:

  I... a III...
  En la fracción IV se señala la prohibición de haber desempeñado el cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

9. La Iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Víctimas propone reformar párrafo primero, las fracciones I y II y el párrafo siguiente al termino de los numerales del artículo 85.

- *Se reforma el párrafo primero, las fracciones I y II y el párrafo siguiente al termino de las fracciones del artículo 85.*

  En el párrafo primero se adiciona que la Comisión Ejecutiva estará integrada por cinco comisionados, los cuales serán propuestos por el Ejecutivo Federal, previa convocatoria pública. Posteriormente, las propuestas serán enviadas al Senado para la votación de las dos terceras partes de los presentes.

En el tercer párrafo se señala que para asegurar que la Comisión Ejecutiva esté integrada por representantes colectivos de víctimas, así como especialistas y expertos en la materia de la Ley, se deberá conformar como se señala en la fracción I y II. Por un lado;

I. Se establece que deberán estar tres comisionados especialistas en derechos, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes propuestos por universidades públicas. Por otro lado;
II. Establece que también deberán estar dos comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el párrafo cuarto se adiciona que, para la elección de los comisionados, el Senado deberá conformar una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, la cual será responsable de encabezar el proceso de selección y recibirá las propuestas de comisionados.

10. La Iniciativa presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, propone reformar las fracciones I, III y IV del artículo 2 y 4, adiciona un tercer párrafo al mismo artículo.

- *Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 2.*

El artículo 2, hace referencia al objeto de la Ley, en la fracción;

I. se adiciona que el objeto de la Ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, desplazados internos forzados y de violaciones a derechos humanos.

II...

III. Se añade que también el objeto de la Ley será garantizar la protección y la asistencia a los desplazados internos forzados en cuanto a su integridad física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos.

IV. Se agrega que otro de los objetos de la Ley es establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades que intervengan en los procedimientos relacionados con las víctimas y desplazados internos forzados.

V...

Igualmente propone reformar el primer párrafo del artículo 4 y se adiciona un tercer párrafo al mismo. En el primer párrafo se agrega que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo en sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito, desplazamiento forzado de su comunidad, o violación de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales de los que México sea parte.

En el tercer párrafo que se adiciona, establece que son víctimas los desplazados internos como personas que de manera forzada han huido de sus hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y los desastres naturales.

11. La Iniciativa presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se reforman, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, propone:

- *Se reforman el primer y cuarto párrafos del artículo 1.*

  En el primer párrafo se adiciona que la Ley es de orden público, interés social y observancia en todo el territorio nacional en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero en materia de reparación.

  En el cuarto párrafo se agrega la indemnización como una de las medidas que comprenden la reparación integral.

- Se *reforman las fracciones I y II del artículo 2.*

  En la fracción I se adiciona que se deben reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en la Ley, en la Constitución, y en las

normas sobre derechos humanos en los Tratados Internacionales de los que México.

En la fracción II se agrega que se deben establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

- Se *reforman el primer y el actual segundo párrafo del artículo 4.*

En el primer párrafo se agrega que se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos o anulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.

En el segundo párrafo, se adiciona que también se consideran víctimas a las personas que tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas. También se encuentran dentro de este supuesto las personas que se encuentren ante un hecho que implique la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa.

A su vez, se adiciona que en todo momento las víctimas tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de la Ley, así como a las medidas de protección de la Ley.

Por último, se agrega que La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

- Se *reforman el segundo, tercer, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo*

sexto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo parrafos del artículo 5.

En la fracción I que contiene el Principio de Dignidad, se agrega que las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares. También se adiciona que todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación.

En la fracción II, que consagra el Principio de Buena fe, se añade que las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. A su vez, se agrega que los servidores públicos que intervengan no deberán criminalizar o responsabilizar a la víctima por su situación, ni negarle los servicios de ayuda, atención y asistencia para no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Además, se establece que este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie ni en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas.

En la fracción III del Principio de Complementariedad, se adiciona Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación, y por lo mismo en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización, de esta manera las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia.

En la fracción V, que contiene el Principio de Enfoque Diferencial y especializado, se derogan los últimos dos párrafos.

En la fracción VI, la cual establece el Principio de Enfoque Transformador, se adiciona que las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias

para que las medidas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, de tal manera que las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos.

En las fracciones IX y X se derogaron los últimos párrafos.

En la fracción XI que consagra el Principio de Mínimo Existencial, se adicionó que las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de la Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes.

En la fracción XII se deroga el último párrafo, en las fracciones XIII y XIV se cambian los nombres de los Principios, el primero por el de "No victimización secundaria" y el segundo por el de Participación conjunta.

En la fracción XVI, que consagra el Principio de Publicidad, se adiciona que todas las acciones, mecanismos y procedimientos adoptados en el marco de la Ley, incluidos los que señalan los artículos 85 y 86, deberán ser públicos.

En la fracción XVII del Principio Rendición de cuentas, se añade que las autoridades y funcionarios estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere la Ley.

Se derogó el último párrafo de la fracción XVIII.

- Se reforma *la fracción V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, y se adiciona la fracción VIII del artículo 6.*

En la fracción V se adiciona que la Compensación es la reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho.

En la fracción VIII se establece el Desplazamiento interno forzado, el cual se define como la condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

En las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, se agregan las siguientes palabras: Fondo, Hecho victimizante, Ley, Plan, Programa, Procedimiento, Registro, Reglamento, Sistema y Víctima, respectivamente.

En la fracción XVIII se adiciona que también se consideran víctimas a las personas que, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o que dependan económicamente de la persona desaparecida.

- Se reforma el *párrafo primero, las fracciones I, III, IV, VII, VIII, XX y XXXIII del artículo 7.*

En el párrafo primero se agrega que la Ley no podrá ser interpretada de forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.

En la fracción I se adiciona que la investigación debe llevar a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante.

En la fracción III se adiciona que se debe conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos.

En la fracción IV se añade que se le debe brindar protección a la víctima, a lo largo de todos los procesos en los que sea parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentre.

En la fracción VII se agrega que se debe contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral.

En la fracción VIII se adiciona que la víctima tendrá derecho al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad.

En la fracción XX se añade que las víctimas tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del SNAV con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten

En la fracción XXXIV se adiciona que las víctimas deberán ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de la Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente.

En la fracción XXXV se agrega que se podrá solicitar ayuda internacional humanitaria.

En la fracción XXXVI se añade que pueden transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia.

En la fracción XXXVII se adiciona que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas deberán ser interpretados para que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, y en caso de conflicto normativo se aplique la que más favorezca a la víctima.

- Se *reforman el primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 8.*

Se adiciona que las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida.

También se agrega que las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia.

Por último, se agrega que las medidas se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias.

- Se *reforma el primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 9.*

Se adiciona que las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal, restaurativo, transformador, de género y diferencial.

También se agrega que se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, orientados a brindar condiciones para superar su victimidad, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.

Por último, se añade que las medidas de asistencia y atención, en ningún caso serán descontados de la indemnización a las víctimas.

- Se *reforma la fracción II del artículo 12.*

  Se añade que se debe reparar el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de la Ley.

- Se *reforma el artículo 15.*

  Se añade que las víctimas tienen derecho a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima, con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, o la persona que consideren.

- Se *reforma el cuarto y quinto párrafos del artículo 21.*

  Se añade que las organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas tienen derecho a estar presentes en las exhumaciones.

  También se agrega que una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, se hará la entrega de los cuerpos.

- Se *reforma el artículo 23.*

  Se añade que se podrán proporcionar a la autoridad competente los peritajes independientes a cargo de los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas.

- Se *reforma el artículo 26.*

  Se adiciona que ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni medida de reparación integral protegidos por esta ley.

- Se *reforman las fracciones III y VI del artículo 27.*

Se añade que la compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido. También se agrega que la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación se entenderán como parte de la reparación colectiva.

Por último, se añade que las medidas de reparación integral podrán cubrirse con cargo al Fondo o parcialmente en coordinación con las autoridades correspondientes.

- Se *reforma el segundo párrafo del 28*.

Se agrega que los servicios tomarán en cuenta a la víctima que pertenece a un grupo de condiciones de vulnerabilidad como los desplazados internos forzados.

- *Se reforma el artículo 29*.

Se adiciona que las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativa y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos, con independencia de su fuero competencial, incorporación a un registro y sin exigir ninguna otra condición previa para su admisión. También se añade que en caso de que no exista comisión de víctimas en la entidad federativa de que se trate o ésta no garantice la atención requerida, la Comisión Ejecutiva está obligada a cubrir los gastos de la atención médica de emergencia, independientemente de la jurisdicción o competencia.

- *Se reforma el artículo 31*.

Se agrega que la Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante, así como las comisiones de atención a víctimas, independientemente del fuero competencial, están obligados a apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante y que el

pago de los apoyos económicos se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, mismas que no podrán ser menores a la protección que otorga la presente ley.

- *Se adiciona un último párrafo al artículo 34.*

  Se añade que no podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

- *Se reforma el artículo 38.*

  Se agrega que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) brindará directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento interno forzado por causa del delito cometido. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera. Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.

- *Se reforma el artículo 39.*

  Se agrega que cuando la víctima se traslade a un lugar distinto de su lugar de residencia y requiera regresar al mismo, las comisiones de víctimas de las entidades federativas o la Comisión Ejecutiva, si se tratara de una diligencia de carácter federal en otra entidad, o se cumpliera el supuesto establecido en el cuarto párrafo del artículo 79 de esta ley, pagarán los gastos correspondientes.

- *Se reforma el artículo 41.*

  Se añade que las víctimas tendrán derecho a que se apliquen en su favor las medidas contempladas en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

- *Se reforma el artículo 45.*

  Se añaden a los desplazados internos forzados y migrantes como víctimas que Comisión Ejecutiva deberá tener en cuenta.

- *Se reforma el artículo 47.*

  Se sugiere que las políticas y acciones establecidas tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán medidas particularmente con quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración.

- *Se reforma el artículo 57.*

  Se agrega a la Ciudad de México como parte de las entidades que formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia a víctimas.

- *Se reforman las fracciones I y VI del artículo 61.*

  Se adiciona que se deberá hacer el restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona y que las víctimas deberán tener un regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones.

- *Se reforma el artículo 63.*

  Se añade a las víctimas de desplazamiento interno forzado como parte de las víctimas que recibirán un trato especial cuando se otorguen medidas de rehabilitación.

- *Se reforma primer párrafo y fracción VIII del artículo 64.*

  Se menciona que la reparación económica como compensación se otorgará por todos los perjuicios y los cuales influyen los gastos comprobables de

transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio a diligencias ministeriales o judiciales.

- *Se reforma el primer párrafo del artículo 65.*

  Se añade que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos exactos que determine la resolución en cada caso.

- *Se reforma el artículo 66.*

  Se adhiere que cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación o indemnización a la víctima, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio del sentenciado.

- *Se reforman el primer y último párrafos del artículo 67.*

  Se adiciona que para efectos de otorgar la indemnización a las víctimas del delito se deberá tomar en cuenta un acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión Ejecutiva, a instancia de parte interesada, aprobado por la mayoría simple de los y las presentes, en el cual se ordene el pago de la compensación, así como las demás medidas de reparación que correspondan, a partir de cumplirse los siguientes supuestos: I) el presunto responsable no cuente con recursos o no sea solvente para cubrir la reparación que corresponda; II) se venzan los plazos con que cuentan el Ministerio Público o el juez de la causa para cumplir con lo dispuesto en las fracciones a) y b).

  Por último, se añade que los plazos a los que se refiere el ii) no podrán exceder los noventa días naturales posteriores a la solicitud de la víctima al Ministerio Público o, en su caso, al juez de la causa. También se añade que el monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización.

- *Se reforma el primer párrafo del artículo 69.*

Se añade que la Comisión Ejecutiva correspondiente ordenará la compensación subsidiaria de una víctima que no haya sido reparada cuando obtenga todos los elementos a su alcance que lo demuestren y se discuta por la Comisión y de esta manera deberá obtener a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas lo establecido en el inciso c) del artículo 67.

- *Se reforma la fracción II del artículo 73.*

Se añade que la búsqueda de las personas desaparecidas se hará conforme a los términos establecidos en la Ley en materia de desapariciones.

- *Se reforma la fracción XII dela artículo 74.*

Se adiciona que, en el caso de personas desaparecidas, se considerarán además las que señala la Ley en la materia.

- *Se reforma el artículo 79.*

Se adiciona que no podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.

También agrega que las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no exista la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente; si existiera y la víctima no hubiere recibido respuesta dentro de los quince días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado la misma.

Por último, se agrega que las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable, y en el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

- *Se reforma el artículo 84.*

  Se adiciona que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.

  También agrega que las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva no estarán subordinadas a autoridad alguna.

  Por último, añade que el Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva, la cual tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como desempeñarse como el órgano operativo del SNAV.

- *Se reforma el artículo 85.*

  Se adiciona que la Comisión Ejecutiva estará integrada por un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública y consulta nacional con los colectivos y organizaciones de víctimas, tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente, y tres propuestas por cada miembro del Consejo Directivo, a elegir.

  También añade que el proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que, en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

  Agrega que para garantizar que la Comisión Ejecutiva representa a colectivos de víctimas, especialistas y expertos que hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos: Tres personas provenientes del ámbito académico propuestas por

instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas, tres personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, especializadas en la defensa de los derechos humanos

Añade que para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

También agrega que para la elección del Comisionado presidente y delos miembros del Consejo Directivo, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos.

Por último, se añade que, en la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.

- *Se reforma el artículo 86.*

Se adiciona que para ser Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva, se requiere: contar con experiencia acreditada y comprobable con una antigüedad del al menos siete años, no haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

Se añade que, en la integración de la Comisión Ejecutiva, el Ejecutivo federal y el Senado están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado, por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones. También, que la persona que se desempeñe como Comisionado Presidente y las personas integrantes del Consejo Directivo, se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos y el Comisionado Presidente no podrá ser representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes.

Se adiciona también que por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del SNAV ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

Se agrega que el Senado podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando: a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual; b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral; c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas; y d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

Por último, se adiciona que el procedimiento para la revocación del mandato deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado y que el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

- *Se reforma el artículo 88.*

Se adiciona que el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones: I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva; II. Instruir la elaboración y aprobar los proyectos de normas de carácter interno, relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente; III.- Validar el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente; IV. Conocer y validar el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva; V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, y VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente.

- *Se reforma el artículo 93.*

Se adiciona que, a fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, se establecen las Relatorías Especiales. También se añade que las Relatoras o los Relatores Especiales serán designados directamente por el Pleno de la Comisión a partir de un proceso de convocatoria pública, en la cual las personas candidatas serán postuladas en el proceso por grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Se agrega que serán atribuciones de las relatorías especiales las siguientes: I.- Realizar consultas directas a las víctimas para el diseño e impulso de medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral; II.- Mantener una constante coordinación con las relatorías especiales de las entidades federativas para el intercambio de información; III.- Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos; IV.- Elaborar diagnósticos nacionales anuales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos; V.- Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones; VI.- Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas; VII.- Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de la Ley; VIII.- Elaborar propuestas de política pública y normatividad en la materia de su especialización y IX. Emitir opinión sobre los

proyectos de dictamen de reparación emitidos por el Comité Interdisciplinario Evaluador en los casos relacionados con su mandato temático.

La Comisión Ejecutiva contará al menos con las Relatorías Especiales sobre violencia familiar, violencia sexual, trata y tráfico de personas, personas desaparecidas, víctimas de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, desplazamiento interno forzado, y sobre migrantes.

Por último, se agrega que el Pleno de la Comisión se constituye en un Comité Interdisciplinario Evaluador para dictaminar y aprobar los proyectos de reparación integral, atendiendo a la proporción del daño en cada caso, el cual deberá someter a la votación del Pleno de la Comisión para su aprobación, en los términos de los artículos 145 y 146 de esta normatividad.

- *Se adiciona un párrafo segundo, quinto, sexto al artículo 96.*

En el artículo 96, se establece el Registro Nacional de Victimas, el cual es fundamental para garantizar que las victimas tengan un acceso oportuno y efectivo a la medida de ayuda, resistencia, asistencia, atención.

En este sentido dentro de este artículo se adiciona un párrafo segundo, el cual establece que, para efectos de la inscripción de las víctimas en el registro, no será necesario que se exhiba algún tipo de documento.

Se adiciona también un párrafo quinto en el que se propone que el registro contara con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes.

En el párrafo sexto se modifican términos tales como que las entidades federativas contarán con sus propios registros y que la integración del registro federal y se adiciona la conformación del registro nacional, estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva.

- *Se reforma el artículo 97.*

Por su parte en el Articulo 97, se establece las fuentes de las que será integrado el Registro Nacional de Victimas, compuesta de tres fracciones; en este sentido se propone reformar los párrafos posteriores los cuales; a grandes rasgos

establecen que las instituciones públicas de protección de derechos humanos y general las instancias de procuración de justicia deberán Remitir a la Comisión Ejecutiva las bases de datos, que permita reunir información de los expedientes.

- *Se adiciona algunos términos al artículo 101.*

  Establece la presentación de la solicitud, la cual se adiciona deberá ingresarse al registro en un plazo no mayor a cinco días hábiles. También se adiciona al validarse la inscripción la comisión ejecutiva, deberá infórmale al solicitante que fue inscrito. En párrafos posteriores se hacen ciertas adiciones que expresamente, establecen que no se podrá exigir a la víctima mayores requisitos a los establecidos en eta ley. Y que el servidor público de la Comisión ejecutiva no podrá condicionar las ayudas.

- *Se adicionan los siguientes términos al artículo 108.*

  En el presente artículo se adiciona el termino reinserción social, término que alude a las personas que se encuentren bajo custodia del estado, estarán obligados de recibir la declaración de autoridades.

- *Se reforma el artículo 110.*

  Es reformado en su totalidad y establece la calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos derivado del hecho victimizante.

  En este sentido dentro del quinto párrafo del mismo artículo se adiciona las medidas que garantizaran la reparación integral. Posteriormente se reforma en su totalidad la fracción e) del mismo artículo, la cual establece a los grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer algún caso internacional.

- *Se adiciona el término, desplazamiento interno forzado, en la fracción III del artículo 111.*

  Se adiciona un término importante en la fracción III, del mismo artículo; es decir el desplazamiento interno forzado, también se adiciona en el segundo párrafo,

que los procedimientos no podrán negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos.

- *Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción X del artículo 118.*

  Donde se impulsa la ceración de refugios para las víctimas y se realizan medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado y de la migración. Y la fracción X. se adiciona en su totalidad la cual establece, el diseño y ejecución de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

- *Por su parte en el artículo 119, se reforma su fracción V y VI.*

  Versa en la adición de la fracciona anterior. En cuanto a la reforma a su fracción VI. Se adiciona las medidas de prevención y atención del desplazamiento interno forzado y migrante desde una perspectiva que garantice su derecho un nivel de vida adecuado.

- *Se adiciona una fracción XI al artículo 123 y el resto se recorren.*

  Esta surte efecto en el sentido que su adición es dicha fracción, tiene que ver con el procedimiento de investigación y eventual sanción penal, al servidor público, que incurra en conductas delictivas o aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

- *El titulo décimo primero, es un capitulo único, denominado las sanciones, este capítulo es adicionado en su totalidad, integra los artículos del 190 al 197.*

  De manera general, se basa las sanciones hacia un servidor público, cuando este actúa de manera omisa, o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados en virtud, o al menos esto es lo que se propone en el presente decreto.

12. La Iniciativa presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas.

- *Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción VIII Bis. del artículo 6.*

  El artículo 6, establece los conceptos referidos para efectos de esta ley.

  Donde las y los Senadores reforman la fracción III. Comisiones de Victimas, para entenderlo como la comisión de atención integral a víctimas de cada entidad federativa; al igual que se adiciona una fracción VIII Bis. La cual establece un Fondo Local, entendido como el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de victimas que cada entidad federativa debe construir.

- *Se reforma el primer y cuarto párrafo y se adiciona un quinto, sexto y séptimo párrafo del artículo 8.*

  El artículo 8, establece que las victimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades.

  De esta manera, dentro del párrafo cuarto del mismo artículo se adiciona el termino, "en el ámbito de sus respectivas competencias", ya que en este párrafo se menciona que las medidas de ayuda, asistencia, atención se brindaran por las instituciones públicas del gobierno federal, entidades federativas y de los municipios.

  En este sentido, dentro del mismo artículo, se adiciona un párrafo quinto, en el que se establece que la comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas, autorizaran que la víctima acuda a instituciones privadas de atención medica con cargo al fondo, en casos de extrema necesidad.

  En la adición al párrafo sexto, se propone que la Comisión ejecutiva y las comisiones de Victima, podrán otorgar medidas de ayuda con cargo al fondo.
  Finalmente, la adición al párrafo séptimo, establece que los pagos que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Victimas, deberán ser anticipados y en este caso las victimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos dentro de los siguientes 30 días naturales.

- *Se reforma la fracción VIII del artículo 95.*

El artículo 95, establece las facultades del Comisionado Presidente, donde se adiciona el siguiente texto, a la fracción VIII. Del mismo artículo, el cual establece que la Comisión podrá inscribir victimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Publico, una autoridad jurisdiccional o mediante organismos protector de los derechos humanos.

- *Por otra parte, se adiciona el artículo 8 Bis.*

  El cual establece que la Comisión Ejecutiva, de oficio o a petición de la víctima, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas, en los siguientes supuestos, donde se adicionan las fracciones, I... a IV...

  I. establece que cuando la entidad federativa no cuente con una comisión de víctimas, se podrá ejercer la facultad de atracción.

  II. Cuando hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del hecho victimizante, la Procuraduría o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

  III. tratándose de violaciones a derechos humanos. Y finalmente
  IV. Cuando se acaso de trascendencia nacional.

  Finalmente se incluye un último párrafo al artículo en estudio, los pagos hechos por la Comisión Ejecutiva con cargo al fondo, deberán ser integrados por la comisión de victimas correspondiente, o por la tesorería de la entidad federativa.

- *Se adiciona, el artículo 39 Bis.*

  El cual establece que los gastos derivados del traslado de las víctimas para acudir a recibir atención médica, o para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, también deberán ser cubiertos por la comisión Ejecutiva y las Comisiones de Victimas, con cargo al fondo a los fondos locales, respectivamente.

III. CONSIDERACIONES

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del año 2008, se estableció en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como uno de sus principios generales el de reparar el daño a la víctima. En ese mismo artículo, en su apartado B, se reconocieron los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Es por lo anterior que estas Comisiones Unidas coincidimos en la importancia de reformar la actual Ley General de Víctimas. Tal y como lo indican los proponentes de las diversas Iniciativas, la legislación referente a las víctimas es una herramienta trascendental en nuestro país, no obstante, después de tres años de su publicación es posible hacer un análisis y una revisión de su efectividad en la práctica, observándose algunas disposiciones que hacen ineficiente y retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y su posterior reforma del 3 de mayo de ese mismo año, la Ley se estableció no solo como el entramado jurídico y constitucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos que hasta el momento no habían tenido su debido reconocimiento. Ésta se constituyó como el reconocimiento del Estado mexicano a su responsabilidad de atender uno de las problemáticas más grandes que tiene nuestro país a causa de la violencia sufrida en los últimos años. La Ley generó mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia, contando con un perfil humanista y progresista. Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico, estableciendo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas y el de establecer un derecho victimal que sea eficaz.

Los miembros de estas Comisiones Unidas consideramos la atención a víctimas como un área en constante cambio debido a las necesidades que surgen día a día y en consecuencia demandan de una Ley actualizada, que atienda efectivamente la problemática de las víctimas, y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello a las víctimas recuperar su proyecto de vida.

Por un lado, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de los delitos que se cometen en territorio nacional recaen en el fuero local. No obstante, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo cuenta con la facultad de atender y reparar a las personas víctimas de los delitos que son de fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades federales.

Aunado a ello, los Congresos locales no han cumplido con el plazo de armonizar los ordenamientos jurídicos locales conforme a la Ley General de Víctimas, para lo cual tenían 180 días a partir de su publicación el 9 de enero de 2013. Como consecuencia de esto, sólo once comisiones estatales de atención a víctimas se han establecido, y de estas, sólo seis cumplen con lo que la Ley General de Víctimas establece. En consecuencia, actualmente no existe una asistencia adecuada en las entidades federativas a las víctimas.

Es por lo anterior, que con la reforma planteada se proponen establecer diversos ejes para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga la facultad de atraer los casos de atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local.

Por otro lado, la participación de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia en la elaboración de la política tendiente a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de víctima es fundamental. Si bien, la redacción actual de la Ley General de Víctimas establece que la sociedad civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar activamente en la elaboración de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, así como en la implementación de la política pública, la realidad es que, actualmente, no se prevén en la ley mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los destinatarios de la Ley en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En la actualidad, la participación de la ciudadanía en la política sobre la atención a las víctimas no debe limitarse a la consulta, tal y como lo establece la actual redacción de

la Ley General de Víctimas en donde se prevé la asistencia de la sociedad civil a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; por el contrario, debe ampliarse en la ley para garantizar una participación real, en donde sean las víctimas y la sociedad civil quienes participen con poder de decisión en el ciclo completo de las políticas públicas; es decir, en su formulación, instrumentación, control y evaluación.

En ese tenor, también se hace necesario hacer una reestructuración de los órganos operativos de atención a víctimas. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso la justicia, a la verdad y a la reparación de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, según lo establece el artículo 79 de la Ley General de Víctimas. Esto significa que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es una instancia deliberativa y de toma de decisiones.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del Sistema Nacional. Desde esta perspectiva, resulta innecesario que el órgano operativo cuente con un órgano deliberativo como lo es el Pleno de los Comisionados pues ello significa que las decisiones deben someterse a criterios que van más allá de lo operativo.

Ante esto, resulta necesario hacer una revisión de la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La compactación y optimización en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas.

En ese sentido, las iniciativas presentadas por las Senadoras Cristia Díaz, Angélica de la Peña y Fernando Yunes, respectivamente, consideramos están basadas en las necesidades que han expresado los grupos de la sociedad civil, así como de los colectivos de víctimas.

Derivado del análisis de las diversas iniciativas, las Comisiones Unidas consideramos relevante contextualizar el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015 en su reciente visita a nuestro País, México sufre una crisis en materia de derechos humanos. En esta concordancia, la debilidad de las instituciones, la penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social.

Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido más acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias franjas del territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado una falla estructural del Estado de derecho.

Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.

La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el país. En efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una genuina aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y reparación del daño.

En este tenor, la Ley General de Víctimas representó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Este marco jurídico y el andamiaje institucional que puso en marcha, significaron una postura profundamente innovadora no sólo en el contexto mexicano sino a nivel internacional. La Ley tiene un carácter humanista y progresista, es armónica con los estándares internacionales de derechos humanos y pone en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Sin embargo, la expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de debates y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para ser observada, derivado de las opiniones de quienes señalaban que para emitirse una "ley general" debería existir una disposición constitucional que lo determinase.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

En fechas recientes, el 25 de julio de 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Desde nuestra perspectiva, dicha reforma viene a superar el debate que se dio entre quienes sostienen que la Ley General de Víctimas -publicada en Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013- no tiene base constitucional para haber sido expedida, y quienes sostenían que si la había.

Al margen de lo anterior, podemos decir que con la expedición de esta reforma constitucional no debe haber mayor pretexto o argumento alguno para que las entidades federativas de todo el país cuenten con sus respectivas comisiones de víctimas. Recordemos que actualmente existe una falta de claridad respecto de cuáles son las obligaciones de las entidades federativas para la conformación de las respectivas comisiones locales de víctimas, sin embargo, la asignación de dicha facultad legislativa permite homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de gobierno, así como precisar su actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia.

Actualmente, la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir con los mandatos que le impone la Ley General de Víctimas, entre otras razones por esta falta de claridad constitucional. Las entidades federativas no han dado una respuesta homogénea a la necesidad de crear una Comisión de Víctimas, sus formas de integración, los procedimientos establecidos para la reparación integral, no se cuenta con los esquemas generales de regulación para el registro estatal de víctimas, la defensoría jurídica así como el establecimiento de sus respectivos fondos, por lo que proponemos en esta iniciativa que las víctimas cuenten con un marco jurídico flexible y acorde a su calidad para que de manera inmediata puedan acceder a la ayuda, la asistencia y la reparación de manera rápida y accesible.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas constituyendo un parteaguas en México: la creación de una política de Estado en materia de atención a víctimas y la consolidación de un derecho

victimal efectivo, colocando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como el órgano operativo y rector de dicha encomienda.

Sin embargo, como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de ella son perfectibles y sujetas de revisión y diagnóstico. A tres años de la entrada en vigor de la Ley y dos años de la puesta en operación de la CEAV, se ha identificado la existencia de disposiciones que dificultan aspectos fundamentales de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, obstaculizando los procesos de atención y reparación.

Este ejercicio legislativo parte del análisis de una ley que en su momento fue profundamente innovadora y atendió una necesidad impostergable, pero que a la luz del estudio de su implementación práctica, se hace evidente la importancia de realizar modificaciones para fortalecer el marco jurídico de la operación institucional.

Es por ello que es preciso analizar y resolver los problemas estructurales de la Ley.

Acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

Existe el reclamo legítimo de muchas de las víctimas de poder acceder a los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala para brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

De la información existente podemos señalar que entre finales de 2014 y enero de 2016 este Fondo contó con 1,536 millones de pesos, de los cuales sólo se han erogado recursos equivalentes a un 3%. Este importe se destinó a la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%)[1]. Sin embargo, a marzo de este año 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas –cabe señalar que aun estando en dicho padrón no se garantiza dicho apoyo- y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

En ese sentido, proponemos flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención

[1] *El tortuoso camino de las víctimas en México.* Periódico El País, sección Internacional, 15 de marzo de 2016.

y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual en la presente iniciativa hemos definido como *recursos de ayuda*, a diversos gastos, como son alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Asimismo, el dictamen propone, la obligación qué las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad de presupuestaria necesaria para su otorgamiento.

En ese sentido, proponemos facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Facultad de atracción

Actualmente la CEAV tiene la facultad de atender y reparar a las personas víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales. Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local.

Fuente: **Sistema Nacional de Seguridad Pública** (SNSP)

	2012	2013	2014	2015
Federal	**125,328**	**98,189**	**98,059**	**95,727**
Común	**1,704,915**	**1,681,077**	**1,590,331**	**1,500,897**
	1,830,243	1,779,266	1,688,390	1,596,624
Federal	6.8%	5.5%	5.8%	6.0%
Común	93.2%	94.5%	94.2%	94.0%

En este sentido, un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la LGV.

A partir de este escenario, es imperativo y urgente establecer directrices puntuales a fin de que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local. Para esto, se pretenden fijar los supuestos en los cuales la Coisión podrá atraer un asunto en la norma adjetiva.

Conformación de la CEAV para una atención más ágil a las víctimas

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, según lo establece el artículo 79 de la LGV. Esto significa que el SNAV es una instancia deliberativa y de toma de decisiones.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo del SNAV, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del Sistema Nacional.

Si bien la LGV concibió al Pleno de los Comisionados de la CEAV como un órgano de discusión de la política pública de atención a víctimas, en la actualidad un problema que ha sido observado por organizaciones defensoras de los derechos humanos es que la CEAV enfrenta la existencia de un Pleno que se ha venido reduciendo. Si bien la ley establece que estará integrada por siete comisionados, en la actualidad solamente funciona con cuatro de ellos. Hoy, a tres años de su integración y haciendo un balance del funcionamiento observamos una pesada estructura administrativa que por su diseño institucional no contribuye suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la propia CEAV por lo que resulta urgente modificar su estructura, integración y funcionamiento.

La existencia de un Pleno de la CEAV con siete comisionados y comisionadas ha demostrado ser una estructura demasiado pesada tanto presupuestal como funcional.

Por tanto, proponemos que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento

en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. **Será nombrado por el Presidente de la Republica previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.**

Asimismo, resulta necesario hacer una modificación estructural de la Comisión Ejecutiva, por lo que la compactación y optimización en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas. Para ello se elimina la existencia de los comités de estructura en el artículo 93 y se determina la existencia del Comité Interdisciplinario evaluador, con facultades debidamente reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral, y en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la Ley, así cmo para la creación de fondos de emergencia.

Participación de la sociedad en la política pública

Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, resulta imprescindible que en la elaboración de la política pública participen en forma activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

La redacción actual de la Ley General de Víctimas establece que la sociedad civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar activamente en la elaboración de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, así como en la implementación de la política pública, sin embargo, no se prevén en la ley mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los destinatarios de la Ley en la CEAV.

Por lo anterior, proponemos una reforma que prevé la figura de una **Asamblea Consultiva**, la cual resulta de mayor utilidad en términos de la incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación de la política pública.

La Asamblea Consultiva se concibe como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo en la toma de decisiones. Adicionalmente Cuatro respresentantes de la Asamblea, integrarán la Junta de Gobierno. Por lo que su participación estará garantizada en todo momento, para la debida atención a las víctimas.

Responsabilidades de los servidores públicos

Aunque en la Ley General de Víctimas se establece que existe una obligación de las y los funcionarios para velar por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral a fin de no ser re victimizadas. Se propone incluir que "las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar".

Interés Superior de la Niñez

Por lo que se refiere a los principios que guían a los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley se incluye el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Lo anterior en virtud de que la Ley en citada establece en su artículo 49 los siguientes:

> **Artículo 49**. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
>
> Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual

procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008, mediante la cual se implementa en nuestro país el sistema de procesamiento penal acusatorio, estableció en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, como uno de sus principios generales el de reparar el daño a la víctima. Se otorgó a la víctima la facultad de solicitar directamente la reparación del daño. Por otra parte, el apartado B de dicho artículo, reconoció los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se le haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Consecuencia de lo anterior, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible; de ahí, la necesidad de reformar la Ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico federal.

Esta propuesta busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para "procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral" podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual manera y con la finalidad de evitar confusiones respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que

la figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como son las procuradurías de las entidades federativa o dependencias análogas.

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, proponemos que se integra por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y contará con un servicio civil de carrera que comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Para cumplir con esta misión, la Comisión podrá de manera excepcional contratar el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, y lo hará estrictamente en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de la Ley, lo que significa que las condiciones de contratación deberán ser similares y en ningún caso mayores a las descritas para el servicio profesional.

Desplazamiento Interno

El informe sobre Desplazamiento Forzado Interno en México[2] (DFI) presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en mayo de este año, cuyo objetivo es analizar las causas y manifestaciones principales del DFI a fin de proponer medidas y acciones que protejan a la población en esta situación. Para ello, el informe recopiló información de fuentes primarias y secundarias. En relación con las primeras el personal de la CNDH, acudió a diferentes lugares del país a realizar entrevistas y recabar testimonios del DFI. Con esta información, el informe revela que las personas que manifestaron ser víctimas de DFI totalizan 1,787, de las cuales 1,248 son por desastres naturales y 536 por causas de violencia, mientras que las personas víctimas de DFI referenciadas por terceros suman un total de 35,433, de los cuales 89 son por desastres naturales y 35,344 por violencia.

Ahora bien, conviene precisar que si bien de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos, los cuales se encuentran contenidos en los Principios Rectores de Deng, las personas desplazadas internas son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual,

---

[2] Disponible en Internet:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos, de proyectos desarrollo a gran escala o megaproyectos que no estén justificados por un interés público superior o primordial, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida , en México el fenómeno de desplazamiento interno no responde a la actualización de alguno de los supuestos anteriormente señalados, y sí a situaciones de violencia focalizada en algunas regiones del país y patrones no sistemáticos ni generalizados de violaciones a derechos humanos, principalmente como consecuencia de la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada.

De ahí la importancia de atender el llamado de la CNDH para considerar en la Ley General de Víctimas al Desplazamiento Interno como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos; y que, en consecuencia, amerita un tratamiento diferenciado que permita a esta población contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido vulnerados.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras, teniendo en cuenta la complejidad de los derechos humanos que a menudo se ven afectados o se encentran en riesgo a consecuencia del fenómeno de desplazamiento interno, concluimos que resulta procedente que la Ley General de Víctimas reconozca la necesidad de atender y proteger, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de tal fenómeno.

La LGV debe otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.

Por ello, esta iniciativa busca fortalecer la protección de los derechos vulnerados con motivo del desplazamiento interno, respetando de esta forma los principios generales establecidos en la LGV y en particular el enfoque diferencial y especializado.

Mención especial merece la reforma al artículo 45 de la LGV, para garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno a ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las principales afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación.

De igual forma, la reforma al artículo 47, permite puntualizar que las políticas y acciones establecidas en la LGV a efecto de asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo deberán incluir a las personas en situación de vulnerabilidad, como son los migrantes y los que se encuentran en situación de desplazamiento interno.

En ese mismo sentido, y con la finalidad de visualizar a las víctimas de desplazamiento interno se realizaron modificaciones a los artículos 8, 28, 38 y 79

Al respecto, para entender la necesidad de garantizar los derechos de este tipo particular de víctimas, conviene precisar que si bien una de las dimensiones del principio de igualdad es la igualdad formal o de jure, que implica un trato idéntico, "*un enfoque jurídico o programático puramente formal no siempre es suficiente para lograr la igualdad de facto*"[3].

Debemos recordar que en ocasiones la norma aplicada o legislada, aparentemente neutra, puede tornarse indirectamente discriminatoria al agravar la existencia de ciertas condiciones que colocan a determinados grupos en una situación de vulnerabilidad o desventaja en el goce y el ejercicio de los derechos humanos[4].

---

[3] ONU, CEDAW, Recomendación General No. 25: Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – Medidas especiales de carácter temporal, 30º periodo de sesiones (2004), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf, párrafo 8 [visitado 23 de septiembre de 2016].

[4] Tesis: 1a. XLIV/2014 (10a.), supra nota 10.

Por ello, ha sido ampliamente reconocido que el principio de igualdad tiene otra dimensión, es decir, la igualdad sustantiva o de hecho, que de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> *Radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.*[5]

Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, todos de la ONU, han reconocido esta dimensión del principio de igualdad y han señalado que los tratados internacionales cuyo cumplimiento supervisan obligan a los Estados a garantizarla[6].

Régimen Transitorio.

En sus artículos transitorios se establece que el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como la derogación de todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

---

[5] Ibíd.

[6] ONU, CEDAW, Recomendación General No. 25: Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – Medidas especiales de carácter temporal, 30º período de sesiones (2004), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf, párrafo 8 [visitado 23 de septiembre de 2016].

La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

Dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octis, de la Ley.

Las erogaciones que, en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales en el ejercicio fiscal correspondiente.

La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar-su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

ÚNICO. Se REFORMAN: el primero y tercer párrafos del artículo 1; las fracciones I, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 6; las fracciones XXI y XXX del artículo 7; el primero, segundo y cuarto párrafos del artículo 8; la fracción IV del artículo 12; el segundo párrafo del artículo 28; el artículo 31; el artículo 38; la denominación del Capítulo III del Título Tercero; el artículo 45; el artículo 47; las fracciones I y VI del artículo 61; el primero y último párrafos del artículo 67; el artículo 68; el artículo 70; el artículo 71; el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79; las fracciones I, XV, XVII del artículo 81; el sexto párrafo del artículo 83; el primero y quinto párrafos del artículo 84, pasando el quinto a ser párrafo octavo y último por adición de tres párrafos; el artículo 85; las fracciones III y IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; las fracciones XIV, XXXV y XXXVI del artículo 88; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 93; el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX, XII y XIII del artículo 95; el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 96; las fracciones IV y V del artículo 110; el párrafo inicial y la fracción X del artículo 116; las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 125; el primer párrafo del artículo 130; la fracción I del artículo 132; el artículo 134; el artículo 135; el artículo 136; el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 138; el artículo 145; el segundo párrafo del artículo 166; el primer párrafo del artículo 168. **Se ADICIONAN:** dos párrafos sobre el principio de "interés superior de la niñez" al artículo 5, entre los principios de "Integralidad, indivisibilidad e interdependencia" y de "Máxima protección" recorriéndose los subsecuentes; cinco últimos párrafos al artículo 8; un último párrafo al artículo 9; las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 7; dos párrafos finales al artículo 12; dos párrafos al artículo 15; el párrafo quinto, recorriéndose los anteriores quinto a séptimo para ser sexto, séptimo y octavo del artículo 21; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 34; el artículo 39 Bis; dos últimos párrafos al artículo 64; dos últimos párrafos al artículo 79; la fracción XVIII al artículo 81; un segundo, tercer y cuarto párrafos, al artículo 84, recorriéndose los anteriores consecutivamente; el artículo 84 Bis; el artículo 84 Ter; el artículo 84 Quáter; el artículo 84 Quinquies; el artículo 84 Sexies; el artículo 84 Septies; el artículo 84 Octies; la fracción V al artículo 86; la fracción XXXVII al artículo 88; el artículo 88 Bis; la fracción XIV al artículo 95; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 110; las fracciones XI y XII al artículo 116; el artículo 125 Bis; un Capítulo V al Título Octavo, con los artículos 157 Bis, 157 Ter, 157 Quáter y 157 Quinquies; la fracción XI al artículo 180. **Se DEROGAN:** los artículos 16; la fracción XXX del artículo 88; 92; 94; la fracción VII del artículo 125; los artículos 175; 176; 177 y 178; **para quedar como sigue:**

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 **y 73 fracción XXIX-X,** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. **Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.**

...

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

Buena fe.- ...

Complementariedad.- ...

Debida diligencia.- ...

Enfoque diferencial y especializado.- ...

Enfoque transformador.- ...

Igualdad y no discriminación.- ...

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- ...

Mínimo existencial.- ...

No criminalización.- ...

Victimización secundaria.- ...

Participación conjunta.- ...

Progresividad y no regresividad.- ...

Publicidad.- ...

Rendición de cuentas.- ...

Transparencia.- ...

Trato preferente.- ...

Artículo 6. ...

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas **adscritos a la Comisión Ejecutiva y** sus equivalentes en las entidades federativas;

II. ...

III. Comisiones de víctimas: **Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México**;

IV. ... a la VIII. ...

IX. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;

XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito**, y**

XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XXII. ...

Artículo 7. ...

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. ... a la XX. ..

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos **mayores, la población** indígena **y las personas en situación de desplazamiento interno**;

XXII. a la XXIX. ...

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;**

XXXI. a la XXXIII. ...

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

XXXV. La protección de las Víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley en términos la legislación aplicable, y

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta ley;

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de **los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda,** de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos **que atenten contra la vida,**

contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno,** recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

...

Las medidas de **ayuda inmediata**, ayuda, asistencia, atención, **rehabilitación** y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias,** a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas podrán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con

los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 9. ...

...

...

...

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. ... a la III. ...

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado **a solicitud de la víctima** de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. ... a la XIII. ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la

contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15. ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Se deroga.

Artículo 21. ...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable**, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades

competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes **en la materia**, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. … a la VI. …

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

Artículo 28. …

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 31. La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias **correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.**

Artículo 34. ...

I. ... a la VI. ...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I ...

CAPÍTULO II

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o **en situación de desplazamiento** de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE **TRASLADO**

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto

párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial **para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno**. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos

académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 61. ...

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona**;

II. ... y III. ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen**;

VII. ... y VIII. ...

Artículo 64. ...

I. ... a la VIII. ...

...

...

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán** el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) ...

b) ...

...

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización mensuales**, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones **en el ámbito de su competencia,** de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos **que ameriten prisión preventiva oficiosa o** en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, **daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad** o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, **cuando así lo determine la autoridad judicial.**

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo **o los Fondos estatales, según corresponda**, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación **a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda, tendrán la obligación de** exigir que el sentenciado restituya al Fondo **o a los fondos estatales** los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 79. ...

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos

humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una **Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas**, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones **de Víctimas** tienen la obligación de atender**, asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva promoverá su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 81. ...

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. ... a la XV. ...

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:

a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la víctima;

b) La obligación de las Comisiones de Víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal, y

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 83. ...

...

...

...

...

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los

colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

...

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es **un organismo** con personalidad jurídica y patrimonio propios**; con** autonomía técnica, de gestión y **contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.**

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

En la ejecución de las funciones....

De la Comisión Ejecutiva ...

A fin de garantizar el acceso ...

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:

a) Gobernación quien la presidirá;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Educación Pública;

d) Salud;

II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y

III. El titular de la Comisión Ejecutiva.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de

Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

Artículo 84 Sexies. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y

V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.**

Artículo 86. Para ser **Comisionado Ejecutivo** se requiere:

I. …

II. …

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación;**

IV. Contar con título profesional, y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección **del Comisionado Ejecutivo,** deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. ... a la XIII. ...

XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV. ... a la XXIX. ...

XXX. Se deroga.

XXXI. ... a la XXXIV. ...

XXXV. Hacer públicos los informes **anuales sobre el funcionamiento** del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como **sobre** el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia**;**

XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos

humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;

II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;

IV.- Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;

V.- Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo; y

VI.- Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;
b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y
c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus

representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo federal, por la comisión de víctimas local con cargo al fondo local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la comisión de víctimas local o se haya constituido el fondo local.

Artículo 90. ...

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que **realice** la **Junta de Gobierno**;

III. ...

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

V. ... a la VIII. ...

IX. Suscribir los convenios de colaboración, **coordinación o concertación** o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. ...

XI. ...

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva;

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva en términos de la legislación aplicable.

Artículo 96. ...

...

El Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, **y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.**

Las **entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación, **y las entidades federativas** estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El **Comisionado Ejecutivo** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

...

Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. ...a la III. ...

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva, y

VIII. El Ministerio Público.

...

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I. ... a la IX. ...

X.- Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en términos de esta ley, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

...
...
...
...
...

Artículo 125. ...

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. **Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;**

II. ...

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento **jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.**

Artículo 125 bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

TÍTULO OCTAVO

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos **de Ayuda** y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, **siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas**.

...

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, **y sin que pueda ser disminuido**.

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;

II. ... a la VIII. ...

...
...

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las **reglas de operación** para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, **en términos de lo establecido en el Reglamento,** el Comisionado Ejecutivo, **previo dictamen a que se refiere el artículo 93 fracción III** podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de los Recursos de Ayuda,** el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un

tiempo determinado. **El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.**

Artículo 136. El Fondo será administrado por **una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de** la Comisión Ejecutiva **en su calidad de fideicomitente,** siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 138. El titular de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo, deberá:

I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo **se administren y ejerzan adecuadamente** a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

II. ...

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno, y**

IV. ...

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva **la** turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para

la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.

TITULO OCTAVO
CAPÍTULO I ...
CAPÍTULO II ...
CAPÍTULO III ...
CAPÍTULO IV. ...

CAPÍTULO V
De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa

Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos Estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de la Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 166. ...

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a **solicitar a la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o** no pueda **contratar un abogado particular,** el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. **En este caso,** la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

...
...

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

QUINTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el

acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octies, de la Ley.

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

OCTAVO.- Las erogaciones que, **en el ámbito de la federación** se generen **con motivo de** la entrada en vigor **del** presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales **en el ejercicio fiscal correspondiente.**

NOVENO. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

DÉCIMO. Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

DÉCIMO PRIMERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

DÉCIMO TERCERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

DECIMO CUARTO. En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

04-11-2016
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 78 votos en pro, 9 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 25 de octubre de 2016.
Discusión y votación, 4 de noviembre de 2016.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 04 de Noviembre de 2016

(Dictamen de segunda lectura)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Informo a la Asamblea que van a presentar el dictamen la Senadora Cristina Díaz, la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Fernando Yunes y la Senadora Graciela Ortiz, inmediatamente después entraremos a la discusión en lo general, para hablar a favor y en contra, para que se vayan registrando.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un avance en nuestra legislación de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista. Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico, estableciendo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas, y el de establecer un derecho victimal eficaz.

No obstante, las necesidades para la debida atención a las víctimas demandan una ley actualizada, que atienda efectivamente la problemática de las víctimas y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, a fin de garantizar que las víctimas recuperen su proyecto de vida.

Es importante mencionar que estas reformas se han construido con la cercanía y participación de los colectivos de víctimas y las ONG's, por tanto, tenemos la convicción de que las reformas planteadas serán un cambio en beneficio de ellas.

Y es importante también señalar el trabajo realizado por mis compañeros Senadores. Mi más amplio reconocimiento a los compañeros que integramos las comisiones que hemos dictaminado y que nos llevó meses el trabajo; el trabajo en comisiones, el encuentro, el escuchar, el atender las diversas y plurales opiniones de todas estas organizaciones y de las víctimas.

Mi profundo reconocimiento a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; a mi compañero y amigo también Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; a mi estimada compañera y amiga Graciela Ortiz, Presidenta de Estudios Legislativos; y sin duda, nuestro reconocimiento a nuestros secretarios técnicos, su trabajo tiene un alto valor para todos nosotros.

Esencialmente los cambios que se proponen son, y debo aclarar que en esta mesa plural de trabajo, en donde están los Senadores y sin duda la presencia de todas estas organizaciones, también debo de reconocer la intención siempre del gobierno, de atender a las víctimas.

Nuestro reconocimiento también al gobierno, al Presidente Enrique Peña Nieto; sin duda, estos cambios que hoy se proponen, es por la participación de todos.

Primero, reglas para la debida coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y las entidades federativas, a efecto de que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral.

Segundo, la facultad para que la Comisión Ejecutiva otorgue subsidiariamente ayudas a cargo del fondo a través de los convenios que celebre con las entidades federativas.

Tercero, en ese sentido las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades, como son: alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Cuarto, se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con lo cual desaparecen los comités con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en elaborar los proyectos de reparación.

Esto contribuirá a eficientar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área.

Quinto, se determina la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla la Comisión Ejecutiva.

Sexto, la comisión estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, sustituyendo así el actual funcionamiento de la CEAV, auxiliado por las áreas administrativas correspondientes.

Séptimo, se fijan como atribuciones de la Comisión Ejecutiva, dictaminar la procedencia sobre casos de atención a víctimas, cuya competencia originaria corresponde al fuero local para asistir y, en su caso, reparar las víctimas del fuero local a través de la "facultad de atracción".

Ello va a contribuir a agilizar el trato a las víctimas mediante un procedimiento claro y específico. Esta "facultad de atracción" es un tema muy importante para las víctimas y fuimos sensibles ante la necesidad, ante la exigencia, ante el sentido de justicia y dolor de las víctimas.

Octavo, la CEAV deja de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.

Noveno, será electo por las dos terceras partes del Senado de la República, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Décimo, contará con facultades para designar a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Décimo primero, se establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas.

Décimo segundo, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento.

Décimo tercero, se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios garantizaran criterios de transparencia y oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Décimo cuarto, se incluye el interés superior de la niñez como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En armonía con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico y otorgar a las víctimas el rol que le corresponde en la procuración e impartición de justicia, garantizando en todo momento el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las víctimas.

Décimo quinto, se establece que para procurar hacer efectivos cada uno de estos derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias.

Décimo sexto, se ampliará también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no sólo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Y es importante mencionar que para la primera integración del Comisionado Ejecutivo y de la Asamblea Consultiva, se establecen de manera única y excepcional los transitorios siguientes:

Transitorio Quinto. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo quien durará en el cargo tres años.

Transitorio Décimo Quinto. Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el comisionado ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

Debemos ser claros los Senadores, con esta ley se está garantizando la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos.

Se blinda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las comisiones ejecutivas, asunto que ha sido denunciado por las víctimas que en muchos estados no tienen esta comisión, estarán sujetos a las sanciones de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de que en ese espacio las secretarías generales de gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a las víctimas.

Lo tenemos muy claro, estamos comprometidos en garantizar la debida atención a las víctimas en todos los ámbitos y para el acceso a las medidas de ayuda y de reparación, podrá, en caso de incumplimiento o por carencia de recursos de sus entidades federativas, la comisión ejecutiva en manera subsidiaria atender dichas demandas.

En conclusión, Senadores, en términos generales se está generando un nuevo instrumento jurídico que permita a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, como la exigencia y como la demanda más importante de todas ellas, así como de establecer una estructura orgánica funcional para ello.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar, ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, su Presidenta, la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores Senadores:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración contiene diversas reformas a una de las piezas legislativas trascendentales en el marco jurídico de nuestro país, fruto de una demanda colectiva y de la lucha de miles de víctimas y familiares de personas que sufrieron en carne propia la realidad del país en materia de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Esta ley es la Ley General de Víctimas. Todos recordamos la historia del recorrido en el país a lo largo y ancho, y también de la presencia de estos colectivos en Estados Unidos, justamente con este propósito: visibilizar las violaciones de las que son víctimas quienes clamaban justicia; y por supuesto el Estado mexicano al clamor de esta sociedad, garantizó resolver todos los impedimentos para que esta ley fuera desjudicializada, a final del sexenio pasado, entrara en vigor y luego también se hicieran reformas pertinentes.

Sin embargo, a poco más de tres años de distancia, las propias víctimas han estado prácticamente en la oficina de todas y de todos ustedes, precisamente pidiéndonos la revisión de la ley. Denunciando fracasos en el diseño legal e institucional, que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención a víctimas que se encuentra vigente en el país y, por supuesto, este perfeccionamiento a partir de la implementación de una ley totalmente novedosa para nuestro país.

Un poquito de historia quizá.

En 2013 muchos colectivos de víctimas, sus familiares y muchas organizaciones de la sociedad civil, exigieron aprobar una ley construida desde la sociedad, y así lo hicimos.

Pocos meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos exigieron aprobar reformas propuestas por ellos, para atender observaciones de tipo jurídico, y así lo hicimos.

Hoy nuevamente se nos plantea un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta dónde ha sido posible, siempre pensando, intentando reflejar, insisto, con la voluntad política de todas las partes y lograr la construcción de estas reformas de este dictamen que hoy ponemos a su consideración, y yo sí creo que es importante destacar, teniendo siempre enfrente, resolver el problema que se nos estaba exigiendo resolver; es decir, lograr que las víctimas de delitos o las víctimas de violaciones a los derechos humanos fuesen atendidas de manera debida, también de manera respetuosa, desde la Comisión de Atención a Víctimas.

Es importante señalar que hay tres cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen, una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas, según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las necesidades de alimentación, de traslado, de aseo personal, del pago de su hotel, la atención psicológica, el

transporte de emergencia o cualquier alojamiento que fuese transitorio, pero siempre que éste pueda ser en condiciones de dignidad y segura.

Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando. No ser maltratadas, no ser revictimizadas, aduciendo porque no se presenta una factura inscrita en el marco de lo que establece el SAT, estos recursos que devengan las víctimas no son reintegrados.

Eso me parece que es uno de los elementos importantes que establecemos en estas reformas, las medidas de ayuda provisional, siempre con un enfoque, y lo destacamos, transversal de la perspectiva de género y diferencial durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima o las víctimas puedan emprender el siguiente paso en condiciones de atención inmediata a su necesidad.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, de las 32 entidades federativas, podrán otorgar a cargo de sus recursos de ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, en casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la Comisión Ejecutiva o las comisiones estatales podrán autorizar que la víctima o víctimas que acudan a una institución de carácter privado con cargo al fondo o también con cargo al fondo estatal, según corresponda.

En este sentido, es importante destacar que las reformas inscriben de manera puntual, de manera enfática esta atención.

También establecemos que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen, con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos, con cargo al fondo, el que está a nivel federal, o en cargo al fondo a nivel estatal, según corresponda.

Pero también atendemos que México está en un proceso de formación desde las universidades de especialistas en estas materias y, por lo tanto, establecemos que estos pagos a estos expertos, a estos peritos podrán ser excepcionalmente también extranjeros en el caso de que no haya mexicanos especialistas en estas necesidades, es importante esa reforma.

No menos importante, es agregar que los servicios a que se refiere la presente ley, tomen en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a mayor riesgo, como es el caso de niñas, niños y adolescentes; mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también personas en situación de desplazamiento interno.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo donde establecemos estas características, a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabiente. Especificamos que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda, cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

Primero. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal.

Segundo. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes.

Tercero. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional.

Cuarto. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de lo que referencia la propia ley.

En caso de que las comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos de las víctimas, en los ámbitos locales, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que estamos planteando en estas reformas, podrá brindar la ayuda a que se refieren estos preceptos que acabo de mencionar, con cargo al fondo.

Es importante subrayar que lo anterior no exime de su responsabilidad a las comisiones estatales de víctimas de las entidades federativas, pues éstas deberán reintegrar los gastos en términos de lo que también previsoriamente establecemos en el artículo 81 de estas reformas.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y la Comisión Ejecutiva dará aviso a la Auditoría Superior de la Federación y en caso de incumplimiento de la entidad federativa.

Ésta es una reforma trascendental, impedimos que las víctimas de las entidades federativas, que hoy llegan a esta Comisión Ejecutiva y que no se les puede atender por el fondo federal, hoy deben ser, y así lo decimos en el addéndum que estamos presentando, no es "podrán", "deberán" atender a las víctimas de las entidades federativas.

¿Qué pasa con los recursos que deberían estar saliendo de las arcas, de los fondos creados por cada una de las 32 entidades? Eso no debe ser preocupación de las víctimas de las entidades federativas, tanto víctimas de delitos, como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya basta que revictimicemos, y entonces, la Secretaría de Hacienda debe hacer lo suyo.

El sentido, el objeto sustantivo de esta ley es que se atienda a todas las víctimas de las entidades federativas.

Estas reformas, por supuesto, facilitan a las víctimas la atención que el Estado debiera obligarles, pero al no estar concretándose esta petición, pues son hoy atendidas y deben ser atendidas por el fondo federal.

Volvemos, volvemos, volvemos señoras y señores, a los términos del artículo 1o. constitucional, cuando se orienta desde su transitorio en la reforma del 11 de junio de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos, volvemos a reivindicar ese artículo, y atendemos a todas las víctimas del país, eso es muy importante refrendar.

Ahora bien, puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene esta reforma. Hemos enfrentado muchas dificultades, sin embargo, nos parece importante que hoy logramos pasos trascendentales. No logramos todo, ya lo dije, puedo señalar uno: desplazamiento interno.

Nosotros presentamos iniciativas, el Senador Yunes y yo, enfatizando en el desplazamiento forzoso interno. En la negociación no quedó forzoso, pero queda el desplazamiento interno, donde no se demerita cada una de las características establecidas en el estándar internacional de lo que es el desplazamiento forzoso interno.

No hay absolutamente ninguna persona que sea víctima de un desplazamiento interno, ya sea por desastre natural, ya sea por violencia, ya sea por conflicto armado, inclusive, o por la instalación de los megaproyectos que no sea atendida ahora por estas reformas, que por cierto establecemos en la exposición de motivos las recomendaciones en esta materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si a mí me preguntan: ¿Estas reformas, Senadora de la Peña, valen la pena refrendarlas, aun cuando haya pendientes? Yo les digo: ¡Sí! Porque tengo enfrente, como todas y todos, quienes trabajamos en ellas, a las víctimas, particularmente a aquellas que hasta ahora no habían sido atendidas.

Hay otras reformas importantes, no me voy a detener en ellas. Simplemente quiero terminar invocando la sensibilidad de cada uno y cada una de ustedes, sobre todo en mi grupo parlamentario para que tomen consideración del avance de las reformas.

Hoy vamos a tener una Comisión de Atención a Víctimas unipersonal. Integramos una Asamblea Consultiva con nueve personalidades de las Organizaciones No Gubernamentales.

Es verdad, la CEAV es una entidad paraestatal. La ley obliga que debió haber tenido una junta de gobierno, se creó todo un movimiento alrededor de impedir que hubiera, de que rechazáramos la propuesta de que se integrara una Junta de Gobierno. Sin embargo, esta Junta de Gobierno que está constituida por cuatro representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, cuatro funcionarios públicos, y quien está al frente de la Comisión de Atención a Víctimas, está acotada, no podrá intervenir en las decisiones de la Comisión de Atención a Víctimas.

De tal manera, que es importante señalar que aun cuando haya resistencias a la integración de esta figura, pues también, tengo que decirlo de manera clara y precisa, que no podrá intervenir en las decisiones que tienen que ver con la reparación integral del daño al que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de delitos, que para el caso de la ley son exactamente igual.

No es una más o menos importante respecto de la otra.

Muchas gracias, y perdonen que me haya llevado tanto tiempo, pero era necesario enfatizar las características de las principales reformas que hoy presentamos a su consideración.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña, que ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos, como Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Fernando Yunes Márquez.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero, en primer lugar, agradecer a mis compañeras las Senadoras Cristina Díaz y Angélica de la Peña, por todo este trabajo conjunto durante muchos meses, que se ha dado en diversas reuniones de trabajo, debates internos con organizaciones de la sociedad civil, y que hoy estoy convenido que nos traen un buen dictamen, un dictamen que ayudará a las víctimas.

Es importante recordar como contexto, que la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008, se estableció como un principio constitucional la reparación del daño a las víctimas y por tal nació, en su momento, en 2013, la Ley General de Víctimas.

Hoy este dictamen, lo que busca es precisamente aprovechar la referida reforma constitucional para corregir los errores de la ley vigente, que si bien, constituyeron en su momento un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, así como un avance, también, importante en la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y, por ende, la Comisión Ejecutiva, tenemos la obligación, yo diría que no solamente legal, sino moral también, de mejorar el marco jurídico actual, particularmente la obligación de atender sus extractos, que de acuerdo a las demandas de las víctimas y sus familiares, son actualmente inoperantes.

Desde hace muchos meses estas comisiones unidas hemos analizado el tema, iniciamos con la reforma en materia de desaparición forzada, que sigue siendo uno de los grandes pendientes que tenemos en el Senado.

Una de las quejas constantes de las víctimas, son la falta de apoyo económico y la imposibilidad de acceso a los fondos de ayuda en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, la mayoría de ellos, ante estas situaciones, tienen que vender incluso sus viviendas para poder hacer frente a todos los gastos que implica realizar una búsqueda seria y efectiva. Todos ellos han sido defraudados por el Estado mexicano y por las entidades federativas.

Otro de los principales problemas que enfrenta esta ley, es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificada.

Hoy en día, esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucradas en la materia.

Por todo lo anterior se propone, en primer lugar, flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos.

Con esta reforma, incluimos en la figura de los recursos de ayuda, diversos gastos como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Además, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo de apoyo eficaz y asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, y con ello, la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales de todas las entidades, podrán otorgar recursos de ayuda.

Para garantizar el funcionamiento de este esquema, se determina una compensación subsidiaria a víctimas, cuando la entidad federativa que corresponda, no cuente en ese momento con los recursos para su otorgamiento.

Lo anterior, será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas.

Por otra parte, la ley vigente establece que la CEAV únicamente puede intervenir tratándose de delitos federales. Esto resulta totalmente inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley.

Conforme a lo anterior, se propone establecer la figura de la facultad de atracción, a fin de determinar de manera clara los supuestos en los que la CEAV puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común.

De igual forma, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ahora bien, por lo que respecta al diseño institucional de la CEAV, ésta se integra actualmente por siete comisionados, aunque en realidad hoy funciona solamente con tres de ellos.

Es evidente que esta estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia, y operatividad de la comisión.

Por lo anterior, se propone que la misma deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal, con un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Víctimas y será propuesto por el Presidente de la República en terna y ratificado por el Senado por las dos terceras partes de los presentes.

Aprovecho el momento para hacer un llamado al Presidente de la República y al gobierno federal, a que tengan sensibilidad y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para que las propuestas enviadas al Senado, tengan un alto nivel de consenso.

En otro orden de ideas, y derivado de la reforma constitucional de 2008, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible, por lo que se proponen diversas disposiciones a fin de cumplir con este objetivo, entre las que se encuentran: fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que se cuenta en la Ley General de Víctimas para hacer valer sus derechos a través de un efectivo servicio civil de carrera.

Se establecen mecanismos para que las víctimas puedan contar con servicios de atención médica, psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con este objetivo.

Aseguramiento del acceso de las víctimas en la educación y asegurar su permanencia en el sistema educativo, entre ellas, incluye a las víctimas de desplazamiento interno.

Asimismo, se amplían los criterios de representación del asesor jurídico, para que cubran no solamente el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Compañeras y compañeros: Este dictamen se ha trabajado con gran amplitud desde hace mucho tiempo, es un tema que hemos analizado y estudiado junto con las organizaciones de la sociedad civil. El tema de atención a víctimas no es un tema político, ni de partidos o ideologías, es un tema de alto interés social y de interés nacional que debemos atender y solucionar, la realidad actual es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben.

Queremos decirles a las víctimas de delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia.

Seamos muy claros, el fondo real de lo que se propone el día de hoy, no es la nueva junta de gobierno que tendrá la comisión ni la totalidad de su estructura, la finalidad real es que las víctimas y sus familiares puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, o la atención médica y un correcto asesoramiento jurídico, y con ello tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad.

Son miles los familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione, les garantizamos que así será.

Los invito, compañeras y compañeros, a votar a favor del presente dictamen, no nos neguemos la oportunidad que ahora tenemos de apoyar a las víctimas a acceder a un verdadero y eficiente apoyo, seamos partícipes de este progreso normativo y dejemos como legado una digna atención a las víctimas de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia, que ha presentado el dictamen.

Para los mismos efectos, tenemos a la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Tal vez uno de los avances más relevantes en materia de derechos humanos, es no solamente la persecución eficiente del delito, la configuración de los tipos para que respondan a la realidad que en este sentido vive hoy el país, sino fundamentalmente reconocer lo que sucede, no solamente con quien comete el delito que debe ser sancionado con todo rigor, sino desde luego con aquellos que son víctimas de ese delito.

En los últimos años, México ha tenido problemas por una serie de delitos que se han venido cometiendo y que han ido dejando víctimas a lo largo y ancho del país, cuyos derechos no eran reconocidos por la ley, y tal vez esa sea la parte más importante, el elemento toral de esta Ley General de Víctimas que hoy venimos a presentar ante ustedes los presidentes de cuatro comisiones, la Comisión de Justicia que preside el Senador Fernando Yunes; la Comisión de Derechos Humanos que preside la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Angélica de la Peña; la Comisión de Gobernación como comisión líder en esta materia, que preside la Senadora Cristina Díaz; y la Comisión que preside su servidora, de Estudios Legislativos.

Por ello, y convencidos de que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento esencial, primordial para consolidar el sistema de libertades, para garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos, es condición indispensable que las bases legales sean funcionales, que sean aplicables en la realidad y que tengan un adecuado desarrollo normativo para el ejercicio de esos derechos.

Es a partir, ustedes lo saben, de la reforma constitucional en materia de justicia penal, cuando reformamos el artículo 20 en su Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reconoció como uno de los principios generales el de reparación del daño a la víctima.

En esta disposición, en su origen, se sostuvo la finalidad de sentar la base constitucional para que se permita a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultadas para garantizar sus derechos, y específicamente para garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas del delito.

Sin duda, como ya lo mencioné, los hechos delictivos ocasionan una lesión a la sociedad y tienen un efecto concreto en las personas y en las familias, y en esta parte es donde estriba la importancia de la reforma que venimos a plantear ante ustedes, de la Ley General de Víctimas, reconocer, a través de esta ley, tal situación de víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades, me parece que es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de lo que todos anhelamos: la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, que le dé respuesta al sentir de los ciudadanos.

En los distintos países, en el mundo, tradicionalmente se ha considerado, se contempla al delincuente ignorando a la víctima, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o de imposible reparación que ciertamente lesionan al individuo, a la mujer, al niño, al joven, al hombre, que son víctimas de ese delito, pero que en conjunto, también van lesionando y dañando el tejido social.

Porque penetran en el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su estado físico, sino en su estado emocional; y alcanzan sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y su situación jurídica en la mayoría de los casos.

Es por lo anterior, que en el dictamen que presentamos a la consideración de este Pleno, se resalta la necesidad de reformar de manera integral la actual Ley General de Víctimas y, en efecto, la legislación sobre protección y atención a las víctimas que es una herramienta fundamental en nuestro país, después de tres años de su publicación necesita ser reformada, necesita ser mejorada y necesita buscar que su aplicación sea verdaderamente funcional y real para quienes hacen uso o quienes requieren del amparo y la protección de esta ley.

Por ello, el análisis y la revisión de su efectividad en la práctica, dio lugar a que se observaran algunas disposiciones que son ineficientes, que retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas y que hicieron nugatorio el espíritu esencial de la Ley General de Víctimas redactada en su momento.

Yo quiero reconocer aquí que la Ley General de Víctimas, sin duda alguna significa un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia, porque cuenta con un perfil humanista y progresista.

Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual contempló todo el andamiaje jurídico y estableció a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que conocemos como CEAV, para ser la institución encargada de operar la política de estado en materia de atención a víctimas y establecer un derecho victimal eficaz.

Ya mis compañeros, presidentes de comisiones, han referido la importancia de las modificaciones legales que se proponen en esta pieza legislativa, sólo quiero mencionar algunas que me parece que son las más relevantes, por ejemplo: el flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda a las Víctimas, la ayuda inmediata a la asistencia, la atención y la rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos, me parece de la mayor importancia.

La justicia, ese es un principio de derecho que todos conocemos, la justicia que no es oportuna y atingente, deja de ser justicia y esa es parte esencial, tal vez, de la importancia que tiene esta reforma a la Ley General de Víctimas que ha sido presentada por los presidentes de las comisiones.

El establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con este mismo fondo de ayuda, de asistencia y reparación integral, que den asesoría jurídica y que tienen un registro puntual de las víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán entonces, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, me parece que es de la mayor importancia.

El que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno actúen conforme a los principios y criterios establecidos en la ley, y si no los atienden, queden sujetos a las responsabilidades administrativas civiles o penales a que haya lugar, da la importancia de que México, en su conjunto, a través de todos sus órdenes de gobierno, vaya caminando en la consecución de esta búsqueda de respeto a los derechos humanos de quienes son víctimas

de algún delito en el país, y creo que es lo que más podríamos resaltar como un gran avance de lo que se está presentando el día de hoy.

Yo no quisiera extenderme más, porque fue verdaderamente prolija la forma en que fue expresada y explicada por Angélica de la Peña, por mi compañera Cristina Díaz, por el Senador Fernando Yunes, el contenido de las reformas que estamos hoy presentando.

Solamente concluiría que, en términos generales, se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, y eso, compañeras y compañeros Senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita de manera fundamental para aquellos que han sido víctimas de un delito y que han perdido en ocasiones, a veces, hasta sus seres queridos y que son por las omisiones o las ausencias en la ley, a veces son doblemente victimizados.

Yo quisiera felicitar de corazón, viniendo de un estado como el mío, que ha sufrido etapas negras en materia de seguridad, felicitar el compromiso de Cristina Díaz, el compromiso de Angélica de la Peña, el compromiso de Fernando Yunes, y el compromiso de todas y todos ustedes si es así su deseo apoyar esta ley que les estamos presentando.

Muchísimas gracias por su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que ha presentado el dictamen.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación a diversos artículos del proyecto de Decreto, las someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta Parlamentaria, si la Asamblea las aprueba, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas. **(1)**

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen las propuestas contenidas en este documento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobadas las propuestas de las comisiones. La discusión se dará sobre estas mismas que ya han sido integradas al dictamen.

También quisiera informarles que recibimos los votos particulares del Senador Armando Ríos Piter y de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

El voto particular del Senador Armando Ríos Piter se integrará al Diario de los Debates de manera completa.

(Voto particular del Senador Armando Ríos Piter)**(2)**

Tiene el uso de la palabra, para presentar su voto particular, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos.

En días como hoy celebro y agradezco ser y pertenecer a un grupo parlamentario que nos permite la libertad de pensar, de actuar y de votar en cada uno de los temas como así lo consideremos.

Agradezco pertenecer al partido y al grupo parlamentario de las libertades.

Y en nombre del Senador Armando Ríos Piter, y de una servidora, presento este voto particular en un tema tan trascendental, pero que además nos ha costado años de esfuerzo, no sin antes celebrar el trabajo de las comisiones.

Posiciono con un voto particular en contra de la totalidad de este dictamen que ahora se discute, en virtud de que en su momento se presentó una serie de propuestas que no fueron consideradas.

Primero, se propone la modificación a los siguientes artículos:

Al 4. Para incorporar la definición del Derecho Internacional Humanitario sobre Víctimas que otorga una protección más amplia.

A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150 para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado aun cuando en tres artículos se incorporan ya la frase de "desplazamiento interno", pero no en el 6, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

En los artículos 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no sólo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales, a menos que no haya peritos nacionales capaces.

No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses.

El enfrentamiento científico, como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fotos clandestinas como en Tenancingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; se entregan cuerpos equivocados a los familiares como en la explosión de Pemex, y ahora les están condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales buenos, es que podrán contar con peritajes de calidad.

Asimismo, se presentó propuesta de modificación a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas, y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui géneris, y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1o., 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y no encontramos por qué deba incorporarse una junta de gobierno, ni que sea obligación la designación del Comisionado Presidente, por el Ejecutivo Federal.

De la misma manera, en nuestra propuesta se plantearon cambios al artículo 84 para adicionar derechos a la justicia restaurativa.

En el artículo 85 la integración del CEAV, como un Consejo Directivo y un Comisionado Presidente, así como un procedimiento para su elección, además se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley.

En el artículo 86 se propuso no quitar el candado de dos años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo, y en una fracción V, con un candado de perfil, de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En el artículo 87 respecto a la duración del cargo.

En el artículo 88 de las facultades del Consejo Directivo, consideramos que con la Junta de Gobierno que se aprobó en comisiones unidas, se está violentando el principio universal de no progresividad en materia de derechos. las propuestas de los artículos 84, del proyecto de dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso, como una traición a las demandas del propio movimiento.

Presento esta intervención con mi voto particular en contra y del Senador Armando Ríos Piter, porque aunque reconozca que contiene elementos positivos y que realizaron un gran trabajo las comisiones, lo que le da sustento a un organismo que puede lograr eventualmente su plena autonomía, ha sido lesionado.

Esta ley ha vencido, por derecho propio, todos los cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia se han ganado amparos, se ha recibido reparación del daño con base en esta ley, y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes, constitucionalmente ha controvertido con base en las facultades.

A la Comisión Ejecutiva, como organismo descentralizado no sectorizado, sin la junta de gobierno ni designación presidencial de su presidente, por qué votar a favor si validaríamos un retroceso violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

Podemos escuchar argumentos de nuestros colegas legisladoras y legisladores, de que no ha funcionado la comisión, pero no reconocemos que a estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos, fueron electos por nosotros, y no somos capaces ni siquiera de criticar la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que hoy señalamos.

Como Senadoras y Senadores, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley señala, y luego decimos que la ley no sirve.

Es el mismo caso del Ejecutivo Federal al definir ternas que violentan la ley, elaboraron un reglamento contrario a la ley y sus mecanismos, y ahora dicen que no funciona en estructura, que desde el primer día invadieron e intervinieron, con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación en este organismo que alguna vez intentó tener independencia de quienes con su acción u omisión son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país.

Por ello, no podemos votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular, de los derechos de las víctimas.

Muchas gracias.

Voto Particular. **(3)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.

Vamos a pasar a la discusión en lo general, y me permito informales que tenemos más de 22 oradores, unos para hablar a favor y otros en contra.

Saben que es obligación de esta Presidencia privilegiar el debate, por lo anterior, vamos a ser, ahora sí, estrictos con el tiempo, para que pueden hablar a favor y en contra. Después de que lleven cuatro minutos, recibirán su tarjeta de tiempo y luego serán interrumpidos por el Presidente, con el objeto de privilegiar el debate, porque tenemos muchos oradores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que la construcción de una ley como la de víctimas, suele ser un proceso complejo, un proceso largo, porque se tienen que ir conciliando los intereses y los diferentes puntos de vista, muchas veces contrapuestos sobre un mismo asunto.

El tema de la atención integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que tuvo origen en el sexenio pasado, estuvo plagado de diferendos, pues el reconocimiento de la calidad de víctimas de miles de personas implicaba también un reconocimiento por parte del gobierno federal en turno, de las consecuencias de su estrategia de seguridad.

Así que su respuesta fue la creación de Províctima, un organismo descentralizado, intrascendente, desde mi punto de vista, inoperante y sometido del todo a los intereses del Ejecutivo que nada hizo en favor de las víctimas, pero que ante la movilización y activismo de personas y organizaciones, principalmente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, finalmente se logró la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que a pesar de su naturaleza jurídica como paraestatal, contaría, así se decía, con una sana independencia del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.

Por desgracia, como todos sabemos, el diseño colegiado fracasó, y la CEAV se vio atrapada en los vergonzosos conflictos internos que sostuvieron sus propios comisionados.

Hoy, a todos nos queda claro la necesidad de rediseñar la institución para hacerla eficiente, para hacerla operante, y es así que hemos llegado hasta este punto, hasta la discusión de un dictamen que pretende, no sólo rediseñar a la CEAV, sino también de modificar algunos otros aspectos de la ley, particularmente para lograr que por fin las entidades cuenten con sus comisiones locales de atención a víctimas, que es otro de los grandes pendientes que pretendemos subsanar.

Pero compañeras y compañeros, aunque reconozco avances muy importantes en este proyecto, no puedo dejar de señalar el desaseo que se dio en el proceso legislativo en su discusión y aprobación en comisiones, porque no puede ser que se nos envíe el proyecto de dictamen y se nos convoque a la reunión de comisiones y con unas horas de anticipación, para que al llegar a dicha reunión se nos diga que en el transcurso de la noche se volvió a modificar y se pretenda que la aprobemos así, sin saber qué se modificó y por qué, solamente pidiéndonos un acto de fe.

Por eso votamos en contra en comisiones, y es que, compañeras y compañeros, en un dictamen tan extenso como éste, no basta que durante la reunión se dé lectura a las modificaciones y se nos muestren de manera aislada en una pantalla, para que en unos minutos analicemos su correspondencia o consonancia con el resto del proyecto.

Yo entiendo los obstáculos que ha representado la construcción de esta reforma, pero no puede ser justificación para que el resto de los integrantes de la comisión actuemos como simples levanta dedos, no es así como yo ejerzo mi labor como Senador de la República.

Y en cuanto al fondo, me preocupa que en este proyecto se profundice la injerencia del Ejecutivo en la CEAV, que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del Comisionado, como de los miembros de la Asamblea Consultiva. Y ojalá me equivoque, porque no quisiera ver a la CEAV convertida en una nueva Províctima a modo del Ejecutivo.

Y es por estas razones, señor Presidente, que a pesar de que reitero mi reconocimiento en los avances de este proyecto, he decidido que mi voto será en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya, y gracias por respetar el tiempo.

Denle volumen, por favor, en el escaño del Senador Casillas, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para comunicarle, estoy anotado en la lista de oradores a favor, voy a declinar mi participación, para que me hagan favor de borrarme.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí. Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum, para hablar a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Quiero empezar por reconocer a los presidentes de las comisiones, a Cristina, a Angélica, a Chela, a Fernando, por el esfuerzo que hicieron para que este dictamen después de tantos debates, investigaciones, reuniones, pudiera estar aquí un dictamen tan importante a la Ley General de Víctimas.

Y quiero hablar especialmente de un tema, que por mucho tiempo, nosotros, hemos impulsado, es lo que tiene que ver con desplazamiento forzado interno.

Somos 11 estados de la República, pero a nombre del estado de Sinaloa, quiero agradecer fuertemente que finalmente el tema del desplazamiento forzado interno se logre.

Aquí, en este dictamen, hay una decena de iniciativas de diversos grupos parlamentarios, que lo único que busca, que lo único que pretende es eficientar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el sistema nacional.

Encontramos que algunas entidades federativas no cumplián con las disposiciones previstas en la ley, y tampoco se les brindaba el apoyo oportuno a víctimas, y se revisó a fondo el tema del Fondo de Atención a Víctimas, que a pesar de que tenía una cantidad muy importante para ejercer, solamente se había ejercido el 3 por ciento.

Por lo tanto, también se advirtió la necesidad de flexibilizar las reglas de acceso para apresurar los apoyos básicos.

Este dictamen habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades, y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados.

Me parece un avance muy importante, y el grupo parlamentario del PRI reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho para tener a la mano un documento tan importante que refleja el compromiso del Senado de la República con uno de los apartados más demandados por esta sociedad, que es la atención a víctimas.

También este dictamen trata el caso del incumplimiento con el reintegro a la Federación compensatoria al monto respectivo, con cargo a las transferencias de los recursos federales.

Destaco también que la Comisión Ejecutiva tiene aspectos muy importantes para expedir los lineamientos para que la víctima no tenga mayores cargos de comprobación.

Es un avance importantísimo. No debemos regatear el esfuerzo que se ha hecho. Entiendo que puede ser mejorada esta ley, pero lo que tenemos a la mano refleja lo que la sociedad civil organizada, lo que la sociedad nos ha demandado.

Una vez más, muchas felicidades y nuestro reconocimiento a las cuatro comisiones que hicieron un trabajo importante, y que me siento muy contenta de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, y que hoy entreguemos el resultado en este dictamen.

Especialmente, subrayo el tema de desplazamiento forzado interno, porque era una de las tareas que no habíamos querido reconocer y que hay cientos de familias que viven divagando, están sin los recursos, perdieron su patrimonio, y que hoy tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para hablar en contra.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado de Guerrero. Estas se suman a las 170 que ha habido desde el 2013 a la fecha.

El día 1º de noviembre mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, jóvenes que iban en su vehículo, del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte.

Todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país, organizan brigadas, búsquedas de sus seres queridos, en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas, muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares.

Miles de desplazados, y así podemos sumar las tragedias y atrocidades que vivimos en este momento, y nosotros, los legisladores y las legisladoras estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de la violencia, sin el aval de las víctimas y en retroceso de lo que teníamos anteriormente, retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos que ya habían sido adquiridos por las víctimas.

Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen, que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar estos comisionados, las enviaron de la Secretaría de Gobernación, y que nosotros los elegimos por lo que somos corresponsables en su funcionamiento y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del reglamento de la ley, es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, y que hicieron un reglamento contrario a la ley, lo que, precisamente, suponemos es para que ésta no funcionara, con el sólo hecho de modificar el reglamento, la ley podría funcionar.

Voy a votar en contra de esta reforma, porque independientemente del retroceso y de reconocer que también hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de un retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo lo que ya se agrega en la adenda.

En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del Comisionado Ejecutivo y la Junta de Gobierno, se planteó que así lo establecían los esquemas de los organismos descentralizados en la ley de paraestatales, por lo que iba en paquete.

Ahora, saludamos que se elimine la designación presidencial, pero nos preguntamos, ¿por qué se insiste en mantener una Junta de Gobierno?

Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios que hoy tenemos.

En el Quinto Transitorio, por única vez, será el Presidente de la República el que designe al Comisionado Presidente por tres años, designación transexenal, cosa de lo que debemos tomar nota, le agregan un Décimo Quinto Transitorio para que por única vez el Comisionado Presidente, sea designado por el Presidente de la República, designe a las personas que conformarán la Asamblea Constitutiva integrada por expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero sigue habiendo una Junta de Gobierno presidida por Segob, por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de esa reforma quedaría de la siguiente forma:

Por los próximos dos años, el Presidente de la CEAV será el que decida el gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que decida el Presidente de la CEAV, designada por el gobierno federal y la Junta de Gobierno será presidida por el Secretario de Gobernación.

Por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a las víctimas.

Para concluir, en motivos del tiempo, suscribo y destaco un comunicado de reforma a la Ley General de Víctimas que es denominado "Acuerdo Político que Desampara a las Víctimas". Este comunicado se emitió en la Ciudad de México el 26 de octubre de 2016.

Lo suscribimos y aquí tenemos academias, expertos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil, colectivos de víctimas que no suscriben esta reforma, por lo que la votaremos en contra.

Muchas gracias.

Intervención [(4)]

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Resulta clara la situación crítica que vive nuestro país. La creciente violencia reflejada en los últimos reportes de incidencia delictiva, sobre todo que dan cuenta organizaciones y observatorios que se dedican justamente a medirlos.

También México, en tiempos recientes, se ha caracterizado lamentablemente por una creciente y reiterada violación a derechos humanos, una crisis de inseguridad que engloba estos fenómenos y que debe ser enfrentada y combatida a través de una estrategia integral; sin embargo, pese a esta situación, México no ha sido capaz de incluir en la política criminal una visión integral que atienda a las víctimas, que las visibilice en su justa dimensión, no sólo como parte de una cifra de incidencia criminal.

Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral.

Por ello, una reforma sustantiva a la Ley General de Víctimas era necesaria y es por ello que votaré a favor del presente dictamen, así como lo hicimos como integrantes de la Comisión de Justicia.

Es necesario que esta ley tenga, efectivamente, modificaciones certeras que ayuden, finalmente, a reconocer los derechos de las víctimas y a que el Estado mexicano se haga cargo de la función que le corresponde en este papel.

Es por ello que, si bien es cierto, consideramos como positivas la mayor parte de las modificaciones que se atienden en este dictamen, también debemos reconocer, como lo haremos en su momento, que todavía hay temas que se tienen que solucionar y aspectos de la ley que deben de modificarse. Presentaremos algunas reservas que dan cuenta de esta situación, e incluso que tienen que ver con el propio dictamen y que consideramos debe ser perfeccionado.

Me referiré a los aspectos que consideramos favorables del dictamen que se somete a su consideración, y uno de ellos justamente tiene que ver con los mecanismos de acceso al fondo, ya que se fortalece el otorgamiento de medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos y prácticamente inaccesibles.

Para lo cual se define como recursos de ayuda a diversos gastos, como son: alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Se establece la obligación de las entidades federativas a contar con un fondo de ayuda, asistencia, reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común

para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria necesaria para su otorgamiento.

Se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Un aspecto medular en este dictamen es el cambio de la propia naturaleza de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que originalmente fue concebida como un órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del sistema nacional.

Por lo que hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dejará de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo, con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el registro nacional de atención a víctimas.

El cambio de esta comisión estará a cargo ahora de un comisionado ejecutivo, se establecen los mecanismos para su designación, también se establecen mecanismos de participación de la sociedad a través de la Asamblea Consultiva, se establece también el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, insisto, consideramos que hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y en su momento presentaremos las reservas pertinentes, sin embargo, consideramos, como lo dije a un inicio, que las propuestas que contiene este dictamen en su mayoría beneficiaran el desarrollo de la Ley General de Víctimas, por lo cual pedimos su votación a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Senadora Dolores Padierna, la tengo registrada para hablar a favor, la Senadora Pilar Ortega acaba de hablar a favor y el Senador Morón me pidió que registrara en el Diario de los Debates, si usted nos autoriza, le daríamos el uso de la palabra para hablar en contra, a la Senadora Lorena Cuéllar y luego usted a favor, si lo considera. Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar, para hablar en contra.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación.

Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país, uno de cada cuatro mexicanos es víctima, por ende, considero que en los términos que se presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema.

Las constantes violaciones en materia de derechos humanos hoy tienen en una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones.

Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades, lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad.

Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el gobierno insiste en no reconocer esta crisis, lo que lleva a constantes episodios de confrontación. Por ello, como legisladores, debemos ser más más incidentes para hacer frente a esta problemática.

En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta no va al fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización.

Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto, y coinciden en que la Ley General de Víctimas aún está muy lejana de poderse hacerse realidad.

El problema, ya no son los derechos de las víctimas, sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos; es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando, continuará defraudando la esencia de este ordenamiento y, este el punto de fondo, es decir el cómo.

Es también el gran ausente en esta reforma, que básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cabe señalar, ha dejado mucho que desear.

Claro ejemplo es lo siguiente: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que entre 2014 y 2016 asciende a 1,500 millones de pesos, presenta un subejercicio del 90 por ciento; cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo sistema penal acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, el Registro Nacional de Víctimas apenas cubre el 0.02 por ciento, es decir, menos de 4 mil inscripciones contra un universo de 23.3 millones de víctimas.

Esta comisión ha hecho funciones de un organismo de control extraoficial que nunca ha sido autónomo, y en la presente reforma se propone que el Presidente de la República designe a su titular, cosa que es completamente antidemocrática.

Además se excluye la posibilidad de que dicho titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo.

Con esto, además hacemos de lado la demanda de que algún día está comisión sea un organismo autónomo y en su lugar se mantiene una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.

Es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas será más una pieza de contención política que como eje de una política nacional de atención y transformación de las causas estructurales de la violencia.

Como si esto no fuera suficiente, en el régimen transitorio se establece que mientras se nombren las comisiones en las entidades, sean los secretarios de gobierno de los estados los que atiendan dicha función.

Esto me preocupa, particularmente, dadas las condiciones que atraviesa mi entidad Tlaxcala, puesto que como han dado a conocer distintos medios, se vive en una violación sistemática a los derechos humanos de personas y colectivos que llegan a manifestarse en contra del autoritarismo estatal. Incluso, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a distintos derechos en contra de personas jubiladas por parte del gobernador.

Por ende, con este artículo transitorio se da paso a que continúe la impunidad y crezca la impotencia que sienten estudiantes, adultos mayores, sindicalistas y trabajadores del Estado que han puesto de manifiesto su inconformidad por actos del gobierno estatal.

Hago un respetuoso llamado para que nos tomemos mayor tiempo en esta discusión del proyecto que hoy nos ponen a consideración, porque sin duda no toca los problemas que estamos teniendo de fondo, sino que además deja muchas interrogantes.

Por ello, mi voto será en contra de este dictamen, porque es a todas luces insuficiente por las personas de mi estado y de nuestro país quienes continúan en las calles manifestándose en contra de la impunidad, el olvido y la indiferencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Durante la última década, las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país han levantado la voz y han reclamado una atención integral por parte del Estado mexicano, hace cinco años, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad concentró miles de estas voces en torno a la necesidad de contar con una legislación especial que precisamente velara por los derechos de las personas que habían sido víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos.

Con la Ley General de Víctimas se avanzó, de manera importante, en la construcción de ese andamiaje legal e institucional que esas miles de víctimas reclamaban hace más de un lustro; sin embargo, aunque la ley representó un avance sustancial, a través del tiempo se fueron detectando problemas para su aplicación, para su operación y sobre todo para brindar una correcta atención precisamente a las personas para las que fue creada, es decir, para las propias víctimas.

Por ello, desde diferentes sectores sociales, políticos, de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, las comisiones dictaminadoras se dieron a la tarea de construir una serie de reuniones, foros y encuentros para ir recabando las ideas y las propuestas que permitieran mejorar la Ley General de Víctimas, pero no sólo la ley como un instrumento normativo, sino principalmente para el mejoramiento de la atención y de los servicios que se brindaban desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El dictamen que hoy discutimos y que cuenta con el voto favorable de varios integrantes de mi fracción, del PRD, integra muchas de estas inquietudes y propuestas formuladas por las propias víctimas y por especialistas en la materia, buscando en todo momento que desde este Poder Legislativo, se abone al fortalecimiento y operación de las instancias del Estado mexicano encargadas de la atención integral para todas las víctimas que lamentablemente existen en nuestro país.

Algunos aspectos positivos que me parece importante destacar de este dictamen y que sirvieron de base para que nosotros decidiéramos apoyarlos son:

La modificación de las reglas de operación del fondo de ayuda a las víctimas flexibilizando sus criterios e integrando mecanismos más ágiles para su operación, garantizando una intervención oportuna para cubrir los gastos de las víctimas en el momento en que sean requeridos.

Otro, es la eliminación de procesos burocráticos y simplificación de los trámites para las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El fortalecimiento de la figura del asesor jurídico, a través del servicio profesional de carrera, con lo que se busca profesionalizar a las y los asesores jurídicos que en muchos de los casos que atienden se han convertido en los únicos abogados y defensores y defensoras de las propias víctimas.

El fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, estableciendo la compensación subsidiaria por parte del Estado y el pago de los gastos de ayuda para las víctimas de aquellas entidades en donde no se cuenta con recursos para atenderles debidamente.

Otra, es la formación de la Asamblea Consultiva en donde participan directamente las y los representantes de la sociedad civil, de la academia, de los familiares de las víctimas, de los colectivos y de toda aquella persona que cuente con la experiencia y la sensibilidad para trabajar y orientar las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La participación de cinco integrantes de la Asamblea Consultiva, en la propia Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, marcando un precedente muy positivo en cuanto a la participación de actores civiles en este tipo de instancias de gobierno y de toma de decisiones, pues los representantes de la sociedad civil contarán con voz y voto para la toma de decisiones.

También está la modificación del procedimiento para el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en donde se incluye un mecanismo obligatorio de consulta e intervención de la sociedad civil para elegir al mejor perfil a la mejor persona para ocupar este cargo.

El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil, además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público o servidora pública incumpla con sus obligaciones frente a las víctimas o las coloque en una situación de revictimización innecesaria.

Son muchos los argumentos, tengo varias cuartillas de cuestiones positivas y avanzadas que tiene este dictamen, pero, finalmente, termino diciendo que es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ejecutivo Federal aseguren y garanticen los fondos necesarios para la operación de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y para la propia organización del Fondo para las Víctimas, de lo contrario, avanzaremos de manera significativa en términos legales, pero estaremos estancados en términos operativos sin recursos o sin fondos suficientes para atender a las víctimas.

El compromiso debe ser con todas y todos, del Poder Legislativo, de la sociedad civil, del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos estatales, de todas y de todos, siempre mirando por el bien y por la reparación del daño de las miles de víctimas que diariamente nos recuerdan que esta sociedad les debe y les debe mucho.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Le preguntaría a la Senadora Martha Tagle, que la tengo registrada para hablar a favor, ¿tiene inconveniente de que le demos el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter para que hable en contra?

¿Usted va a hablar en contra también? ¡Ah! Entonces, tiene usted el uso de la palabra, Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

De hecho debo decir que me ha costado mucho definir la posición de mi voto, porque me consta el trabajo que en las comisiones han hecho para poder llegar al mayor de los consensos posibles, particularmente quienes presiden las Comisiones de Derechos Humanos; de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Justicia, trabajaron arduamente para llegar a un consenso y poder presentar hoy a este Pleno una reforma a la Ley General de Víctimas que pueda incorporar la mayor cantidad de observaciones que ha presentado la sociedad civil organizada.

Sin embargo, tampoco puedo olvidar cuál es el origen y destino de esta ley, esta ley surgió de una demanda ciudadana ante una terrible realidad en nuestro país, una terrible realidad en nuestro país que habla de una ciudad llena de fosas clandestinas por todo nuestro territorio, de múltiples desapariciones forzadas, de tortura y malos tratos, de víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos cometidas, en mayor de los casos, por diferentes entes del Estado mexicano.

Y justo por eso es que hoy he decidido votar en contra de este paquete de reformas a la Ley General de Víctimas, porque si bien se ha hecho un esfuerzo importante para modificar aquellas cuestiones que no hacían operativa la Ley General de Víctimas, como es el tema de los fondos y la competencia de éstos, el problema fundamental sigue estando en quién está a la cabeza de quienes harán posible la reparación de las víctimas, que desafortunadamente a pesar de los esfuerzos que se hicieron sigue siendo el gobierno que está al frente.

Se hizo un esfuerzo importante porque la Junta de Gobierno tuviera la menor influencia posible, y sin embargo la Asamblea será designada, precisamente, por esa Junta de Gobierno, pero además en esos transitorios que es donde justo se ve la verdadera intención de la ley.

Se metieron a los transitorios dos temas que son realmente regresivos, dos transitorios que hablan de excepciones, que solamente por esta ocasión se tendrán que hacer excepciones, pero que es ahí justo donde está el interés del titular del Ejecutivo.

Pues en esta ocasión la Asamblea Consultiva no será definida por la Junta de Gobierno, sino por el Comisionado Ejecutivo, quien a su vez por única ocasión, de acuerdo a un Transitorio Quinto, será propuesto en un plazo de 30 días a este Senado de la República, por el titular del Ejecutivo, sin que medie una terna de por medio a un proceso básicamente de ratificación, como lo que solemos hacer en el Senado de la República y que hemos visto recientemente en el caso del Procurador General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, que son procesos de ratificación fast track, de inmediato, sin siquiera mediar contemplación de si las personas que están siendo propuestas cumplen o no con el perfil, cumplen o no con los requisitos y si son las personas idóneas para ocupar esos cargos. Y lo más lamentable es que se elegirá por tres años, lo que quiere decir que irá más allá de este sexenio.

Por eso, es que he decidido razonar mi voto, y en esta ocasión manifestarme en contra de las reformas propuestas a la Ley General de Víctimas.

Es cuánto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martha Tagle. Ha hablado la Senadora en contra.

Tengo registrado también al Senador Armando Ríos Piter para hablar en contra, pero no le va a importar que deje primero al Senador Romo Medina, para que hable a favor.

Senador Romo, si gusta hacer uso de la palabra.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente.

En el PRI estamos convencidos de que la atención oportuna, eficaz e integral a las víctimas de los delitos demanda un esfuerzo responsable y comprometido de todas las instituciones del Estado mexicano.

Los Senadores de la República tenemos el compromiso de trabajar permanentemente en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico, para atender las medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción, pero sobre todo asegurar las garantías de no repetición; es decir, actualizar nuestras leyes en beneficio de las víctimas y sus familias.

La atención integral a las víctimas exige una ley actualizada, que dote las herramientas necesarias a las instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello recuperar su tranquilidad, seguridad y proyecto de vida.

Bajo esas consideraciones, el voto de mi grupo parlamentario será, sin duda alguna, en sentido positivo.

Nos pronunciamos a favor de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica de gestión.

Y aquí quisiera yo, si me lo permiten, hacer una consideración por algunas reflexiones que se han vertido en esta tribuna, en el sentido del formato del procedimiento con el que se debe de elegir al Comisionado Ejecutivo de esta organización fundamental.

Quiero aquí solamente sustentar que no es un procedimiento directo del Ejecutivo el que se tendrá que establecer para esta nominación, sino que es a través de la consulta de colectivos, a través de las organizaciones sociales, de académicos, de especialistas en la materia. Solamente vinculo en este comentario y sustento esta afirmación en el Transitorio Quinto de este dictamen, de esta reforma donde efectivamente le otorga la facultad al titular del Ejecutivo, para proponer al Senado de la República, mediante una consulta de

todos estos colectivos, y será éste el que elija con las dos terceras partes de los presentes, a este importante funcionario.

Estas nuevas atribuciones serán complementadas al dotarla de la facultad de atracción de casos del fuero local y de la dotación de mecanismos, ciudadanos de consulta y participación, como lo he señalado y lo repito, de la sociedad civil y la academia.

Estamos seguros que con estas modificaciones mejorarán los servicios de procuración, orientación y asesoría jurídica para las víctimas del delito y se rijan por los principios de oportunidad, competencia y suficiencia.

El fortalecimiento de la legislación de atención a víctimas nos permitirá contener, disminuir y prevenir actitudes de indiferencia hacia ellas y facilitará la asistencia a quienes hayan resultado agraviados por la comisión de un delito.

Compañeras y compañeros legisladores, reconocemos que la Ley General de Víctimas ha representado un avance significativo a nuestra legislación; sin embargo, estamos comprometidos en fortalecerla permanentemente para dar mayor certeza a las víctimas de sus familias.

Senadoras y Senadores de la República, con su voto a favor contribuiremos a que el Estado mexicano siga cumpliendo con su responsabilidad de otorgar seguridad a sus habitantes y atienda una de las problemáticas más sentidas, como consecuencia de la vulneración o violación a los derechos humanos, con mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Miguel Romo Medina.

Les informo que los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, el Senador Francisco Salvador López Brito, la Senadora María Elena Barrera Tapia, el Senador Jesús Casillas Romero, el Senador Raúl Morón Orozco y la Senadora Marcela Torres Peimbert, han pedido que sus intervenciones se registren de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(5)**

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(6)**

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(7)**

El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(8)**

El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(9)**

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Posicionamiento Ley General de Víctimas

Después de este proceso de reforma para mejorar el cuerpo normativo que regula la atención y la reparación del daño para las víctimas, hoy tenemos un Dictamen que trae consigo diversos aspectos positivos:

En primer lugar, habrá mayores facilidades para tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral. Las entidades federativas deberán contar con un fondo de ayuda para proporcionar recursos a las Comisiones Ejecutivas en los estados. Además, se modifican los mecanismos de acceso al fondo, y se establece la creación de convenios de colaboración entre el CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas.

En el nuevo proyecto también se fortalece la actuación de los asesores jurídicos federales por ser uno de los mecanismos más efectivos con los que cuenta la Ley para hacer valer los derechos de las víctimas.

Esta no es la primera Ley que reformamos en torno a la protección y garantía de un derecho humano, puedo poner de ejemplo a la ley General de Transparencia y a la ley Federal de Transparencia, en las cuales siempre hubo una interlocución continua con los académicos y expertos de la sociedad civil organizada, y el día de hoy son de las mejores leyes del mundo en materia de Derecho de acceso a la información.

Sé que en cualquier ley que busque garantizar un derecho humano debe cumplir con tres principios:

- **El principio pro persona versus el principio pro estado**; no entiendo como el proyecto integra este principio sin la suficiente participación ciudadana de las víctimas y organizaciones al interior del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le estamos dando mayor importancia a las decisiones de Estado que al punto de vista ciudadano;

- **El principio de no regresión y progresividad versus el principio statu quo**; tampoco cumplimos con este principio porque no puedo comprender que de un acto republicano de nombramiento de un órgano colegiado, pasemos a una designación directa del ejecutivo, en que democracia republicana una Cámara del Congreso regala sus facultades a otro poder, renunciando a los controles democráticos y al diseño de pesos y contrapesos;

- **El principio de certeza y predictibilidad versus principios generalistas**, respecto a este principio me preguntaría yo: ¿por qué estamos renunciando a legislar sobre las facultades de la Asamblea Consultiva de la CEAV?, es necesario que dejemos claro en el cuerpo de la Ley qué es lo que está facultada para hacer la Asamblea Consultiva a efecto de que sus funciones no sean diluidas en un reglamento que de manera unipersonal hace el Ejecutivo.

No entiendo por qué el Gobierno en un contexto generalizado de violaciones graves a los derechos humanos, en un entorno sumamente volátil de escozor social, ingobernabilidad y falta de legitimidad del ejecutivo, regatea los derechos de las víctimas, utilizando la coyuntura de la ineficiencia de la CEAV para apoderarse de ella. Me parece imperdonable este regalo que algunos Senadores pretenden hacer a la SEGOB. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es para los ciudadanos, no para el gobierno.

A pesar de estos avances, debemos considerar que lo delicado del tema, sumado a la actual crisis en materia de atención a víctimas hace necesario ajustar algunos detalles en el diseño institucional de la CEAV, bajo dos ejes.
El primero:

La colaboración en el marco de división de poderes, a través de más y mejores controles parlamentarios; por ello, a pesar de mi voto a favor en lo general, propondré dos reservas mediante las cuales se buscará:

- Que la asamblea Consultiva de la CEAV sea siempre nombrada por el Senado de la República, con pleno apego a los principios de Parlamento abierto, es decir, máxima publicidad y participación ciudadana en todos y cada uno de las etapas del nombramiento. Lo cual implica eliminar el décimo quinto transitorio y modificar la redacción del 84 Octies.

- Eliminar el Quinto transitorio a través del cual se regala al titular del Ejecutivo Federal el primer nombramiento que se hará del Comisionado a efecto de que se realice en terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Segundo:

Que las facultades de la Asamblea consultiva se determinen en la Ley y no transfiramos la facultad al Ejecutivo, esto dará certeza sobre los alcances y la participación de los ciudadanos en la vida interna de la CEAV.

Es cuanto Señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A pesar de ello, después del Senador Armando Ríos Piter, todavía tengo registrados seis Senadores para hablar, ya todos en el mismo sentido, a favor.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a plantear mi posición en contra del presente dictamen, toda vez que considero que por más esfuerzos que sea han hecho, y que lo reconozco de parte de los presidentes, las presidentas también, de las comisiones unidas que lo están presentando el día de hoy, en favor de buscar aproximarse y acercase en muchos de los cuestionamientos que se han venido haciendo a este tema, como poder tener una mayor accesibilidad al fondo por parte de las víctimas, que es una de las principales críticas de la gente en todo el país, que dice: "Oye, esta comisión no está funcionando, porque sufrimos un hecho de violencia en algún lugar de la República, y a final de cuentas el dinero se sigue acumulando ahí, en un fondo, con muchos cientos de millones de pesos, pero a nosotros, a las víctimas no nos sirve, no nos funciona, no nos da atención".

Eso, y lo he celebrado desde que dictaminamos esto en comisiones, es un avance, ¡qué bueno!, qué bueno que estemos buscando acercarnos y buscar que estos instrumentos sean benéficos para la gente que ha sufrido estos hechos de violencia en el país.

Ahí yo he destacado el trabajo de mi compañera Angélica de la Peña, que sin duda alguna en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues ha tenido una gran sensibilidad para acercarnos en ese tema.

Pero una vez que he reconocido ésto, no puedo votar a favor de un dictamen que mantiene la discusión de hace cinco años. Hace cinco o seis años, ustedes recordarán, porque lo vimos y muchos lo sentimos en lo más profundo, a cientos de hombres y mujeres que fueron a lo largo y ancho de toda de la República, pasando por Morelos, pasando por Nayarit, estacionándose en Querétaro, llegando hasta Chihuahua, yendo a Guerrero, a cada uno de los puntos del país, donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, iba levantando una voz, que era la voz del sufrimiento de las víctimas de la violencia.

Hombres y mujeres, y muchos de ellos de Guerrero, que habían perdido a una hija, que habían perdido a una esposa, que no encontraban después de cuatro años a un hijo, y que no había ninguna autoridad que les diera señales de dónde estaba.

Y trayendo aquí a esta tribuna, la voz de padres de familia que me decían: "Yo cómo voy a confiar en la autoridad, Diputado", porque yo era Diputado en aquel entonces, "si a mí me consta en videos que fue la policía de Veracruz la que levantó a mi hijo y después no supimos nada más de él, o que fue la policía de Tamaulipas, o que los últimos que los vieron fueron policías en algunos de estos rincones del territorio bañado por la sangre y el dolor".

Entonces, si no entendemos de dónde venimos, compañeras y compañeros, difícilmente vamos a entender de qué se trata esta ley, de qué se trata haber construido una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por los hechos de la violencia.

Y ese precisamente es el punto más importante, compañeras y compañeros, con el que yo difiero profundamente de lo que hoy está a punto de aprobarse.

Cuando dejan en este dictamen una Junta de Gobierno, dejamos de escuchar a esos padres, a esas madres de familia, a esos hermanos, a esas hermanas, que dicen: "cómo vamos a aceptar de una Comisión de Atención a Víctimas, a miembros del Estado mexicano, cuando es el Estado mexicano mismo el que está involucrado en la violencia que nos está quitando a nuestros familiares".

Ese es el meollo del tema y por eso Calderón veto esta ley, y por eso, se recibió con gran agrado, por parte de esas víctimas, cuando el Presidente Peña Nieto quitó ese veto. Ese debate sigue instalado, compañeras y compañeros, porque siguen siendo decenas de miles de víctimas en el país, y es un hecho que no se quedó aislado en el sexenio anterior.

Hoy tendríamos que entender que los principios de París que dieron origen a ese planteamiento, que sea la gente, las ciudadanas y los ciudadanos que han sufrido esa violencia, quienes puedan representar a las víctimas, el punto nodal de reencuentro con esa gente a la que el Estado mexicano le ha fallado en lo más

básico y fundamental, que es el respeto a la vida, a garantizarles que vivan en Morelos, en Querétaro, en Guerrero, en Chihuahua. Eso es en lo que ha fallado el Estado mexicano.

De tal manera que yo no puedo acompañar un dictamen que falla en lo fundamental, que se acerquen muchas cosas, pero que falla en lo fundamental.

Ahí, donde hay un hombre desaparecido, ahí donde hay una fosa clandestina, ahí donde hay una ausencia que se recuerda con dolor día con día, por un padre, por una madre, por un hermano, por una hermana, es donde el Estado mexicano ha estado colapsado.

Y eso, podemos ponernos de acuerdo en un dictamen de esta naturaleza, pero si esa gente no logra encontrar oídos, escucha, sentimiento y emoción que comparta ese dolor, de ninguna manera vamos a reconciliar ese país.

Ésta era una oportunidad o es, espero persuadirlos en ello, yo no puedo votar en contra de esto, porque mucha gente de Guerrero y mucha gente del país, quisiera tener una comisión diferente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Los siguientes oradores todos son a favor y tengo registradas seis reservas.

Tengo registrados para hablar a favor todavía a la Senadora Hilda Flores, Lucero Saldaña, al Senador Héctor David Flores y a la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Hilda Flores nos pide que su intervención se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(10)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Le daría el uso de la palabra, si así desea hacerlo, a la Senadora Lucero Saldaña.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

Mi reconocimiento a las comisiones que hicieron posible un dictamen con la escucha constante de diversas voces, organizaciones, tanto en el terreno internacional como nacional.

A favor del dictamen, porque para una víctima es importante el que se avance. De tener una estructura que había sido colegiada, con dificultad en la toma de decisiones y en dar pronta respuesta, a tener hoy un Comisionado Ejecutivo, de una estructura de varias comisiones, ahora a una Comisión Interdisciplinaria; de tener hoy estándares internacionales, para que no solamente la atención integral, sino la reparación del daño, con una poyo inmediato, así como apoyos que van a representar transparencia en el ejercicio del fondo.

El nombre de la ley queda como víctimas y no solamente de delitos, porque también se incluye a quienes son violentados en sus derechos humanos por parte de una autoridad.

Estos esquemas que hoy estamos refiriendo, han tenido una larga historia desde los 90's, en que se empieza a hablar del tema de víctimas de delitos, y ya hasta el 2008 efectivamente viene el tema de reparación del daño.

¿Quiénes son víctimas y cómo poder tener acceso en una localidad determinada? Pues hay una coordinación ahora, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, para que se asegure que haya recursos, se asegure de cualquier forma a que las entidades federativas vean por un fondo. El diagnóstico es que la mitad de las entidades tenían una comisión y menos de ellas, se veía que no tenían la aplicación de estos comisionados.

Hoy estamos ante un dictamen en el que con esta reforma se brindará certidumbre al extender el reconocimiento de las víctimas en cualquier parte de nuestro país y que puede haber la atracción de delitos locales, siempre y cuando hayan pasado precisamente por esa etapa local.

Se está reconociendo a que la ciudadanía forme parte de una asamblea consultiva, no consejo, asamblea, en donde, habrá esa profesionalización y esa transparencia en el manejo del recurso. También se está viendo en esta reforma lo que la ciudadanía ha estado demandando: agilizar el trámite, pronta respuesta, atención profesional; es decir, capacitación adecuada tanto en el tema de niñez, como en el tema de igualdad de género y también en las diferencias de acuerdo a la condición de vulnerabilidad.

Las entidades, entonces, darán un servicio y estaremos respondiendo a las necesidades muy concretas que la sociedad nos ha demandado.

Con dicho dictamen hoy le queremos decir a la sociedad que si se hablaba de que no están todas las voces, todo lo que les preocupa en esta ley, es de gran avance, por eso el grupo parlamentario del PRI vota a favor, reconociendo el gran trabajo en mesas de discusión con las propias autoridades que estarían implementando esto, pero también con familiares y víctimas de los delitos.

Les pedimos su voto a favor y cualquier duda que haya, poderla atender. Tenemos oportunidad de revisar, como lo estamos haciendo hoy, de una aplicación, cuál es la mejor respuesta más ágil de política pública para un tema fundamental donde a nivel internacional todos los países están abonando al mismo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Tengo registrados, para hablar a favor, al Senador Héctor David Flores Ávalos y a la Senadora Mariana Gómez del Campo, y me ha pedido la palabra para hechos la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen es producto de un trabajo que integra múltiples iniciativas, si no mal recuerdo deben ser 12 las que se presentaron por Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Lo primero que celebro es este interés multipartidista por revisar a fondo la eficacia y eficiencia de la actual Ley General de Víctimas, y lo celebro porque en el trabajo legislativo, y más cuando se trata de una ley general que, en mi opinión, trasciende los límites ordinarios del federalismo por cuanto a que invade la esfera de competencia de los estados y municipios, es fundamental encontrar el acuerdo político.

Y el acuerdo político, en mi opinión, no necesariamente significa tener un punto de vista uniforme o idéntico sobre el contenido de la ley, pero sí indispensablemente revela una unidad de propósito; esa unidad de propósito, en mi opinión, es la que hoy debe destacarse.

Todo progreso, en mi opinión, es iniciado por confrontar los conceptos actuales, la realidad prevaleciente y es ejecutado el suplantar las instituciones existentes. Esa ejecución, la de suplantar las instituciones existentes, debe realizarse no solamente con sumo cuidado, sino también, y sobre todo, con claridad extraordinaria sobre lo que se pretende lograr.

Es indispensable saber lo que se quiere para saber qué es lo que no funciona, y qué es lo que se propone para remediarlo.

Por eso destaco la unidad de propósito detrás de este dictamen.

Voy a mencionar tres aspectos, no porque sean los únicos, sino porque realmente me parecen de una gran relevancia.

Hay en principio el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar que el Estado en cualquiera de sus frentes, debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una víctima del ámbito federal o local.

Hoy se propone que el Fondo de Atención a Víctimas previsto en esta Ley General de Víctimas, a través de un esquema de compensación con las entidades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local. En eso me parece que hay un avance fundamental.

En segundo lugar, y toda vez que una vertiente importante, más no exclusiva de las víctimas provienen de la actividad del Estado, existe también claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de conformación, tanto del órgano de gobierno como del Comisionado Ejecutivo en esta Comisión de Atención a Víctimas.

Es evidente por los resultados que ha tenido hasta hoy la comisión, que el texto de la norma vigente no lo permite.

La participación de la sociedad en el órgano de gobierno es un elemento de control extraordinario que permite hacer transparente el escrutinio público las decisiones que ahí se adopten sin perder de vista que es el Estado el responsable primordial de garantizar la conducción de la comisión y de lograr los objetivos de política pública detrás de esa institución.

Lo mismo ocurre con la consulta pública que debe hacerse para escoger a la persona que será propuesta al Senado como Comisionado Ejecutivo.

Y este tema no es menor, déjenme decirlo con claridad, en lo personal me hubiera gustado que, por ejemplo, en lugar de consulta, se hubiera planteado una convocatoria, una convocatoria que sujetará al Ejecutivo a cumplir, él mismo, con los condicionamientos previamente establecidos en un documento que fuera a la vista de la sociedad calificable.

Sin embargo, tampoco puede obviarse la bondad de transitar a favor del acuerdo político, y un acuerdo político que entiende que garantizar el escrutinio social, que abona a la verticalidad y el equilibrio de las decisiones de la comisión, está previsto en este dictamen.

Esto es mi opinión lo fundamental; además reconocer que la solución no necesariamente es ciudadanizar todas las instituciones, en el sentido de que, reitero, es el Estado y debe ser el Estado el principal responsable de garantizar la eficacia de sus instituciones.

Señor Presidente, por razón de tiempo, simple y sencillamente me gustaría decir que mi voto es a favor de este dictamen, en razón de que, en mi opinión, recoge avances significativos en relación con el texto vigente y que, si bien es cierto que pudiera encontrarse quizás una redacción mucho más acabada en ciertos temas que han creado controversia, la realidad es que permitirle a las víctimas que comiencen a ser atendidas, a ver satisfechas sus necesidades de ayuda inmediata, es comenzar a hacer justicia.

Por eso mi voto es a favor, señor Presidente, y dejo constancia de mi participación para que sea incluido en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Intervención. **(11)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Integre Servicios Parlamentarios de manera completa el documento que ha dejado el Senador Héctor David Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor, la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, me parece éste un día muy relevante en materia legislativa, se están abordando dictámenes que inciden directamente en la transformación de la realidad de muchísimas personas en nuestro país que, desafortunadamente, han sufrido violaciones, han sufrido abusos, han sufrido atropellos, incluso, de personas que han perdido algún familiar y se han topado con un muro de insensibilidad por parte de diversas autoridades. Y también una ley con serias complicaciones para poderse ejecutar.

Me queda claro que no existe ley perfecta, pero que las comisiones han hecho un trabajo, un esfuerzo muy importante y han tratado también de escuchar a las diferentes voces.

Yo quiero compartirles, y por eso mi interés de intervenir en este dictamen, que durante la Comisión Permanente, primero, como ustedes saben, se creó la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, fuimos testigos de la urgencia de reformar la Ley General de Víctimas, las personas que resultaron víctimas en la comunidad, pues no pudieron acceder al fondo de ayuda de manera pronta y expedita, debido a que no contaban con facturas de los gastos que habían erogado por servicios funerarios, por ejemplo, o para el reembolso de los traslados, para el hospedaje, para la alimentación, para la atención médica que recibieron en hospitales particulares.

Después de una reunión larga que tuvimos con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos reunimos con diferentes actores, pero hubo temas que nos inquietaron, y lo que hicimos fue un grupo de Senadores integrantes de esta comisión de Nochixtlán, la Senadora María Hilaria Domínguez, el Senador Fidel Demédicis, el Senador Ismael Hernández Deras, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Senador Benjamín Robles, lo que hicimos fue presentar una iniciativa de ley concretamente para que se discutiera también en esta Ley General de Víctimas, y que fuese tomada en cuenta.

Yo quiero decirles que, afortunadamente tomaron en cuenta la gran mayoría de lo que expusimos en esta iniciativa de ley, por ejemplo, la parte de prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas estén facultadas para otorgar de manera directa medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.

Prever que en casos urgentes o de extrema necesidad, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de las entidades federativas estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en algunos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención médica y sean cubiertos sus gastos. Incluir el reembolso de los traslados que las víctimas deban realizar para acudir o recibir atención médica o para alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes.

Flexibilizar los requisitos de inscripción al Registro Nacional de Víctimas, y prever que la Comisión Ejecutiva pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el ministerio público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.

La posibilidad también de prever la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos parecía fundamental.

Yo agradezco a las tres comisiones, a las dos presidentas y al presidente que hayan podido incluir muchas de estas propuestas que hicimos desde una iniciativa de ley que nació en esta Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

Qué bueno, qué bueno que tengamos la sensibilidad para impulsar este tipo de legislación y poderle hacer la vida a la gente mucho más fácil, cuando desafortunadamente son víctimas y este tipo de hechos, pues se dan en diferentes estados de la República.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

No tengo más oradores registrados, solo tengo una última intervención, para hechos, de la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema.

Por favor, sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias por darme la oportunidad de poder rectificar en hechos el trabajo que han hecho las comisiones. Es muy importante señalar, en el orden cronológico que se envió a los correos personales de los Senadores, los cambios que iban surgiendo a partir de las reuniones que teníamos de trabajo las comisiones con expertos, con académicos y con ONG's.

El primer correo fue el 4 de octubre de 2016, y se envió el primer proyecto de dictamen para conocimiento de todos, el 11 en físico y en correo personal, y por supuesto se subió a los micrositios de las comisiones.

El 11 de octubre de 2016, primera convocatoria a reunión de comisiones unidas a efectuarse el día 13 del mismo mes, y se adjuntó el proyecto de dictamen.

Dicha comisión se mantuvo permanente, y el 13 de octubre se envía una nueva convocatoria a reunión de comisiones unidas a efectuarse el 18 del presente.

El 17 de octubre se envía proyecto de dictamen con modificaciones respecto del anterior, debidamente señaladas para efecto de que los Senadores lo pudieran identificar.

El 18 de octubre del mismo año, en virtud de diversas observaciones de Senadores, así como de la sociedad civil y colectivos de víctimas, se declara un receso para analizar dichas propuestas de modificación.

El 22 de octubre se envió notificación para reanudar sesión de comisiones unidas a efectuarse el 25 del mismo mes, y se adjunta dictamen con modificaciones debidamente señaladas.

Mismo día y mismo mes se llevó a cabo la reunión de comisiones unidas, y en dicha reunión se llevó a cabo una amplia discusión, se hicieron modificaciones aprobadas por los integrantes de las mismas, adicionalmente se acordó que las propuestas de modificación no acordadas en reunión de comisiones fueran presentadas en el Pleno en la sesión de discusión del dictamen, como se ha hecho en su conducción, señor Presidente.

Dichas modificaciones sólo fueron en tres aspectos:

Primero. A los artículos 84 Octies, 85, Quinto Transitorio y se adiciona el Décimo Quinto y Décimo Sexto respecto del mecanismo en nombramiento tanto del Comisionado Ejecutivo, la integración de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva.

Segundo. A los artículos 8 y 39 Bis para dejar en términos "deberá" en vez de "podrá" respecto de la aplicación de recursos con cargo al fondo por parte de la Comisión Ejecutiva que muy bien dio una amplia explicación la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

A los artículos 29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 57, 80, 82, 88, 89, 97, 100, 114, 117 y 164 para corregir referencias de Distrito Federal y establecer entidades federativas, una corrección de estilo.

En este sentido, las modificaciones fueron publicadas debidamente en la Gaceta del Senado, previo a la discusión del Pleno.

¿Qué les puedo mostrar a todos ustedes como Asamblea? Que aquí están las notificaciones de recibido, cada vez que un documento nuestro se modificaba.

Le agradezco la oportunidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Cristina Díaz.

Se inserta intervención de la Senadora Sandra Luz García Guajardo.

La Senadora Sandra Luz García Guajardo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(12)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera que el tema está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El tema está suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

En consecuencia, abrimos el registro de reservas, y nos han hecho llegar las Senadoras Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón reservas a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68.

El Senador Zoé Robledo nos ha hecho llegar reservas a los artículos 6 y 7.

Por parte de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166.

Y se pregunta a la Asamblea si alguien más desea hacer una reserva o adición.

No habiendo ninguna, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y los artículos no reservados.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 78 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la discusión en lo particular, recibimos las reservas de las Senadoras Silvia Garza y Luisa María Calderón a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68 del proyecto de Decreto.

Para presentar dichas reservas, tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

He estado preguntando con mis compañeros las razones de algunos artículos, y he firmado junto con mi compañera Silvia Garza, en su ausencia, la reserva que hace de varios de los artículos.

Quiero insistir en el artículo 67, es el que a mí me incomoda, me duele, y lo voy a decir con un ejemplo, hace tres años…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, Senadora.

¿Artículo 77?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Artículo 67.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Artículo 67. Perdón.

Discúlpeme.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Artículos 66 y 67, que es el de la sentencia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Nada más para no confundir.

El artículo 66 no lo tenemos reservado, nada más para informar a la Asamblea.

El artículo 67 sí, sí ahí quiere hacer la intervención también, pero informo a la Asamblea que el artículo 66 no está reservado.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Ok. Artículo 67.

Hace tres años, en mi estado, en Tanhuato, después de tres intentos de homicidio, mataron al alcalde Gustavo Garibay, tenía tres chiquitos. Hubo denuncia, nunca han encontraron al victimario.

Hace seis meses encontraron muerta a su esposa Gabriela. Torturada, con la cara desollada, y se quedaron tres chiquitos sin ninguna protección.

Los cuida su abuelo, que es un campesino, que no sabe leer y que no tiene manera de mantenerlos. Él quiere sacarlos de Tanhuato porque siente que tiene que salvarles la vida.

Las preguntas son: ¿cuándo va a haber sentencia?, ¿y cuándo esos tres chiquitos van a tener reparación del daño?

Por supuesto que mataron a su papá, es una víctima del delito.

Por supuesto que mataron a su mamá, es una víctima del delito.

Y resulta que la autoridad recogió el poco dinero que tenían en su casa, y dijo: "Que lo pueden usar hasta que la más pequeña cumpla 18 años". Hoy tiene 3 años.

Por eso me parece muy difícil aceptar que hasta que haya una sentencia, el estado asumirá o no la responsabilidad de la reparación del daño.

Si van a ir a hacer el juicio, si los van a entrevistar, si los gastos, estos, de gestoría o de operación los ponga el estado, no hay problema.

El tema es, ¿quién va a darles de comer, cobijo, afecto, acompañamiento a tres niños que se han quedado sin mamá y sin papá, víctimas de un delito?

Por eso me parece que no es aceptable que hasta que haya una sentencia o una resolución, haya reparación del daño, y por eso, señor Presidente, y por eso Asamblea, estoy en contra de este artículo 67.

Gracias.

Propuestas de modificación. **(13)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Luisa María Calderón.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas mencionadas a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación de los artículos que ha hecho mención el señor Presidente. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. No se admiten a discusión los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar sus reservas a los artículos 6 y 7 del proyecto de Decreto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Dice el Capítulo III, en su artículo 60 de la Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado:

"La Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad, sus libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas".

Eso dice la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia.

El país quizá más emblemático respecto al fenómeno, no a la población de desplazamiento interno, al fenómeno de desplazamiento interno, que ha habido en la región y quizá en el mundo. Un tercio de la población colombiana llegó a estar desplazada en cierto momento.

Por eso estas reservas, porque en la ley no queda todavía claro qué entendemos por desplazamiento y tampoco queda claro que el desplazamiento es siempre forzado. Esa palabra hubiera sido extraordinaria tenerla.

Yo también reconozco, como muchos que han pasado por aquí, el trabajo de las comisiones.

Reconozco que el tema por fin haya llegado a la legislación mexicana. Pero no puedo dejar de insistir en dos cosas:

Primero. La definición de desplazamiento.

Segundo. El establecimiento permanente, que el desplazamiento siempre es un fenómeno forzado.

¿Qué entiende el dictamen? Veamos críticamente este dictamen.

Hay siete menciones al desplazamiento interno forzado en el dictamen que acabamos de votar, y en ellas, en cada una de las menciones, el artículo 7, por ejemplo, que habla de las víctimas y sus derechos, se habla de personas en situación de desplazamiento interno, no forzado, desplazamiento interno nada más, y se comparan, en ese mismo artículo y en esa misma fracción, a la infancia, a los adultos mayores, a la población indígena y a las personas en situación de desplazamiento.

¿Por qué es relevante esto? Porque ahí está el error, el desplazamiento es un fenómeno, el desplazamiento forzado es un fenómeno, no es una población en situación de vulnerabilidad, es decir, déjenme ponerlo de una manera, hay víctimas que se desplazan, pero también hay quien se desplaza y en ese momento se convierte en una víctima, y me parece que eso sigue sin estar claro aquí en el dictamen.

En las otras menciones que se hacen sobre el fenómeno se establecen las víctimas del delito del secuestro, desaparición forzada, de otras formas de privación de la libertad y nunca se menciona el fenómeno de desplazamiento en el artículo 7; después en el artículo 8, cuando se establecen las políticas públicas, sólo se dice que para atender a los desplazados internos, a las personas desplazadas internas, van a recibir ayuda médica y psicológica, hasta ahí.

Posteriormente el propio dictamen dice no, los vamos a atender muy bien, ¿quién los atiende? El DIF. Cómo el DIF va a poder atender a los 280 mil desplazados, que probablemente hay en México, según el monitoreo de desplazamiento interno forzado de Noruega, que es el dato más real que tenemos en México, hay otros peores, hay quien dice que el fenómeno de desplazamiento podría estar ya en México, arriba de medio millón de personas.

Entonces, ahí está, me parece, el error, considerar al desplazamiento como una población vulnerable y no como un fenómeno que debemos atender.

Reconozco que después, en el mismo dictamen, en el artículo 79, se habla que en el caso de las víctimas de desplazamiento interno que se encuentran en una entidad federativa distinta a su entidad, que es casi siempre el caso, la Comisión Ejecutiva promueva su debido registro, que es lo principal, su atención y la reparación.

¿Qué significa la reparación en el tema de desplazados?

Primero, retorno seguro, generar las condiciones para que la gente pueda regresar.

Segundo, cuando el retorno no puede ser seguro o no puede existir, entonces el establecimiento de esa población que entra en el fenómeno, en el nuevo lugar en donde está en ese momento.

Creo que ahí está la clave, en tener una definición y no la tenemos, y quizá estamos perdiendo una oportunidad, porque hay que quedar claros, los desplazados en México, todos son forzados y existen, el problema es que no lo logramos visibilizar, no sabemos quiénes son.

Déjenme decirles de manera muy breve, y le pido su consideración, señor Presidente, quiénes son los desplazados, bueno, son aquellos periodistas que tienen que salir de sus estados, como los de Veracruz, para garantizar sus vidas y seguir escribiendo, esos son desplazados internos.

Las presidentas municipales de Chenalhó, de Oxchuc, que no pueden asumir y ejercer su cargo, porque hay violencia política de género contra ellas, son desplazadas internas.

Las personas que se han tenido que mover por proyectos de desarrollo son desplazados internos, si no tenemos una buena definición, puede la autoridad creer que los desplazados, en realidad son damnificados o que son migrantes, y son dos fenómenos completamente diferentes.

Ahí está la solución.

Mi voto en el dictamen fue por una razón, porque creo que este puede ser el punto de destino hacia donde debemos caminar, perdón, que éste no es el punto de destino, que éste es el punto de origen apenas, de un fenómeno que nos debe llevar a un lugar, ese lugar se llama Ley General de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en México.

Esta iniciativa de ley está desde el martes 18 de diciembre de 2012 en el Senado. Es decir, está en sus manos, que realmente demos el paso que necesitamos dar para atender el fenómeno de desplazamiento y no sea, no siga creciendo, hasta que en un momento realmente ya no podamos hacer absolutamente nada al respecto.

Es cuanto, señor Presidente. Le agradezco su tolerancia.

Propuestas de modificación. **(14)**

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas que ha expuesto en tribuna el Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Los artículos 6 y 7 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Recibimos la propuesta de la Senadora Pilar Ortega Martínez a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166 del proyecto de Decreto. Dichas reservas están en el monitor de sus escaños. **(15)**

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es del interés de alguien que sean leídas por la Secretaría.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de su interés que se dé lectura a las reservas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No es necesario dar lectura a las reservas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber más artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166, en los términos del dictamen.

El Senado de la República saluda y da la más cordial bienvenida al maestro Armando Manzanero, destacado compositor mexicano, invitado del Senador Emilio Gamboa.

Bienvenido, maestro Manzanero, y le solicito a Servicios Parlamentarios que suba por él y lo acompañen al Pleno para que lo puedan saludar los Senadores de la República. Es un invitado distinguido del Senado de la República. Por favor, Servicios Parlamentarios, vayan por el maestro y que nos acompañe aquí abajo para el término de la sesión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 75 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 del proyecto de Decreto, en los términos que se presentó el dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. **Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.**

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

"Año del Centenario de la Constitución"

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2016

LXIII/CG/379/2016

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E.

Distinguido Senador Presidente:

Por instrucciones de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, en atención a los acuerdos logrados al interior de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, le solicito respetuosamente a Usted, que el documento presentado por los Senadores Presidentes de dichas Comisiones con propuestas de modificaciones al Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, el día jueves 27 de octubre del presente, y que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de la República, sea sustituido por el documento adjunto que contiene propuestas de modificaciones a los artículos 8, 29, 30, 33, 34, 36, 39 Bis, 40, 42, 46, 52, 54, 57, 79, 80 81, 82, 84, 85, 88, 89, 95, 97, 98, 100, 114, 117, 164, quinto transitorio, y para que se adicionen los transitorios, decimo quinto y decimo sexto.

Lo anterior, con la finalidad de que este documento sea presentado ante el Pleno del Senado de la República, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, junto con el dictamen en referencia.

ATENTAMENTE

PUBLIO RIVERA RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO

C.C.P. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 8 Oficina 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06030, México, D.F., Tel.: 5345 3000, Ext. 3849
E-mail: gobernación@senado.gob.mx

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E:

Distinguido Senador Presidente,

Los Presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, proponemos al Pleno del Senado de la República, modificaciones al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Dice:	Debe decir:
Artículo 8. ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***)	**Artículo 8.** ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***)
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas ~~podrán~~ otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.	**La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.**
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima ~~que~~ acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en	**En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.**

los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.	
La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, ~~podrán~~ otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.	**La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias,** deberán **otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.**
La Comisión Ejecutiva ~~podrá~~ cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.	**La Comisión Ejecutiva** deberá **cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.**
Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, ~~de los estados, del Distrito Federal~~ y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.	**Artículo 29.** Las instituciones hospitalarias públicas **Federales, de las entidades federativas** y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. ... I a X. ... En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación~~, los estados, el Distrito Federal~~ o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.	**Artículo 30.** ... I a X. ... En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, **las entidades federativas** o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.
Artículo 33. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. ...	**Artículo 33.** Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. ...
Artículo 34. ... I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, ~~estatales, del Distrito Federal~~ y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;	**Artículo 34.** ... I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, **de las entidades federativas** y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; III a VI ... ... (***En términos del Dictamen***)	II. Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; III a VI ... ... (***En términos del Dictamen***)
Artículo 36. Los Gobiernos federal~~, estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.	**Artículo 36.** Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.
Artículo 39 Bis. ... (***En términos del Dictamen***) **En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, ~~podrá~~**	**Artículo 39 Bis.** ... (***En términos del Dictamen***) **En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá**

brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo. ... (***En términos del Dictamen***)	**brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.** ... (***En términos del Dictamen***)
Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, ~~estatal, del Distrito Federal~~ o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, ~~estatales, del Distrito Federal~~ o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.	**Artículo 40.** Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, **de las entidades federativas** o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, ~~estatal, las del Distrito Federal~~ y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.	**Artículo 42.** Las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.
Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, ~~de los estados, del Distrito Federal~~ y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.	**Artículo 46.** Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, **de las entidades federativas** y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.
Artículo 52. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.	**Artículo 52.** Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 54. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.	**Artículo 54.** Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas** a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.
Artículo 57. La Federación, ~~los estados, el Gobierno del Distrito Federal~~ y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.	**Artículo 57.** La Federación, **las entidades federativas** y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
Artículo 79. ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva promoverá su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.	**Artículo 79.** ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva **y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán** su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 80. El Gobierno Federal, ~~los estados, el Gobierno del Distrito Federal~~ y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.	**Artículo 80.** El Gobierno Federal, **de las entidades federativas y los municipios**, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
Artículo 81. … (***En términos del Dictamen***) I. … (***En términos del Dictamen***) II. … (***En términos del Dictamen***) III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas ~~y el Distrito Federal~~; IV a XVIII. … (***En términos del Dictamen***)	**Artículo 81.** … (***En términos del Dictamen***) I. … (***En términos del Dictamen***) II. … (***En términos del Dictamen***) III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas; IV a XVIII. … (***En términos del Dictamen***)
Artículo 82. … I. … a) … b) … c) …	**Artículo 82. …** I. … a) … b) … c) …

II. ... a) ... b) ... c) ... III. ... a) ... IV. ... a) ... b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de ~~los estados y del Distrito Federal.~~ ...	II. ... a) ... b) ... c) ... III. ... a) ... IV. ... a) ... b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de **las entidades federativas.** ...
Artículo 84 Octies. ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.	**Artículo 84 Octies.** ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) ... (***En términos del Dictamen***) Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas **sólo** por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.	**Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.**
Artículo 88. ... (***En términos del Dictamen***) I a XXI. ... (***En términos del Dictamen***) XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas ~~y del Distrito Federal~~, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación; XXIII a XXIV. ... (***En términos del Dictamen***) XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, ~~estatal, del Distrito Federal~~ y municipal;	**Artículo 88.** ... (***En términos del Dictamen***) I a XXI. ... (***En términos del Dictamen***) XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación; XXIII a XXIV. ... (***En términos del Dictamen***) XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, **de las entidades federativas** y municipal;

XXVI a XXXVII. … (***En términos del Dictamen***)	XXVI a XXXVII. … (***En términos del Dictamen***)
Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas ~~estatales y del Distrito Federal~~, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.	**Artículo 89.** La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas **de las entidades federativas**, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.
Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades: **I. …** **II.** Convocar~~, dirigir, coordinar~~ y dar seguimiento a las sesiones que **realice** la **Junta de Gobierno**; **III. … a la XIV. … (en términos del dictamen)**	**Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:** **I. …** **II.** Convocar y dar seguimiento a las sesiones que **realice** la **Junta de Gobierno**; **III. … a la XIV. … (en términos del dictamen)**
Artículo 97. … I. … II. … III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal,	**Artículo 97.** … I. … II. … III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal,

~~estatal, del Distrito Federal~~ o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.	**de las entidades federativas** o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. ... ...
Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos ~~estatales o del Distrito Federal~~, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.	**Artículo 98.** Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos de las entidades federativas, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal. ... ...

Artículo 100. ...	**Artículo 100.** ...
I a III. ...	I a III. ...
IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, ~~estatales o del Distrito Federal~~ según la competencia;	IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva **o a las Comisiones de las entidades federativas** según la competencia;
V a XI. ...	V a XI. ...
...	...
Artículo 114. ...	**Artículo 114.** ...
I a V. ...	I a V. ...
VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones ~~estatales y del Distrito Federal~~, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;	VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones **de las entidades federativas**, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;
VII a XIII. ...	VII a XIII. ...

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal~~, a los estados y al Distrito Federal~~, en el ámbito de sus respectivas competencias: I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... IX. ...	**Artículo 117.** En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal **y a las entidades federativas**, en el ámbito de sus respectivas competencias: I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... IX. ...
Artículo 164. ... ... Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal, ~~entidades federativas o el Gobierno del Distrito Federal~~ no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.	**Artículo 164.** ... ... Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal o **en los gobiernos de las entidades federativas** no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

QUINTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.	**QUINTO.- Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años.** **En adelante, la designación del Comisionado Ejecutivo se realizará de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.**
... (En términos del Dictamen)	**... (En términos del Dictamen)**
... (En términos del Dictamen)	**... (En términos del Dictamen)**

Se adicionan:

Transitorios

DÉCIMO QUINTO. Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el Comisionado Ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

DÉCIMO SEXTO. Constituida la Asamblea Consultiva, deberá elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno dentro de los diez días siguientes.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

El suscrito, Senador **ARMANDO RÍOS PITER**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 207, 208, 209 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento en mi calidad de secretario de la Comisiónde Gobernación el siguiente **VOTO PARTICULAR** con relación a la totalidad de dictamen señalado al rubro, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la iniciativa presentada el 14 de abril de 2016 y a planteamientos que miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática han hecho llegar de manera oficial a quienes presiden las Comisiones Unidas de Dictamen y de la comisión de opinión, Gobernación, Justicia, Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Derechos Humanos, una serie de propuestas de modificación al dictamen que nos fue entregado para nuestro conocimiento y observaciones, sin embargo, todas las propuestas que formulamos, no fueron consideradas.

Propuse las siguientes modificaciones a los artículos:

a) 4, para incorporar la definición del derecho internacional humanitario sobre víctimas que otorga una protección más amplia,

b) 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131, y 150 para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado; aun cuando en tres artículos se incorpora ya la frase desplazamiento interno, pero no en el 6 que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

c) 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritajes independientes y ahora, no sólo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al adicionar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya en peritos nacionales capacitados. No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses: enfrentamiento científico como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fosas clandestina como en Tetelcingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo sistema de justicia acusatorio, se entregancuerpos equivocadas a sus familiares como en la explosión de Pemex y ahora, les están condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales buenos, no podrán tener el derecho de peritajes de calidad.

   Asimismo, presenté propuestas de modificaciones atodos artículos referidos a la estructura orgánica porque esta ley de las víctimas, para las víctimas y por las víctimas, que pasó un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui generis y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1, 17, 20, 73, 90, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales y no encontramos que deba incorporarse una junta de gobierno ni que sea obligado que la designación del comisionado presidente deba ser por el Ejecutivo federal.

Al contrario, en el artículo 5 de la ley de entidades paraestatales se señala que:

… organismos de estructura de descentralizado *que hubiere, se regirán* ***por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia,y que sólo*** *en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley* […] *Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de Vigilancia cuenten con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.*

De la misma manera en nuestra propuesta se plantearon cambios en los artículos:

- Artículo 84, adicionar derechos a la justicia restaurativa
- Artículo 85, integración de la CEAV, con un Consejo Directivo y un comisionado presidente, así como el procedimiento para su elección; además, se propuso considerar en ese artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley
- Artículo 86, se propuso; no quitar el candado de los dos años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo y una fracción V con un candado de perfil de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos
- Artículo 87, duración del cargo
- Artículo 88, facultades del Consejo Directivo

Consideramos que con la Junta de Gobierno y la designación presidencial que se aprobó en Comisiones Unidas, se está violentando el principio universal a la no progresividad en materia de derechos, las propuestas de los artículos 84 Ter, Quáter, Quinties, Sexies, Septies, del Proyecto de Dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno es un retroceso y significa regresar a un modelo superado como el deProvíctima que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso como una traición a las demandas del movimiento.

Se propusoque en los artículos 84 y 85 se regule el procedimiento de elección del comisionado presidente (integrante del Consejo Directivo que se propone) a través de ternas enviadas por el Ejecutivo y la elección por las dos terceras partes del Senado, como se hace actualmente.

En el 86, además de no apoyar lo que se propone en las fracciones IV y V del dictamen y además, incorporar el procedimiento para la revocación del mandato.

d) En el segundo párrafo del artículo 132, cuestionamos que se elimine la asignación fija en el Presupuesto de Egresos de la Federaciónal Fondo de Atención a Víctimas.

e) Por último, cuando se enviaron las observaciones cuestionamos el décimo quinto transitorio, ahora décimo cuarto transitorio que establece que:*si no hay comisión de víctimas en la entidad federativa, entonces se queda a cargo de la función el secretario General de Gobierno de la entidad*; este es un incentivo muy negativo para que no se avance en la creación de las comisiones locales, en este momento hay sólo diez comisiones de víctimas en las entidades federativas, a pesar de que se han "armonizado" en las 32 entidades federativas las leyes locales; este transitorio será suficiente para que no se cumpla con la creación de las comisiones locales, por lo que proponemos no incorporarlo en estos términos.

Presento esta intervención como mi voto particular en contra, porque, aunque reconozca que contiene elementos positivos, lo que le da sustento a un organismo que pueda lograr, eventualmente, su plena autonomía, ha sido lesionado. Esta Ley ha vencido por derecho propio todos los cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia, se han ganado amparos y se ha recibido reparación con base en esta ley y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes constitucionalmente ha controvertido, con base en sus facultades, a la Comisión Ejecutiva como organismo descentralizado no sectorizado sin una junta de gobierno ni designación presidencial de su presidente, por qué votar a favor,validaríamos un retroceso violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

Podremos escuchar argumentosde nuestros colegas legisladores y legisladoras de que no ha funcionado la Comisión, pero no reconocemos que estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos, fueron electos por nosotros y no somos capaces ni siquiera de criticarnos la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que la ley señala.Como Senado, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley nos señala y luego decimos que la ley no sirve. Parafraseando a Sor Juana, legisladores *necios que acusáis … sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.*

Es el mismo caso del Ejecutivo federal, al definir ternas que violentaban la ley, elaboraron un reglamento contrario a la Ley y sus mecanismos, y ahora dicen que no funciona una estructura que, desde el primer día, invadieron e intervinieron; con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación de este organismo que alguna vez intento tener independencia de quienes, con su acción u omisión, son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país. Por ello, no puedo votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular, de los derechos de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de víctimas para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 **y 73 fracción XXIX-X,** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

…

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. **Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.**

…

Artículo 5. …

Dignidad.- …

Buena fe.- …

Complementariedad.- …

Debida diligencia.- …

Enfoque diferencial y especializado.- …

Enfoque transformador.- …

Igualdad y no discriminación.- …

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- …

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- …

Mínimo existencial.- …

No criminalización.- …

Victimización secundaria.- …

Participación conjunta.- …

Progresividad y no regresividad.- …

Publicidad.- …

Rendición de cuentas.- …

Transparencia.- …

Trato preferente.- …

Artículo 6. …

I. Asesor Jurídico**:** Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas **adscritos a la Comisión Ejecutiva y** sus equivalentes en las entidades federativas;

II. …

III. Comisiones de víctimas: **Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México**;

IV. … a la VIII. …

VIII.- Desplazamiento interno: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado los límites de territorio nacional, o bien, personas o grupos de personas que hayan tenido que huir de México por los motivos previstos en la Ley de Refugiados y Protección complementaria. Es víctima de desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de situaciones de violencia, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida.

IX. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

IX. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;

XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVII.Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XVIII. Víctima: (…)

También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida.

XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito**, y**

XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XXII. …

Artículo 7. …

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, **por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable.**

(…)

I.- a XIX.- (…)

I. … a la XX. ..

XX.- A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; **en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo**

momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten;

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos **mayores, la población** indígena**y las personas en situación de desplazamiento interno**;

XXII. a la XXIX. …

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;**

XXXI. a la XXXIII. …

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV.Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente;

XXXV. La protección de las Víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley en términos la legislación aplicable, y

XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria,

XXXVI.Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta ley;

XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia;

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima, y

XXXVIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de **los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda,** de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos **que atenten contra la vida,** contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno forzado,** recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos **que atenten contra la vida, contra la** libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno,** recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

…

Las medidas de **ayuda inmediata**, ayuda, asistencia, atención, **rehabilitación** y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias,** a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas podrán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de

Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

(…)

(…)

Artículo 9. …
…

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para **superar su victimidad,** llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, **y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas.** Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

(…)

(…)

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. … a la III. …

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado **a solicitud**

de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. … a la XIII. …

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15. …

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, **perito independiente acreditado por la víctima con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas** o la persona que consideren.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Se deroga.

Artículo 21. …
…
…
…

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable**, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes **en la materia**, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, **así como peritajes independientes con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas,** con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. … a la VI. …

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

Artículo 28. …

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 31. La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias **correspondientes a los**

Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

Artículo 34. …

I. … a la VI. …

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I …

CAPÍTULO II

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o **en situación de desplazamiento** de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o **en situación de desplazamiento interno** por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. **Para ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá asignar de sus recursos presupuestales, una partida emergente.**

CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE **TRASLADO**

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial **para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno**. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito

o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración.** La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 61. ...

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona**;

II. … y III. …

VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen**;

VII. … y VIII. …

Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará untrato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas**, y a víctimas de desplazamiento interno.**

Artículo 64. …

I. … a la VIII. …

…

…

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

LaComisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda,expediránlos lineamientosrespectivos a efecto de quea la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán** el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) …

b) …

…

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización mensuales**, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones **en el ámbito de su competencia,** de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos **que ameriten prisión preventiva oficiosa o** en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, **daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad** o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un

deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, **cuando así lo determine la autoridad judicial.**

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo **o los Fondos estatales, según corresponda**, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación **a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda, tendrán la obligación de** exigir que el sentenciado restituya al Fondo **o a los fondos estatales** los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 79. …

Artículo 79. [...]

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

…

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una **Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas**, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las entidades federativas,** quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. **No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.**

Las Comisiones **de Víctimas** tienen la obligación de atender**, asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas **de las Entidades Federativas** tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva [...] de Atención a Víctimas cuando **no exista aún la comisión de víctimas en la entidad federativa correspondiente**; **si existiera y la víctima** no hubiere recibido respuesta dentro de los **quince** días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma **deficiente o** se hubiere negado **la misma.**

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva promoverá su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno forzado que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación.

Artículo 81. …

I.Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de **la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. … a la XV. …

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos**;**

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:

a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la víctima;

b) La obligación de las Comisiones de Víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal, y

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y

XVIII. Las demás que le otorg**ue** esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 83. …
…
…
…
…

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

…

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es **un organismo** con personalidad jurídica y patrimonio propios**; con** autonomía técnica, de gestión y **contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.**

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

En la ejecución de las funciones....

De la Comisión Ejecutiva …

A fin de garantizar el acceso …

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:

a) Gobernación quien la presidirá;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Educación Pública;

d) Salud;

II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y

III. El titular de la Comisión Ejecutiva.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

Artículo 84 Sexies. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y

V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.**

Artículo 86. Para ser **Comisionado Ejecutivo** se requiere:
I. …

II. …

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación;**

IV.Contar con título profesional, y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección **del Comisionado Ejecutivo,** deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cincoaños sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. … a la XIII. …

Artículo 88. […]

I. a XXXV. [...]

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;

II. Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;

III.- Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;

IV. Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;

V. Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

VI. Emitir recomendaciones al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley.

XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV. … a la XXIX. …

XXX. Se deroga.

XXXI. … a la XXXIV. …

XXXV. Hacer públicos los informes **anuales sobre el funcionamiento** del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como **sobre** el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia**;**

XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVII. **Las demás que se deriven de la presente Ley.**

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;

II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;

IV.- Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;

V.- Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo; y

VI.- Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;
b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y
c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo federal, por la comisión de víctimas local con cargo al fondo local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la comisión de víctimas local o se haya constituido el fondo local.

Artículo 90. …

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I.**Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;**

II.**Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;**

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:

I. …

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que **realice** la **Junta de Gobierno**;

III. …

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

V. … a la VIII. …

IX. Suscribir los convenios de colaboración**, coordinación o concertación** o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. …

XI. …

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva**;**

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva en términos de la legislación aplicable.

Artículo 96. …

…

El Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal**, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.**

Las **entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación, **y las entidades federativas** estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El **Comisionado Ejecutivo** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

…

Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. …a la III. …

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva, y

VIII. El Ministerio Público.

…

Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima **a que se refieren los artículos 4 y 110 de esta Ley,** tendrá como efecto:

II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad**,desplazamiento interno forzadoy** todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente **que no podrá ser invocado para negar o restringir la garantía del otorgamiento de los derechos reconocidos por esta Ley.**

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

I. … a la IX. …

X.- Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en términos de esta ley, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

…
…
…
…
…

Artículo 118. [...]

I. a VII. [...]

VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, **así como realizar medidas para la prevención y atención del desplazamiento interno y de la migración**;

IX. a XVIII. [...]

Artículo 125. …

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. **Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;**

II. …

III.Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento **jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.**

Artículo 125 bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

TÍTULO OCTAVO
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos **de Ayuda** y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, **siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas**.

…

Artículo 131.Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo**en los términos del Capítulo III del Título Quinto de esta Ley**, **el Pleno de la Comisión Ejecutiva en su papel de Comité Interdisciplinario Evaluador realizará** una evaluación integral **del**entorno familiar y social**de las víctimas** con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación; **en dicha evaluación se deberán considerar las condiciones extremas de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado y de desaparición.**

Artículo 132. …

I.Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, **y sin que pueda ser disminuido**.

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;

Artículo 132. [...]

I. a VIII. [...]

II. … a la VIII. …

…
…

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las **reglas de operación** para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, **en términos de lo establecido en el Reglamento,** el Comisionado Ejecutivo, **previo dictamen a que se refiere el artículo 93 fracción III** podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de los Recursos de Ayuda,** el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. **El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.**

Artículo 136. El Fondo será administrado por **una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de** la Comisión Ejecutiva **en su calidad de fideicomitente,** siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 138. El titular de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo, deberá:

I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo **se administren y ejerzan adecuadamente** a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley**;**

II. …

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno, y**

IV. …

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva **la** turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la **determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.**

Artículo 150. [...]

I. a III. [...]

IV. El número y la edad de los dependientes económicos**, [...]**

V. Las condiciones, en caso de desplazamiento interno forzado y migración, y

VI. Los recursos disponibles en el Fondo.

TITULO OCTAVO
CAPÍTULO I …
CAPÍTULO II …
CAPÍTULO III …
CAPÍTULO IV. …

CAPÍTULO V
De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa

Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos Estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de la Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 166. …

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a **solicitar a la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o** no pueda **contratar un abogado particular,** el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro**. En este caso,** la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal**.**

…
…

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

QUINTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octies, de la Ley.

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

OCTAVO.- Las erogaciones que, **en el ámbito de la federación** se generen **con motivo de** la entrada en vigor **del** presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales **en el ejercicio fiscal correspondiente.**

NOVENO. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

DÉCIMO. Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

DÉCIMO PRIMERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

DÉCIMO TERCERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y

fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

DECIMO CUARTO. En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

INACEPTABLE

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN:

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Ejecutiva en términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna.** El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva **y debe contemplar como mínimo los estándares protectores de esta Ley.**

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las demás que esta Ley señale.

[...]

[...]

[...]

Se traslada al artículo 79

Se traslada al artículo 79

…

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por **un Comisionado presidente y un Consejo Directivo conformado por seis víctimas y personas expertas en su atención.** El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública **y consulta nacionalcon los colectivos y organizaciones de víctimas,tres propuestas para la elección de la persona que habrá de cubrir el cargo de Comisionado presidente,** y tres propuestas por cada **miembro del Consejo Directivo,** a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

El proceso de selección de los comisionados deberá realizarse conforme el principio de máxima publicidad garantizado que en cada etapa del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de

selección en el Senado de la República, se publique la información en dos diarios de circulación nacional y se suba a la página web de la Secretaría de Gobernación.

Para garantizar que la Comisión Ejecutiva **representa a** colectivos de víctimas, especialistas y expertos que **hayan desempeñado una labor acreditable y comprobable en la atención a víctimas, las ternas que presente el Ejecutivo federal al Senado, deberán estar conformadas en los siguientes términos:**

I.Trespersonas provenientes del ámbito académico propuestas por instituciones de educación superior, con actividad acreditada de al menos cinco años en la investigación y docencia especializada en la atención a víctimas;

I.Trespersonas provenientes de colectivos de víctima**spropuestas** por organizaciones no gubernamentale**s** registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, **especializadas en la defensa de los derechos humanos,** con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco año**s**.

Para la elección de la persona que sea designada como Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva, la terna que envíe el Ejecutivo federal deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atención a víctimas, y acreditar haber sido postuladas por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

Para la elección **del Comisionado presidente y delos miembros del Consejo Directivo,** el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y **Derechos Humanos**, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

En **la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar** la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que los comisionados deberán proceder de diferentes Entidades Federativas y ser expertos o víctimas de distintos tipos de hechos victimizantes.**

Artículo 86. Para ser **Comisionado Presidente de la CEAV o miembro del Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva**, se requiere:

I. y II.- […]

III.Contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley **con una antigüedad del al menos siete años;**

NO SE ACEPTA PORQUE ESTE ES REQUISITO DE ORGANISMO PARAESTATAL Y QUIENES PUDIERAN OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO PUEDEN NO TENER TÍTULO, PERO SÍ EXPERIENCIA ACREDITATA EN EL TEMA. ADEMAS, MANTENEMOS EL CANDADO DE LOS DOS AÑOS, QUE SÓLO SE ACEPTARÍA QUITAR SI NOS ACEPTAN LA FRACCIÓN V DE NO HABER SIDO SEÑALADO EN RECOMENDACIONES…

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación**; y**

V.- No haber sido señalado en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por su relación directa con hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente.

En **la integración de la Comisión Ejecutiva**, el Ejecutivo**federal** y el Senado **están obligados a garantizar la aplicación del principio de enfoque diferencial y especializado,así como** representación de las diversas regiones geográficas del país **y** de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes, **por lo que sus integrantes deberán conformarse bajo un criterio de paridad de género, provenir de diferentes Entidades Federativas y haberse destacado en el ejercicio de diversas profesiones.**

Por lo que hace a las personas integrantes del Consejo Directivo, no podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ni participar en espacio consultivo en representación de sociedad civil derivado de otras leyes.

El Senado, a través de un procedimiento legislativo que inicia con una proposición de punto de acuerdo con toda la información respectiva adjunta, e involucra a las Comisiones Unidas que procesan la elección, podrá revocar el mandato de las personas que integran la Comisión Ejecutiva, como colectivo o de manera individual, cuando:

a) Tengan un subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual;

b) Incumplan con el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas en el Registro;

c) Nieguen a una víctima del delito o de violación de derechos humanos el apoyo con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley.

Si de esta negativa, la víctima pierde la vida, se podrá iniciar además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; y

d) Incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad.

El procedimiento para la revocación del mandato, previo análisis de la información, deberá seguir el trámite legislativo establecido en la normatividad del Senado; el dictamen respectivo deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días naturales.

I.- La Mesa Directiva del Senado turnará a las Comisiones Unidas competentes el punto de acuerdo respectivo:

II.- Las Comisiones Unidas analizarán la información que acompañe la proposición con punto de acuerdo y, de ser necesario, recabará más elementos que acrediten lo expresado en dicho punto de acuerdo;

III.- De encontrarse que se ha incurrido en alguno de los supuestos para la revocación del mandato, las Comisiones Unidas emitirán un dictamen conforme lo establece la normatividad aplicable, cumpliendo estrictamente el plazo legal que en ésta se señala.

Artículo 87. El presidente de la Comisión Ejecutiva durará en su encargo dos años, renovable por una ocasión y será elegido por **pleno del Consejo Directivo. Sus facultades serán de carácter administrativo, y para los efectos del cumplimiento del Título Quinto de la presente Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, y tendrá voto de calidad exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo.**

NUESTRA PROPUESTA PARA EL FONDO O QUE SE QUEDE EL TEXTO VIGENTE

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será **al menos** de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

II.- a VIII.- […]

[...]
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, **excepto si el subejercicio del Fondo supera el 60% del mismo.** La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

…
…

TRANSITORIOS

DECIMO CUARTO. - En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

NO SE ACEPTA ESTE ARTÍCULO.

Armando Ríos Piter
Senador de la República

Octubre 26 de 2016

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

Quienes suscriben, Armando Ríos Piter y Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 207, 208, 209 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos el siguiente **VOTO PARTICULAR** en CONTRA de la totalidad de dictamen señalado al rubro, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la iniciativa presentada el 14 de abril de 2016 y a planteamientos que miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática han hecho llegar de manera oficial a quienes presiden las Comisiones Unidas de Dictamen y de la comisión de opinión, Gobernación, Justicia, Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Derechos Humanos, una serie de propuestas de modificación al dictamen que nos fue entregado para nuestro conocimiento y observaciones, sin embargo, todas las propuestas que formulamos, no fueron consideradas.

Propuse las siguientes modificaciones a los artículos:

a) 4, para incorporar la definición del derecho internacional humanitario sobre víctimas que otorga una protección más amplia,

b) 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131, y 150 para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado; aun cuando en tres artículos se incorpora ya la frase desplazamiento interno, pero no en el 6 que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

c) 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritajes independientes y ahora, no sólo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al adicionar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya en peritos nacionales capacitados. No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses: enfrentamiento científico como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fosas clandestina como en Tetelcingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo sistema de justicia acusatorio, se entregancuerpos equivocadas a sus familiares como en la explosión de Pemex y ahora, les están condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales buenos, no podrán tener el derecho de peritajes de calidad.

Asimismo, presenté propuestas de modificaciones atodos artículos referidos a la estructura orgánica porque esta ley de las víctimas, para las víctimas y por las víctimas, que pasó un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui generis y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1, 17, 20, 73, 90, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales y no encontramos que deba incorporarse una junta de gobierno ni que sea obligado que la designación del comisionado presidente deba ser por el Ejecutivo federal.

Al contrario, en el artículo 5 de la ley de entidades paraestatales se señala que:

… organismos de estructura de descentralizado *que hubiere, se regirán* ***por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia,y que sólo*** *en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley* […] *Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de Vigilancia cuenten con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.*

De la misma manera en nuestra propuesta se plantearon cambios en los artículos:

- Artículo 84, adicionar derechos a la justicia restaurativa
- Artículo 85, integración de la CEAV, con un Consejo Directivo y un comisionado presidente, así como el procedimiento para su elección; además, se propuso considerar en ese artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley
- Artículo 86, se propuso; no quitar el candado de los dos años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo y una fracción V con un candado de perfil de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos
- Artículo 87, duración del cargo
- Artículo 88, facultades del Consejo Directivo

Consideramos que con la Junta de Gobierno y la designación presidencial que se aprobó en Comisiones Unidas, se está violentando el principio universal a la no progresividad en materia de derechos, las

propuestas de los artículos 84 Ter, Quáter, Quinties, Sexies, Septies, del Proyecto de Dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno es un retroceso y significa regresar a un modelo superado como el de Províctima que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso como una traición a las demandas del movimiento.

Se propusoque en los artículos 84 y 85 se regule el procedimiento de elección del comisionado presidente (integrante del Consejo Directivo que se propone) a través de ternas enviadas por el Ejecutivo y la elección por las dos terceras partes del Senado, como se hace actualmente.

En el 86, además de no apoyar lo que se propone en las fracciones IV y V del dictamen y además, incorporar el procedimiento para la revocación del mandato.

d) En el segundo párrafo del artículo 132, cuestionamos que se elimine la asignación fija en el Presupuesto de Egresos de la Federaciónal Fondo de Atención a Víctimas.

e) Por último, cuando se enviaron las observaciones cuestionamos el décimo quinto transitorio, ahora décimo cuarto transitorio que establece que:*si no hay comisión de víctimas en la entidad federativa, entonces se queda a cargo de la función el secretario General de Gobierno de la entidad*; este es un incentivo muy negativo para que no se avance en la creación de las comisiones locales, en este momento hay sólo diez comisiones de víctimas en las entidades federativas, a pesar de que se han “armonizado” en las 32 entidades federativas las leyes locales; este transitorio será suficiente para que no se cumpla con la creación de las comisiones locales, por lo que proponemos no incorporarlo en estos términos.

Presento esta intervención como mi voto particular en contra, porque, aunque reconozca que contiene elementos positivos, lo que le da sustento a un organismo que pueda lograr, eventualmente, su plena autonomía, ha sido lesionado. Esta Ley ha vencido por derecho propio todos los cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia, se han ganado amparos y se ha recibido reparación con base en esta ley y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes constitucionalmente ha controvertido, con base en sus facultades, a la Comisión Ejecutiva como organismo descentralizado no sectorizado sin una junta de gobierno ni designación presidencial de su presidente, por qué votar a favor,validaríamos un retroceso violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

Podremos escuchar argumentosde nuestros colegas legisladores y legisladoras de que no ha funcionado la Comisión, pero no reconocemos que estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos, fueron electos por nosotros y no somos capaces ni siquiera de criticarnos la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que la ley señala. Como Senado, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley nos señala y luego decimos que la ley no sirve.

Es el mismo caso del Ejecutivo federal, al definir ternas que violentaban la ley, elaboraron un reglamento contrario a la Ley y sus mecanismos, y ahora dicen que no funciona una estructura que, desde el primer día, invadieron e intervinieron; con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación de este organismo que alguna vez intento tener independencia de quienes, con su acción u omisión, son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país. Por ello, no puedo votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular, de los derechos de las víctimas.

Consideramos fundamental para garantizar una mayor autonomía y legitimidad del responsable del ejercicio de los recursos de atención de las victimas consideramos que el dictamen debe modificarse en:

a) La Comisión Ejecutiva debe precisarse que sea un organismo descentralizado.

b) El nombramiento de Comisionado Ejecutivo debe ser exclusivo del Senado de la República **previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por** el voto de las dos terceras partes **de los presentes en sesión ordinaria.**

c) Eliminar el Quinto Transitorio que establece como nombramiento del Comisionado Ejecutivo al Poder Ejecutivo, de acuerdo al:

"QUINTO TRANSITORIO. *Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley. Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013. En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.*

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman el artículo 84, 85 y quinto transitorio de la Ley General de Víctimas para quedar como sigue:

Dice	Debe Decir
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es ·un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.**	**Artículo 84.** La Comisión Ejecutiva es ·un organismo **descentralizado** con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión **y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.**
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por** el voto de las dos terceras partes **de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la**	**Artículo 85.** La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo nombrado por el Senado de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por** el voto de las dos terceras partes **de los presentes en sesión ordinaria.**

República.	
QUINTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley. Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013. En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.	**Quinto.** Se elimina. Y se ajustan los subsecuentes.

Suscriben

Armando Ríos Piter Iris Vianey Mendoza Mendoza

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Octubre 27 de 2016.

RAZONAMIENTO DEL VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL PROYECTO DE DICTAMEN DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

El día de ayer, supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa de la zona centro del Estado de Guerrero que se suman a las 170 que ha habido desde 2013 a la fecha; el día 1 de noviembre, mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, jóvenes que iban en su vehículo del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte; todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país organizan brigadas de búsqueda de sus seres queridos en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas.

Muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares, miles de desplazados forzados y así podemos sumar las tragedias y atrocidades, y nosotros legisladores y legisladoras, estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de las violencias sin el aval de las víctimas y retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos ya adquiridos por las víctimas.

Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar a estos comisionados las enviaron de la Secretaría de Gobernación y que nosotros los elegimos, por lo que somos corresponsables de su no funcionamiento y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del Reglamento de la Ley es una facultad exclusiva de la Secretaría de gobernación y que hicieron un reglamento contrario a la ley y precisamente para que no pudiera funcionar. Con tan sólo modificar el reglamento podría funcionar la ley.

Voy a votar en contra de esta reforma porque, independientemente de reconocer que hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se

ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo la adenda que se conoció apenas:

Como ya expresamos en el voto particular en contra, en los artículos 12 y 15, condicionan el pago de peritos independientes o internacionales a que haya personal nacional capacitado. No hemos aprendido, y varios de los que hoy van a votar a favor de este dictamen, se suben a tribuna a saludar y elogiar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo un estudio de las condiciones desastrosas en que se encuentra la actividad pericial en nuestro país, y tenemos las inhumaciones irregulares en las fosas de Tetelcingo y la entrega equivocada de cadáveres como sucedió en la explosión de Pemex de 2013 y ahora le vamos a quitar a las víctimas, que necesitan peritos de calidad y no tienen cómo pagarlos, el derecho a que sean cubiertos esos gastos por los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva.

No se reconoce con plenitud el fenómeno del desplazamiento interno forzado como una tragedia que debe ser atendida a profundidad, y no conforme con eso en el nuevo artículo 79 último párrafo le agregan que los desplazados serán registrados "cuando así proceda"

En el segundo párrafo del artículo 132, eliminan la obligación de designar recursos fijos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al fondo de atención a víctimas, y nuevamente condicionan a que haya menos del 0.014% de recursos para que, suponemos que será a través de transferencias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, se le otorguen recursos para atender a las víctimas. Pésimo mensaje de que las víctimas no son importantes, al grado que se le puede quitar su presupuesto a su atención.

Sobre todo, se violenta la relativa independencia de la comisión ejecutiva al instaurar una Junta de Gobierno presidida por la secretaría de Gobernación y aunque ya modificaron el artículo 85 para que la designación se mantenga por el senado a partir de una terna enviada por el ejecutivo federal, al mantener la

junta de gobierno se mantiene la interferencia e intromisión de la secretaria de gobernación en la estructura orgánica, porque será la secretaría de gobernación, la que presidirá la Junta.

En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del Comisionado Ejecutivo y la Junta de Gobierno, se planteó que así lo establecía el esquema de organismo descentralizado en la ley de paraestatrales, por lo que iba en paquete; ahora saludamos que se elimine la designación presidencial, pero nos preguntamos, por qué se insiste en mantener la junta de gobierno.

Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios:

Quinto transitorio, por única vez, será el presidente de la república el que designe al comisionado presidente por tres años (designación transexenal), le agregan un **décimo quinto transitorio** para que, por única vez, el comisionado presidente que sea designado por el presidente de la República, designe a las personas que conformaran la Asamblea Consultiva conformada por expertos, víctimas y organizaciones de sociedad civil, pero sigue habiendo una Junta de Gobierno presidida por Segob, por el la subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de la reforma es:

Por los próximos dos años, el presidente de la CEAV será el que decida el gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que defina el presidente de la CEAV designado por el gobierno federal y la Junta de Gobierno será presidida por la Secretaría de Gobernación.

El Décimo Quinto Transitorio, es un incentivo perverso para que las entidades federativas, pues deja a las Secretarías de Gobierno la función de atención a víctimas, mientras se crean las Comisiones locales. Con esto ya no habrá necesidad de crearlas.

Por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación de la estructura de atención a víctimas que construimos originalmente como una instancia independiente para proteger los derechos de las víctimas, pues si en verdad inspirara esta reforma la mejora de la ley y de los procedimientos, bastaría que la secretaría de gobernación modificara el Reglamento de la Ley General de Víctimas y le regresara a la Comisión Ejecutiva las funciones y facultades que la Ley le otorga, y nosotros, Senado, cumpliríamos con el nombramiento de los cuatro comisionados faltantes y ahora sí cumpliríamos con los perfiles que la propia ley les otorga.

Pero no será así, porque el objetivo real es que la Secretaría de Gobernación tenga el pleno control de la Comisión Ejecutiva, y eso es lo que vamos a convalidar con esta reforma a la Ley General de Víctimas que, por cierto, no lleva el aval de los colectivos de víctimas, ni de los expertos en el tema, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas.

Por todo ello, voy a votar en contra y, además, porque estoy convencida de que la gravísima situación humanitaria que se vive en nuestro país, con miles de víctimas merece, como lo han dicho los colectivos de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los expertos que están rechazando esta reforma, una legislación con los mayores niveles de independencia y con las víctimas como eje central de la reforma, y no es el caso.

Me hago eco y suscribo el comunicado llamado, reforma a la Ley de Víctimas: acuerdo político que desampara a las víctimas, firmado por 61 organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y expertos, que pido se integre a mi posicionamiento.

Por una reforma a la ley de víctimas con, por y para las víctimas, votaré en contra de esta reforma.

Reforma a Ley de Víctimas: acuerdo político que desampara a las víctimas

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.- La reforma a la Ley General de Víctimas avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos el martes 25 de octubre, es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México.

Si bien la reforma se propone reducir en parte la estructura y los procesos burocráticos que impedían por completo el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, es sumamente preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político. En particular por los puntos a continuación:

1. Las Comisiones del Senado que avalaron el dictamen apoyaron un acuerdo político –tal como lo manifestaron en la sesión– para que el Presidente designe al titular del organismo (una primera vez por un periodo de tres años). Esta decisión, además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que hemos acompañado el proceso de reforma. Adicionalmente es preocupante que no se incluyó la cláusula propuesta por diversos colectivos de víctimas y organizaciones, de excluir en el proceso de selección como candidatos/as a quienes han venido desempeñando cargos de comisionados y comisionadas, toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años y con suficiente evidencia no estar a la altura de la tragedia que vive México.

2. La CEAV es un órgano operado políticamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la reforma consolida esta condición porque tendrá a la cabeza una Junta presidida por la misma Secretaría y conformada en su mayoría por autoridades (cuatro secretarios de Estado y el presidente de la CEAV, designado por el Ejecutivo Federal), sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la materia, lo cual deja a éstos sin la suficiente capacidad para vigilar y monitorear su funcionamiento y proponer acciones que favorezcan la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la Ley.

3. Las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma. No sólo hubo una negativa expresa para incluir

la definición de este fenómeno y su característica de *forzado* en el articulado aprobado, sino que persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal.

4. Pese a que insistimos en incluir un proceso abierto, democrático y participativo en la construcción del reglamento interno de funcionamiento, esta solicitud fue, igualmente, desconocida. La participación en este proceso se sustenta por el conocimiento que tienen los colectivos y organizaciones, las necesidades de mejoras internas en cuanto a la estructura, los perfiles de sus empleados, el proceso de contratación y la revisión de los modelos de atención integral que han sido aprobados por el pleno saliente, entre otras consideraciones.

5. El Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año sino que será la Secretaría de Hacienda quien asigne los recursos "siempre y cuando" haya menos de un porcentaje determinado. Además, se limita a que víctimas recurran a peritos independientes o internacionales sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado.

Las consideraciones expresadas, minimizan el objetivo de la reforma aprobada. El poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie. De hecho, es un retroceso respecto a los controles que la Ley vigente tiene respecto a la designación y estructura. Las víctimas, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto merecen más que esto y la crisis de derechos humanos instalada en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida. Llamamos con urgencia al Pleno del Senado de la República y a la Cámara de Diputados a atender los puntos antes señalados.

FIRMAN

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COLECTIVOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

1. Alianza Américas
2. ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
3. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

4. Asistencia Legal por los Derechos Humanos
5. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
6. Cauce Ciudadano
7. Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
8. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
9. Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
10. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
11. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
12. Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón"
13. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
14. Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C.
15. Colectivo Colibrí
16. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
17. Colectivo de mujeres desplazadas internamente de San Juan Copala
18. Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba - Córdoba
19. Colectivo Solecito - Veracruz
20. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
21. Comité de Familiares y amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
22. Desaparecidos de El Fuerte
23. Desaparecidos Justicia A. C Querétaro
24. Designaciones Públicas
25. Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
26. Enjambre Digital
27. Enlaces Xalapa
28. Justicia para Nuestras Hijas A.C.
29. Familia Ponce Ríos desplazada internamente
30. Familiares en Búsqueda "María Herrera", Poza Rica, Puebla, Morelos, D.F, Xalapa
31. Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos
32. Familias Unidas Piedras Negras
33. Frontera con Justicia A.C. [Casa del Migrante de Saltillo]
34. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
35. Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
36. Grupo de Búsqueda de Fosas Clandestinas
37. Grupo VIDA de Torreón
38. Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

39. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración INEDIM
40. Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
41. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
42. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
43. Instituto para la Seguridad y la Democracia INSYDE
44. Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), A.C.
45. Movimiento Migrante Mesoamericano
46. Red de Enlaces Nacionales
47. Red por los derechos de la infancia en México, REDIM
48. Red Retoño
49. Reverdeser Colectivo
50. Scalabrinianas SMR
51. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
52. Taller de Desarrollo Comunitario A.C
53. Todos Ciudadanas A.C.
54. Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos San Luis Potosí
55. Unión de Madres y Familiares Desaparecidos de Sinaloa Años 70
56. WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

ACADÉMICAS/OS, EXPERTOS/AS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS A TÍTULO INDIVIDUAL

57. Brenda Valdés Corona
58. Carlos Ríos Espinosa
59. Carolina Robledo Silvestre
60. Claudia Erika Zenteno Zaldívar
61. Defensora de los Derechos Humanos desplazada internamente del estado de Sinaloa
62. Ina Zoon
63. Jacobo Dayán
64. Jesús Robles Maloof
65. Laura Rubio
66. Layda Negrete
67. Leticia Calderón Chelius
68. Maite Azuela
69. Séverine Durin
70. Silvano Cantú

Posicionameinto del PVEM respecto a dictamen de reformas a la Ley General de Víctimas.

Con su venia Señor Presidente.

Buenas tardes senadoras y senadores.

El dictamen que en este momento analizamos reforma la Ley General de Víctimas.

Es el resultado de someter a estudio más de 10 iniciativas [12] de diversos senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios.

Concentra el trabajo de muchas horas de trabajo, dentro y fuera de este Senado. Refleja dedicación y empeño de los Presidentes de las Comisiones, senadores integrantes y equipo técnico.

Recaba y da voz a víctimas y familiares.

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del año 2008, estableció en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I [primera], ***la reparación del daño,*** como uno de sus principios generales.

Se otorgó a la víctima la facultad de solicitar directamente la reparación del daño. Y reconoció expresamente los derechos de la víctima u ofendido.

En ese momento se cambio el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia.

Dejo de ser un elemento pasivo y se transformó en un elemento activo, imprescindible para la investigación de los delitos, garantía de sus derechos y fortalecimiento de las instituciones de justicia.

El presente dictamen continúa en esta línea de protección y reconocimiento de la personalidad de la víctima y sus derechos.

Actualiza el marco legislativo y realiza adecuaciones necesarias que derivan de la experiencia y testimonio de los directamente involucrados en el proceso.

Son logros de este dictamen:

1. La inclusión del interés superior de la niñez.

2. Creación de las Comisiones de Víctimas para los Estados y la Ciudad de México.

3. Establecimiento de un fondo estatal en cada entidad federativa para la atención a las víctimas.

5. Contempla la atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento.

6. E institiye un servicio profesional de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones de las personas que trabajan en la institución.

Quiero destacar un elemento de suma importancia en este dictamen. Con las reformas a la Ley General de Víctimas se reconoce como grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos a las niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas discapacitadas, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno

Esto deriva de su exposición a mayores factores de riesgo. Para ellas se prevé un enfoque diferencial.

A estos grupos expuestos se les garantiza el derecho a ser consideradas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular sus principales afectaciones y consecuencias.

Adicionalmente, las políticas y acciones establecidas en la Ley tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios.

En estos casos se tomarán las medidas para superar esta condición particularmente en aquellos casos que las víctimas seas niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o víctimas de desplazamiento interno.

Otro tema de gran relevancia y especial atención, lo constituyó el fondo de atención a víctimas.

Hoy, a tres años de estar en operación, la Ley General de Víctimas requiere de modificaciones urgentes para que la protección plasmada en letra sea real y personas de carne y hueso, víctimas de delitos, puedan acceder a los derechos que les corresponden.

Compañeras y compañeros senadores, dictamenes como éste, ameritan que todos estemos de acuerdo.

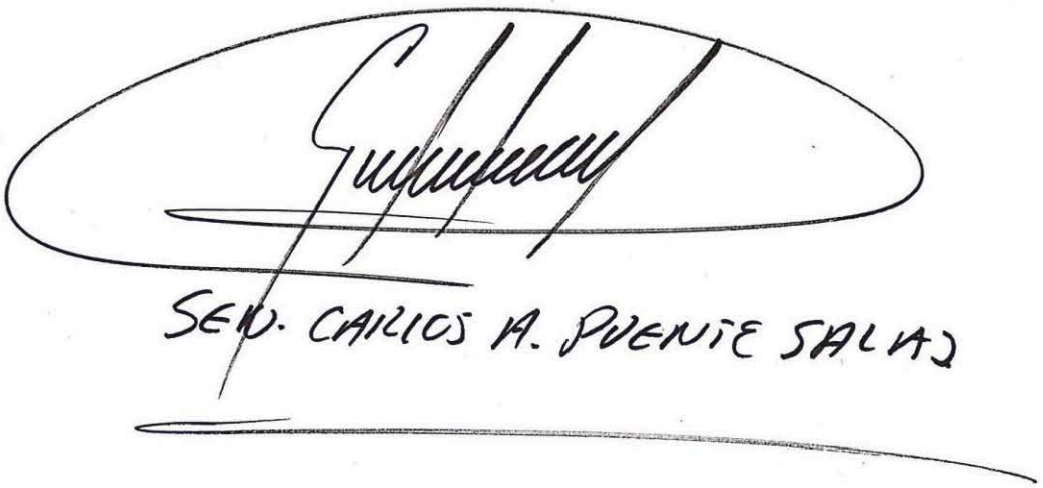
Dificilmente alguien se manifestará en contra de las víctimas y a favor de su revictimización por el sistema.

Los exhorto a que apoyemos este dictamen y no esperemos más tiempo. Este dictamen es ejemplo de que todas las leyes son perfectibles.

Pero hoy es necesario cambiar inmediatamente las fallas que ya hemos identificado.

El Partido Verde se expresa a favor de este Dictamen y los exhorta con respeto a que nos sumemos al trabajo para eficientar la impartición de justicia y la protección del inocente.

Por su atención, muchas gracias.



DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO

Senador por el Estado de Sinaloa

México, D.F. a 4 de noviembre de 2016

Posicionamiento al **DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.**

Mi voto es a favor; de generar desde el poder legislativo las herramientas necesarias para garantizar los derechos humanos de los mexicanos, así como también permitir una pluraridad de ideas que refleje las posturas y necesidades de cada una de las áreas afectadas ante los continuos episodios de violencia que existen en el país.

A través de este dictamen, se busca una mayor aplicación de Ley General de Víctimas, así como también transparentar las acciones necesaroas para cumplir con la acreditación de la calidad de víctima en los momentos y condiciones que se realiza ésta ante las autoridades obligadas por la ley; no obstante, se indican las penalizaciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con los derechos que esta Ley otorga a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Debido a los cambios sociales ocasionados por los índices de delicuencia y violación de derechos presentados en los últimos años, con estas reformas se podrá garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas como resultado de que sus victimizantes hubieran fallecido o se encuentren desaparecidas. Asismismo, derivado del crimen organizado en distintas regiones del país, se otorgarán derechos a las víctimas de desplazamiento interno forzado.

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios

El dictamen señala que, a tres años de la publicación de la Ley General, sigue siendo ineficiente la operación del Fondo de Ayuda, para lo cual se consideró oportuno flexibilizar los mecanismos de acceso a este mecanismo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos. También se propone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, y que será el encargado de designar a los responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

De esta manera, dentro de los principales puntos considerados en este dictamen se encuentran:

-Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

-Generar un Interés superior en los derechos humanos de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios

-Todas las políticas públicas que sean implementadas deberán contar un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta ~ey le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

-Las garantías establecidas en la Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

-Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse.

-Se podrán promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, reitero mi apoyo a este Dictamen que tiene la intención de garantizar mejores condiciones de vida los mexicanos, sobretodo aquellos que son más vulnerables

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios

ante temas de delicuencia organizada, inseguridad, etc; así como también de crear compromisos entre las instituciones para salvaguardar los derechos humanos y hacer más eficiente y fácil la aplicación de estos principios para los ciudadanos afectados. Aún es necesario seguir trabajando en este tema, sin embargo este dictamen es un esfuerzo para buscar mejorar las condiciones de las víctimas.

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios



POSICIONAMIENTO SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

DICTAMEN SOBRE LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Con su venia, Presidente.

La justicia es uno de los valores que debemos reposicionar como eje rector de la salvaguarda de todos los mexicanos y por ende de nuestra nación.

En 2008, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, se estableció como punto fundamental para la protección integral de las personas, **el principio general de reparación del daño a la víctima,** a la par de reconocer diversos derechos de las víctimas u ofendidos.

Posteriormente, para dar la estructura jurídica necesaria al principio constitucional, en 2013 se expidió la Ley General de Víctimas, que tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia instrumentando efectivamente los de derechos humanos.

Sin lugar a dudas, la Ley General de Víctimas se ha convertido en una herramienta trascendental para coordinar las acciones que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

Este ordenamiento permitió constituir el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con un enfoque humanista y progresista, **privilegiando los derechos humanos por encima de todo**, generando mecanismos efectivos de acceso a la justicia.

La vida diaria y la perseverante evolución de la sociedad obliga al legislador a mantener una constante vigilancia de las necesidades sociales; hoy es necesario ajustar la Ley General de Víctimas para optimizar sus mandatos y hacer efectivo el objeto que le dio vida.

En este sentido, el dictamen que se presenta ante ustedes ha sido enriquecido con diversas iniciativas de los distintos Grupos Parlamentarios; de las cuales destacan grandes aportaciones que debemos integrar a la Ley General de Víctimas para poder hacer efectiva la garantía constitucional de los derechos humanos.

Como parte de la tendencia nacional para mantener uniformidad y homogeneizar los mecanismos de protección a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá la facultad de

atraer los casos del fuero local, que es precisamente, donde recaen la mayoría de los delitos cometidos.

Asimismo, será reestructurada para **optimizar sus decisiones** y permitir que las acciones sean más ágiles, operativas y cercanas a la gente; es momento de hacer que esto **sea parte de nuestra población**, que no se sienta como algo ajeno.

Por lo que también se privilegia la **participación de la sociedad civil** que podrá formular, instrumentar, controlas y sobre todo, evaluar, las política públicas en materia de atención de víctimas.

Esto es un paso muy importante para socializar un problema tan grave, **permitiendo que la sociedad civil sea parte de la solución [redacted].**

Es muy importante señalar que la incorporación del **principio del interés superior de la niñez** da cabida a la protección de uno de los grupos más vulnerables y que más resiente el objeto de la norma.

Con estas reformas estaremos atendiendo las **principales observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,** con la finalidad de fortalecer las instituciones de justicia y la instrumentación de los derechos humanos.

Considerando estos aportes, los Senadores del Partido Verde votaremos a favor del dictamen, ya que impulsará diversas mejoras en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para lograr una atención más efectiva y coordinada de las víctimas.

Este es un gran paso para **poder consolidar efectivamente el respeto a los derechos humanos** y sobre todo la **protección de aquellos que han sido víctimas**, permitiendo que nos acerquemos un poco más a la justicia real y atendamos, consecuentemente, a la dignidad humana que cada uno merece.

Gracias por su atención.

Es cuanto, Presidente.

LÍNEAS SOBRE EL DICTAMEN QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

- El Senado de la República, **es respetuoso de las aportaciones y manifestaciones de la sociedad civil organizada**, cuyo **papel** es **crucial para la formulación, instrumentación, control y evaluación** de las políticas públicas en los **temas de interés general**, como el que nos atañe.

- Estamos ante un **producto legislativo integral** que comprende el **trabajo de diversos legisladores** de distintos Grupos Parlamentarios, así como **de la sociedad civil organizada**.

- La Ley **responde al compromiso** permanente de **salvaguardar los derechos humanos y al contexto** en el que nos encontramos **inmersos**.

- Los **cambios** propuestos están encaminados a **brindar una efectiva atención a las víctimas del delito**, garantizando la **protección y reparación del daño**, eje rector del nuevo modelo de justicia penal que rige en nuestro país.

- Es **importante precisar** que como se refiere en el dictamen, **la Ley se caracteriza por su visión humanista y progresista**, además de estar en **armonía con los estándares internacionales** en materia de derechos humanos y **colocar en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas**.

- Con los cambios propuestos, se busca terminar **con aspectos burocráticos e inequitativos**, al **flexibilizar** los mecanismos de **acceso al Fondo de Atención Víctimas** y, **fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación** que sean **necesarias y urgentes** para subsanar las **necesidades diarias de las víctimas**.

- Aunado a lo anterior, se establece que **la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas** y las **respectivas en las entidades** federativas, tendrán que **expedir los lineamientos para que la víctima no tenga mayores cargas de comprobación**, con lo cual se **evita su re-victimización**.

- En el dictamen **se ha definido como recursos de ayuda, a diversos gastos, como son alimentación, hospedaje, trasportación,** entre otros, que deben ser concebidos como **gastos operativos ordinarios para que las víctimas** puedan **obtener** una **atención inmediata, adecuada y efectiva.**

RAZONAMIENTO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO DE VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

La desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes, la tortura, y todos aquellos hechos aterradores que vienen ocurriendo en México en la última década, nos obligan hoy a hacer una

reflexión sobre las leyes y reformas que una sociedad castigada y dolida necesita para restablecer en Estado de derecho y para enfrentar las consecuencias de delitos de lesa humanidad y que debilitan al máximo los derechos humanos en México.

En la búsqueda de alternativas para revertir esta situación, las víctimas, las organizaciones de familiares de víctimas y una sociedad movilizada e indignada, son ya la parte fundamental de este proceso. A ellas debemos, y no al

Gobierno Federal, una serie de propuestas valiosísimas para modificar y de alguna manera detener esta inercia de muerte y destrucción.

Recordemos que desde el año 2006 se comenzó a implementar una estrategia centrada en el incremento de las fuerzas policiacas y en la participación de fuerzas militares en las tareas de seguridad pública. A 10 años de iniciada esta estrategia, los resultados en la recuperación por la paz son inconsistentes.

En Michoacán hemos padecido esta tragedia del desplome de la seguridad humana y hemos vivido en los últimos años una grave situación en materia de violación a los derechos humanos; con el resultado también de miles de víctimas, desplazados y ciudadanos en situación absoluta de indefensión. Los asesinatos en Apatzingán, Michoacán, del 6 de enero de 2015; y las ejecuciones deTanhuato, también en Michoacán, el 22 de mayo de 2015, sumados a los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de

México, el 30 de junio de 2014; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, septiembre 2014, son las violaciones y crímenes que hicieron de México el país de la impunidad, causando una indignación a nivel internacional y una presión de organismos internacionales para que el Gobierno de la República atendiera de manera inmediata estas violaciones para garantizar su no repetición.

Sin embargo, no ha sido así. Seguimos con un elevado número de víctimas directas, indirectas y potenciales, por la comisión de delitos y de violaciones a los derechos humanos, y quienes en un gran número no solo no pueden acceder a la reparación integral de los daños que se les ha ocasionado, además, sufren de múltiples violaciones de otros derechos, como al debido proceso, acceso a la justicia, acceso a la verdad, seguridad jurídica, a una justicia pronta, a la

protección a su patrimonio, dignidad, integridad y vida, entre otros.

Estas situaciones fueron las que llevaron a muchas víctimas a organizarse, para solicitar e impulsar cambios en el marco jurídico, en las políticas públicas y en las actuaciones de las autoridades. Han sido años de lucha, en los que el dolor y la esperanza de contribuir en el cambio de una realidad de criminalidad creciente que les arrebató a sus seres queridos, y a otros más su integridad física o

psíquica, es lo que los ha mantenido en pie.

Este es el origen de la Ley General de Víctimas y también de las propuestas de reforma como la que hoy discutimos, a fin de generar condiciones de una verdadera y eficaz asistencia a las víctimas de delitos con estricto apego a sus derechos humanos, evitando en todo tiempo la re-victimatización.

Aún así, reconozco que este dictamen ha incorporado modificaciones sustantivas

en beneficio de las víctimas, destaco algunas:

1. Las medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, serán más oportunas y rápidas de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante.

2. La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda o de reparación del daño, cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en

caso de no contar con disponibilidad de recursos.

En lo que no estoy de acuerdo es en que ésta Comisión Estatal deba reintegrar en forma directa o descontarlo de las transferencias federales el monto de lo subsidiado. De igual forma manifiesto mi desacuerdo en el porcentaje de recursos que conforman el fondo nacional y el transferido a las entidades federativas para integrar el fondo, ya que es de conocimiento de todos que el mayor porcentaje de víctimas las tenemos en el

fuero común, que los estados cuentan con una crisis financiera y que los problemas de inseguridad que se viven en lo local son un reflejo de la crisis económica y financiera que vive el país, de la falta de empleo, del empleo precario, de los bajos salarios, de la falta de oportunidades para estudiar y de la baja calidad educativa, así como del consumo de drogas, entre otras, la incidencia delictiva es un problema multifactorial y no podemos cargar la

mayor responsabilidad a las autoridades estatales.

Manifiesto mi voto en contra de este dictamen, por la forma de procesar legislativamente el tema. Un tema tan sensible, de gran trascendencia en el ámbito social y jurídico, dejó fuera a las víctimas mismas, a los principales protagonistas que iniciaron este proceso de legislación y de reforma, lo que también contraviene la recomendación número 32 hecha al Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos, que exhorta a: "Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas".

Asimismo, voto en contra por haber generado un dictamen acotado y por los aspectos de manejo de porcentajes de

recursos que integran el fondo, así como por el manejo que se le da al apoyo subsidiario de medidas de ayuda y reparación del daño que otorga la Comisión Ejecutiva a las comisiones de las entidades. Además, por la forma en que se elegiría al Presidente de la Comisión y se integraría la junta de gobierno, burocratizándolo sin ciudadanizarlo, en este aspecto, me uno a las manifestaciones públicas de las organizaciones de la sociedad civil organizada, en el sentido de que no debe

debilitarse el principio de independencia de un órgano encargado de hacer cumplir un derecho humano fundamental, como es el de una reparación integral del daño para víctimas del delito y derechos humanos.

Por estas razones mi voto será en contra.

Muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

INTERVENCION PARA LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

4 DE NOVIEMBRE 2016

Compañeras y compañeros Senadores,

Hoy discutimos la reforma a la Ley General de Víctimas, con ella ponemos al día este ordenamiento jurídico para responder a las necesidades actuales y buscamos resarcir el daño causado por la violencia en nuestro país.

Mis compañeras y compañeros Senadores han detallado los alcances y beneficios de esta reforma, cuya trascendencia no deja lugar a dudas. Pero quiero referirme a un tema específico que ha quedado contemplado en la misma: el interés superior de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.

Ser víctima del delito y la violencia no es una decisión voluntaria. Todos podemos ser víctimas, y por ello, todos debemos tener el derecho a la atención, auxilio y ayuda. Pero las niñas, niños y adolescentes merecen nuestra especial atención.

En este sentido, el Dictamen que nos ocupa amplía el espectro de grupos en situación de vulnerabilidad, y armoniza la Ley de Víctimas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al incorporar el interés superior de la niñez, como principio rector.

Coincidimos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la imposibilidad de medir la verdadera magnitud de la violencia contra los niños y niñas.

Existe una carencia de datos sobre el número exacto de víctimas porque muchos casos se mantienen en secreto y no quedan denunciados.

Sin embargo, este organismo estima que entre 500 y mil 500 millones de niños en el mundo experimentan la violencia anualmente.

La mayor parte de los actos de violencia contra los niños los cometen personas que éstos conocen y en quienes deberían poder confiar e ir en busca de protección y apoyo, como progenitores, padrastros o parejas de los progenitores, compañeros de clase y profesores, por mencionar algunos.

Existen grupos de niñas, niños y adolescentes que son particularmente vulnerables a la violencia, incluidos niños con discapacidades, niños pertenecientes a minorías, niños que viven en las calles, adolescentes en conflicto con la ley, y niños refugiados, desplazados y migrantes.

Generalmente, los niños sufren un mayor riesgo frente a la violencia física y las niñas afrontan mayor riesgo de abandono y violencia y explotación sexuales. Esta es la razón de fortalecer la protección a estos grupos en la Ley.

Qué más quisiéramos que ellas y ellos no fueran víctimas, pero la realidad es que sí lo son y en la mayoría de los casos son los más afectados y más desprotegidos. Y ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos legales e institucionales.

Aprobemos este Dictamen, sigamos con los avances de cara al futuro para que las niñas, niños y adolescentes de México sean no sólo vistos como una estadística, sino atendidos de la forma debida y adecuada.

Compañeras, compañeros, mi voto será a favor de esta reforma y solicito a ustedes su apoyo en el mismo sentido.

Este Senado ha mostrado su compromiso incondicional a la causa de las niñas, niños y adolescentes. Aprobamos una Ley de vanguardia y hoy contamos con un Sistema Nacional de Protección Integral en la materia.

Continuemos mostrando este compromiso. Pues como bien se ha dicho es por el 33% de la población y el 100% del futuro de México.

Muchas gracias

A FAVOR DEL DICTAMEN DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Compañeras y compañeros senadores,

El presente dictamen es producto de un trabajo que integra múltiples iniciativas (12, si no recuerdo mal), presentadas por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios.

Yo celebro el interés multipartidista por revisar a fondo la eficacia y eficiencia de la actual Ley General de Víctimas. Y lo celebro, porque en este trabajo legislativo, y más cuando se trata de una ley general que trasciende los límites ordinarios del federalismo, el acuerdo político resulta indispensable. Acuerdo político que no necesariamente significa tener una opinión uniforme o idéntica sobre el contenido, pero que indispensablemente revela unidad de propósito.

Esa unidad de propósito, en mi opinión, es la que hoy debe destacarse.

Dice George Bernard Shaw que todo progreso es iniciado por confrontar los conceptos actuales, la realidad prevaleciente, y es ejecutado al suplantar las instituciones existentes.

Esa ejecución, la de suplantar las instituciones existentes, debe realizarse no sólo con cuidado, sino también –y sobre todo- con una claridad extraordinaria acerca del rumbo que se quiere lograr. Es indispensable saber lo que se quiere, para saber qué es lo que no funciona y qué es lo que se propone para remediarlo.

Por eso destaco la unidad de propósito. Qué hay detrás de este dictamen en ese sentido? Voy a mencionar tres puntos, no porque sean los únicos, sino porque me parecen de gran relevancia:

1. Hay, en principio, el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar el reconocimiento de que el Estado –en cualquiera de sus frentes, federal, estatal o municipal- debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una victima del ámbito federal o local.

   Hoy se propone que el fondo para la atención de víctimas previsto en esta Ley General, a través de un esquema de compensación con las entidades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local. En ello, estimo, hay un avance fundamental en este dictamen.

2. En segundo lugar, toda vez que en una vertiente importante –más no exclusiva- las víctimas provienen de la actividad del Estado, existe claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en

el proceso de conformación tanto del órgano de gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como en la selección del comisionado ejecutivo. Es evidente, por sus resultados, que el texto vigente de la ley no permite que esa conformación se traduzca en una atención efectiva de las víctimas. Por ello se reconoce la necesidad de modificar el contenido de la ley.

La participación de la sociedad en el órgano de gobierno es un elemento de control extraordinario, que permite hacer transparente al escrutinio público las decisiones que ahí se adopten, sin perder de vista que es el Estado el responsable primordial de la conducción de la Comisión y de lograr los objetivos de política pública detrás de su existencia.

Lo mismo ocurre con la consulta pública que debe hacerse para escoger a la persona que será propuesta al Senado como Comisionado Ejecutivo.

Pero este tema no es menor. Lo digo con claridad, porque en lo personal, me hubiera gustado que, por ejemplo, en lugar de consulta existiera una convocatoria, que sujetara al titular del Ejecutivo a una selección basada en criterios previamente definidos y transparentados. Pero tampoco puede obviarse la bondad de transitar a favor del acuerdo político y entender que lo importante es encontrar la unidad de propósito detrás de la reforma. Y esa unidad de propósito se presenta en garantizar el escrutinio social, la verticalidad y el equilibrio en las decisiones de la Comisión. Eso es, en mi opinión, lo fundamental, además de reconocer que la mal llamada "ciudadanización" de todas las posiciones, también conlleva el efecto de restarle al Estado la responsabilidad de garantizar la eficacia de sus instituciones.

3. Por último, hay un aspecto que es igualmente fundamental: reconocer que tanto las víctimas del delito como las víctimas por violaciones de derechos

humanos deben ser atendidas en igualdad de importancia. Su condición, y el caso concreto de cada una de ellas, puede dar lugar a diversos procesos. Pero en lo fundamental, la ley debe reconocer su tratamiento y atención con el carácter de víctimas.

En este aspecto, al igual que en el caso anterior, en lo personal considero que el texto del dictamen pudo ser mayormente preciso en esa condición de igualdad y dar menor espacio a un trato discriminatorio por razón del acto que origina su carácter de víctima. Pero igualmente resalto el avance fundamental del dictamen, en lo que ha existido un acuerdo político amplio, para garantizar que la Comisión Ejecutiva y las comisiones de los estados **deban**, así como una obligación que no da lugar a discrecionalidad, atender las necesidades de ayuda inmediata, asistencia o rehabilitación de las víctimas, con independencia de su origen como víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos. Ahí encuentro la mayor ventaja.

Pueden encontrarse otros avances significativos en este dictamen, como las previsiones en relación con el desplazamiento forzado de personas o el esfuerzo de apuntalar la autonomía técnica, presupuestaria y de gestión del organismo, pero lo importante, lo que me parece fundamental, es responderle a la gente de inmediato. Es permitir que las víctimas comiencen a ser atendidas; que puedan ver satisfechas sus necesidades de ayuda inmediata. Por ahí se comienza a hacer justicia. Eso es lo que recojo de este dictamen. Por eso mi voto es a favor. Muchas gracias.

Posicionamiento de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, respecto al Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

H. CAMARA DE SENADORES
2016 NOV 4 AM 11 10
Presidencia de la Mesa Directiva
SECRETARIA TÉCNICA
003065

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E

009179

Antes que nada quiero reconocer el trabajo realizado por las comisiones dictaminadoras y en especial de sus presidentes, Senadores Fernando Yunes, Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Graciela Ortiz que durante meses han trabajado en crear los acuerdos necesarios para la aprobación de las presentes reformas.

Sobre el dictamen a discusión quiero señalar que desde su nacimiento en enero de 2013 la Ley General de Victimas ha sido polémica y la presente reforma no es la excepción.

Las deficiencias en la vigente Ley General de Victimas se encuentran plenamente detectadas y se pueden resumir en la dificultad que tienen

las víctimas directas e indirectas de hechos ilícitos de acceder a la reparación integral del daño.

Tengo claro que existen artículos polémicos en el presente dictamen, especialmente en la naturaleza jurídica y en el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin embargo, las presentes reformas son primordiales para incentivar que la victimas acudan a esa Comisión y para que dicha institución se encuentre en posibilidad legal de atenderlos.

Mi Estado Tamaulipas no puede esperar un día más las presentes reformas, ya que durante décadas estuvo en el abandono y es apenas ahora cuando el nuevo Gobernador Francisco Cabeza de Vaca anunció la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Tamaulipas.

Lo anterior debido a que únicamente 17 Estados cuentan con una Comisión Estatal de Victimas y sólo 6 cuentan con un Fondo específico para ese tema y por supuesto Tamaulipas -lamentablemente- no es uno de ellos.

No es un secreto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido deficiente en su actuar, más allá de las causas que lo hayan generado, la verdad es que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no ha funcionado, ya que mientras existen miles de víctimas con necesidad de apoyo, tenemos un inútil fondo con 1,480 millones de pesos parados; es decir, del presupuesto otorgado

para dicho fondo en los últimos tres años, únicamente se han utilizado 80.2 millones en ayudas inmediatas y como compensación por reparación integral.

Por otro lado, necesitamos el compromiso de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dotar de recursos suficientes a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas. Igualmente, necesitamos que las Entidades Federativas armonicen sus leyes con la presente Ley General de Víctimas y exista un verdadero compromiso para crear las Comisiones Estatales de Atención.

El dictamen considera cuestiones propositivas, tal y como son la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de asistencia local, un área de asesoría jurídica y un registro de víctimas. Así como la facultad de atracción –en ciertos casos- para que la Comisión Ejecutiva pueda atender y asistir a víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Por lo anterior y toda vez que el presente dictamen es un avance hacía la eliminación de las barreras que tienen las víctimas para acceder a la asistencia de la Comisión Ejecutiva y ante la obligación que tengo como representante de un Estado que durante décadas se ha ubicado en los primeros lugares de las entidades federativas con mayor índice en delitos de alto impacto, manifiesto que mi voto será a

favor y que desde esta cámara seguiremos trabajando para lograr mayor autonomía en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Silvia Guadalupe Garza Galván, miembro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la República, tengo bien a someter a consideración del Pleno de esta Soberanía, la **RESERVA** por la cual se propone modificar **el artículo 1, 8, 39 BIS, 67 y 68 del Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas**, de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, para su debida discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el Dictamen correspondiente, lo cual se realiza al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Pese a que esta Ley fué promulgada desde 2013, al día de hoy la mayoría de los Estados siguen sin tener sus Comisiones de Víctimas debidamente estructuradas con fondos y personal suficiente para operar de manera adecuada, es decir, la Ley es letra muerta.

Únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal: Nuevo León, Michoacán, Coahuila, SLP, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán y Campeche y de ellos sólo 6 han asignado un fondo para brindar

medidas de ayuda y reparación a las víctimas (Nuevo León, SLP, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán).

Esta cifra es aún más alarmante ya que al día de hoy, aún con la implementación en todo el país del Sistema Penal Acusatorio, son miles las víctimas que no reciben la atención de un asesor jurídico desde el momento en que presentan una denuncia en el Ministerio Público. Tan solo en 2016, en los 17 estados antes señalados se han denunciado 561, 418 delitos (conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y sólo existen 264 asesores jurídicos, es decir, en promedio cada asesor atendería 2,126 casos, lo cual es humanamente imposible y es un reflejo del nulo compromiso de los Estados para atender a las víctimas del delito.

De ahí la importancia de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas esté obligada a atender a las víctimas que son ignoradas por los estados, con la facultad de repercutir los gastos erogados en el presupuesto estatal correspondiente.

Toda vez que es una obligación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas brindar las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación así como los recursos de ayuda que requiera la víctima, la cual debe ser claro en las palabras que describen, proponiendo cambiar la palabra "podrá" por la palabra "deberá".

Por otra parte, se propone dicha redacción ya que sería una simulación dejar al arbitrio de las Comisiones de Víctimas la subsidiariedad de la Comisión Ejecutiva, debido a que el texto vigente señala que la Comisión Ejecutiva sólo cubrirá las medidas de ayuda inmediata cuando las Comisiones de Víctimas lo soliciten por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos.

Lo que se propone es dar un plazo de 7 días naturales, puesto que son medidas de ayuda inmediata, para que las Comisiones de Víctimas brinden el apoyo; en caso de no hacerlo la Comisión Ejecutiva será subsidiaria de manera obligatoria, de esta manera se garantiza que ninguna víctima sea desatendida.

Es importante mencionar que dentro de la propuesta existe una inequidad en las compensaciones que se brindan por reparación del daño a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es inadmisible que exista una Ley creada para proteger los derechos de las víctimas y procurarles la reparación del daño y tengan mayores beneficios que las victimas que han dañado.

Por esto es importante busca dar las mismas condiciones a las víctimas, tanto del delito como de violaciones a Derechos Humanos y así mismo quitar la burocracia y requisitos excesivos que no permiten que las víctimas del delito tengan acceso a los fondos y ayudas que el Estado ha destinado para ellas.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, las siguientes:

RESERVAS

DICE	DEBE DECIR
Artículo 1: La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y	Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y

ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. ... La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar	ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. ... La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, **en caso de incumplimiento, la Comisión Ejecutiva será subsidiaria en dichas medidas y deberá repercutirlo en el presupuesto estatal.** Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. ... ... Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención,	Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. ... ... Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención,

rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.	rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.	Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas podrán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.	La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas **deberán otorgar,** con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.	En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.
La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.	La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, **deberán otorgar,** con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.
La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión	La Comisión Ejecutiva **deberá cubrir,** con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata **cuando las**

Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.	**víctimas hayan acudido a las Comisiones de Víctimas de las entidades federativas y no hubieren recibido respuesta dentro de los 7 días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.**
Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas: I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal; II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima	Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas: I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal; II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima

considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo. Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.	considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, **deberá brindar** la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo. Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.
Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:	Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) ... b) ... ... El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	a) ... b) ... ... El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, **tanto para las víctimas del delito como para las víctimas de violaciones a derechos humanos**, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.	Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, **y para ello bastará que se acredite la existencia del delito sin necesidad de que se determine a los responsables ni se condicionará a**

	que la víctima cuente con una determinación judicial.
La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.	La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

ATENTAMENTE

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2016.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

México, D.F. a 4 de noviembre de 2016

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

El que suscribe, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, numeral 2; 200, numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al *DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS*, someto a la consideración de este Pleno, la adición de la fracción XXXVII al artículo 7, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Dice:	**Debe Decir:**
Artículo 7 (...) Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. a la XXXVI. (...) XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.	Artículo 7 (…) Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. a la XXXVI. (...) XXXVII. **La protección de las Víctimas de desplazamiento interno incluirá el acceso a soluciones duraderas a su situación. Para ello, el Estado en sus tres órdenes de gobierno establecerá las medidas necesarias para garantizar la libertad, seguridad, dignidad e integridad, sea ésta física, moral o mental de los desplazados internos, a través de medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de**

	soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados **XXXVIII.** Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

SUSCRIBE

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 4 del mes de noviembre del 2016.

México, D.F. a 4 de noviembre de 2016

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

El que suscribe, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, numeral 2; 200, numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al *DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS*, someto a la consideración de este Pleno, la adición de la fracción VIII al artículo 6, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Dice:	**Debe Decir:**
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. a VII. (…) VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; IX. a XXII. (...)	Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. a VII. (…) VIII. **Desplazamiento interno: Es el fenómeno migratorio en el cual personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a huir o abandonar su lugar de residencia habitual, sin salir del territorio nacional, como resultado o para evitar los efectos de un conflictos comunales, políticos, religiosos, étnicos o armado, de situaciones de violencia generalizada, de actos de la delincuencia organizada, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, de construcción de obras de infraestructura u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.** **Se entenderá por desplazado interno la condición de la persona que se encuentre dentro de los supuestos del párrafo anterior.**

	IX. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; **X.** a **XXII.** (...)

SUSCRIBE

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 4 del mes de noviembre del 2016.

Sen. Pablo Escudero Morales
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República

RESERVA AL ARTICULO 8 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE GOBERNACION; DERECHOS HUMANSO; JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

JUSTIFICACIÓN

Toda vez que es una obligación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas de las entidades federativas brindar las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación así como los recursos de ayuda que requiera la víctima, se considera adecuado se debe cambiar la palabra "podrá" por la palabra "deberá".

Por otra parte, en el último párrafo se propone dicha redacción ya que sería una simulación dejar al arbitrio de las Comisiones de Víctimas la subsidiariedad de la Comisión Ejecutiva, debido a que el texto vigente señala que la Comisión Ejecutiva sólo cubrirá las medidas de ayuda inmediata cuando las Comisiones de Víctimas lo soliciten por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos. Lo que se propone es dar un plazo de 7 días naturales, puesto que son medidas de ayuda inmediata, para que las Comisiones de Víctimas brinden el apoyo; en caso de no hacerlo la Comisión Ejecutiva será subsidiaria de manera obligatoria, de esta manera se garantiza que ninguna víctima sea desatendida.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 8. ...	**Artículo 8.** ...
...	...
...	...
...	...
...	...
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas podrán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.	La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas ~~podrán~~ **deberán** otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizaste.

...	...
La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.	La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, ~~podrán~~ **deberán** otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.
La Comisión Ejecutiva podrá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.	La Comisión Ejecutiva ~~podrá~~ **deberán** cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Sen. Ma. Del Pilar Ortega Martínez

Sen. Pablo Escudero Morales
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República

RESERVA AL ARTICULO 39 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE GOBERNACION; DERECHOS HUMANSO; JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

JUSTIFICACIÓN

Se propone cambiar la palabra "podrá" por la palabra "deberá" ya que de lo contrario se deja al libre arbitrio de la Comisión Ejecutiva la facultad de brindar la ayuda en materia de transporte a las víctimas que así lo requieren por el incumplimiento de las Comisiones de Víctimas, y esto debe ser una obligación del Estado para no dejar a las víctimas desprotegidas.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 39 Bis. ...	**Artículo 39 Bis.** ...
I a la VI ...	I a la VI ...
En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.	En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, ~~podrá~~ **deberá** brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.
...	...

Sen. Ma. Del Pilar Ortega Martínez

Sen. Pablo Escudero Morales
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República

RESERVA AL ARTICULO 67 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE GOBERNACION; DERECHOS HUMANSO; JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

JUSTIFICACIÓN

El párrafo tercero del artículo 67 del proyecto de decreto, señala el monto de la compensación subsidiaria a la que el Estado estará obligada a pagar a las victimas, sin embargo se considera necesario que la ley de manera concreta especifique que dicho monto sea tanto para víctimas del delito como para las víctimas de violaciones a derechos humanos, es decir la propuesta de redacción de este artículo tiene como objetivo otorgar las mismas condiciones a las víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos en el monto de la compensación subsidiaria.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:	**Artículo 67** …
a) .. .	a) .. .
b) .. .	b) .. .
…	…
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, **tanto para las víctimas del delito como para las víctimas de violaciones a derechos humanos,** será hasta de quinientas unidades de medida y actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima

Sen. Ma. Del Pilar Ortega Martínez

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

RESERVA AL ARTÍCULO 166 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DERECHOS HUMANOS; JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

JUSTIFICACIÓN

El párrafo segundo del artículo 166 del proyecto de decreto, señala que en casos de que no se cuente con el personal necesario para la asesoría jurídica, de manera excepcional, se podrá contar con el servicio de particulares para ejercer la función de asesores jurídicos, por lo que se propone que en la ley se establezca que deberá justificarse la necesidad de contar con la mencionada asesoría, así como la obligación de que se establezca en el reglamento los lineamientos por los cuales podrá hacerse uso de la asesoría de particulares, mismos que deberán estar basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 166.	**Artículo 166. ....**
Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta ley	
	En cuyo caso deberá de justificarse la necesidad de contar con dicha asesoría y su función.
	El reglamento de esta ley establecerá los lineamientos mínimos para que la Asesoría Jurídica haga uso de esta atribución, en los cuales deben establecerse principios de transparencia y rendición de cuentas.

Sen. Ma. Del Pilar Ortega Martínez

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XIX	Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 8 de noviembre de 2016	Número 4655-I

CONTENIDO

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas

Anexo I

Martes 8 de noviembre

"Año del Centenario de la Constitución"

MESA DIRECTIVA

CS-LXIII-II-1P-108

OFICIO No. DGPL-1P2A.-3373

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2016.

CC. SECRETARIOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

A t e n t a m e n t e

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ
Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIII-II-1P-108

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ÚNICO. Se REFORMAN: el primero y tercer párrafos del artículo 1; las fracciones I, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 6; las fracciones XXI, XXX y XXXIV del artículo 7; el primero, segundo y cuarto párrafos del artículo 8; la fracción IV del artículo 12; el segundo párrafo del artículo 28; el artículo 29; el último párrafo del artículo 30; el artículo 31; el primer párrafo del artículo 33; las fracciones I y II del artículo 34; el artículo 36; el artículo 38; la denominación del CAPÍTULO III del TÍTULO TERCERO para quedar como "MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO"; el primero y el último párrafos del artículo 40; el artículo 42; el artículo 45; el artículo 46; el artículo 47; el artículo 52; el artículo 54; el artículo 57; las fracciones I y VI del artículo 61; el primero y último párrafos del artículo 67; el artículo 68; el artículo 70; el artículo 71; el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79; el artículo 80; las fracciones I, III, XVI y XVII del artículo 81; el inciso b) de la fracción IV del artículo 82; el sexto párrafo del artículo 83; el primero y quinto párrafos del artículo 84; el artículo 85; el primer párrafo, las fracciones III y IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; las fracciones XIV, XXII, XXV, XXXV y XXXVI del artículo 88; el artículo 89; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 93; el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX, XII y XIII del artículo 95; el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 96; la fracción III del primer párrafo del artículo 97; el primer párrafo del artículo 98; la fracción IV del artículo 100; las fracciones IV y V del artículo 110; la fracción VI del artículo 114; la fracción X del artículo 116; el primer párrafo del artículo 117; las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 125; el primer párrafo del artículo 130; la fracción I del artículo 132; el artículo 134; el artículo 135; el artículo 136; el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 138; el artículo 145; el cuarto párrafo del artículo 164; el segundo párrafo del artículo 166; el primer párrafo del artículo 168. **Se ADICIONAN:** el principio de "Interés superior de la niñez" al artículo 5, entre los principios de "Integralidad, indivisibilidad e interdependencia" y de "Máxima protección" recorriéndose los subsecuentes; las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 7; cinco últimos párrafos al artículo 8; un último párrafo al artículo 9; dos párrafos finales al artículo 12; dos párrafos al artículo 15; el párrafo quinto, recorriéndose los anteriores quinto a séptimo para ser sexto, séptimo y octavo del artículo 21; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo al artículo 28; un último párrafo al

artículo 34; el artículo 39 Bis; dos últimos párrafos al artículo 64; dos últimos párrafos al artículo 79; la fracción XVIII al artículo 81; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 84, recorriéndose los actuales segundo, tercero, cuarto y quinto para ser quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente; el artículo 84 Bis; el artículo 84 Ter; el artículo 84 Quáter; el artículo 84 Quinquies; el artículo 84 Sexies; el artículo 84 Septies; el artículo 84 Octies; la fracción V al artículo 86; la fracción XXXVII al artículo 88; el artículo 88 Bis; la fracción XIV al artículo 95; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 110; las fracciones XI y XII al artículo 116; el artículo 125 Bis; un CAPÍTULO V "DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA" al TÍTULO OCTAVO, con los artículos 157 Bis, 157 Ter, 157 Quáter y 157 Quinquies. **Se DEROGAN:** los artículos 16; la fracción XXX del artículo 88; 92; 94; la fracción VII del artículo 125; los artículos 175; 176; 177 y 178; para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

...

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

Buena fe.- ...

Complementariedad.- ...

Debida diligencia.- ...

Enfoque diferencial y especializado.- ...

Enfoque transformador.- ...

Gratuidad.- ...

Igualdad y no discriminación.- ...

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- ...

Mínimo existencial.- ...

No criminalización.- ...

Victimización secundaria.- ...

Participación conjunta.- ...

Progresividad y no regresividad.- ...

Publicidad.- ...

Rendición de cuentas.- ...

Transparencia.- ...

Trato preferente.- ...

Artículo 6. ...

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas;

II. ...

III. Comisiones de víctimas: Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México;

IV. a **VIII.** ...

IX. Fondo estatal: El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;

XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y

XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XXII. ...

Artículo 7. ...

...

I. a **XX.** ...

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;

XXII. a **XXIX.** ...

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;

XXXI. y **XXXII.** ...

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta Ley, y

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las

entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

...

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a

una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva deberá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 9. ...

...

...

...

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 12. ...

I. a **III.** ...

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al

procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. a **XIII.** ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15. ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Derogado.

Artículo 21. ...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código

Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 27. ...

I. a **VI.** ...

...

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la Víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes,

indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas Federales, de las entidades federativas y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. ...

I. a **X.** ...

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, las entidades federativas o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la Víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

Artículo 33. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

...

Artículo 34. ...

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, de las entidades federativas y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. a **VI.** ...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna Víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 36. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender

lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la Víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la Víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la Víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

Las Comisiones de víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, de las entidades federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a

los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a ésfos que las establecidas en la presente Ley.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 52. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 54. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

Artículo 57. La Federación, las entidades federativas y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 61. ...

...

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

II. a **V.** ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;

VII. y **VIII.** ...

...

Artículo 64. ...

I. a **VIII.** ...

...

...

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) ...

b) ...

...

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la Víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la Víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la Víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la Víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo o los Fondos estatales, según corresponda, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda, tendrán la obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo o a los Fondos estatales los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la Víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 79. ...

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 80. El Gobierno Federal de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 81. ...

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. ...

III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas.

IV. a **XV.** ...

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:

a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la Víctima;

b) La obligación de las Comisiones de víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la Víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 82. ...

I. ...
a) ...
b) ...
c) ...

II. ...
a) ...
b) ...
c) ...

III. ...
a) ...

IV. ...
a) ...
b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

...

Artículo 83. ...

...

...

...

...

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

...

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdó a su disponibilidad presupuestaria.

En la ejecución de las funciones ...

De la Comisión Ejecutiva ...

A fin de garantizar el acceso ...

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un Fondo estatal en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:

a) Gobernación quien la presidirá;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Educación Pública;

d) Salud;

II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y

III. El titular de la Comisión Ejecutiva.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

Artículo 84 Sexies. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y

V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se requiere:

I. y **II.** ...

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su designación;

IV. Contar con título profesional, y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. ...

I. a **XIII.** ...

XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV. a **XXI.** ...

XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

XXIII. a **XXIV.** ...

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal;

XXX. Derogado.

XXXI. a **XXXIV.** ...

XXXV. Hacer públicos los informes anuales sobre el funcionamiento del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;

XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el Fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;

II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

III. Cuando el Mihisterio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;

IV. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;

V. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo, y

VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo federal, por la comisión de víctimas local con cargo al Fondo local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la comisión de víctimas local o se haya constituido el Fondo local.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas de las entidades federativas, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 90. ...

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta del Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;

III. ...

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

V. a **VIII.** ...

IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. ...

XI. ...

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva;

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva en términos de la legislación aplicable.

Artículo 96. ...

...

El Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

...

Artículo 97. ...

I. ...

II. ...

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, de las entidades federativas o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

...

...

...

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos de las entidades federativas, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

...

...

...

...

Artículo 100. ...

I. a **III.** ...

IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de las entidades federativas según la competencia;

V. a **XI.** ...

...

Artículo 110. ...

I. a **III.** ...

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos Internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva, y

VIII. El Ministerio Público.

...

Artículo 114. ...

I. a **V.** ...

VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones de las entidades federativas, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VII. a **XIII.** ...

Artículo 116. ...

I. a **IX.** ...

X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en términos de esta Ley, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

...

...

...

...

...

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal y a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

Artículo 125. ...

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;

II. ...

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

VII. Derogado.

Artículo 125 Bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

...

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido.

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;

II. a **VIII.** ...

...

...

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, en términos de lo establecido en el Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo 93 fracción III podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un

tiempo determinado. El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.

Artículo 136. El Fondo será administrado por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 138. El titular de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo, deberá:

I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

II. ...

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, y

IV. ...

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.

CAPÍTULO V
DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA

Artículo 157 Bis. El Fondo estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los fondos estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de esta Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada Víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 164. ...

...

...

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal o en los gobiernos de las entidades federativas no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

Artículo 166. ...

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

...

...

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

QUINTO.- Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durara en el cargo tres años.

En adelante la designación del Comisionado Ejecutivo se realizara de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octies, de la Ley.

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

OCTAVO.- Las erogaciones que, en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales en el ejercicio fiscal correspondiente.

NOVENO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

DÉCIMO.- Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

DÉCIMO PRIMERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

DÉCIMO TERCERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

DÉCIMO QUINTO.- Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el Comisionado Ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por la dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

DÉCIMO SEXTO.- Constituida la Asamblea Consultiva, deberá elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno dentro de los diez días siguientes.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2016.

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ
Vicepresidenta

SEN. MARÍA E. BARRERA TAPIA
Secretaria

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2016.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

LA SUSCRITA, SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA EEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
Secretaria

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Ley General de Víctimas.

Declaratoria de Publicidad.
Diciembre 8 del 2016.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada la Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracción XXXIII y 3; así como 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Edgar N
7 Dic 16
13:16

ANTECEDENTES DEL DICTAMEN

1. El día 8 de septiembre de 2016, la Senadora Cristina Díaz Salazar presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

   El 23 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

2. El día 8 de septiembre de 2016, los senadores Angélica de la Peña, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determino turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

   El 23 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

3. El día 2 de diciembre de 2013, las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determino turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

   El 14 de abril de 2016 la Mesa Directiva, acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

   El 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y Dictamen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

4. El día 5 de diciembre de 2013 las Senadoras Angélica de la Peña, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez, presentaron ante el Senado de la República una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

   El 14 de abril de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

   El 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

5. El día 9 de septiembre de 2014, la Senadora Adriana Dávila Fernández presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General de Victimas, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

   En la misma fecha la Mesa Directiva, determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

   El 14 de abril de 2016la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

   El 20 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de

Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

6. El día 14 de octubre de 2014, la Senadora Adriana Dávila Fernández, presentó ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

   El 14 de abril de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos para que emita su opinión.

   El 20 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

7. El día 27 de noviembre de 2014, la Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presento ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha la Mesa Directiva determino turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

   El 14 de abril de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.
   El 20 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva, acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de

Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

8. El día 19 de febrero de 2015 las Senadoras Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

   El 26 de febrero de 2015, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

   El 14 de abril de 2016, la Mesa Directiva, acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen y en la Comisión de Derechos Humanos para que emita opinión.

   El 20 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

9. El día 12 de marzo de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma la Ley General de Victimas.

   En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

   El 14 de abril de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación

y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos para que emita opinión.

El 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

10. El día 29 de septiembre de 2015, la Senadora Mónica Arreola Gordillo, presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

    En la misma fecha Mesa Directiva, determino turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

    El 14 de abril de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativo Segunda, para su análisis y dictamen, y en la Comisión de Derechos Humanos, para que emita opinión.

    El 20 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

11. El día 14 de abril de 2016, el senador Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas.

    En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

El 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

12. El día 14 de septiembre de 2016, los senadores Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédici Hidalgo, Hilario Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Victimas.

    En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

    El 23 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

13. En fecha 18 de octubre de 2016, se citó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, a celebrar reunión extraordinaria, a efecto de analizar y en su caso deliberar el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, declarando sesión permanente el dictamen fue aprobado en Comisiones Unidas en fecha 25 de octubre de 2016.

14. Posteriormente, en fecha 4 de noviembre del presente año, la Colegisladora aprobó en su Pleno el proyecto de dictamen respectivo, remitiendo la Minuta correspondiente a la Mesa Directiva de esta Soberanía.

15. En fecha 8 de noviembre la Minuta fue recibida en la Cámara de Diputados, siendo turnada a la Comisión de Justicia para dictamen con opinión de la

Comisión de Derechos Humanos, dicha minuta fue recibida formalmente en la Comisión de Justicia en esa misma fecha para su dictaminación correspondiente.

16. Por último, mencionamos que en fecha 24 de noviembre fue aprobada en Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos la Opinión correspondiente a la Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, dicha opinión fue recibida formalmente en la Comisión de Justicia el 29 de noviembre del presente año, esto a efecto de que fuera analizada en el proceso de dictaminación de la Minuta.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Colegisladora señala que a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del año 2008, se estableció en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como uno de sus principios generales el de reparar el daño a la víctima. Que en ese mismo artículo, en su apartado B, se reconocieron los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

De acuerdo a lo anterior, señalan la importancia de reformar la actual Ley General de Víctimas tal y como lo indican los proponentes de las diversas Iniciativas, haciendo hincapié en que la legislación referente a las víctimas es una herramienta trascendental en nuestro país, y que no obstante, después de tres años de su

publicación es posible hacer un análisis y una revisión de su efectividad en la práctica, observándose algunas disposiciones que hacen ineficiente y retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas.

Posteriormente la Colegisladora, manifiesta que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y su posterior, reforma del 3 de mayo de ese mismo año, la Ley se estableció no solo como el entramado jurídico y constitucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos que hasta el momento no habían tenido su debido reconocimiento. Hacen énfasis en que ésta se constituyó como el reconocimiento del Estado mexicano a su responsabilidad de atender uno de las problemáticas más grandes que tiene nuestro país a causa de la violencia sufrida en los últimos años.

Por lo cual mencionan que es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia, contando con un perfil humanista y progresista, constituyendo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico, estableciendo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas y el de establecer un derecho victimal que sea eficaz.

De esta manera consideran la atención a víctimas como un área en constante cambio debido a las necesidades que surgen día a día y en consecuencia demandan de una Ley actualizada, que atienda efectivamente la problemática de las víctimas, y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello a las víctimas recuperar su proyecto de vida.

Refieren que los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reflejan que la mayoría de los delitos que se cometen en territorio nacional recaen en el fuero local. No obstante, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo cuenta con la

facultad de atender y reparar a las personas víctimas de los delitos que son de fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades federales.

Aunado a lo anterior los miembros de la colegisladora hacen hincapié en que los Congresos locales no han cumplido con el plazo de armonizar los ordenamientos jurídicos locales conforme a la Ley General de Víctimas, para lo cual tenían 180 días a partir de su publicación el 9 de enero de 2013. Como consecuencia de esto, sólo once comisiones estatales de atención a víctimas se han establecido, y de estas, sólo seis cumplen con lo que la Ley General de Víctimas establece. En consecuencia, actualmente no existe una asistencia adecuada en las entidades federativas a las víctimas.

Es por lo anterior, que aseguran que con la reforma planteada se proponen establecer diversos ejes para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga la facultad de atraer los casos de atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local.

Por otro lado exponen que la participación de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia en la elaboración de la política tendiente a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de víctima es fundamental. Que si bien, la redacción actual de la Ley General de Víctimas establece que la sociedad civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar activamente en la elaboración de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, así como en la implementación de la política pública, la realidad es que, actualmente, no se prevén en la ley mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los destinatarios de la Ley en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Comentan que en la actualidad, la participación de la ciudadanía en la política sobre la atención a las víctimas no debe limitarse a la consulta, tal y como lo establece la actual redacción de la Ley General de Víctimas en donde se prevé la asistencia de

la sociedad civil a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y que por el contrario, debe ampliarse en la ley para garantizar una participación real, en donde sean las víctimas y la sociedad civil quienes participen con poder de decisión en el ciclo completo de las políticas públicas; es decir, en su formulación, instrumentación, control y evaluación.

En ese tenor, también se creen necesario hacer una reestructuración de los órganos operativos de atención a víctimas. Esto en razón de que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso la justicia, a la verdad y a la reparación de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, según lo establece el artículo 79 de la Ley General de Víctimas.

También mencionan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del Sistema Nacional. Desde esta perspectiva, resulta innecesario que el órgano operativo cuente con un órgano deliberativo como lo es el Pleno de los Comisionados pues ello significa que las decisiones deben someterse a criterios que van más allá de lo operativo.

Ante esto, ven necesario hacer una revisión de la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La compactación y optimización en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas.

Para ahondar más se puede referir que la minuta se contextualiza al tenor de lo siguiente:

- *"De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015 en su reciente visita a nuestro País, México sufre una crisis en materia de derechos humanos. En esta concordancia, la debilidad de las instituciones, la penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social.*
- *Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido más acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias franjas del territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado una falla estructural del Estado de derecho.*
- *Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.*
- *La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el país. En efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una genuina aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y reparación del daño.*
- *En este tenor, la Ley General de Víctimas representó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.*
- *Este marco jurídico y el andamiaje institucional que puso en marcha, significaron una postura profundamente innovadora no sólo en el contexto mexicano sino a nivel internacional. La Ley tiene un carácter humanista y progresista, es armónica con los estándares internacionales de derechos*

humanos y pone en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas.

- *Sin embargo, la expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de debates y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para ser observada, derivado de las opiniones de quienes señalaban que para emitirse una Ley General debería existir una disposición constitucional que lo determinase.*
- *En fechas recientes, el 25 de julio de 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que establezca la concurrencia de la federación, las Entidades Federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias."*

Por otra parte, los miembros de la colegisladora consideran que la Ley General de víctimas contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas constituyendo un parteaguas en México: la creación de una política de Estado en materia de atención a víctimas y la consolidación de un derecho victimal efectivo, colocando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como el órgano operativo y rector de dicha encomienda.

Pero también comentan que como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de ella son perfectibles y sujetas de revisión y diagnóstico. Por lo que también hacen hincapié en que a tres años de la entrada en vigor de la Ley y dos años de la puesta en operación de la CEAV, se ha identificado la existencia de disposiciones que dificultan aspectos fundamentales de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, obstaculizando los procesos de atención y reparación.

De acuerdo con todo lo anterior, la colegisladora plantea que la ley que en su momento fue profundamente innovadora y atendió una necesidad impostergable, pero qué a la luz del estudio de su implementación práctica, se hace evidente la importancia de realizar modificaciones para fortalecer el marco jurídico de la operación institucional y es por ello que es preciso analizar y resolver los problemas estructurales de la Ley.

De esta manera hemos dado a notar las razones que explican los integrantes de la colegisladora para dar sustento a la reforma que plantean, sin embargo para efectos de pormenorizar en el contenido de la Minuta, procederemos a plasmar los temas principales que se abordan en la misma:

- **Acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral**

Proponen flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos.

Se definen como recursos de ayuda, a diversos gastos, como son alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Se propone, la obligación qué las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, cuando la Entidad Federativa lo

solicite por no contar en el momento de la disponibilidad de presupuestaria necesaria para su otorgamiento.

Se propone facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

- **Facultad de atracción**

Se establecen directrices puntuales a fin de que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local. Para esto, se pretenden fijar los supuestos en los cuales la Comisión podrá atraer un asunto en la norma adjetiva.

- **Conformación de la CEAV para una atención más ágil a las víctimas**

Se sugiere modificar la estructura, integración y funcionamiento de la CEAV, para que deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. Será nombrado por el Presidente de la Republica previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.

También se propone hacer una modificación estructural de la Comisión Ejecutiva, eliminando la existencia de los comités de estructura en el artículo 93 y se determina la existencia del Comité Interdisciplinario evaluador, con facultades debidamente reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos del

Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral, y en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la Ley, así como para la creación de fondos de emergencia.

- **Participación de la sociedad en la política pública**

Se prevé que en la elaboración de la política pública participen en forma activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

Por lo que se propone una reforma que prevé la figura de una Asamblea Consultiva, la cual resulta de mayor utilidad en términos de la incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación de la política pública,

La Asamblea Consultiva se concibe como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo en la toma de decisiones. Adicionalmente Cuatro representantes de la Asamblea, integrarán la Junta de Gobierno. Por lo que su participación estará garantizada en todo momento, para la debida atención a las víctimas.

- **Responsabilidades de los servidores públicos**

Se propone incluir que "las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar".

- **Interés Superior de la Niñez**

El Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

- **Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio**

Se busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para "procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral" podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual manera y con la finalidad de evitar confusiones respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como son las Procuradurías de las Entidades Federativa o dependencias análogas.

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, se propone que se integre por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y contará con un servicio civil de carrera que

comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Para cumplir con esta misión, la Comisión podrá de manera excepcional contratar el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, y lo hará estrictamente en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de la Ley, lo que significa que las condiciones de contratación deberán ser similares y en ningún caso mayores a las descritas para el servicio profesional.

- **Desplazamiento Interno**

Se prevé considerar en la Ley General de Víctimas al Desplazamiento Interno como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos; y que, en consecuencia, amerita un tratamiento diferenciado que permita a esta población contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido vulnerados.

Se expresa que resulta procedente que la Ley General de Víctimas reconozca la necesidad de atender y proteger, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de tal fenómeno y que dicha Ley, debe otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.

Por ello, la Minuta busca fortalecer la protección de los derechos vulnerados con motivo del desplazamiento interno, respetando de esta forma los principios generales establecidos en la Ley y en particular el enfoque diferencial y especializado.

Por lo que se propone garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno a ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las principales

afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables, respetando siempre los principios generales establecidos en la Ley y conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las Entidades Federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación.

Para efectos de ejemplificar mejor las modificaciones propuestas en la Minuta que nos ocupa, presentamos el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.	**Artículo 1.** La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y **73 fracción XXIX-X**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.
...	...
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.	La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. **Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
...	**a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.** ...
Artículo 5. ... Dignidad.-... ... ... Buena fe.- ... Complementariedad.- ... ... Debida diligencia.-... ... Enfoque diferencial y especializado.-... ... ... Enfoque transformador.-...	**Artículo 5....** Dignidad.- ... ... Buena fe.-... Complementariedad.- ... ... Debida diligencia.-... ... Enfoque diferencial y especializado.-... ... ... Enfoque transformador.-...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Gratuidad.-...	Gratuidad.-...
Igualdad y no discriminación.-...	Igualdad y no discriminación.-...
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.-...	Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.-...
...	...
	Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.
	Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.
	Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
Máxima protección.-...	Máxima protección.-...
Mínimo existencial.-...	Mínimo existencial.-...
No criminalización.- ...	No criminalización.- ...
Victimización secundaria.-...	Victimización secundaria.-...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Participación conjunta.-... ... Progresividad y no regresividad.-... Publicidad.-... ... Rendición de cuentas.-... Transparencia.- ... ... Trato preferente.-...	Participación conjunta.-... ... Progresividad y no regresividad.-... Publicidad.-... Rendición de cuentas.-... Transparencia.- ... Trato preferente.-...
Artículo 6. ... I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas; II... III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal ~~y del Distrito Federal~~ de Atención Integral a Víctimas;	**Artículo 6....** I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas **adscritos a la Comisión Ejecutiva** y sus equivalentes en las entidades federativas; II. ... III. Comisiones de víctimas: Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas **y de la Ciudad de México**;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
IV. a VIII....	IV. a VIII....
	IX. Fondo estatal: El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;
IX. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;	X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
X. Ley: Ley General de Víctimas;	XI. Ley: Ley General de Víctimas;
XI. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;	XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;
XII.. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;	XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;
XIII. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;	XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
	XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;
XIV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;	XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;
XV. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;	XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
XVI. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;	XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
XVII. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;	XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;
XVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;	XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y
XIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.	XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
XX. ~~Se deroga.~~	
XXI. ~~Se deroga~~	
XXII. ...	XXII. ...
Artículo 7. ...	**Artículo 7. ...**
...	...
I. a XX. ...	I. a XX. ...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;	XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena **y las personas en situación de desplazamiento interno;**
XXII. a XXIX. ...	XXII. a XXIX. ...
XXX. A que se les otorgue, ~~en los casos que proceda,~~ la ayuda provisional;	XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;**
XXXI. y XXXII. ...	XXXI. y XXXII. ...
XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas~~, y~~	XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas; **XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;** **XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta Ley, y
XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.	XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.	**Artículo 8.** Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda**, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.	Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno**, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
...	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán ~~exclusivamente~~ por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.	... Las medidas de ayuda **inmediata**, ayuda, asistencia, atención, **rehabilitación** y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias**, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. **Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.** **La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.** **En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.** **La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley. La Comisión Ejecutiva deberá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.	**Artículo 9....** ... ... La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 12. ... I. a III.... IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. a XIII.... 	**Artículo 12. ...** I. a III.... IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado **a solicitud de la víctima** de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. a XIII.... **La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.**
Artículo 15. ...	**Artículo 15. ...** **La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.** **Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.**
Artículo 16. ~~Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los~~	**Artículo 16.** Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.~~	
Artículo 21. ...	Artículo 21. ...
...	...
...	...
...	...
	La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.
Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley ~~y en los códigos de procedimientos penales~~, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.	Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable,** la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.
...	...
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes ~~aplicables~~, a fin de	Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes **en la**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.	**materia,** a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
Artículo 27. ... I. a VI. ... ... Las medidas ~~colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados~~	**Artículo 27. ...** I. a VI. ... ... Las medidas **de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.**
Artículo 28. ... Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la ~~v~~víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres~~, menores de edad,~~ adultos mayores ~~y población~~ indígena.	**Artículo 28. ...** Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la Víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes,** mujeres, adultos mayores, **personas con discapacidad, migrantes,** indígenas, **personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.** **Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas ~~del Gobierno~~ Federal, de ~~los estados, del Distrito Federal~~ y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.	**Artículo 29.** Las instituciones hospitalarias públicas Federales, de **las entidades federativas** y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.
Artículo 30. ... I. a X.... En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, ~~los estados, el Distrito Federal~~ o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.	**Artículo 30. ...** I. a X.... En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, **las entidades federativas** o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.
Artículo 31. La Federación, ~~los estados, el Gobierno del Distrito Federal~~ o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa ~~cuando la causa de la muerte sea homicidio.~~ Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias ~~aplicables.~~	**Artículo 31.** La Federación, **las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la Víctima directa **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias **correspondientes a los**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.
Artículo 33. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal,~~ a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. ...	**Artículo 33.** Los Gobiernos **federal y de las entidades federativas,** a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. ...
Artículo 34. ... I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, ~~estatales, del Distrito Federal~~ y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento; II. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal,~~ a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no	**Artículo 34. ...** I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, **de las entidades federativas** y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento; II. Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; III. a VI. ...	mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; III. a VI. ... **No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna Víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.**
Artículo 36. Los Gobiernos federal, ~~estatales y del Distrito Federal,~~ a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.	**Artículo 36.** Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.
Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas ~~o desplazadas~~ de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la	**Artículo 38.** El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas **o en situación de desplazamiento** de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la ~~v~~víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.	El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la Víctima supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
CAPÍTULO III MEDIDAS EN MATERIA DE ~~TRANSPORTE~~	CAPÍTULO III MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO
SIN CORRELATIVO	**Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la Víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:** **I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;** **II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;** **III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la Víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y** **IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo. **Las Comisiones de víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.**
Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, ~~estatal, del Distrito Federal~~ o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, ~~estatales, del Distrito Federal~~ o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o	**Artículo 40.** Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, **de las entidades federativas** o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.	con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.
Artículo 42. Las autoridades del orden federal~~,~~ ~~estatal, las del Distrito Federal~~ y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.	**Artículo 42.** Las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores y ~~población~~ indígena	**Artículo 45.** Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como** niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, **personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**
Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, ~~de los estados, del~~	**Artículo 46.** Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, **de las entidades**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~Distrito Federal~~ y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.	**federativas** y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.	**Artículo 47.** Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno.** La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 52. Los Gobiernos federal~~, estatales y del Distrito Federal~~, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.	**Artículo 52.** Los Gobiernos federal y **de las entidades federativas,** a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.
Artículo 54. Los Gobiernos federal~~, estatales y del Distrito Federal,~~ a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía,	**Artículo 54.** Los Gobiernos federal y **de las entidades federativas,** a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía,

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado	establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.
Artículo 57. La Federación~~, los estados, el Gobierno del Distrito Federal~~ y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.	**Artículo 57.** La Federación, **las entidades federativas** y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
Artículo 61. ... ... I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición ~~forzada;~~ II. a V. ... VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia; VII. y VIII.	**Artículo 61. ...** ... I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona**; II. a V. ... VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen**; VII. y VIII. ... ...
Artículo 64. ... I. a VIII.	**Artículo 64. ...** I. a VIII. ... ... **En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.
Artículo 67. ~~El Pleno de~~ la Comisión Ejecutiva ~~correspondiente~~ determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: a)... b)... ... El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas ~~veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal,~~ ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.	**Artículo 67.** La Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de víctimas, según corresponda,** determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: a)... b)... ... El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización mensuales, que** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la Víctima.
Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos ~~considerados como graves~~ en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física ~~y/o~~ mental como consecuencia del delito.	**Artículo 68.** La Federación y las entidades federativas compensarán **a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia**, de forma subsidiaria el daño causado a la Víctima de los delitos **que ameriten prisión preventiva oficiosa o** en aquellos casos en que la Víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, **daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad** o si la Víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, **cuando así lo determine la autoridad judicial.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.
Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo en términos de esta Ley y su Reglamento.	**Artículo 70.** La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al **Fondo o los Fondos estatales, según corresponda**, en términos de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 71. La Federación tendrá ~~derecho a~~ exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.	**Artículo 71.** La Federación **a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda,** tendrán **la obligación** de exigir que el sentenciado restituya al Fondo **o a los Fondos estatales** los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la Víctima por el delito que aquél cometió.
Artículo 79. ... El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno ~~del Distrito Federal~~ y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título. ... Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva ~~Federal de Atención a Víctimas~~ y Comisiones ~~Ejecutivas de atención a~~ víctimas ~~estatales y del Distrito Federal,~~ quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.	**Artículo 79. ...** El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título. ... Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones **de** víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Las Comisiones ~~Ejecutivas de atención a~~ víctimas ~~estatales y del Distrito Federal~~ tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.	Las Comisiones **de** víctimas tienen la obligación de atender, **asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos **humanos** cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. **En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.** **En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.**
Artículo 80. El Gobierno Federal, ~~los estados, el Gobierno del Distrito Federal~~ y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.	**Artículo 80.** El Gobierno Federal, **de las entidades federativas** y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
Artículo 81. ... I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, ~~del Gobierno del Distrito Federal~~ y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención,	**Artículo 81. ...** I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención,

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;	defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
II....	II. ...
III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas ~~y el Distrito Federal;~~	III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas.
IV. a XV. ...	IV. a XV. ...
XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, ~~y~~	**XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;** **XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:** **a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la Víctima;** **b) La obligación de las Comisiones de víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la Víctima;** **c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal. **En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y** **d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y**
XVII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.	XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 82. ...	**Artículo 82....**
I....	I....
a) ...	a) ...
b) ...	b) ...
c) ...	c) ...
II. ...	II. ...
a) ...	a) ...
b) ...	b) ...
c) ...	c) ...
III. ...	III. ..
a) ...	a) ...
IV. ...	IV. ...
a) ...	a) ...
b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de ~~los estados y del Distrito Federal.~~	b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos **de las entidades federativas.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
V. ...	...
Artículo 83. ... ... Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del ~~Pleno~~ de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda. ...	**Artículo 83.** ... ... Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda. ...
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva ~~de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas~~, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y ~~gozará~~ de autonomía técnica y de gestión. ~~El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.~~	**Artículo 84.** La Comisión Ejecutiva **es un organismo** con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con **los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.** **Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.** **La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale. **El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.**
...	En la ejecución de las funciones ...
...	De la Comisión Ejecutiva ...
...	A fin de garantizar el acceso ...
Las entidades federativas y ~~el Distrito Federal~~ contarán con una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.	Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un Fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.
SIN CORRELATIVO	**Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:** **I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;** **II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y** **III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera: I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado: a) Gobernación quien la presidirá; b) Hacienda y Crédito Público; c) Educación Pública; d) Salud; II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y III. El titular de la Comisión Ejecutiva. Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto. La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Sexies. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones: I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo; II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento; III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo; IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan. En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.
SIN CORRELATIVO	Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva. La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico. Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región. Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley. La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial. Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará ~~integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá~~ por el voto de las dos terceras partes de los presentes. ~~Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.~~ ~~Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:~~ ~~I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;~~ ~~II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.~~ ~~Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.~~	**Artículo 85.** La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido** por el voto de las dos terceras partes de los **miembros** presentes **de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas~~	
Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:	**Artículo 86.** Para ser Comisionado **Ejecutivo** se requiere:
I. y II....	I. y II....
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, ~~y~~	III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación;**
	IV. **Contar con título profesional,** y
IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.	**V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.**
En la elección ~~de los comisionados~~, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.	En la elección **del Comisionado Ejecutivo**, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
~~Los comisionados~~ se desempeñarán~~á~~n en su cargo por cinco años ~~y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato,~~ sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia	**El Comisionado Ejecutivo** se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
Artículo 87. ~~La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado quien durará en funciones dos años, renovable por una ocasión y será elegido por los comisionados.~~	**Artículo 87.** El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 88. ...	**Artículo 88....**
I. a XIII. ...	I. a XIII. ...
XIV. ~~Administrar y~~ vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;	XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;
XV. a XXI. ...	XV. a XXI. ...
XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas ~~y del Distrito Federal~~, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;	XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;
XXIII. a XXIV. ...	XXIII. a XXIV. ...
XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, ~~estatal, del Distrito Federal y~~ municipal;	XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, **de las entidades federativas** y municipal;
XXVI. a XXIX. ...	XXVI. a XXIX. ...
~~XXX. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos que requieran prevención, atención e investigación con una perspectiva integral tales como en los casos de desaparición~~	XXX. Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto autorizado;~~ XXXI. a XXXIV. ... XXXV. ~~Recibir y evaluar~~ los informes ~~rendidos por el titular~~ del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, ~~y~~ XXXVI. Las demás que se deriven de la presente Ley.	XXXI. a XXXIV. ... XXXV. **Hacer públicos** los informes **anuales sobre el funcionamiento** del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; **XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y** XXXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.
SIN CORRELATIVO	**Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:** **I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el Fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;** **II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias; IV. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste; V. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo, y VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos: a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima; b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional. La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas. **Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo federal, por la comisión de víctimas local con cargo al Fondo local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la comisión de víctimas local o se haya constituido el Fondo local.**
Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas ~~estatales y del Distrito Federal~~, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.	**Artículo 89.** La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homologas de **las entidades federativas**, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.
Artículo 90. ... Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta ~~de alguno de sus integrantes~~ cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.	**Artículo 90. ...** Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.
Artículo 92. ~~La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo.~~	**Artículo 92.** Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.~~	
Artículo 93. ~~A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país,~~ la Comisión Ejecutiva ~~contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:~~ ~~I. Comité de violencia familiar;~~ ~~II. Comité de violencia sexual;~~ ~~III. Comité de trata y tráfico de personas;~~ ~~IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;~~ ~~V. Comité de personas víctimas de homicidio;~~ ~~VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;~~ ~~VII. Comité de detención arbitraria;~~ ~~VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y~~ ~~IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.~~ ~~Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.~~	**Artículo 93.** La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades: I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda; II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento; III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.
~~**Artículo 94.** Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad federativa también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.~~ ~~Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se~~	**Artículo 94**. Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.~~ ~~Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y elaboración de los diagnósticos, cuidando la información de carácter privado de las víctimas.~~	
Artículo 95. El Comisionado ~~Presidente~~ tendrá las siguientes facultades: I... II. Convocar~~, dirigir, coordinar~~ y dar seguimiento a las sesiones que ~~celebre la Comisión Ejecutiva;~~ III. ... IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos~~ a través de las sesiones que se celebren;~~ V. a VIII.... IX. ~~Proponer al Pleno de la Comisión Ejecutiva~~ los convenios de colaboración o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; X. ... XI. ... XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, ~~y~~	**Artículo 95**. El Comisionado **Ejecutivo**, tendrá las siguientes facultades: I. ... II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice **la Junta de Gobierno**; III. ... IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos; V. a VIII.... IX. **Suscribir** los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; X. ... XI. ... XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva; **XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y** XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
XIII. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.	Ejecutiva **en términos de la legislación aplicable**.
Artículo 96. ... ... El Registro Nacional de Víctimas ~~será~~ una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva ~~y contará con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva.~~ El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal. ~~Los estados y el Distrito Federal~~ contarán con sus propios registros. La Federación, ~~los estados y el Distrito Federal~~ estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. ~~El Presidente de la Comisión Ejecutiva~~ dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal. ...	**Artículo 96. ...** ... El Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva. El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, **y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.** **Las entidades federativas** contarán con sus propios registros. La Federación, y **las entidades federativas** estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. **El Comisionado Ejecutivo** dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal. ...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 97. ... I.... II. ... III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, ~~del Distrito Federal~~ o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.	**Artículo 97. ...** I. ... II. ... III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, **de las entidades federativas** o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. ... ...
Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos ~~estatales o del Distrito Federal,~~ según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.	**Artículo 98.** Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos de **las entidades federativas,** según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal. ... ...
Artículo 100.... I. a III.... IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de	**Artículo 100....** I. a III.... IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, ~~estatales, o del Distrito Federal~~ según la competencia; V. a XI.... ...	la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de las **entidades federativas** según la competencia; V. a XI.... ...
Artículo 110. ... I. a III.... IV. Los ~~órganos jurisdiccionales internacionales~~ de protección de derechos humanos ~~a los que México les reconozca competencia, y~~ ~~V. La Comisión Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:~~ ~~a) El Ministerio Público;~~ ~~b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;~~ ~~c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, o~~ ~~d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.~~ ...	Artículo 110. ... I. a III.... IV. Los **organismos públicos** de protección de los derechos humanos; V. **Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;** VI. **La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;** VII. **La Comisión Ejecutiva, y** VIII. **El Ministerio Público.** ...
Artículo 114. ... I. a V. ... VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones ~~estatales y del Distrito Federal,~~ y de	**Artículo 114. ...** I. a V. ... VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones **de las entidades federativas**, y de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten; VII. a XIII....	las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten; VII. a XIII....
Artículo 116. ... I. a IX.... X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.	**Artículo 116. ...** I. a IX.... **X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;** **XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en términos de esta Ley, y** XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa. ... ...
Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal~~, a los estados y al Distrito Federal,~~ en el ámbito de sus respectivas competencias: I. ... II. ... III. ...	**Artículo 117.** En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal y a **las entidades federativas,** en el ámbito de sus respectivas competencias: I. ... II. ... III. ...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
IV. ...	IV. ...
V. ...	V. ...
VI. ...	VI. ...
VII....	VII....
VIII. ...	VIII. ...
IX. ...	IX. ...
Artículo 125. ...	**Artículo 125....**
I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral;	I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. **Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;**
II....	II....
	III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;
III. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;	IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;
IV. Formular denuncias o querellas;	V. Formular denuncias o querellas;
V. Representar a la víctima en todo procedimiento ~~penal;~~	VI. Representar a la víctima en todo procedimiento **jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.**
VI. ~~Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad, y~~	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~VII. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público.~~	VII Derogado.
SIN CORRELATIVO	**Artículo 125 Bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.** **La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.**
Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos ~~necesarios para la~~ ayuda, ~~asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos~~ ...	**Artículo 130.** El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, **siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.** ...
Artículo 132. ... I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;	**Artículo 132....** I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, **y sin que pueda ser disminuido.** **La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al** 0.014% del gasto programable del

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de~~ 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación. II. a VIII....	Presupuesto de Egresos de la Federación **del año inmediato anterior**; II. a VIII.... ... ...
Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las ~~disposiciones necesarias~~ para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.	**Artículo 134.** La Comisión Ejecutiva deberá emitir las **reglas de operación** para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.
Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, ~~y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se~~ podrá crear un fondo de emergencia para ~~los apoyos establecidos en el Título Tercero de esta Ley,~~ el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. ~~La Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de diez días, determinará los apoyos económicos de emergencia que se requieran.~~	**Artículo 135.** Cuando la situación lo amerite, **en términos de lo establecido en el Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo 93 fracción III** podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de los Recursos de Ayuda,** el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. **El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.**
Artículo 136. El Fondo será administrado por ~~la Comisión Ejecutiva~~ siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.	**Artículo 136.** El Fondo será administrado **por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva en su calidad de fideicomitente,** siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. **La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.
Artículo 138. El titular del Fondo deberá: I. ~~Administrar cautelosamente~~ los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley; II.... III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ~~ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva,~~ y IV. ...	**Artículo 138.** El titular **de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo,** deberá: I. **Vigilar que** los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley; II. ... III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno,** y IV. ...
Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva ~~le~~ turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la ~~propuesta que el comisionado presidente presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva para determinar el apoyo o ayuda~~ que requiera la víctima.	**Artículo 145.** En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la **determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación** que requiera la víctima.
SIN CORRELATIVO	**CAPÍTULO V** **DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
SIN CORRELATIVO	Artículo 157 Bis. El Fondo estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.
SIN CORRELATIVO	Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.
SIN CORRELATIVO	Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los fondos estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de esta Ley.
SIN CORRELATIVO	Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
	atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada Víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.
Artículo 164. ... ... Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal, entidades federativas ~~o el Gobierno del Distrito Federal~~ no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.	Artículo 164. ... ... Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal **o en los gobiernos de las entidades federativas** no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.
Artículo 166. ... ~~Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables~~.	**Artículo 166. ...** **Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.**
Artículo 168. La víctima tendrá derecho a ~~nombrar~~ un Asesor Jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En caso de ~~no contar con~~ abogado particular, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.	**Artículo 168.** La víctima tendrá derecho a **solicitar a la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico** en caso de **que no quiera o no pueda contratar un ~~abogado particular~~**, el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. **En este caso,** la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
... ...	Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal. ... ...
~~**Artículo 175.** La Junta Directiva estará integrada por el Director General de la Asesoría Jurídica Federal, quien la presidirá, así como por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, nombrados por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director General. Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable y durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por otros tres.~~	**Artículo 175.** Derogado.
~~**Artículo 176.** La Junta Directiva podrá sesionar con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto de calidad. Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada dos meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.~~	**Artículo 176.** Derogado.
~~**Artículo 177.** Son las facultades de la Junta Directiva: I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la Asesoría Jurídica de las Víctimas; II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;~~	**Artículo 177.** Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
~~III. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de Asesoría Jurídica Federal;~~ ~~IV. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, en temas como capacitación y apoyo;~~ ~~V. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de atención a víctimas;~~ ~~. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Federal;~~ ~~VII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Comisión Ejecutiva;~~ ~~VIII. Aprobar los lineamientos generales para la contratación de peritos y especialistas en las diversas áreas del conocimiento en que se requieran;~~ ~~IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal;~~ ~~X. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y~~ ~~XI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.~~	
~~**Artículo 178.** El Director General de la Asesoría Jurídica Federal, será designado por el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Ejecutiva y durará tres años en su cargo, pudiendo ser reelecto hasta por tres años más.~~	**Artículo 178.** Derogado

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

P R I M E R A. La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

S E G U N D A.- Por lo que corresponde al proceso de dictaminación, esta Comisión de Justicia es competente para conocer y dictaminar este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción I, numeral 1 del artículo 80 y la fracción I, numeral 1 del artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

T E RC E R A. Para los integrantes de esta dictaminadora, resulta trascendente el legislar en materia de víctimas, ellas son la parte que más se ha descuidado a lo largo de la historia del derecho penal, por lo cual brindarles el lugar que les corresponde dentro de la escena jurídica y otorgarles un papel central, es el resultado del compromiso que ha adquirido el Estado mexicano al proponer un cambio en su sistema de justicia.

Siendo así es importante mencionar que reconocemos la preocupación de los legisladores que presentaron sus iniciativas y que derivaron en la Minuta que hoy nos ocupa, siempre en razón de salvaguardar los derechos de las víctimas, procurando su bienestar con reformas a la Ley General de Víctimas, siendo esta una Ley de vanguardia humanitaria, respetuosa de los derechos humanos y garantías individuales consagradas en nuestra carta magna. Como ya sabemos el impacto que se generó por la creación de la ley general de victimas es muy grande debido a que es una de las primeras legislaciones que contempla los derechos de las victimas siendo nuestro país pionero en la preservación de los derechos

humanos de las víctimas, de este modo se abre un camino que genera un apertura muy extensa sobre la preservación de sus derechos.

De este modo con las reformas a Ley General de Víctimas se pretende ampliar sus horizontes, para subsanar las deficiencias que se encuentren dentro de ella, siendo esto un esfuerzo y colaboración de diversas instituciones del Estado Mexicano para brindar una mayor protección a sus habitantes.

Así mismo se busca crear un mayor lazo de confianza entre la víctima y el Estado, en la que se procure una mejor implementación del sistema, mismo que llevará al porvenir buscado por la sociedad mexicana, sirviendo como ejemplo para las demás naciones.

Por otra parte, y para dar contexto a los presentes considerandos, referimos que a partir de la reforma Constitucional que se da el 18 de junio de 2008, surge en nuestro país un parte aguas en materia de justicia, se crea un nuevo paradigma, en el cual se trata de dejar de lado todo el peso que se encontraba arrastrando hasta ese momento en el aparato de justicia mexicano, es decir desde la eficiencia y formas de actuar de las policías, hasta el hacinamiento existente en el sistema penitenciario nacional, todo esto claro pasando por los problemas existentes meramente en los procesos penales en donde la víctima siempre fue olvidada.

Por esa razón, y a criterio de esta dictaminadora el momento en el que nace la reforma en materia penal, resulta ser oportuna, para poder echar a andar la maquinaria que está permitiendo el tránsito de la llamada justicia retributiva, dando cabida a un nuevo comienzo que es la justicia restaurativa, en donde la víctima toma ese papel protagónico del que hemos hablado dentro de los procesos penales, ya que lo más importante dentro de estos, ya no es el tratamiento que se le brindará al delincuente para que pueda readaptarse a la sociedad, si no ahora lo más importante

es retribuirle a la víctima en la medida de lo posible el bien jurídico que le fue transgredido.

Esto por lo que respecta propiamente al derecho penal, no obstante las víctimas de las transgresiones a los derechos humanos también han sido olvidadas dentro de la esfera jurídica, por lo cual legislar de manera integral tanto para la víctimas de los delitos, como de las personas que sufren violaciones graves a los derechos humanos paso a ser un factor fundamental.

Es por ello que como antecedente directo de la Ley General de Víctimas encontramos la violencia generada por la expansión en los últimos lustros de las organizaciones de delincuencia organizada, lo que ha dejado un gran número de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas de su lugar de origen.

En este contexto de violencia, académicos, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, señalaron la necesidad de que el Estado reconociera la magnitud del problema y asumiera su responsabilidad frente a las víctimas. Fue así que empezó a surgir la exigencia de una ley que reconociera los derechos de las víctimas y estableciera una serie de medidas para responder a sus necesidades.

En algunos espacios e instituciones se recuperó esa idea e impulsaron distintas acciones; por ejemplo, desde la Oficina del Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México se presentó una propuesta de ley al Senado de la República como aporte a este proceso. Esta demanda de varios actores y espacios, donde confluyeron propuestas e iniciativas diversas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y expertos, se concretó finalmente en la elaboración de la Ley General de Víctimas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

La Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad en el Senado y la Cámara de Diputados en abril de 2012. No obstante, dicha Ley no se publicó ese año por observaciones del Ejecutivo Nacional. Sin embargo desde el punto de vista del Congreso de la Unión, estas observaciones eran extemporáneas, por lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ordenó su publicación; sin embargo, el 19 de julio de 2012 la Secretaría de Gobernación promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de controversia constitucional contra la Cámara de Senadores respecto de la extemporaneidad o no de las observaciones realizadas por el Ejecutivo al Congreso –es decir, que determinara si estaban o no fuera de tiempo–, situación que paralizó la publicación de la Ley General de Víctimas. Con la entrada del nuevo titular del Ejecutivo Federal en diciembre del 2012, se retiró la controversia constitucional y la Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2013. La Ley sufrió posteriormente una serie importante de reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013.[1]

Con todo lo hasta aquí descrito y de acuerdo con la trayectoria y surgimiento de la Ley, es necesario referir los que nos comenta nuestra colegisladora del Senado de la República de que las normatividades siempre son perfectibles y en este caso la Ley general de víctimas también lo es, por lo cual se considera viable realizar las reformas necesarias a dicha Ley a efecto de que la protección y acceso a los derechos que de ella emanan sean más accesibles para las personas que se encuentran en esta condición.

[1] Todos los antecedentes, fueron extraídos del libro "Introducción a la Ley General de Víctimas", que puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica[http://colaboracioncivica.org/esp/wp-content/uploads/2014/12/LeyVictimas-1.pdf]

C U A R T A . De acuerdo a los numerales anteriores de los presentes considerandos y manifestando que esta dictaminadora comparte la opinión de nuestra similar del senado de reformar la Ley General de Víctimas para fortalecer los siguientes aspectos:

- **Acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral**

Como ya lo hemos mencionado y derivado de las notas periodísticas que se mencionaron con antelación, consideramos necesario flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas.

Por lo cual estamos de acuerdo en que se obligue a las entidades federativas a que cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, ya que efectivamente como lo refiere la colegisladora con esto la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos.

De la misma manera coincidimos con la idea de facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV, ya que efectivamente estos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

- **Facultad de atracción**

Con respecto a establecer las directrices puntuales a fin de que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local, creemos que resulta muy atinado, en virtud de que existen asuntos del orden local de relevancia que requieren la atención de la Comisión Ejecutiva y no de las comisiones estatales, dado esta situación, coincidimos con nuestra similar en fijar los supuestos en la norma adjetiva en los que se daría la atracción.

- **Conformación de la CEAV para una atención más ágil a las víctimas**

En la minuta se sugiere modificar la estructura, integración y funcionamiento de la CEAV, para que deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, mismo que designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. Este se sugiere sea nombrado por el Presidente de la Republica previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.

De la misma manera se propone hacer una modificación estructural de la Comisión Ejecutiva, eliminando la existencia de los comités de estructura en el artículo 93 y se determina la existencia del Comité Interdisciplinario evaluador, con facultades debidamente reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral, y en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la Ley, así como para la creación de fondos de emergencia, con todo esto se logrará que la estructura de la Comisión permita la atención más agilizada a las víctimas que en los momentos complicados cuando son vulnerados sus bienes jurídicos

tutelados o sus derechos humanos lo que menos requieren es un ente burocrático si no instituciones flexibles, amables y de corte humano, que les ayuden en su situación y no que les complique más las cosas.

- **Participación de la sociedad en la política pública**

Se prevé en la minuta que en la elaboración de la política pública participen en forma activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

Por lo que se propone una reforma que prevé la figura de una Asamblea Consultiva, la cual resulta de mayor utilidad en términos de la incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación de la política pública, esta se concibe en la reforma como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y se sugiere este integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo en la toma de decisiones. Adicionalmente Cuatro representantes de la Asamblea, integrarán la Junta de Gobierno. Por lo que su participación estará garantizada en todo momento, para la debida atención a las víctimas.

Ante esto coincidimos plenamente con lo expuesto por nuestra similar del Senado, ya que como bien lo explicamos en los antecedentes que dieron origen a dicha Ley que se pretende reformar, la Ley General de Víctimas es el resultado en conjunto del esfuerzo de diversos actores sociales, del ámbito académico y demás, por lo cual su participación ya al momento de aplicarse la Ley, resulta de gran relevancia, esto sin duda para esta dictaminadora es un gran aporte en beneficio de la víctimas.

- **Responsabilidades de los servidores públicos**

En la propuesta de reforma, se propone incluir que "las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar". Para esta dictaminadora, esta propuesta resulta pertinente ya que sólo estableciendo las responsabilidades de los servidores públicos se logrará combatir la corrupción que desgraciadamente permea en nuestras instituciones, por lo cual consideramos viable la propuesta de reformar en este sentido la Ley General de Víctimas.

- **Interés Superior de la Niñez**

El principio del interés superior del niño o niña, es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Para contextualizar podemos mencionar que las Naciones Unidas establecieron, a nivel internacional, la noción de los derechos humanos cuando aprobaron, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de la Declaración se reconoce que todos los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles, están mutuamente relacionados y son interdependientes.

Aunque esta Declaración no forma parte de la ley internacional vinculante, su aceptación por parte de todos los países del mundo supone una adherencia al principio fundamental de que todos los seres humanos deben ser tratados con igualdad, y es preciso respetar los derechos que poseen de manera inherente.

Los derechos de la niñez comienzan a perfilarse justamente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25 la Declaración señala que la infancia y la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, y que

todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de él, tienen derecho a igual protección social.

Con ello comenzó a crearse todo un marco de protección a los Derechos Humanos, entre ellos La Convención Sobre los Derechos del Niño, que constituye un gran salto por la forma en que se conceptualizaba a los niños al considerarlos, a partir de ese momento, como sujetos de derechos, dejando de lado la teoría tutelar que los consideraba como "menores". Con la entrada en vigor de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la norma jurídica y la doctrina se unen para cambiar la visión que se tenía de la infancia hasta el momento, estableciendo que lo que ha de protegerse es el ejercicio integral de los derechos humanos por parte de las niñas, los niños y los adolescentes.

Como bien sabemos todo Estado, al haber aceptado el cumplimiento de las normas de dicha Convención, estos se obligan a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las normas de la Convención, a convertir estas normas en una realidad para las niñas y niños y a abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir o conculcar el disfrute de estos derechos. [2]

Nuestro país al ser parte de dicha convención, ha buscado la manera de armonizar su legislación para dar cabal cumplimiento a lo establecido en ella, así como al párrafo primero del artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ha legislado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De esta manera podemos inferir que al armonizar la Ley General de Víctimas tomando en cuenta el interés Superior de la Niñez, estamos cumpliendo con lo establecido en las disposiciones tanto nacionales e internacionales ya

[2] Los Derechos de la Infancia, artículo de la Cámara de Diputados a través CEAMEG, disponible en electrónico [http://www.diputados.gob.mx/documentos/CEAMEG/3.%20derechos.pdf] Comsultado el <15 de noviembre de 2016>

mencionadas, sin omitir lo mencionado en el párrafo 9 del artículo 4 de la Norma Suprema que a la letra dice:

Artículo 9.- [...]

"En todas las decisiones y actuaciones del ***Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez****, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez."*

[..]
(Subrayado propio)[3]

De esta manera podemos mencionar que consideramos viable por armonización legislativa el agregar dentro de la Ley General de Víctimas el Principio de Interés Superior de la Niñez, no olvidando mencionar que dicho grupo vulnerable requiere de toda la protección de las instituciones y del Estado mexicano.

Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Dentro de los cambios propuestos, se busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de estas. Se establece que para "procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral" podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la misma manera también se propone ampliar también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual manera y con la finalidad de evitar confusiones respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como son las Procuradurías de las Entidades Federativa o dependencias análogas.

También se propone que se integre por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y contar con un servicio civil de carrera que comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

Ante tales propuestas de modificación esta dictaminadora está de acuerdo en virtud de que darle su lugar que le corresponde al asesor jurídico, dignificará la carrera de este, provocando que su actuar sea en beneficio de la víctima, además de que se amplía su campo de acción no sólo a la materia penal, lo que permitirá mayor protección al momento que se den los hechos víctimizantes.

Desplazamiento Interno

En este punto Al igual que nuestra colegisladora se nos hace necesario precisar que si bien, de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos, los cuales se encuentran contenidos en los Principios Rectores de Deng, se entiende como desplazamientos internos a aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos, de proyectos desarrollo a gran escala o megaproyectos que no estén justificados por un interés público superior o primordial, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida.

Cabe mencionar que en nuestro país no existe disposición Constitucional o legal en la que se contemple la definición del desplazamiento interno, o del desplazamiento interno forzado. Por lo tanto en la Ley General de Víctimas se ha tomado como referencia la de los Principios Rectores, sin que sean vinculantes, toda vez que los mismos son criterios orientadores para los Estados afectados por este fenómeno.

Para continuar, es necesario mencionar que en nuestro país, dicho fenómeno responde a situaciones de violencia focalizada en algunas regiones del país y patrones no sistemáticos ni generalizados de violaciones a derechos humanos, principalmente como consecuencia de la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada.

Por lo que de la misma manera que el Senado coincidimos en atender el llamado de la CNDH para considerar en la Ley General de Víctimas al Desplazamiento Interno como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos; y que, en consecuencia, amerita un tratamiento diferenciado que permita a esta población contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido

De esta manera consideramos procedente que la Ley General de Víctimas reconozca la necesidad de atender y proteger, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de tal fenómeno y que dicha Ley, debe otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias y de esta manera fortalecer la protección de los derechos

vulnerados con motivo del desplazamiento interno, respetando de esta forma los principios generales establecidos en la Ley y en particular el enfoque diferencial y especializado.

Por lo que los integrantes de esta dictaminadora consideramos que al garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno se estará dando cabida a que a estas se le proteja desde un enfoque diferencial y especializado, atendiendo de manera particular sus principales afectaciones que son la carencia de medios de subsistencia y de vivienda digna, la inseguridad al retornar, la falta de documentos de identidad, y las complicaciones para acceder a los sistemas educativo y de salud; así como el sentimiento de desarraigo y el rompimiento de la vida en comunidad.[4] Como podemos observar no son sólo afectaciones materiales, sino que también se afectan los aspectos psicoemocionales de las personas que sufren este tipo de desplazamiento, por estas razones esta dictaminadora no cree necesario, sino urgente realizar las reformas a la Ley que permitan la protección de los desplazados internamente por causa de la delincuencia organizada, la violencia o cualquier otra circunstancia.

Q U I N T A.- Siguiendo con las consideraciones y en relación a la Opinión que se menciona en el apartado de antecedentes del presente dictamen, mencionaremos los cambios que se presentan en la Minuta y que se destacan en la ya mencionada opinión, cambios que vale la pena decir la Comisión de Derechos Humanos concuerda con ellos:

- Se contempla la obligación para que los estados establezcan fondos estatales de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas.

[4] Revista Defensor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Número 4, abril de 2016, Pag. 45, disponible en electrónico [http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_04_2016.pdf] Consultado el <15 de noviembre de 2016>

- Se contempla la previsión de gastos de ayuda inmediata para las víctimas a cargo de la CEAV y las Comisiones estatales.

- Se prevé que las víctimas puedan acceder a gastos de ayuda inmediata.

- Se establece que la CEAV podrá cubrir, con cargo al Fondo federal, las erogaciones derivadas por concepto de medidas de ayuda inmediata, cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la propia LGV.

- La CEAV y las comisiones estatales podrán otorgar medidas de ayuda provisional a las víctimas con cargo a sus recursos. Se prevé que las víctimas podrán comprobar dichos gastos en un período de 30 días (y no como rembolso). Igualmente, los lineamientos que se expidan deberán NO causar mayores cargas de comprobación a las víctimas.

- Se adiciona que las entidades federativas, además de la federación y los municipios, donde se haya cometido el hecho victimizante, apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios.

- Igualmente, la CEAV podrá cubrir la compensación subsidiaria a la víctima, pero la comisión estatal deberá solicitarlo por escrito y rembolsarlo. En caso de que los recursos no sean resarcidos, la CEAV ejercerá el derecho de repetir contra la comisión estatal correspondiente y contra quienes hayan cometido el delito.

- Se contempla el apoyo de gastos de traslado para las víctimas cuando tengan que trasladarse para realizar diligencias derivadas del hecho

victimizarte (transportación, hospedaje y alimentación). Cuando las Comisiones Estatales no hayan cubierto los gastos recién señalados, la CEAV podrá brindar la ayuda con cargo al Fondo, solicitando a las Comisiones Locales el reintegro de los gastos y, cuando no se realice, deberá cubrirse el monto actualizado más los intereses.

- Se prevé que, aun en casos de competencia local, las víctimas podrán acudir directamente a la CEAV, cuando no reciban respuesta (en 30 días) por la comisión local, cuando la atención brindada sea deficiente o se les hubiere negado.

- Se adiciona a diversos grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como lo son: niñas, niños y adolescentes; mujeres; adultos mayores; personas con discapacidad; migrantes; indígenas; personas defensoras de derechos humanos; periodistas y personas en situación de desplazamiento interno, como sujetos de prioridad y enfoque diferencial de atención.

- Se contempla la celebración de convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones estatales para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la primera a través de su fondo.
- Instituciones u organizaciones, sociales o privadas, colectivos o grupos de víctimas, y demás instituciones nacionales o extranjeras, participarán como invitados a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas –SNAV-.

- Especifica que la CEAV, para su administración contará con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo. También con una Asamblea

Consultiva que fungirá como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

- Establece que la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en la LGV y demás disposiciones aplicables. Igualmente, prevé que dicho órgano se integrará de la siguiente forma: por el titular de la Comisión Ejecutiva; un representante de las siguientes secretarías de Estado: Gobernación quién la presidirá, Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Educación Pública y Salud; cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, adicionalmente contará con un Secretario Técnico.

- Define que la Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva. Se integrará por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificadas por un período igual. Se prevén requisitos de elección y de la convocatoria para su designación.

- Establece que la Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos.

- Faculta al Comisionado Ejecutivo para designar las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

- Se añade que se podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de recursos –medidas- de ayuda.

- Se establece que la Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo.

- Se contempla que las víctimas tendrán derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva, o a sus equivalentes estatales, que le proporcionen un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular.

- Se establece que la Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la LGV. Para ello, se prevé que contará con un servicio civil de carrera.

De esta manera resulta pertinente mencionar que en la opinión multicitada se considera procedente en sus términos la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

S E X T A.- Después de los análisis vertidos en las consideraciones anteriores podemos inferir que desde la publicación de la Ley General de Víctimas, nuestro país cuenta con una herramienta sólida para garantizar la protección de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, con su entrada en vigor se rompió el paradigma arraigado en la sociedad de que solamente se protegían los derechos humanos de presuntos delincuentes, lo que generaba la percepción constante de autoridades coludidas con criminales y abandono para quienes sufrían sus actos.

Como igual hemos podido demostrar la Ley tiene un carácter humanista, es armónica con tratados internacionales y pone en el centro de atención las necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones

de todos los entes del Estado para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan.

Con esto nos damos cuenta que el instrumento jurídico que nos encontramos trabajando es pieza fundamental para garantizar la justicia restaurativa en nuestro país y reparar integralmente a las víctimas. No omitimos mencionar que esta Ley fue respuesta del Estado Mexicano al enorme dolor que sufría y sigue sufriendo nuestro país, por lo cual, como ya lo decíamos salta a la vista su vocación humanitaria.

Por todo esto, nosotros como legisladores atendiendo a esta gran responsabilidad cobramos conciencia de la relevancia que tiene el hecho de que México cuente con un instrumento legal en materia de reparaciones integrales a la vanguardia, por lo tanto también valoramos en toda su extensión las dificultades que esta Ley tuvo que enfrentar en su travesía para llegar a buen puerto.

El hecho de que las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, a pesar de su dolor, cuenten con un ordenamiento jurídico que, al aplicarse adecuadamente, sirve de bálsamo para la cicatrización de las heridas provocadas por tanta violencia, es el motor que nos impulsa a manifestar nuestro parecer con las reformas presentadas.

Estas reformas que son un logro más de la justicia restaurativa, no sólo servirán para satisfacer los justos reclamos de las víctimas, sino para lograr, paulatinamente, un México en paz, el México que todos queremos, en donde la aplicación de esta ley sea cada vez menos frecuente, por innecesaria.

Sabemos que las reformas que se proponen y de las cuales los miembros de esta dictaminadora estamos de acuerdo, serán criticadas por muchos, no obstante se deja de manifiesto lo que al comenzar los considerando mencionamos, todas las leyes son perfectibles y esta Ley y estas reformas no son la excepción, sin embargo

no olvidemos que son la manifestación del trabajo para atender las exigencias de la sociedad para responder a las demandas de las víctimas y sus familiares de verdad, justicia y paz.

De acuerdo con los presentes considerandos, esta dictaminadora determina **VIABLES** las propuestas de modificación vertidas en la Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto y para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Justicia somete a consideración de esta Soberanía en los términos de la Minuta, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN: el primero y tercer párrafos del artículo 1; las fracciones I,III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 6; las fracciones XXI, XXX y XXXIV del artículo 7; el primero, segundo y cuarto párrafos del artículo 8; la fracción IV del artículo 12; el segundo párrafo del artículo 28; el artículo 29; el último párrafo del artículo 30; el artículo 31; el primer párrafo del artículo 33; las fracciones I y II del artículo 34; el artículo 36; el artículo 38; la denominación del CAPÍTULO III del TÍTULO TERCERO para quedar como "MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO"; el primero y el último párrafos del artículo 40; el artículo 42; el artículo 45; el artículo 46; el artículo 47; el artículo 52; el artículo 54; el artículo 57; las fracciones I y VI del artículo 61; el primero y último párrafos del artículo 67; el artículo 68; el artículo 70; el artículo 71; el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79; el artículo 80; las fracciones I, III, XVI y XVII del artículo 81; el inciso b) de la fracción IV del artículo 82; el sexto párrafo del artículo 83; el primero y quinto párrafos del artículo 84; el artículo 85; el primer párrafo, las fracciones III y IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; las fracciones XIV, XXII, XXV, XXXV y XXXVI del artículo 88; el artículo 89; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 93; el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX, XII y XIII del artículo 95; el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 96; la fracción III del primer párrafo del artículo 97; el primer párrafo del artículo 98; la fracción IV del artículo 100; las fracciones IV y V del artículo 110; la fracción VI del artículo 114; la fracción X del artículo 116; el primer párrafo del artículo 117; las

fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 125; el primer párrafo del artículo 130; la fracción I del artículo 132; el artículo 134; el artículo 135; el artículo 136; el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 138; el artículo 145; el cuarto párrafo del artículo 164; el segundo párrafo del artículo 166; el primer párrafo del artículo 168. **Se ADICIONAN**: el principio de "Interés superior de la niñez" al artículo 5, entre los principios de "Integralidad, indivisibilidad e interdependencia" y de "Máxima protección" recorriéndose los subsecuentes; las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 7; cinco últimos párrafos al artículo 8; un último párrafo al artículo 9; dos párrafos finales al artículo 12; dos párrafos al artículo 15; el párrafo quinto, recorriéndose los anteriores quinto a séptimo para ser sexto, séptimo y octavo del artículo 21; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 34; el artículo 39 Bis; dos últimos párrafos al artículo 64; dos últimos párrafos al artículo 79; la fracción XVIII al artículo 81; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 84, recorriéndose los actuales segundo, tercero, cuarto y quinto para ser quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente; el artículo 84 Bis; el artículo 84 Ter; el artículo 84 Quáter; el artículo 84 Quinquies; el artículo 84 Sexies; el artículo 84 Septies; el artículo 84 Octies; la fracción V al artículo 86; la fracción XXXVII al artículo 88; el artículo 88 Bis; la fracción XIV al artículo 95; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 110; las fracciones XI y XII al artículo 116; el artículo 125 Bis; un CAPÍTULO V "DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA" al TÍTULO OCTAVO, con los artículos 157 Bis, 157 Ter, 157 Quáter y 157 Quinquies. **Se DEROGAN:** los artículos 16; la fracción XXX del artículo 88; 92; 94; la fracción VII del artículo 125; los artículos 175; 176; 177 y 178; **para quedar como sigue:**

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y **73 fracción XXIX-X,** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. **Las autoridades de todos los ámbitos de**

gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

...

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

Buena fe.- ...

Complementariedad.- ....

Debida diligencia.- ...

Enfoque diferencial y especializado.- ...

Enfoque transformador.- ...

Gratuidad.-...

Igualdad y no discriminación.- ...

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- ...

Mínimo existencial.- ...

No criminalización.- ...

Victimización secundaria.- ...

Participación conjunta.- ...

Progresividad y no regresividad.- ...

Publicidad.- ...

Rendición de cuentas.- ...

Transparencia.- ...

Trato preferente.- ...

Artículo 6. ...

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas **adscritos a la Comisión Ejecutiva** y sus equivalentes en las entidades federativas;

II. ...

III. Comisiones de víctimas: Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas **y de la Ciudad de México;**

IV. a VIII. ...

IX. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;

XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito; **y**

XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XXII. ...

Artículo 7. ...

...

I. a XX. ...

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, población indígena **y las personas en situación de desplazamiento interno;**

XXII. a XXIX. ...

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;**

XXXI. y XXXII. ...

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicables;

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta ley, y

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida **de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda**, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad **o** la integridad, **así como de desplazamiento interno**, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

...

Las medidas de ayuda **inmediata**, ayuda, asistencia, atención, **rehabilitación** y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las

entidades federativas y municipios **en el ámbito de sus competencias**, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva deberá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 9. ...

...

...

...

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 12. ...

I. a III....

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado **a solicitud de la víctima** de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. a XIII....

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15. ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Derogado.

Artículo 21. ...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, **en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable,** la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de

cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes **en la materia,** a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 27. ...

I. a VI. ...

...

Las medidas **de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.**

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes,** mujeres, adultos mayores, **personas con discapacidad, migrantes,** indígenas, **personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas Federales, de **las entidades federativas** y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. ...

I. a X....

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, **las entidades federativas** o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31. La Federación**, las entidades federativas** o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa **en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante.** Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias **correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda**.

Artículo 33. Los Gobiernos **federal y de las entidades federativas,** a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos

municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

...

Artículo 34. ...

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, **de las entidades federativas** y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. a VI. ...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna Víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 36. Los Gobiernos federal **y de las entidades federativas**, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración,

que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas **o en situación de desplazamiento** de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la **víctima** supere las condiciones de emergencia, **exista una solución duradera** y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

Las Comisiones de víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, **de las entidades federativas** o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente

afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, **de las entidades federativas** y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para **los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como** niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, **personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, **de las entidades federativas** y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, **particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno.** La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 52. Los Gobiernos federal y **de las entidades federativas,** a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 54. Los Gobiernos federal y **de las entidades federativas,** a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

Artículo 57. La Federación, **las entidades federativas** y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 61. ...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

...

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición **de persona**;

II. a V. ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar **original** de residencia **u origen**;

VII. y VIII. ...

...

Artículo 64. ...

I. a VIII. ...

...

...

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva **o las Comisiones de víctimas, según corresponda,** determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a)...

b)...

...

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas **unidades de medida y actualización mensuales, que** ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán **a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia**, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos **que ameriten prisión preventiva oficiosa o** en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, **daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad** o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, **cuando así lo determine la autoridad judicial.**

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al **Fondo o los Fondos estatales, según corresponda**, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación **a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda,** tendrán **la obligación** de exigir que el sentenciado restituya al Fondo **o a los Fondos estatales** los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 79. ...

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de

los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones **de** víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones **de** víctimas tienen la obligación de atender, **asistir y, en su caso, reparar** a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos **humanos** cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. **En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.**

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 80. El Gobierno Federal, **de las entidades federativas** y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 81. ...

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno **de la Ciudad de México** y municipales,

organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. ...

III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas.

IV. a XV. ...

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:

a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la víctima;

b) La obligación de las Comisiones de víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su Fondo estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 82....

I....

a) ...

b) ...

c) ...

II. ...

a) . ..

b) ...

c) . ...

III. ...

a) . ...

IV. ...

a) ...

b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos **de las entidades federativas.**

V ...

Artículo 83. ...

...

...

...

...

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del **Titular** de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

...

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva **es un organismo** con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

...

...

...

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas **y un Fondo estatal** en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:

a) Gobernación quien la presidirá;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Educación Pública;

d) Salud;

II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y

III. El titular de la Comisión Ejecutiva.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

Artículo 84 Sexíes. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y

V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará **a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.**

Artículo 86. Para ser Comisionado **Ejecutivo** se requiere:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

I. y II....

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, **por lo menos en los dos años previos a su designación;**

IV. Contar con título profesional, y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección **del Comisionado Ejecutivo**, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años **sin posibilidad de reelección**. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88....

I. a XIII. ...

XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV. a XXI. ...

XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los

principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

XXIII. a XXIV. ...

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, **de las entidades federativas** y municipal;

XXVI a XXIX. ...

XXX. Derogado.

XXXI. a XXXIV. ...

XXXV. Hacer públicos los informes **anuales sobre el funcionamiento** del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;

XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el Fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;

II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;

IV. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;

V. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo, y

VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las Comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo Federal, por la Comisión de Víctimas local con cargo al Fondo Local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la Comisión de Víctimas local o se haya constituido el Fondo Local.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homologas de **las entidades federativas**, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 90. ...

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta **del Comisionado Ejecutivo** cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. Derogado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Artículo 95. El Comisionado **Ejecutivo**, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice **la Junta de Gobierno**;

III. ...

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

V. a VIII....

IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. ...

XI. ...

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva;

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva **en términos de la legislación aplicable.**

Artículo 96. ...

...

El Registro Nacional de Víctimas **es** una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de

violaciones a derechos humanos del orden federal, **y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.**

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y **las entidades federativas** estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

...

Artículo 97. ...

I. ...

II. ...

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, **de las entidades federativas** o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

...

...

...

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos de **las entidades federativas,** según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos

federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

...

...

...

...

Artículo 100....

I. a III....

IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de las **entidades federativas** según la competencia;

V. a XI....

...

Artículo 110. ...

I. a III....

IV. Los **organismos públicos** de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva, y

VIII. El Ministerio Público.

...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Artículo 114. ...

I. a V. ...

VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones **de las entidades federativas**, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VII. a XIII....

Artículo 116. ...

I. a IX....

X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas, en términos de esta Ley, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

...

...

...

...

...

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal y a **las entidades federativas,** en el ámbito de sus respectivas competencias:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII...

VIII. ...

IX. ...

Artículo 125....

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. **Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;**

II....

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento **jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.**

VII. Derogado.

Artículo 125 Bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, **siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.**

...

Artículo 132....

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, **y sin que pueda ser disminuido.**

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación **del año inmediato anterior**;

II. a VIII....

...

...

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las **reglas de operación** para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, **en términos de lo establecido en el Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el**

artículo 93 fracción III podrá crear un fondo de emergencia para **el otorgamiento de los Recursos de Ayuda,** el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. **El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.**

Artículo 136. El Fondo será administrado **por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva en su calidad de fideicomitente,** siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 138. El titular **de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo,** deberá:

I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

II. ...

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas **a la Junta de Gobierno,** y

IV. ...

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de

base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.

CAPÍTULO V
DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA

Artículo 157 Bis. El Fondo estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de esta Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada Víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 164. ...

...

...

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal o en los gobiernos de **las entidades federativas** no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

Artículo 166. ...

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a **solicitar a la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular,** el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

...

...

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

QUINTO.- Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durara en el cargo tres años.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

En adelante la designación del Comisionado Ejecutivo se realizara de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

SEXTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octies, de la Ley.

SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

OCTAVO.- Las erogaciones que, en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales en el ejercicio fiscal correspondiente.

NOVENO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuéstales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

DÉCIMO.- Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

DÉCIMO PRIMERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuéstales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

DÉCIMO TERCERO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

DECIMO CUARTO.- En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

DÉCIMO QUINTO.- Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el Comisionado Ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

DÉCIMO SEXTO.- Constituida la Asamblea Consultiva, deberá elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno dentro de los diez días siguientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1		Ibarra Hinojosa Álvaro PRESIDENTE	PRI			
2		Hernández Madrid María Gloria SECRETARIA	PRI			
3		Ramírez Nieto Ricardo SECRETARIO	PRI			
4		Cortés Berumen José Hernán SECRETARIO	PAN			
5		Neblina Vega Javier Antonio SECRETARIO	PAN			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
6		Sánchez Carrillo Patricia SECRETARIA	PAN			
7		Santana Alfaro Arturo SECRETARIO	PRD			
8		Limón García Lía SECRETARIA	PVEM			
9		Sánchez Orozco Víctor Manuel SECRETARIO	MC			
10		Álvarez López Jesús Emiliano INTEGRANTE	MORENA			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
11		Basurto Román Alfredo INTEGRANTE	MORENA			
12		Bañales Arambula Ramón INTEGRANTE	PRI			
13		Canales Najjar Tristán Manuel INTEGRANTE	PRI			
14		Castillo Martínez Edgar INTEGRANTE	PRI			
15		Couttolenc Buentello José Alberto INTEGRANTE	PVEM			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
16		Domínguez Domínguez César Alejandro INTEGRANTE	PRI			
17		Enríquez Vanderkam Mayra Angélica INTEGRANTE	PAN			
18		Fernández González Waldo INTEGRANTE	PRD			
19		González Navarro José Adrián INTEGRANTE	PAN			
20		González Torres Sofía INTEGRANTE	PVEM			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
21		Iriarte Mercado Carlos INTEGRANTE	PRI			
22		Luna Canales Armando INTEGRANTE	PRI			
23		Murrieta Gutiérrez Abel INTEGRANTE	PRI			
24		Ordoñez Hernández Daniel INTEGRANTE	PRD			
25		Ramírez Núñez Ulises INTEGRANTE	PAN			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE VICTIMAS.

No.	FOTO	NOMBRE	FRACCIÓN	SENTIDO DE SU VOTO		
				A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
26		Romo García Edgar INTEGRANTE	PRI			
27		Tamayo Morales Martha Sofía INTEGRANTE	PRI			

14-12-2016
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de las Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones dela Ley General de Víctimas.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 323 votos en pro, 41 en contra y 34 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 8 de diciembre de 2016.
Discusión y votación 14 de diciembre de 2016.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DELA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Diario de los Debates

México, DF, miércoles 14 de diciembre de 2016

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se somete a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres cinco minutos; hasta por tres minutos, perdón.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; y la diputada María Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que hoy se somete a nuestra consideración, plantea modificaciones de gran calado a un instrumento fundamental para la impartición de justicia plena en nuestro país.

Dentro de las múltiples bondades de esa minuta Encuentro Social saluda las siguientes: la flexibilidad de los mecanismos de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral y esta que obliga a las entidades federativas a que cuenten con uno propio, una asesoría jurídica y con un registro de víctimas, lo cual se hace factible proporcionar recursos para ayuda; del mismo modo es digno de encomio la previsión de una compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos.

En segundo término consideramos de notable trascendencia la instauración de la facultad de la atracción en favor de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas, lo cual evidentemente hará factible que los asuntos locales de especial relevancia sean atendidos por la comisión referida.

Otro avance que merece ser señalado es el importante proceso de la armonización y la actualización de la norma, así se modifica la fundamentación de la Ley General a Víctimas, atendiendo a la reforma constitucional que adiciona una ordinal décima a la fracción XXIX del artículo 73 constitucional que nos faculta ampliamente para legislar en la materia.

Un acierto más que manifiesta es la inclusión, la obligación a cargo de las autoridades de los tres niveles de gobierno de brindar atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social, bajo el apercibimiento no hacerlo, esto de no hacerlo quedará sujeto a responsabilidades administrativas, civiles o penales o a las que haya lugar.

Adicionalmente resultan sumamente acertadas las disposiciones que tienen por objeto la modificación de la estructura, la integración y la fundamentación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues al transitar de un cuerpo colegiado a un comisionado ejecutivo con el amplio reconocimiento de la defensa y protección de los derechos humanos, se agiliza su fundamentación en beneficio de los usuarios.

Asimismo se abre la posibilidad para que la sociedad civil participe de manera activa y en la elaboración de las políticas públicas y en materia a través de la figura de la asamblea consultiva integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Con ello estamos ante una gran, y un gran aporte en favor del sector en que este acto a lo que buscamos proteger. Finalmente consideramos de toral importancia el avance realizado en materia de interés superior de la niñez, pues se garantiza a todo menor víctima de un delito de violación de sus derechos humanos, un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar.

De este modo, en virtud de las múltiples luces del dictamen a discusión, las y los diputados de Encuentro Social, conscientes de los beneficios que la reforma traerá consigo, votaremos a favor. Es cuanto, presidente.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto.

En esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, con la finalidad de robustecer las medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación para las víctimas.

La propuesta pretende hacer una reestructuración de los órganos operativos. Es un hecho lastimoso que la mayoría de los estados siguen sin cumplir con los mandatos que les impone la ley.

Por eso es preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda.

Es preciso dotar a la Comisión Ejecutiva de directrices puntuales a fin de intervenir efectivamente en la atención a las víctimas y de ser el caso conseguir la reparación del daño.

No queremos dejar pasar un tema que nos parece fundamental y con el cual coincidimos plenamente, y es la inclusión del interés superior de la niñez como uno de los principios rectores de la ley.

En Nueva Alianza estamos decididos a no ser omisos con las obligaciones que tenemos para quienes han sufrido en su vida, su familia, su integridad física, psicológica o su patrimonio. Por eso coincidimos con el presente dictamen, confiando en que las acciones que se deriven de este decreto se conviertan en una

atenuante del dolor de miles de mexicanas y mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país requiere de un proceso de reconocimiento y aceptación. Nada gana en México ni las víctimas con la negación de esta crisis.

Han sido persistentes y constantes los reportes y recomendaciones por parte de los principales organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a lo largo de este sexenio.

Esta crisis de derechos humanos ha llevado a organizaciones internacionales a señalar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hemos atestiguado casos terribles, como: Tlatlaya, con 21 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, como el de Iguala, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos; como el de Tanhuato, en donde la policía federal ejecutó extrajudicialmente a por lo menos 22 personas; o como el de Nochixtlán, en que una decena de manifestantes fueron asesinados en un operativo de la policía.

La legislación en materia de víctimas es uno de los principales instrumentos que tiene el Estado mexicano para reconocer este problema, pero también para reparar el daño. Su aplicación no ha estado a salvo de obstáculos y resistencia, pero no por eso podemos perder de vista que esta legislación es uno de los principales instrumentos que tenemos para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

Decimos que una legislación en materia de víctimas es un instrumento idóneo para combatir la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, porque se reconoce la dimensión de un problema que lastima a la sociedad; porque se reconoce como sujetos de derecho a quienes no tienen voz; porque se restituye y repara el daño que en muchas ocasiones es cometido por el Estado en contra de sus ciudadanos.

Sin una Ley de Víctimas apropiada México no será capaz de salir de esta crisis. La actual Ley de Víctimas es resultado de la lucha de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas, las violaciones a los derechos humanos se reconocen hoy como las víctimas que tienen rostro, tienen nombre y deben ser reconocidas y reparadas.

La reforma que estamos discutiendo hoy no es perfecta, pero intenta superar obstáculos, intenta ser más operativa y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, darle viabilidad y suficiencia al Fondo de Asistencia, pero la reparación del daño no es la sustitución de recursos económicos por el castigo y sanción de los culpables.

Estamos convencidos como fracción ciudadana, que los derechos de las víctimas no se negocian ni se regatean, ni mucho menos se quitan. Por ello, conscientes de que este instrumento normativo, como cualquier otro, requiere ser probado en su aplicación, votaremos a favor con una reserva, que es el nombramiento del primer comisionado ejecutivo, porque el compromiso debe ser puntual seguimiento y aplicación a la norma, apreciar cómo funciona y corregir.

En beneficio de la ciudadanía está esta Ley de Víctimas, todo lo que puede ser mejorado lo tendremos que revisar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, a 10 años del inicio de la guerra declarada contra el narcotráfico, los resultados son desoladores, la derrota de una estrategia militar que nos cuesta a todos y se hace presente cada vez con más fuerza en nuestras vidas.

El parte de guerra de hoy: Más de 100 mil muertes, 30 mil desaparecidos. En ese lapso creció en más del doble la cifra de secuestros denunciados. Las denuncias por extorsión se triplicaron, las bandas criminales son más

fuertes, están más armadas y mejor equipadas. Miles de niños y adolescentes armados como soldados del crimen. El dinero sucio se limpia, genera derrama económica y se transforma en puntos del PIB. Crecen las fortunas de algunos, la pobreza de incrementa y el tejido social se deteriora.

Lo más terrible es que la mayoría nos acostumbramos. Es mejor seguir de largo y asumir que estamos lejos de las balas. El país está carcomido en su espíritu. Pocas cosas cimbran y movilizan.

En los últimos años han sucedido en México los crímenes más atroces. En 10 años hemos sido incapaces de enfrentar el drama humano generado por esta absurda guerra de Calderón y Peña. Cuando al Estado no le preocupa la justicia ni la búsqueda de la verdad, invita a la repetición, garantiza la impunidad a los victimarios y olvida a las víctimas.

Diez años de contar víctimas y hasta hoy estamos discutiendo nuevamente esta ley. No es motivo de orgullo, sino de vergüenza para las instituciones de la República.

Creemos que este dictamen en lo inmediato resulta un pequeño avance. Pero en el fondo es una afrenta a los colectivos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema tan sensible y de gran trascendencia dejó fuera a las víctimas mismas.

El dictamen es resultado de un acuerdo político, para que el presidente designe al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se omitió la petición expresa de las organizaciones para excluir a los actuales comisionados.

Resulta necesario señalar la omisión deliberada de no reconocer una cuestión fáctica, que es el desplazamiento de miles de personas, desplazamiento forzado. Esta circunstancia implicó desconocer el desplazamiento interno forzado, lo cual en la especie implicará que persistan trabas burocráticas.

Es una vergüenza para esta Cámara la forma en que se procesó el dictamen, sin la consulta y el consenso de las víctimas y de las organizaciones. Además que en la Comisión de Justicia no se permitió la discusión.

Dese aquí decimos: Morena seguirá caminando al lado de las víctimas y sus familiares. Seguiremos denunciando las graves violaciones. Reconocemos los avances, pero ubicamos temas importantes que quedaron pendientes. La desdicha nacional que estamos viviendo merece una legislación que tenga a las víctimas como eje central de la reforma.

Los temas importantes que quedaron pendientes son, el tema de la autonomía de la comisión; la descripción, la definición de desplazamiento interno forzado; ubican el tema de los peritajes, le ponen un candado al tema de los peritajes internacionales e independientes; el nombramiento del titular de la comisión va a ser hecho por esta ocasión, por una primera vez, por el presidente de la república, vamos a presentar reservas; el tema del presupuesto, en lugar de ser acumulativo le pone que será hasta el 0.014, estamos en contra de eso. Reconocemos avances y por eso Morena, en consecuencia, votará en abstención. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

La diputada Lia Limón García: Con su venia, presidenta. Las reformas que hoy estamos discutiendo a la Ley General de Víctimas buscan subsanar deficiencias de esta ley que han impedido la correcta operación y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y también el correcto funcionamiento del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Esta serie de reformas yo las dividiría en dos rubros. Aquellas que tienen que ver con poder agilizar los recursos que se encuentran en el fondo, que es justamente la de fortalecer la ayuda provisional a las víctimas y crear un esquema más flexible para el uso y comprobación de los recursos. Y por otro lado, la que tiene que ver con la estructura de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacerla más operativa.

El fondo lamentablemente, el fondo tiene una cantidad importante, Morena ahorita mencionaba, cuestionaba el tema de la definición del presupuesto del fondo. La ley establece que el fondo debe de ser de 0.014 por ciento

de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y eso se mantiene. Es decir, la reforma que se hace garantiza que cada año el fondo cuente con ese recurso.

El problema no ha sido la falta de fondos para la atención a víctimas, el problema ha sido la serie de trabas que existen en la propia ley para poder ejercer este fondo. Con estas reformas hoy las víctimas podrán recibir apoyo de manera adecuada, no solo como indemnización sino también apoyos para poder ejercer varios de los otros derechos establecidos en la propia ley.

También se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto quiere decir que se da la posibilidad de que ante ciertas condiciones la comisión pueda atraer los casos que se encuentran en entidades federativas y que no han sido atendidos y pueden repetir contra las entidades federativas para que éstas cubran los recursos o el otro modo de hacerlo es ir directamente al presupuesto del siguiente año de la entidad federativa que debe de hacer este pago.

En cuanto a la restructuración de la comisión, aquí se cuestionaba y se decía que se dejó fuera a los colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es falso. Se está modificando la comisión para que en lugar de ser un cuerpo colegiado sea unipersonal, porque como ustedes bien saben, los cuerpos colegiados muchas veces son muy democráticos pero poco ágiles y lo que se requiere es una mayor agilidad de la comisión en beneficio de las víctimas.

Por ello se modifica y se hace unipersonal pero se establece una asamblea consultiva conformada justamente por nueve personas, miembros de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil y académicos que llevarán y seguirán llevando la voz de las víctimas.

Y trato de explicar un par de temas más. Se cuestionaba aquí también el tema de dejar de lado el tema del desplazamiento interno forzado. No se está dejando de lado, se está incluyendo desplazamiento interno.

No se incluye la palabra forzado porque si revisan los instrumentos internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren a desplazamiento interno forzado en aquellos estados que están en guerra o en un conflicto interno armado, no es el caso de México, por eso se dejó específicamente el término de desplazamiento interno, agregando esta posibilidad de que se atienda ese grupo de personas, así como también a los migrantes.

Por último, en cuanto a peritajes independientes, se establece la posibilidad de que se puedan pagar peritajes independientes con cargo al fondo en aquellas materias donde no se contase con peritos expertos en México.

En esos casos se pueden traer peritos internacionales para atender esos temas. Esa es otra de las reformas importantes de esta ley y solo quiero decir que estoy convencida de que votar a favor de este dictamen es votar a favor de las víctimas. Votar a favor de que las víctimas puedan ejercer sus derechos, entre otros el de reparación, el de indemnización y todos los demás derechos establecidos en la Ley General de Víctimas. Y es votar a favor de que por fin pueda funcionar una ley que tiene elementos muy positivos pero que por ciertas trabas hasta hoy no hay podido funcionar.

Por ello, por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México daremos nuestro voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, tiene por objeto realizar múltiples ajustes a la Ley General de Víctimas, que derivan de su propia falta de funcionamiento.

En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática hemos hecho un amplio análisis de esta propuesta de Ley General de Víctimas. Muchas voces en contra, otras a favor, hemos defendido este dictamen desde el momento en que fue turnado por parte del Senado.

Hemos defendido que sean incluidos aspectos trascendentales como lo son la facultad de atracción, que hoy adquiere esta nueva conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Delito.

Hemos defendido la protección que en este dictamen se le da al interés superior de la niñez. Hemos defendido el hecho de que se haya plasmado en este dictamen que el apoyo económico por parte del fondo ya se otorgará de manera expedita, sin necesidad de una sentencia de carácter judicial.

Hemos defendido que la asamblea consultiva sea de una representación equilibrada, con participación de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera.

Hemos señalado también con mucha puntualidad una serie de omisiones y errores que se han detectado también en el cuerpo del presente dictamen.

Por ejemplo, el tratamiento que se le da al ofrecimiento de los peritos especializados en diversas materias, poniendo una barrera para que no se eche mano de peritos internacionales, de peritos extranjeros, hasta en tanto no se agoten los peritos especializados en la materia del país.

Hemos señalado nosotros de manera puntual, que es necesario que se plasme en el cuerpo de la ley o que se incluya el término de desplazamiento forzoso interno. Hemos propuesto que este organismo sea un organismo completamente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual no ha sucedido.

Pero hoy por hoy, también reconocemos en lo particular las bondades de este dictamen, porque con esto en lo particular estoy consciente de que se va a dar respuesta a más de 185 mil mexicanos que se desplazaron a otras entidades debido a la violencia y a la inseguridad. Por su parte la ONU también es de destacar que establece que hay un 1.7 millones de desplazados.

Entonces, compañeros y compañeras, no confundamos este dictamen y no tratemos de engañar, tiene bondades, pero como lo dije desde un principio y dado que me están acortando ya el tiempo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en consciencia utilizando el libre albedrío de cada uno de los compañeros y compañeras que lo integramos.

En lo particular, anuncio mi voto a favor del presente dictamen, como lo van a hacer otros compañeros y compañeras, y tal y como lo hicimos en la comisión en congruencia. Y en congruencia, dándole respuesta a los miles de desplazados, a los miles de mexicanos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos.

Por ello, en lo particular, anuncio mi voto a favor y reitero la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La ola de violencia que vive nuestro país, desde hace varios años ha obligado al Estado mexicano a saldar una deuda histórica o en la figura de la víctima de los delitos.

Durante prácticamente toda la historia del procesamiento penal mexicano, la figura central fue el presunto delincuente. En torno a ella se desarrollaron leyes, normas, políticas públicas, enfoques y teorías. La figura de víctima estuvo relegada y se consideraba que la simple existencia del Ministerio Público como representante social colmaba todas las necesidades para el acceso y satisfacción de la justicia por parte de quien sufriera directa o indirectamente un delito.

A lo largo de las décadas, dentro de la evolución de la criminología latinoamericana se fue gestando un área de estudio relativa a este grupo vulnerable. Así nació la victimología.

Ha sido tan importante la conformación de un área que se dedique en exclusiva a las víctimas y ofendidos, que la victimología ya se debe considerar una rama de estudio independiente. En México se cuenta con dos hechos relevantes en este campo.

El primero fue la inclusión de un catálogo de derechos para la figura de víctima en la reforma constitucional de 2008. El segundo fue la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas en 2011.

Con posterioridad, fue emitida la Ley General de Víctimas en su primera versión, sin embargo dicho texto tuvo muchos errores, al grado que el Ejecutivo en turno remitió varias observaciones. Ya en este sexenio se tuvo que enmendar debido a los despropósitos que contenía.

Además de generar confusiones y una falsa competencia entre víctimas de delitos que son la razón de su existencia, y víctimas de derechos humanos, es que se han generado estructuras disfuncionales y una política errática.

La mayor muestra de lo anterior, es que en estos tres años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido un subejercicio de mil 500 millones de pesos respecto de los cuales no ha existido capacidad de gestionar una aplicación provechosa en los numerosos casos de víctimas de violencia.

Al votar a favor del presente dictamen, los diputados del PAN hacemos un enérgico llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito.

Igualmente exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos, no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios.

Calificamos como favorable que en este proyecto se homologuen los derechos procesales con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Otro de los rubros en los que queremos hacer patente nuestra atención, es que en la Asamblea Consultiva se observe una composición que privilegie la presencia de organismos de las dos categorías victímales que la ley prevé.

Los diputados del PAN votaremos a favor del dictamen advirtiendo de antemano que seremos muy escrupulosos vigilantes del desempeño de los órganos directivos y ejecutivos de las políticas que dispone tanto la ley como las reformas que se aprobarán. Compañeros diputados y diputadas, muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidenta; con su autorización. Compañeras y compañeros diputados, el sufrimiento de las víctimas es el dolor de la nación toda; superarlo exige escuchar las voces de los agraviados, ser sensibles y proceder con base a la ley.

En la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad, del año 2008, se estableció en el artículo 20 de nuestra Constitución la reparación del daño a la víctima.

Asimismo en el apartado b) de ese mismo artículo 20 se reconocen los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos la impugnación ante autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento, cuando sea reparado el daño ocasionado, el derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y el procedimiento penal, coadyuvar con el ministerio público, que le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen diligencias y pruebas en su favor, a intervenir en el juicio e interponer recursos en los términos establecidos por la ley.

Esta ley generó mecanismos efectivos, un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia y significó un perfil, se connotó por un perfil humanista y progresista, ya que se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se complementó con el establecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la institución encargada de operar la política del estado en esa materia y de establecer un derecho para que resulte eficaz.

Los priistas queremos una sociedad segura y de leyes en la que éstas se apliquen con justicia, firmeza y sin distingos, sin perder de vista que contribuya a resarcir los daños para quienes se han visto afectados.

Consecuentemente consistentes con nuestra función-obligación como Poder Legislativo, el día de hoy realizamos importantes modificaciones a este instrumento legal. El documento que se somete a consideración de esta soberanía tiene entre otros, beneficios la eficacia y eficiencia de la oportunidad y acceso en los recursos al fondo de ayuda de asistencia y reparación integral, y está facultado esta comisión ejecutiva para poder no nada más atender, sino atraer los asuntos del fuero común.

Se incluye el principio de interés superior de la niñez; se fortalece la protección de los derechos vulnerados con motivo de los desplazamientos internos y se respetan de todos los principios establecidos en la ley en favor de las víctimas.

Diputadas y diputados, en palabras de Nelson Mandela, activista sudafricano, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Como legisladores no podemos permitir que la condición de víctima se agudice a causa de la ineficiencia de las leyes. Por eso pido de todos ustedes el voto a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias diputada. Con esta intervención se informa a la asamblea que termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados:

Diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra. En consecuencia tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, has por tres minutos.

El diputado Alfredo Basurto Román: Sí. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. Antes de hacer mi posicionamiento, creo que es pertinente y el momento procesal oportuno para hacer alguna apreciación.

Escuchando con atención a los legisladores que me antecedieron en el uso de la voz, como que veo que se confunde la reparación del daño con la atención e indemnización a víctimas. Compañeros, son dos cosas totalmente diferentes.

La reparación del daño proviene después de un procedimiento y de la comisión de un delito de por medio; y esta no se puede hacer si no existe de por medio una sentencia ejecutoriada, es decir, que se haya declarado la verdad legal e incontrovertible.

Totalmente diferente al dictamen que hoy en un momento se votará, que habla sobre la atención a víctimas. En este aspecto son sujetos totalmente diferentes por las razones que incluso en el mismo dictamen se están precisando.

En ese sentido, en Morena, vemos que, si bien es cierto el dictamen representa avances, más sin embargo, no obstante ello el gobierno federal queda mucho todavía que deberle a la sociedad civil. En ese aspecto podré comentar algunos aspectos.

La historia nos ha dicho que es más fácil que se corrompa una persona unipersonal cuando ejerce un cargo que un órgano colegiado, es decir, cuando se comparte la responsabilidad entre varios sujetos es más difícil que se pueda corromper a que una persona unipersonal pueda decidir, como es el caso.

Más sin embargo, si vemos el dictamen por primera vez y por única vez, a propuesta del Ejecutivo federal se va a designar por una terna en el Senado al comisionado. También ahí hacemos nuestra crítica porque no se define exactamente que este comisionado, por cierto que forma parte del consejo que viene fungiendo, no sea de una afiliación partidista.

Desde el momento que el presidente lo está proponiendo, sabemos que es afín al partido que gobierna en el poder y como historia ustedes dirán, pero va a ser una persona independiente, no dependiendo del Ejecutivo ni del Legislativo, yo tengo mis dudas, para ello los llevaría en unos meses atrás, unos días cómo se designaron a los magistrados electorales, cómo se designa a los consejeros del INE y entre comillas, compañeros, se supone que son órganos autónomos e independientes.

Pero falta mucho, miren, y podríamos hacer muchas críticas no obstante el tiempo que se nos otorga muy limitado, pero de los 2 mil millones de pesos que existían en el fondo, desafortunadamente nada más se ejerció el 3 por ciento. Es decir, 83 millones de pesos nada más se ejercieron de los 2 mil millones de pesos que existían en el Fondo para Atención a Víctimas, y que curiosamente, compañeros, a quién se le otorgó ese beneficio, exclusivamente a puros familiares de militares.

Es decir, el grosor de las víctimas de los de más de mil, de un millón 500 mil personas que el año próximo pasado sufrieron y fueron objeto de este estatus de víctimas, no se les atendió.

Yo concedo la duda de la razón al dictamen porque aquí veo que puras flores y que es muy buen dictamen, que una ley de avanzada, esperemos el tiempo que nos dé la razón, compañeros, pero estoy seguro que la ley, el dictamen como se presenta lleva varias deficiencias y también esos son los argumentos, la ley es perfeccionable, no es perfecta, pero creemos en Morena que se le quedó mucho a deber a la sociedad. Es por ello que en su momento vamos en contra del dictamen. Es cuanto, compañeros. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. La Ley General de Víctimas tiene que ser abordada desde el punto de vista de las víctimas, y aquí a este recinto nos vinieron a decir familiares de alguna de estas víctimas, que señalan al Estado y al Ejecutivo federal del pesar de ellos.

Por eso con mucha razón desconfían de los peritajes nacionales. Cualquiera que se haga sobre los hechos delictivos que ellos señalan y redactada como está la ley, pues no podrían obtener otro tipo de peritajes ni siquiera los internacionales.

Por eso argumento nuestra postura, precisamente por detalles como este, y cito otro y aquí hemos sido reiterativos sobre ese. Sí estas familias que traen consigo la desaparición de un hijo y señalan como culpable al Estado y a su responsable, cómo es posible que le permitamos al Ejecutivo entonces intervenir en el órgano que va a producir, si es que existiera justicia cuando se padece la desaparición de un hijo o la muerte de un hijo, si es que se pudiera reparar ese daño, ¿Cómo es posible que le permitamos al culpable intervenir en la decisión del comisionado? Sea a través de una terna, aunque la vote el Senado, es la intervención directa del Ejecutivo en la aprobación del encargado de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas.

Ese es nuestro cuestionamiento a esta ley, y si la ley es perfectible, pues hagámoslo ahora. Les pido que escuchen con atención las reservas a las que tenemos y dejemos de una vez por todas, una ley que sea efectiva, expedita y que atienda el punto de vista de las víctimas. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Ortega, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros, el Partido de la Revolución Democrática decidió, por plenaria de su grupo parlamentario, ir en contra de esta propuesta.

Por supuesto que en el PRD existe la libertad de conciencia. Ya dirán algunos diputados cuál será el sentir de su voto. Pero quiero precisar que el Partido de la Revolución Democrática irá en contra de este dictamen. ¿Y cuáles son las razones de fondo para que iríamos en contra del dictamen? Primero, recordar, compañeros, que estas modificaciones, reformas y adiciones nacen de la necesidad imperante de modificar la Ley de Víctimas, por los hechos lamentables ocurridos el 19 de junio en Oaxaca, en Nochixtlán.

En la comisión ex profesa se determinó, con la presencia de varias autoridades, entre ellas el subsecretario de Derechos Humanos, que era importante garantizar la reparación del daño a las víctimas o la reposición de la

misma de manera inmediata, porque la ley traía que había que acreditarlo a través de la factura correspondiente y eso conllevaba un proceso largo, tortuoso y hacía imposible la indemnización.

Y por ello se tomó una medida de una reposición del daño, porque no es reparación, la reparación se da hasta el después, hasta después que determina los elementos del tipo y la probable responsabilidad.

Hoy esta propuesta viene en la ley, en las reformas a la Ley General de Víctimas, pero de paso deciden hacer otros elementos que hacen inviable estas reformas o que determinan un retroceso.

Uno. Hacer que sea unipersonal la Comisión Ejecutiva de Víctimas, ya no un colectivo y sí una sola persona, pero no sólo eso, también dicen ahora que sea el presidente de la república el que lo nombre. Juez y parte en un tema tan delicado como las víctimas

Dos. Desplazamiento interno forzado. En ninguna parte del dictamen dice, primero, qué se entiende por desplazamiento interno forzado, cómo se va a atender esta víctima tan importante.

No tengamos miedo, el Estado mexicano, a reconocer que hay violencia en el Estado mexicano, que hay delincuencia organizada, pero el problema no es reconocerlo, el tema fundamental es prevenirlo y poner en la ley que existe la figura de desplazamiento interno forzado, para cuando haya la necesidad se pueda tipificar y se pueda atender de manera adecuada. Por ello es un tema sustantivo y nosotros iremos en contra de la propuesta.

Un tema más, el tema de las periciales. Aquí no hay que ver si es mexicano o extranjero el que hace el peritaje, hay que garantizarle a la víctima la facultad irrestricta y el derecho de que él determine qué perito es más capaz, idóneo para su pericial a su prueba.

Son los temas por los cuales el PRD votará en contra este dictamen. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general, de este dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 323 votos a favor, 34 abstenciones y 41 votos en contra, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 323 votos.

Una vez cerrado el sistema de votación, honorable asamblea, informo que el diputado presidente de esta Cámara, no estando presente en este momento por encontrarse en el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado que se registre su aprobación a la reforma actualmente en votación, solo para registro en el Diario de los Debates.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 5, 7, 12, 15, 21, 38, 45, 47, 87 y 36, hasta por cinco minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, creo que es importante señalar, particularmente me voy a referir primero al desplazamiento interno forzado en el contenido del dictamen.

En el dictamen en comento viene muy omiso el término, de hecho no se presenta salvo en una descripción que dice que no se contempla en el derecho mexicano la figura de desplazamiento forzado interno, por lo cual es importante que se considere en el contenido del mismo, pero lo cierto es que ya en el contenido de la misma norma o de la disposición que se está poniendo a consideración el día de hoy, no aparece ninguna parte, ni en el artículo 5, ni en el 7 que habla con toda precisión del edredario o del concepto que debe de tener el desplazamiento interno forzado, así como en el 38, 45 y 47.

Entonces es importante que aparezca en la ley, dado que señalan algunos compañeros que basta que se presente en la fundamentación y motivación del dictamen, partiendo de la base que el espíritu del legislador por supuesto que forma parte de la ley o de la norma. Pero lo cierto es, que si no aparece explícitamente en el contenido de la norma, pues no se puede aplicar norma alguna si no existe en sus disposiciones.

Por ello nosotros queremos agregar la definición de desplazamiento interno forzado, así como la necesidad de su reconocimiento y una figura jurídica. Por ello es parte de la propuesta que estamos presentando el día de hoy de las modificaciones.

Con más precisión el objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestra República es parte, me parece una absoluta incongruencia que las personas que se encuentren en situación de desplazamiento forzado interno, no aparecen. Por ello esto es más que importante.

Por otro lado, lo señalaba también en mi participación anterior, se va a garantizar la reparación del daño y la reposición del mismo, pero se da un término finito o determinado para garantizar o comprobar el gasto de la indemnización; se da un mes para que las víctimas o los deudos puedan de manera clara acreditar el dinero que se gastaron en la reparación del daño. Lo que estamos pidiendo es muy simple, que se dé la facultad para que sea en 12 meses la comprobación del gasto. Es todo un viacrucis que le den la indemnización y después, en menos de un mes, tener que justificarlo. Creo que habría que ser ahí más laxo para darles más garantías a las víctimas.

Por último el tema de las periciales. Insisto de manera muy puntual que es importante que la víctima sea la que tenga la facultad de determinar si el perito es mexicano o internacional y si la prueba es idónea. Es cuanto, señora presidenta, y espero que sean a favor las propuestas.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 6, 12, 15, 21, 132 y quinto transitorio, hasta por 7 minutos.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas esta ha sido severamente criticada por su corto alcance y por haber sido omisa al retomar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.

Hasta el momento los familiares o quienes han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, no han tenido acceso a los recursos contenidos en el Fondo de Apoyo a Víctimas.

La redacción original de la ley ha permitido que menos de 200 personas recibieran alguna compensación económica por padecer de la delincuencia o del mal funcionamiento de la administración pública, pese a que en 2015 se han denunciado más de 15 mil homicidios dolosos y se han presentado más de 45 mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por desgracia el dictamen que presenta la Comisión de Justicia muestra que de nueva cuenta se dilapidó la gran oportunidad de crear una legislación que dé un reflejo de esta realidad; se desperdició la oportunidad de adecuarla para convertirla en un instrumento real de apoyo de quienes padecen estas constantes violaciones.

El dictamen no aborda modificación alguna en contra del modelo de gastos de las víctimas de forma devengada, es decir, la víctima primero tiene que hacer el pago de la atención médica, psicológica, servicios funerarios o de cualquier otra índole, y posteriormente realizar un trámite para el reembolso del dinero gastado, lo cual muestra una gran insensibilidad ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas con sus familiares.

De la misma manera se desatendieron peticiones realizadas por la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por ejemplo las facultadas para atraer y atender casos que sean competencia originaria de las entidades federativas, o de generar un concepto de reparación integral con cargo al fondo, ya que la restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, también puede ser evaluables económicamente.

Se debió prever un esquema flexible de comprobación de gastos de los pagos con cargo al fondo, que este pueda llevar a cabo adquisiciones y contratación de servicios, además de agilizar la provisión de materiales que permitan la atención médica emergente. Por ello es que este dictamen se queda corto.

Además se adiciona un trámite totalmente innecesario que desatiende de nueva cuenta el estado de vulnerabilidad de las víctimas al obligarlas a solicitar asistencia legal si no se quiere o no se puede contratar con un abogado externo, cuando es obvio que el trámite puede llevarlo a cabo el Estado de manera oficiosa.

Se elimina la posibilidad de contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales sin que si quiera exista un razonamiento lógico que lo funde, a pesar de que en diversas ocasiones se ha demostrado que cuando el Estado lleva a cabo las indagatorias, lo hacen de manera parcial y sin obtener resultados concretos, ejemplos los tenemos en demasía.

Se condiciona la aportación federal para la constitución del fondo de ayuda para las víctimas a pesar de que en la actualidad es casi imposible acceder a él, aun así se pretende que el monto no sea fijo, en lugar de incrementarlo para una atención universal.

Por otro lado, el asunto más grave y peligroso a través de estas reformas, es que se atenta contra la comisión ejecutiva al inhibir la representatividad que debe tener un órgano de tal importancia, ya que de estar compuesta por siete comisionados, ahora se pretende que sea dirigida solo por uno, lo cual, si duda, representará discrecionalidad y falta de legitimidad en las decisiones.

De ninguna manera es buena idea la ausencia de órganos colegiados. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México es la única persona en quien recae la administración pública local y es quien de manera discrecional y sin escuchar las voces de reclamo se ha negado constantemente a declarar la alerta de género

de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, a pesar del alto número de feminicidios que se han suscitado en la capital del país.

De lo anterior se desprende que al ser una sola persona encargada de conducir un órgano, ésta puede detentar las voces que no sean de su corriente ideológica como lo he mencionado en la Ciudad de México.

El desmantelamiento de un cuerpo colegiado de decisiones es retrógrado, trasgrede los principios democráticos de pluralidad, representatividad, que deben permear en la toma de decisiones, mucho más en un tema tan importante como la atención de las víctimas de delito o la violación de derechos humanos.

Compañeras, compañeros, esta es una reforma de gran calado que implica un verdadero cambio de atención a las víctimas. Necesitamos ser receptivos, sensibles. ¿Ustedes, les pregunto, han sido víctimas? Yo sí. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar propuestas de modificación a los artículos sexto y quinto transitorio, hasta por cuatro minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Voy a tratar de ser breve. Las reservas que estoy presentando al dictamen que se somete a consideración tiene por objeto lo siguiente: incluir una definición de lo que debe entenderse por desplazamiento interno forzado.

Y estamos proponiendo la definición aceptada internacionalmente, que es la siguiente: las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El otro aspecto es eliminar la disposición que se encuentra en el quinto transitorio, que le permite al titular del Ejecutivo designar por única ocasión al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, quien además durará en su encargo tres años.

Lo anterior es así ya que el dictamen no reconoce los derechos de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. Pese a lo que la diputada del Verde Ecologista dice, sí habla de desplazamiento interno, no de desplazamiento interno forzado, pero no definen qué se entiende por desplazamiento interno forzado. De modo que se quedará al arbitrio de la Comisión determinar cuándo se está en ese supuesto y tendrá derecho a los beneficios que se establecen en la propia ley.

La reforma que se propone entonces no establece la definición. Sin lugar a duda esto implica un desconocimiento de una realidad consistente en el hecho de que las personas sean desplazadas de su lugar de origen a otros lugares, como consecuencia del delito o de violaciones a derechos humanos, lo que de suyo implica una negativa a reconocerles derechos por ser afectados por dichas circunstancias.

Por otra parte, el dictamen deja de considerar un mecanismo que se establece en la ley, de designación del comisionado ejecutivo, para que sea propuesto en una terna por las organizaciones de la sociedad civil, y luego el presiente lo pase al Senado.

Para el primer periodo, esto es un acuerdo político, será propuesto por el Ejecutivo, además que no hay previsión expresa para que los comisionados de la actual Comisión y otros políticos y funcionarios, dejen de ser considerados para presidir lo que habrá de ser la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por eso estoy presentando estas reservas para adicionar una fracción III Bis al artículo 6, y para eliminar el artículo quinto transitorio. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

El diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, ha retirado sus propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 85, 93 y Quinto transitorio.

Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificaciones a los artículos 7, 8, 28, 38, 45, 47, 79 y 86. Hasta por cinco minutos.

La diputada Araceli Damián González: Me da realmente pena estar en un Congreso en el que le aplaudan a quien no quiere presentar sus reservas para ya irse rápido, caramba, porque saben que está aquí la aplanadora. Pero bueno.

Vengo a presentar reservas a la Ley de Víctimas en todos los artículos que están relacionados también con la situación de desplazamiento interno forzado.

En marzo de 2011 comenzaron las acciones del primer movimiento social de víctimas, que reunió y movilizó a organizaciones e individuos de todo México. Tras meses de recorrer el norte y sur del país, lograron que los Poderes Ejecutivo y Legislativo comprendieran lo importante –cosa que no hicieron hoy– que era contar con una ley para proteger los derechos de las víctimas de la violencia, el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos, que la absurda guerra contra el narcotráfico iniciaba en el sexenio del panista Felipe Calderón provocó y sigue provocando.

Esa ley además era un reconocimiento de la deuda que el Estado mexicano tenía con decenas de miles de personas desde hacía ya décadas.

Como ocurre pocas veces en este recinto, se aprobó por unanimidad la legislación, pero el indolente Felipe Calderón, ¿Verdad? Provocó que se vetara esta ley, lo que a final de cuentas conllevó a una controversia constitucional.

En enero de 2013, se promulga la Ley de Víctimas, que hoy se busca reformar. La demanda de las víctimas es clara, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esta ley creó, no ha hecho su trabajo. Debemos cambiar su estructura para hacerla más eficiente, pero hagámoslo escuchando a las víctimas que sufren todos los días la insensibilidad de quienes pretenden sustituir su derecho a la verdad y a la justicia por dinero.

Por eso es que presento la reforma al artículo 86, además si quienes han estado a la cabeza de la Comisión Ejecutiva han sido omisos en su labor, no permitamos que puedan volver a ser designados.

Por casi tres años decenas de organizaciones sociales han exigido la renuncia de los comisionados que han dejado a las víctimas en el desamparo. No cometamos el error de permitir que esto se mantenga, por eso es que se adiciona este artículo o fracción V, el que además de no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los años, dos años previos a su designación, estos no puedan haber desempeñado el cargo de comisionado en la Comisión Ejecutiva, previamente.

De igual forma, reconozcamos que la guerra contra el narcotráfico en México ha provocado desplazamiento forzado, como ya lo han señalado mis compañeras. No sólo desplazamiento interno, como se pretende decir en esta ley, estamos en periodo muy grave en materia de violación de derechos humanos.

En cada rincón, en cada pueblo de nuestro país hay cientos de miles de asentamientos humanos que están vacíos por desplazamiento forzado. Hay que señalarlo, quedan cosas pendientes en esta reforma y Morena buscará que sean reconocidas en la Ley de Víctimas.

Necesitamos que la Comisión Ejecutiva sea autónoma y no cuente con una Junta de Gobierno, sino con un Consejo Directivo. Necesitamos que no haya designación directa de comisionados a modo, sino convocatorias amplias e incluyentes para encontrar a la persona con el perfil adecuado para dirigir la Comisión. Y por supuesto, necesitamos sanciones claras para funcionarios que revictimizan y tratan sin dignidad y con negligencia a las víctimas.

Sin estas modificaciones corremos el riesgo de que la Ley General de Víctimas siga sin funcionar a la altura de la crisis que existe en el país. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos 12, 15 y 21. Hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las reservas que hoy presento tienen por objeto preservar un derecho adquirido ya por las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el de nombrar a expertos o peritos independientes, sean nacionales o internacionales.

Según el artículo 1 de nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las exigencias del principio de progresividad. En sentido negativo impone una prohibición de regresividad. El legislador, como nosotros, tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos.

La asistencia técnica ha estado presente en el panorama internacional y en los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos. Hoy busco que México no retroceda al eliminar artificialmente los derechos de las víctimas. Asumamos el deber que como legisladores tenemos de cumplir con este principio de progresividad.

Las reservas que se presentan van dirigidas a los artículos que modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían, el poder solicitar la intervención de expertas o expertos y peritos internacionales, y que estos sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas. Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas.

En tres ocasiones se señala lo siguiente en esa ley: “Solo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia”. Eso en los artículos 12, 15 y 21 de la ley.

¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que demitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón?

Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontados y evidenciados por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita.

Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la verdad histórica construida por Murillo Karam.

Ayer apenas discutíamos la Ley contra la Tortura, y obvio fue que esos diputados, creando una mayoría irresponsable, votaron en contra; aun con una carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos. Ignorada, desdeñada por parte de estos diputados.

Ahora también vamos en un acto regresivo, en un proceso legislativo regresivo e irresponsable que les quita a las víctimas el derecho que ya tienen. Esto, sin lugar a dudas es muy grave, pero deja clara una vez más la política implementada por Enrique Peña Nieto, de grave violación a los derechos humanos y que ha sido avalada por sus diputados aquí en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 88, 90, 96, 135 y quinto transitorio, hasta por ocho minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Primero solicito que se inserte en el Diario de Debates las reservas que se presentan, de cada uno de los artículos. Ante un Estado fallido no queda más que establecer las condiciones para que los operadores políticos hagan inviable e inoperante esta Ley General de Víctimas.

El sexto transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 3013, estableció la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con nueve integrantes. Una reforma posterior del 3 de mayo de 2013, determinó que esta comisión se integraría con siete integrantes.

El 9 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, previa consulta a organizaciones vinculadas con víctimas y la defensa de sus derechos, presentó al Senado 61 propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de comisionados en esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El Senado de la República el 23 de septiembre establece el procedimiento de selección de estos comisionados y el 8 de octubre de 2013 aprueba siete comisionados, por cinco, tres y dos y un año del encargo. ¿Por qué

modificar esta estructura de una comisión colegiada para cambiarla a un órgano unipersonal? ¿Qué justifica esta modificación legal para que un órgano colegiado que podría acceder a datos de víctimas de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de desplazamiento interno, sea manejado por una sola persona? Se ha politizado el tema.

Un órgano colegiado no garantiza al Ejecutivo el manejo de esta información; información grave ante el anuncio de organismos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha fallado en la protección de derechos humanos.

Información grave de víctimas que de acuerdo a la Constitución tienen una garantía para la protección de sus bienes, de su persona, y esta ley se manipula para cercenar esa información de estas víctimas.

El artículo quinto transitorio, del cual presentamos una modificación, refiere en su segundo párrafo que los comisionados nombrados el 8 de octubre dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido una vez entrado en vigor el decreto. Quedan sin efecto sus nombramientos. ¿Por qué la urgencia de quitar a este órgano colegiado? Porque no garantiza la secrecía, no garantiza la discrecionalidad en el manejo de las víctimas en nuestro país.

Más de 28 mil desaparecidos, más de 200 mil desplazados internos, más de 100 mil víctimas en el fuego cruzado de esta guerra fallida, de esta estrategia militar contra la delincuencia organizada que es lo que se quiere encubrir al cambiar a los operadores políticos de esta ley.

Un órgano unipersonal de un comisionado propuesto por el Ejecutivo para ser aprobado por el Senado en dos terceras partes de sus integrantes. ¿Por qué esta modificación al diseño institucional? Porque no queremos rendir cuentas, porque no queremos dar anuncios del Estado fallido que tenemos ante la violación reiterada y grave de derechos humanos. Eso es lo que justifica esta modificación a esta ley.

Esta ley no la modifica el interés primordial de la niñez; los operadores de esta ley la harán ineficiente. No modifica o no justifica esta modificación desplazados internos; los operadores de esta ley la harán ineficiente.

Un operador unipersonal, acompañado de una junta de gobierno donde intervienen cuatro secretarías que no se vinculan con la justicia; salud, educación no se vinculan con la justicia, pero integran un órgano colegiado que le quita autonomía a la operación de esta Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esto le resta fuerza y autonomía en sus decisiones. No tiene una autonomía.

Hay simulación en la participación ciudadana; se habla de una asamblea consultiva de nueve elementos electos por la Junta de Gobierno.

Los mismos secretarios que integran la Junta de Gobierno van a elegir a la parte que representa a la sociedad civil. Es un absurdo. Este organismo no tiene autonomía, no tiene una operación ni pesos ni contrapesos que efectivamente transparenten la información de las víctimas en nuestro país.

Ante un Estado fallido el Ejecutivo tiene una urgencia, en el mismo quinto transitorio, primer párrafo, determina que hará una propuesta al Senado a quien ocupe el cargo de este comisionado de este órgano unipersonal para que dure en el encargo tres años, tres años; al Ejecutivo le quedan dos años de gobierno, suficiente para acreditar que este organismo es inoperante y anima a la opacidad y a la falta de transparencia de las víctimas.

No hay datos oficiales de personas desaparecidas, no hay datos oficiales de desplazados internos; se oculta la verdad a todos los mexicanos, se oculta la gravedad de la violación de derechos humanos.

Esta ley será una ley inoperante porque así lo determina la mayoría en esta Cámara de Diputados.

Todas y cada una de las reservas que se han presentado al artículo 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 135, y el quinto transitorio, tienen la finalidad de otorgar autonomía plena a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De no aprobarse las modificaciones que se presentan, estamos ante una ley inoperante. Esta Cámara de Diputados ha emitido leyes inoperantes que los operadores políticos las convierten en ineficientes y en demagogia legislativa. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 84 y 85, por tres minutos.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. Las reservas que tenemos son para modificar los artículos 84 y 85, y tienen que ver con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Hemos señalado en varias ocasiones que fueron políticas de Estado las que generaron tantas víctimas. En el sexenio pasado se declaró una guerra contra el narcotráfico y como consecuencia tuvimos miles y miles de víctimas.

También, ahora en este sexenio se mantiene al Ejército en las calles y como resultado volvemos a obtener cientos y miles de víctimas, y algunas de estas señalaron directamente a los responsables del Estado mexicano como los culpables, y cómo es posible que siendo eso, en el artículo 85, permitamos que esos encargados sean los que disidan el Comisionado Ejecutivo para la Atención de Víctimas.

Eso no puede ser, por eso nosotros estamos proponiendo que en lugar de la terna enviada por el Ejecutivo sea el mismo Senado quien nombre a esa terna y que sean las dos terceras partes de ése órgano legislativo quien tome finalmente la decisión sobre el comisionado.

Desde luego mantener el texto donde debe consultarse a la sociedad civil sobre las propuestas. Y el artículo 84, que proponemos modificar, tiene también que ver con la autonomía plena que exigen las víctimas sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En el texto solamente menciona una autonomía técnica y nuestra propuesta es llevarlo a un órgano que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, no solamente la personalidad jurídica y patrimonio propios con que se mantiene en el dictamen hasta ahora. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 179 y 180, por tres minutos.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas; y pueblo de México que nos sintoniza a través del Canal del Congreso.

El dictamen que se nos presenta sobre la Ley General de Víctimas es omiso al no incluir un capítulo de sanciones, administrativas o penales, sobre un conjunto de supuestos de omisión, de negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos cuando de ellas se desprende daño a la vida, a la integridad, a la salud, la libertad y el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

Esta omisión puede ser subsanada a través de estas reserva que en este momento les voy a presentar; y que consiste en adicional un Título Décimo, De sanciones, que contienen y crean dos artículos, que es el 180 y el 179.

El artículo 179 estipula a la letra: para lo no dispuesto en esta ley, se aplicará de manera supletoria la legislación en materia administrativa y el Código Nacional de Prendimientos Penales en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

Y el artículo 180 busca establecer una sanción al servidor público que actúe de manera omisa, de manera negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente ley.

Y establece además, compañeros diputados y diputadas, que se les sancionará con una amonestación administrativa o en caso de reincidencia, la destitución del cargo.

También para que en caso de que, derivado de la omisión, falta de diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiere sufrido un nuevo daño o éste se hubiese empeorado, se le sancionará con multa o inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades.

Como puede observarse, con esta reserva lo que se intenta es perfeccionar el dictamen que se nos propone. Este dictamen ha reconocido que la legislación actual no ha funcionado y que a tres años de su puesta en marcha tiene serias deficiencias. Entre ellas está precisamente el que no existe un régimen de responsabilidades y sanciones, por lo que los funcionarios que cometan omisiones o cuya actuación sea negligente no han podido ser sancionados.

Es por eso, compañeros, que por favor tomen en cuenta esta reserva y la voten a favor. El pueblo, las víctimas necesitan que los funcionarios que sean omisos en sus obligaciones sean sancionados de acuerdo a la ley. Por su atención, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto transitorio. Hasta por dos minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, diputada presidenta. La reserva que les presentamos es la del quinto transitorio, que tiene que ver con la elección del comisionado ejecutivo y su nombramiento.

Se ha dicho aquí ya antes por otras compañeras y compañeros diputados, que es muy importante que el comisionado sea nombrado por el Senado. Venimos a ratificar esta reserva, porque no es posible que estos tres años sea nombrado directamente por el presidente, porque se puede prestar no solo a confusión, sino a cuotas para no investigar a profundidad el tema y darle causa a los derechos de las víctimas.

Queremos que todos ustedes tomen conciencia de que las víctimas que están allá afuera necesitan la imparcialidad y necesitan que el comisionado ejecutivo sea alguien consciente de las demandas para que las víctimas sean reparadas, pero para que los delincuentes sean sancionados.

Por ello creemos que lo más importante es que sea el Senado el que nombre al comisionado, con la propuesta de terna, pero que se siga el procedimiento legal y normal al que se nombra a todos los comisionados. En este caso las víctimas lo demandan, las familias lo demandan. No les demos un albazo en una ley que hoy puede ser determinante para investigar y para sancionar estos delitos de la materia de ley. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos Quinto transitorio y Décimo Quinto transitorio. Hasta por cinco minutos.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. La congruencia debe ser el principal eje de nuestro actuar en esta Cámara de Diputados, no el doble discurso cuando se trata de respeto a los derechos humanos.

No nos confundamos, el Estado es el responsable de toda la serie de acciones y omisiones que han causado una larga lista de víctimas en nuestro país. El Estado es el responsable de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, esta situación se ve reflejada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados y violaciones sexuales, entre muchas otras circunstancias que ha sumido a México en la peor crisis de los derechos humanos.

El Estado es el único responsable, nuestro deber es construir instancias que estén al frente y que hagan frente a estas arbitrariedades que tiene que ver con la discrecionalidad del uso del poder.

¿Quién viola los derechos humanos? El gobierno, sus funcionarios, quienes tienen alguna función pública y se cometen contra los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién atenderá los casos de violaciones a los derechos humanos? De acuerdo a como viene la minuta lo hará el propio gobierno, y en este caso no podemos ser juez y parte.

Nuestro deber es construir instancias que hagan frente a esta arbitrariedad y al uso discrecional del poder. Sin embargo, parece que eso se olvida en esta Cámara de Diputados.

Algunos todavía apuestan a elefantes blancos y a instituciones adorno que se conviertan en paladines de las atrocidades del gobierno y hay que decirlo, en rehenes de intereses que buscan lucrar con el dolor de las personas.

No podemos ser cómplices con el cinismo del Estado en su doble discurso en el respeto de los derechos humanos de las personas. El permitir que bajo un acuerdo político se pretenda imponer, por el presidente de la república, a la persona que ocupará la Comisión Ejecutiva. Es totalmente inaceptable y desvirtúa el origen de este tipo de instituciones.

Creo que debería haber habido un poco de sensibilidad y poder haber dejado y haber concedido que esta institución pueda tener autonomía e independencia. Lo que se necesita es una verdadera independencia y autonomía de esta Comisión, alejadas de tentaciones autoritarias de querer controlarlo todo.

El actual desastre y el fracaso de la comisión, y por lo que se han tenido que hacer estas reformas, hay que decirlo con todas sus palabras, este fracaso responde a la intromisión del gobierno al no dejar actuar a sus integrantes y pretender inmiscuirse en sus decisiones a través de organizaciones que protegen sus intereses.

El PRD ha sido el principal impulsor de cambios a la ley para hacerla operativa. Nuestro objetivo es que las personas víctimas de delitos o de violaciones de los derechos humanos encuentren un verdadero apoyo y no un cautiverio que las victimice de nueva cuenta.

Propusimos durante el proceso de discusión mejoras para que el Estado cumpla con sus obligaciones de reparar el daño cuando se ven afectados los derechos de las personas. No podemos aceptar una legislación que opaca las cosas buenas que se han logrado, pero que representa verdaderas regresiones con otras disposiciones que también se pretenden imponer.

Resulta mezquino escatimar derechos y más cuando se trata de víctimas. Resulta voraz que el Estado quiera ejercer el control de la comisión ejecutiva al nombrar su primer encargado y ejercer su influencia al controlar la Junta de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación.

Por eso proponemos que el Senado sea quien nombre al comisionado, así como lo hace con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que da buenos resultados.

El lucrar con el dolor ajeno y solapar el negocio de atención de víctimas solo profundiza la impunidad que tiene en hartazgo a la sociedad y es algo que no podemos tolerar. Pedimos voluntad política para que esta operación funcione, para que tenga independencia y dejemos de lado el doble discurso. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo octavo transitorio, hasta por tres minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla: "El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones". Max Weber.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de los subejercicios alcanzó una cantidad cercana a los 12 mil millones de pesos.

Esta práctica, que se ha vuelto tan común, es contraria a lo estipulado en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos e incumple el compromiso asumido por esta administración en el sentido de reorientar los recursos públicos hacia programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro país.

Los subejercicios, además, hablan de un mal proceso de planeación y de ejecución por parte del gobierno federal, reflejando una serie de problemas; desde la falta de capacidad para ejercer estos recursos, pasando porque los recursos llegan tarde y esto dificulta su ejercicio.

En este sentido, el manejo inadecuado de los recursos se debe principalmente a la falta de transparencia, dado que el presupuesto se asigna para un sector y es utilizado para otros fines. En ese sentido planteo que, a efecto de incrementar el Fondo de Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas, se adicionen los recursos provenientes de los subejercicios al primer semestre del año. Con esta asignación corregimos diversos problemas.

En primera instancia, se atiende la asignatura pendiente con las víctimas de la violencia en el país, que son un espeluznante reflejo de la falta de capacidad del gobierno para salvaguardar los derechos humanos ante autoridades que atienden con absoluta indiferencia temas de seguridad pública y en algunos casos hasta con complicidad del crimen organizado. O en casos emblemáticos, como el caso del gobierno del estado de México, que considera la vida de sus habitantes, especialmente de sus mujeres, cosa de poca importancia.

Por otra parte, se da transparencia al uso de los recursos derivado de los subejercicios, tapando el gran hoyo negro en que se convierte su reasignación. Asimismo, se ataca de manera frontal la corrupción de autoridades federales en el uso indiscriminado y discrecional de los recursos públicos provenientes de estos subejercicios para asignarlos con fines electorales. Con su voto a favor de la modificación del artículo octavo transitorio de la Ley General de Víctimas, estaríamos cumpliendo estos objetivos al quedar en los siguientes términos:

Octavo transitorio. Las erogaciones que en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, adicionando además a estos fondos los recursos que reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los programas sujetos a reglas de operación como subejercicios y que al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal no se encuentren asignados. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios, en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 302 votos a favor y 96 votos en contra, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 302 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. **Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.**

VOLUMEN VIII

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 34 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

OPINIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 67, numeral 1 fracción II, 69 numerales 1, 2, 4 y 5, 157 fracción IV y 158 numeral 1 fracción X y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente opinión, al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. En fecha 8 de noviembre de 2016, en sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados, se dio cuenta que el Senado de la República remitió a esta Instancia legislativa la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas –LGV-.

B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la Minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

Posteriormente, la Minuta en mención fue recibida en la Comisión de Derechos Humanos el mismo día 8 de noviembre de 2016.

II. Contenido de la Minuta

La Minuta plantea modificaciones a un total de 72 artículos de la LGV, distribuidas de la siguiente manera: reforma 39 artículos; realiza adiciones a 34 preceptos –entre las que se encuentran adiciones de nuevos artículos-; y deroga disposiciones en nueve preceptos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Es importante señalar que el Proyecto de Decreto aprobado por 78 votos a favor y nueve en contra, en la Colegisladora, recae a un total de 12 iniciativas mediante las cuales se propusieron diversas modificaciones a la LGV, mismas que fueron presentadas –algunas de manera individual y otras de manera conjunta- por las siguientes Senadoras y Senadores:

1) Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks (14 de septiembre de 2016)
2) Cristina Díaz Salazar (8 de septiembre de 2016);
3) Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez (8 de septiembre de 2016);
4) Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter (14 de abril de 2016);
5) Mónica Arriola Gordillo (29 de septiembre de 2015);
6) Angélica de la Peña Gómez (12 de marzo de 2015);
7) Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo (19 de febrero de 2015);
8) Diva Hadamira Gastélum Bajo (27 de noviembre de 2014);
9) Adriana Dávila Fernández (14 de octubre de 2014);
10) Adriana Dávila Fernández (9 de septiembre de 2014);
11) Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Lucero Saldaña Pérez (5 de diciembre de 2013), y
12) Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández (2 de diciembre de 2013).

Las enmiendas planteadas en el Proyecto de Decreto y retomadas de las iniciativas citadas, son las siguientes:

- Adiciona al artículo 73 fracción XXXIX-X de la Constitución para referir que en términos de lo dispuesto por dicho precepto y otros referidos en la ley, la misma es de orden público, interés social y observancia en todo el territorio nacional.

- Se adiciona que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la LGV, precisando que

en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

- Se incluye el término del interés Superior de la niñez y se prevé que cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

- Con relación a la figura del Asesor Jurídico Federal de atención a Víctimas se adiciona que deberán estar adscritos a la comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades Federativas.

- Precisa que las Comisiones de Víctimas se encuentran en cada entidad federativa y se define al Fondo Estatal como el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa.

- Se adiciona el término Recursos de Ayuda, los cuales se entienden como los gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación en la presente Ley; recorriendo de esta manera las fracciones posteriores a está.

- Prevé que las medidas de ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en la ley con cargo al Fondo federal a los fondos estatales, según corresponda.

- Se dispone que las víctimas podrán requerir que las medidas materia de la LGV le sean proporcionadas por una institución distinta –pública o privada- a las que hayan estado involucradas en el hecho victimizante a fin de evitar re-victimización.

- Se incluye a los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno como grupos a los que se buscará que las políticas públicas materia de la ley les sean implementadas con un enfoque transversal de género y diferencial para su beneficio.

- Se adiciona, como uno de los derechos de las víctimas, el relativo a que se les otorgue, como ayuda provisional, los recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la LGV.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

- Se adiciona como uno de los derechos de las víctimas el relativo a que se le considere como justificada, para efectos laborales y escolares, toda comparecencia o diligencia que tenga que realizar ante las autoridades o peritos que requieran la presencia de la víctima.

- Igualmente se contempla la protección como derecho de las víctimas de diversos delitos (secuestro, desaparición, trata, otras formas de privación de la libertad, tortura, entre otros), así como de los colaboradores en un procedimiento penal y las personas y familiares cercanos de las víctimas.

- Se incluye como derecho el acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y locales.

- Se establece que la Comisión podrá cubrir, con cargo al Fondo federal, las erogaciones derivadas por concepto de medidas de ayuda inmediata, cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la propia LGV.

- Contempla que, en casos urgentes, de extrema necesidad o cuando las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención requerida, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal aprobado por la Junta de Gobierno.

- Dispone que la Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, podrán cubrir los gastos que se generen por la contratación de expertos independientes o peritos con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según sea el caso. Para ello, se señala que sólo se podrán contratar dichos servicios cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia correspondiente.

- Se adiciona que las victimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, estableciéndose que la Federación y las Entidades Federativas, en su ámbito competencial, deberán cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.

- Contempla que la Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas locales, podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal, medidas de ayuda, asistencia y atención, que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante.

- Añade que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima, en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de tales medidas.

- Precisa que las medidas de reparación integral podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos estatales.

- Se adiciona que las medidas de ayuda inmediata podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

- Se adiciona que las entidades federativas, además de la federación y los municipios, donde se haya cometido el hecho victimizante, apoyaran a las víctimas indirectas con los gastos funerarios, adicionando también que en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. En cuanto al pago de los apoyos económicos mencionados, se adiciona que estos se gestionarán conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables, adicionando que los apoyos económicos, tendrán que ser gestionados por los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

- Con relaciones a los derechos de las victimas establecidos por la Ley General de Salud y los adicionales en la materia previstos en la LGV, se adiciona que no podrá negarse la garantía de ejercerlos a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

- Se adiciona a diversos grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como lo son: niñas, niños y adolescentes; mujeres; adultos mayores;

personas con discapacidad; migrantes; indígenas; personas defensoras de derechos humanos; periodistas y personas en situación de desplazamiento interno, como prioridad o enfoque diferencial de atención; a quienes se deberán tomar en cuenta sus principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante por diversos organismos.

- Con relación a los servicios que ofrecen las casas de refugio o acogida, se prevé que los servicios de alojamiento y alimentación se proporcionaran en condiciones de seguridad y dignidad también, de manera especial y por el tiempo que sea necesario, a las víctimas que se encuentren en situación de desplazamiento. Adicionalmente, cuando dichas víctimas se encuentren en una entidad federativa distinta la de su origen, la Comisión Ejecutiva promoverá su debido registro, atención y reparación en términos de la LGV.

- Se añade que se deberá dar prioridad, en materia educativa, a todos aquellos que se encuentren en situación de desplazamiento interno forzado, mujeres, personas con discapacidad, migración, indígenas, así como niñas, niños y adolescentes, para lo que se deberá promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito se interrumpen sus estudios.

- Se adicionan dentro de las medidas de restitución el restablecimiento de la libertad cuando se trate de desaparición de personas, así como el regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen.

- Respecto a las compensaciones, se añade que la Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

- Establece que las autoridades competentes cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación. Igualmente se contemplan los supuestos en los que el apoyo para dichos gastos será procedente.

- Señala que cuando las Comisiones de Víctimas Estatales no hayan cubierto los gastos recién señalados, la Comisión Ejecutiva podrá brindar la ayuda con cargo

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

al Fondo, solicitando a las Comisiones de Víctimas Locales el reintegro de los gastos a más tardar 45 días naturales del siguiente ejercicio fiscal, previéndose que, en caso de que no se realice el pago en ese plazo, deberá cubrirse el monto principal actualizado más los intereses que el pago hubiera generado.

- Precisa que tanto la Comisión Ejecutiva como las Comisiones de Víctimas determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo. Igualmente, añadir que el monto de dicha compensación será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, la cual ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido.

- Se establece que la Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad y se adiciona el término a su libre desarrollo de la personalidad.

- Se adiciona que la Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria con cargo al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la comisión estatal correspondiente y contra quienes hayan cometido el delito.

- Se prevé que la Federación y las entidades federativas, según corresponda, tendrán la obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo o a los Fondos estatales, respectivamente, los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que cometió.

- Se adiciona que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) también estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México.

- Añade que para la operación del SNAV y el cumplimiento de sus atribuciones, el mismo contará con la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas Estatales, las cuales conocerán y resolverán los asuntos de su competencia. También se adiciona que las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y,

en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

- Se agrega que las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva la cual podrá otorgar medidas de atención inmediata cuando las no hubieren recibido respuesta de las Comisiones Estatales dentro de los siguientes treinta días naturales o, cuando estas últimas, la hubieren prestado de forma deficiente o la hubieren negado.

- Se incluye como atribución del SNAV la referente a promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la primera a través de su fondo. Asimismo se contemplan los elementos que dichos convenios deberán contener como mínimo.

- Se añade que el Titular de la Comisión Ejecutiva podrá determinar, mediante acuerdo, que instituciones u organizaciones, sociales o privadas, colectivos o grupos de víctimas, y demás instituciones nacionales o extranjeras, deban participar como invitados a las sesiones del SNAV.

- Precisa que la Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio que contará con los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Igualmente que las medidas y reparaciones que dicte no estarán subordinadas a autoridad alguna.

- A la par, se especifica que la Comisión Ejecutiva se desempeñará como el órgano operativo del SNAV y tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.

- Indica que el domicilio de la Comisión Ejecutiva estará en la Ciudad de México e, igualmente, podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

- Se adiciona que las entidades federativas contarán con un fondo estatal.

- Adiciona que el patrimonio de la Comisión Ejecutiva se va a integrar con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, con los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y con los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

- Especifica que la Comisión Ejecutiva contará con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, y con una Asamblea Consultiva que fungirá como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

- Establece que la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en la LGV y demás disposiciones aplicables. Igualmente, prevé que dicho órgano se integrará de la siguiente forma: por el titular de la Comisión Ejecutiva; un representante de las siguientes secretarías de Estado: Gobernación quién la presidirá, Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Educación Pública y Salud; cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, adicionalmente contará con un Secretario Técnico.

- Prevé que la Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes. Paralelamente, se dispone los requisitos de quórum para sus sesiones y la mayoría requerida para la adopción de sus acuerdos.

- Establece las atribuciones la Junta de Gobierno, entre las que se encuentran: aprobar y modificar su reglamento de sesiones y las disposiciones normativas de la Comisión Ejecutiva; definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva; conocer los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva y aquellas que le correspondan conforme a su naturaleza jurídica.

- Define que la Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva. Se integrará por nueve representantes de colectivos de víctimas,

organizaciones de la sociedad civil y académicos que durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificadas por un período igual. Se prevén requisitos de elección y de la convocatoria para su designación.

- Establece que la Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos. Se añaden requisitos adicionales para poder ocupar dicho cargo, entre ellos, haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la LGV, por lo menos en los dos años previos a su designación, contar con título profesional y no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

- Faculta al Comisionado Ejecutivo para designar las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

- Incluye, dentro de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva, las relativas a: conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis –adicionado- de la Ley, es decir, lo referente a atender, asistir y reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los supuesto previstos en tal precepto. A la par, se dispone que deberán hacerse públicos los informes anuales sobre el funcionamiento del Fondo. Igualmente, se añade como una de las facultades la relativa a administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo de reparación integral.

- Con relación a la facultad para que la Comisión Ejecutiva conozca y atienda casos de víctimas de delitos del fuero común o violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos del orden local, se establecen los supuestos de procedencia para el ejercicio de tal atribución. Igualmente, se prevé que la Comisión Ejecutiva podrá valorar tales supuesto de oficio o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de protección estatales, las comisiones de víctimas locales y diversas autoridades precisadas en el Decreto.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

- Se prevé que los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva en los supuestos en que atienda casos del ámbito local deberán ser reintegrados al Fondo federal, por la comisión local de víctimas con cargo a su fondo local correspondiente, en cuanto la misma cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa de que se trate, con cargo a su presupuesto, cuando en dicho estado no exista comisión de víctimas local o no se haya constituido el fondo local.

- Establece que la Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, el cual tendrá como atribuciones las siguientes: ser el área responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de las medidas de ayuda; elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y compensación, así como para la creación de fondos de emergencia; las demás establecidas en la ley.

- En lo relativo a las facultades del Comisionado Ejecutivo: se añade que podrá convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno; notificar a los integrantes del SNAV los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos; suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación que se requieran para el cumplimiento de sus funciones; recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva; determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la asesoría de las Asamblea Consultiva; y, en general, desempeñar todas las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de las funciones del organismo.

- Se prevé la atribución para que el Comisionado Ejecutivo pueda proponer la creación de programas cuando se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

- Señala que el Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal y, por excepción, del orden local, en los supuestos previstos por la LGV (en el art. 88 Bis adicionado).

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

- Adiciona que las entidades federativas contarán con sus propios registros y estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que se genere en la materia. Asimismo, facultar al Comisionado Ejecutivo para que dicte las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas.

- Se incluye que el reconocimiento de la calidad de víctimas, para efectos de la LGV, también podrá ser realizado por: los organismos públicos de protección de derechos humanos, los organismos internacionales en la materia que nuestro país ha reconocido su competencia, la autoridad responsable de violaciones a estos derechos –cuando lo reconozca, la Comisión Ejecutiva y el Ministerio Público.

- Se incluyen como obligaciones de las autoridades –de los tres órdenes de gobierno- en materia de seguridad pública, desarrollo social e integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, las siguientes: generar espacios públicos para cumplir lo que mandata la ley; brindar medidas de atención prioritaria; y las demás previstas en la legislación aplicable.

- Agrega que el Fondo también tendrá por objeto brindar las medidas de ayuda y seguirá criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. Asimismo, se precisa que no podrá ser disminuido y que la aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del año inmediato anterior.

- Se añade que se podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de recursos –medidas- de ayuda.

- Establece que la Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la LGV, con cargo al fondo, y la víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso.

- Se añade que el titular de la Comisión Ejecutiva deberá vigilar que los recursos del Fondo se administren y ejerzan adecuadamente, así como presentar, de manera periódica, informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

- Se establece que la Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo.

- Se agrega que cuando la Comisión Ejecutiva reciba una solicitud, la misma deberá turnarla al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y reparación que requiera la víctima.

- Se adiciona un Capítulo V al Título Octavo, denominado "De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa", el cual se integra por cuatro preceptos que contienen lo siguiente: establecer que el Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas; prever que la suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su fondo estatal será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, la cual se calculará con base en un factor poblacional con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el INEGI; se establece también que la aportación anual se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa, a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

- En complemento a lo enunciado en el párrafo anterior, se prevé que se deberá mantener una reserva del 20% de los recursos que constituyan el patrimonio de Fondos Estatales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la LGV. Finalmente, en lo relativo a esta Capítulo adicionado, se contempla que la constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas y que el acceso a los recursos no podrá ser superior a los límites establecidos en la Ley. Igualmente, que la aplicación de los recursos establecidos en otros mecanismos a favor las víctimas y los de la LGV, se hará de manera complementaria a fin de evitar duplicidad.

- Se contempla que las víctimas tendrán derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva, o a sus equivalentes estatales, que le proporcionen un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular.

- Se establece que la Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la LGV. Para ello, se prevé que contará con un servicio civil de carrera que comprenderá la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

- Se establece que los servicios de Asesoría Jurídica, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, y de manera excepcional, podrá contarse con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos.

- Con relación a las atribuciones del Asesor Jurídico de las Víctimas, se establece que al mismo le corresponde procurar los derechos y garantías de la víctima y se adiciona que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias. Asimismo, se delega al Asesor Jurídico la responsabilidad de tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley, así como representar a la víctima en todo en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

Con relación al ***Régimen Transitorio***, se prevé lo siguiente:

- Plazos de entrada en vigor; disposiciones derogatorias; plazos para emitir reformas, modificaciones legislativas y presupuestarias en el ámbito local, disposiciones reglamentarias y lineamientos; plazos para remitir propuestas del Comisionado Ejecutivo; previsiones temporales en cuanto a las autorizaciones para el acceso a los recursos del fondo; plazos para la publicación de convocatorias; plazos para las adecuaciones a la estructura orgánica y al contrato de fideicomiso; previsiones relacionadas con las erogaciones; plazos para la integración de comisiones de atención a víctimas estatales; previsiones referentes a la celebración de convenios de coordinación relativos a las reglas de reintegración de recursos; previsiones en cuanto a la adecuación de normatividad, a cargo de diferentes autoridades, conforme al Programa y el Modelo de atenció0n a víctimas previsto en la Ley y su Reglamento; y, previsiones para el caso de que

las entidades no cuenten, al momento de la entrada en vigor del Decreto, con comisiones de víctimas.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Sobre las obligaciones básicas del Estado en materia de derechos humanos

Como es sabido, en materia de derechos humanos existen tres obligaciones básicas para los estados: 1. Respetar los derechos; 2. Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y 3. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos.

Las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y ejercicio, constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos.[1]

Ciertamente, la obligación de respetar los derechos humanos por parte de los estados deriva del propio respeto a la dignidad inherente al ser humano, cuestión ésta que determina que los derechos humanos sean superiores al poder de todo Estado y, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH):

> [...] la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.[2]

[1] PINTO, Mónica. *Temas de derechos humanos.* Editores del Puerto. Buenos Aires, 2009.Pág. 47.
[2] La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

De igual modo, Luigi Ferrajoli, jurista eminente de nuestro siglo, ha indicado que:

> En particular y, sobre todo, después de su formulación en convenciones internacionales recibidas por las constituciones estatales o en todo caso suscritas por los Estados, se han transformado en derechos supraestatales: límites externos y ya no sólo internos a los poderes públicos y bases normativas de una democracia internacional muy lejos de ser practicada pero normativamente prefigurada por ellos.[3]

Ahora bien, la obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos implica:

> [...] el deber para los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos y procurar, además, si es posible, **el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.**[4]

La CoIDH en su emblemática sentencia recaída al caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (criterio obligatorio para el Estado Mexicano conforme a la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) señaló:

> [...] la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que

[3] FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil.* Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Págs. 42-43.
[4] CoIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988. Párrafo 166.

> asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos
>
> El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales [...].[5]

En ese contexto los estados, además de estar obligados a no violentar los derechos humanos de toda persona, también deben velar porque tales derechos no sean vulnerados, lo que acarrea el deber de prevención y, en su caso, el de investigación y sanción de las violaciones ocurridas.

En la misma sentencia, la CoIDH indicó:

> Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a *prevenir,* investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para *prevenir*

[5] Idem.

> la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.[6]

Además:

> El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima **una adecuada reparación.**[7]

De lo anterior se desprende que un estado es responsable por incumplir sus deberes básicos no solamente cuando por su proceder vulnera un derecho humano, sino también cuando no realiza lo conducente para prevenir violaciones cometidas por agentes estatales o, incluso por particulares. En este último caso, es responsable cuando no despliega el aparato gubernamental para investigar y sancionar a los responsables.

De este modo, frente al supuesto de una violación a un derecho humano por alguna de las razones antes señaladas, tal situación acarrea diversas circunstancias: el deber de investigar y sancionar la violación al derecho humano conculcado; la exigencia de otorgar garantías de no repetición; el deber de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho violentado y, la reparación integral de los daños producidos por dicha violación.[8]

Como se ha indicado a lo largo de la presente opinión, es precisamente el tema de la reparación el eje que articula las propuestas de modificación normativa contenidas en la Minuta remitida por el Senado, entre otras. En ese sentido, el deber del Estado se actualiza cuando este no ha cumplido con alguna de sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos y, derivado de ello, se materializa una violación a un derecho de orden fundamental.

---

[6] Ibídem. Párrafo 172.
[7] Ibídem. Párrafo 174.
[8] Ibídem. Párrafo 166.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Sobre el cumplimiento del Estado mexicano al deber de Reparar.

En cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y del artículo 1° constitucional que establece, entre otras obligaciones del Estado, la de reparar las violaciones a los derechos humanos, el 9 de enero de 2013, se expidió la Ley General de Víctimas.

Esta Ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, obligando a los tres Poderes y órdenes de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a prestarles asistencia y proporcionarles una reparación integral.

La Ley contempla la creación de diversas instancias, incluyendo una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como el órgano operativo y de control de la Ley. La Comisión contempla la participación de los representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley prevé la creación de las siguientes instancias:

1. Sistema Nacional de Víctimas: máxima institución en materia de atención a víctimas que establecerá y supervisará los programas y acciones para apoyar a las víctimas en los tres órdenes de gobierno.
2. Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas: órgano operativo y de control de la ley, en él participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Ejecutiva está facultada para emitir recomendaciones vinculantes a los integrantes del Sistema.
3. Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas: depende directamente de la Comisión Ejecutiva y su objeto es que los afectados cuenten con un profesional de derecho que los represente y defienda legalmente.
4. Registro Nacional de Victimas: facilitará el acceso a la ayuda que faculta la Ley.
5. Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral: encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas del delito.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

No obstante lo anterior, a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley en mención, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y, en general, el Sistema Nacional de Víctimas han advertido, sobre la práctica, la existencia de vacíos legales (lagunas jurídicas), así como contradicciones normativas (antinomias) y obstáculos diversos que dificultan la atención inmediata y oportuna a las víctimas de los delitos.

En razón de lo anterior, fueron planteadas en el Senado de la República múltiples observaciones a la Ley vigente, iniciándose el proceso legislativo de reformas a la Ley General de Víctimas y, respecto del cual, corresponde a esta Comisión de Derechos Humanos opinar.

Como se señaló en el proemio de la presente opinión, a grandes rasgos, la Minuta recibida del Senado plantea:

a) Fortalecer el Sistema Nacional de Víctimas, estableciendo mayores obligaciones para las entidades federativas a fin de reparar y brindar la asistencia plena a las víctimas de los delitos del orden local;
b) Prever la posibilidad de, con el fondo de la CEAV, brindar apoyo a asuntos de carácter local cuando sean atraídos por la misma;
c) Establecer los casos en los que la CEAV podrá ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos locales;
d) Contemplar que cuando algún gobierno estatal no cubra los gastos de apoyo a víctimas, la CEAV podrá brindar la ayuda correspondiente y, posteriormente, requerir a la autoridad local el reintegro de lo erogado;
e) Contemplar que la administración de la CEAV recaerá en la Junta de Gobierno y el Comisionado Ejecutivo.
f) Señalar las dependencias que representarán al Ejecutivo federal en la Junta de Gobierno;
g) Se contempla una Asamblea Consultiva que se conformará entre 8 y 14 representantes de organizaciones sociales, las cuales serán propuestas por quien presida la Comisión;
h) Se contempla el otorgamiento de medidas de carácter provisional que serán tomadas del fondo de emergencia;

i) Se contempla que para la asignación de medidas, podrán ejercerse recursos de manera inmediata, mismos que se comprobarán posteriormente (actualmente el ejercicio de los mismos se dan solamente por concepto de rembolso), entre otros cambios;
j) Se amplían diversos derechos a favor de las víctimas;
k) Se flexibilizan diversas disposiciones referentes al acceso de los recursos del Fondo para las víctimas;
l) Se incluyen mayores obligaciones a cargo de distintas autoridades y se enuncian de manera expresa diversos grupos que, por su especial situación de vulnerabilidad, requieren atención especial y prioritaria, entre otros elementos.

Como se aprecia, las preocupaciones señaladas por la Colegisladora se centran en campos específicos, respecto de los cuales fueron realizadas las modificaciones indicadas, dichos cambios –concretos- son los siguientes:

Acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El Dictamen recibido del Senado y corroborado por la propia CEAV, indica que, entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contó con 1,536 millones de pesos, de los cuales sólo se han erogado recursos equivalentes a un 3%. Este importe se destinó a la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%). Sin embargo, a marzo de este año, 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

Uno de los principales obstáculos que se observan para poder acceder al Fondo, y a sus beneficios, son los múltiples trámites administrativos que se requieren y que, muchas veces pesan sobre las propias víctimas. Cumplimentando el principio de máxima protección a la persona dispuesto por nuestro texto fundamental, se coincide plenamente con la propuesta tendiente a una mayor flexibilización de los mecanismos de acceso al Fondo, así como en el reforzamiento que se hace

respecto de las medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

Así, el Senado de la República define como recursos de ayuda, a diversos gastos, entre otros: alimentación, hospedaje y trasportación, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios a fin de que las víctimas puedan obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

De igual modo, se destaca que de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los delitos cometidos en nuestro país corresponden al orden local y no al federal. Esta consideración resulta de fundamental importancia porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dispone de competencia para atender y reparar exclusivamente a las víctimas de los delitos de competencia federal y de violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por autoridades del orden federal. Adicionalmente, diversos Congresos locales no han legislado aún conforme a lo dictado en la vigente Ley General de Víctimas y, en muchos casos, se carece incluso de Comisiones Estatales de Atención a las Víctimas (sólo once comisiones estatales de atención a víctimas se han establecido y, de estas, sólo seis cumplen con lo que la Ley General de Víctimas establece). Ante ello, derivado de una omisión legislativa que corresponde a los órdenes locales, resulta imposible cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de reparar a las víctimas del delito y a las de violaciones a sus derechos fundamentales.

Uno de los objetivos centrales de la reforma propuesta a la Ley General de Víctimas consiste, precisamente, en fortalecer las obligaciones de las entidades federativas para que, desde la Ley General, se fijen bases mínimas a cumplir por ellas y para que las omisiones locales no sean obstáculo para disponer de un marco jurídico que las obligue a cumplir plenamente el derecho fundamental de reparación. Por otro lado, también se fortalece a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, en ciertos casos, tenga la facultad de atraer los casos del fuero local, sin que ello signifique el que la entidad federativa se desprenda de su responsabilidad de reparar.

En razón de estas consideraciones, la Minuta plantea que las entidades federativas deban contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas.

Además, se dispone que las comisiones de las entidades federativas podrán, en ciertos casos y con cargo al Fondo Federal, proporcionar la ayuda y recursos que correspondan reintegrando posteriormente esas erogaciones al Fondo Federal.

De igual modo, para dar armonía a la reforma planteada, se realizan modificaciones a fin de facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas para que, mediante convenios de coordinación con las Comisiones locales y la Comisión Federal de Atención a Víctimas, se dispongan las reglas para efectuar las reintegraciones que correspondan.

Se dispone también, a efecto de brindar una atención inmediata a las víctimas de los delitos que, en ciertos casos, las víctimas podrán acudir a las instituciones privadas a recibir los servicios de atención que se requieran –dada su inmediatez- para posteriormente ser cubiertos esos gastos por los fondos de los Estados o por el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Facultad de atracción

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del total de víctimas de delitos cometidos en 2012, 93.2% correspondieron al ámbito local y 6.8% al federal. Para 2013, 94.5% correspondieron al orden local y 5.5% al federal. Para 2014, 94.2% y 5.8%, respectivamente; y, en 2015, 94% del orden local frente a 6% del orden federal.

Como se aprecia dichos datos arrojan, claramente, que es en el ámbito de las entidades federativas donde se cometen la mayor cantidad de ilícitos, por lo que en ese sentido, las entidades federativas deben asumir una mayor responsabilidad al respecto. Adicionalmente, en términos de la Ley General de Víctimas, se tiene una importante implicación, ya que del universo de víctimas en nuestro país, sólo un porcentaje ínfimo puede acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previstos en la LGV.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En razón de lo anterior, la Minuta propone realizar reformas para indicar que, en ciertos casos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podrá atraer los casos del orden local cuando se reúnan ciertas características. El artículo 88 Bis dispone que:

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:
I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el Fondo respectivo o careza de fondos suficientes;
II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;
III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;
IV. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;
V. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier motivo, y
VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:
a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;
b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y
c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Conformación de la CEAV para una atención más ágil a las víctimas.

Se plantean reformas orgánicas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de hacerla más ágil y dinámica en sus decisiones. Actualmente, la Comisión es un órgano colegiado, integrado por siete Comisionados. Muchas de las decisiones que toma la Comisión tienen que realizarse de manera plenaria y ello, como lo ha indicado la propia CEAV, se ha traducido en múltiples trámites burocráticos que dificultan una atención directa e inmediata a las víctimas de los delitos.

En ese sentido, se comparte la argumentación que indica que no debe ser la Comisión Ejecutiva un órgano colegiado porque, su diseño funcional, la convierte en un órgano operativo de implementación de las decisiones tomadas en el seno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El Sistema, por su parte, si responde a la lógica deliberativa y colegiada -de ahí que sea un sistema-, mientras que la Comisión Ejecutiva debe responder a una lógica de ejecución, de aplicación y, en la cual, resulta más adecuado la existencia de un solo Comisionado, y no de siete como actualmente existe.

Corrobora lo anterior el artículo 79 de la Ley General de Víctimas que dispone:

Artículo 79. *El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.*

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

De ahí que se coincida en modificar la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva para que la misma esté a cargo de un solo Comisionado Ejecutivo, con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. La Minuta dispone que el Comisionado será nombrado por el Presidente de la Republica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y será ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes, en sesión ordinaria, del Senado de la República.

De igual modo, en esta línea conductora de mayor flexibilidad y agilidad en el funcionamiento de la Comisión, se crea un Comité Interdisciplinario evaluador a quien corresponderá la elaboración de los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral, y en su caso, la compensación. En contrapartida, a fin de reducir la estructura burocrática de la Comisión, se eliminan los Comités previstos

actualmente en el artículo 93 correspondiendo sus funciones al Comité Interdisciplinario.

Participación de la sociedad en la política pública.

La Ley vigente prevé, en su artículo 5, el principio de la participación conjunta entre Estado y Sociedad Civil, a fin de dar cumplimiento al objetivo de la Ley, respecto de este principio la LGV indica: "Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas."

De igual modo, el artículo 84 párrafo segundo de la Ley vigente, dispone que: "En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones."

En la práctica, se ha observado que, no obstante lo indicado, la participación de la sociedad civil se encuentra relegada y con pocas posibilidades de incidencia en la política toral en materia de víctimas. Sin lugar a dudas, las víctimas, sus derechos, las obligaciones del Estado y la política central en la materia no pueden en modo alguno llegar a buen término cuando se carece de una participación plena e inclusiva de la sociedad civil.

Atento a ello, la propuesta de modificación normativa planteada por el Senado establece mecanismos de consulta y de participación, creando, concretamente, la figura de la "Asamblea Consultiva", en la cual podrá participar la sociedad civil directamente en la formulación, implementación y evaluación de la política pública en materia de víctimas.

Así, el artículo 84 Octies propuesto en la Minuta dispone:

Artículo 84 Octies.- *La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.*
La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

...
...
...

Responsabilidades de los servidores públicos.

Al igual que en otras disposiciones normativas existentes, se reafirma el papel que corresponde a los servidores públicos tratándose del cumplimiento de la ley y en la maximización de la función pública respecto al cumplimiento de derechos fundamentales. Por ello, se recuerda que ante el incumplimiento de las disposiciones normativas los mismos serán sujetos de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

De este modo, el artículo 1°, párrafo segundo del Proyecto de Decreto dispone que: *"La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar."*

Principios de actuación.

Reconociendo el gran valor que la teoría principalista de los derechos ha tenido en el actuar público, se refuerzan con la inclusión del interés superior de la niñez, ello

en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

De este modo, se incluye en al artículo 5° el principio del Interés Superior de la Niñez, disponiéndose que: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales."

Además, en términos de armonización normativa se indica que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que, conjuntamente, implementen las acciones debidas para la maximización y tutela de los derechos fundamentales de la niñez.

Armonización con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Nuestra Constitución dispone en su artículo 20, apartado A, fracción I, el deber de reparar el daño a la víctima. El apartado B del mismo artículo dispone que como un derecho de la víctima u ofendido, podrá impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se le haya reparado el daño ocasionado. Además, también se contemplaron diversas formas de participación directa de la víctima a fin de un acceso pleno a la justicia. Todo ello, en el marco del nuevo modelo de Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Ante ello, se deben realizar las reformas correspondientes a la Ley General de Víctimas, particularmente en lo que hace a la figura del "Asesor Jurídico" para que, en armonía con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se puedan hacer valer efectivamente los derechos de las víctimas.

Se establece que, para "procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral", podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Además, la figura del "Asesor Jurídico" se integrará por: las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y contará con un servicio civil de carrera que comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones (artículo 125 Bis).

Desplazamiento interno, migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

El Senado de la República reconoce el gran problema existente en nuestro país en cuanto al desplazamiento forzado interno. Proporciona información derivada del informe particular realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en mayo de este año, y, en razón de lo anterior, plantea reformas a la Ley General de Víctimas que puedan coadyuvar a la atención de las víctimas que se encuentran en tal situación.

Además, también se reconoce a las personas migrantes como un grupo en situación de vulnerabilidad y se prevén diversas acciones para focalizar su atención y mejorar su condición.

En diversos artículos se prevé a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, así como a las personas en condición de migrante. Así, en el artículo 7, relativo a los derechos en general de las víctimas, en la fracción XXI se indica que en las políticas públicas implementadas se de atención particular, además, de a la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

infancia, los adultos mayores y la población indígena, a las personas en situación de desplazamiento interno.

El artículo 28 relacionado con las medidas de ayuda inmediata señala que los servicios a que se refiere la Ley tomarán en cuenta si la víctimas pertenecen a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

El artículo 38 refiere que el Sistema Nacional DIF, y sus homólogos en las entidades federativas y municipios, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido en contra de ellas o de la violación de sus derechos humanos.

En el artículo 47, relativo a la interrupción de los estudios con motivo de la comisión de un delito o violación a derechos humanos, se dispone que deberán tomarse las medidas pertinentes para asegurar la permanencia en el sistema educativo, particularmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno.

En el artículo 79 queda dispuesto que, en el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Disposiciones transitorias

Esta Comisión opinante conviene en la vacatio legis planteada por el Senado, así como en la obligación del Ejecutivo Federal de realizar las reformas reglamentarias que correspondan para dar cumplimiento a las modificaciones planteadas en la Minuta. De igual modo, se conviene en la obligación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para emitir los lineamientos que dispone el artículo 39 Bis de la Ley, relativos a los apoyos de las víctimas en gastos de transporte, hospedaje y alimentación que se requieran para trasladarse de un sitio a otro y, en cuanto a la obligación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y demás dependencias de las Entidades Federativas para armonizar sus reglas.

Asimismo, se concuerda en la previsión para que sea el Asesor Jurídico Federal quien asuma la dirección de la Comisión Ejecutiva hasta en tanto se designa al Comisionado Ejecutivo por el Senado de la República. Igualmente, en el procedimiento indicado para la designación del Comisionado Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tiene a bien emitir la presente:

OPINIÓN

Primero. Se considera procedente la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas citada en el proemio de la presente Opinión.

Segundo. Remítase la presente opinión a la Comisión de Justicia a efecto de que sea analizada en el proceso de dictaminación que realice esa Comisión y, en su momento, sea anexada al dictamen que se emita, conforme a lo previsto por el artículo 69, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. Remítase copia de la presente opinión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre de 2016

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
PRESIDENTE			
Dip. Armando Luna Canales			
SECRETARIOS			
Dip. Erika Lorena Arroyo Bello			
Dip. María Isabel Maya Pineda			
Dip. Benjamín Medrano Quezada			
Dip. Sara Latife Ruiz Chávez			
Dip. Emma Margarita Alemán Olvera			
Dip. José Antonio Salas Valencia			
Dip. María Concepción Valdés Ramírez			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Jorge Álvarez López			
Dip. Karina Sánchez Ruiz			
Dip. Manuel Jesús Clouthier Carrillo			
INTEGRANTES			
Dip. Lorena del Carmen Alfaro García			
Dip. Cuitláhuac García Jiménez			
Dip. Sylvana Beltrones Sánchez			
Dip. Ana Leticia Carrera Hernández			
Dip. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez			
Dip. Maricela Contreras Julián			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Marco Antonio García Ayala			
Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández			
Dip. Lia Limón García			
Dip. Alma Lilia Luna Munguía			
Dip. Luis de León Martínez Sánchez			
Dip. Alberto Martínez Urincho			
Dip. María Candelaria Ochoa Avalos			
Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn			
Dip. Enrique Pérez Rodríguez			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Erika Rodríguez Hernández			
Dip. Liliana Ivette Madrigal Méndez			
Dip. Enrique Zamora Morlet			
Dip. Alberto Silva Ramos			

VOTO PARTICULAR DE LA OPINIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El que suscribe, **Alberto Martínez Urincho**, diputado integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 69, 90, 91 y 157, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento el siguiente

VOTO PARTICULAR:

A la Opinión de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas que presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de conformidad a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

I.1. En el orden del día de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha de 8 de noviembre de 2016, se dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas la cual fue remitida por el Senado de la República en los términos en que dispone el artículo 72 de la Constitución Federal.

I.2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida Minuta a la Comisión de Justicia para análisis, estudio y dictamen y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

Dicha la Minuta fue recibida por la Comisión de Derechos Humanos el día 8 de noviembre del presente año.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Propone fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas. Establece la obligación para que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda. Se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV.

Se establecen directrices puntuales a fin de que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local.

Propone que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. Será nombrado por el Presidente de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria del Senado de la República.

Se prevé la figura de una Asamblea Consultiva, como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo.

En la Ley se incluye como principio rector el interés superior de la niñez. Se fortalece la protección de los derechos vulnerados con motivo del desplazamiento interno, respetando de esta forma los principios generales establecidos en la Ley.[1]

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

III.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido observando con preocupación la situación de derechos humanos en México que en los últimos años se ha manifestado en mayores denuncias de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como el recrudecimiento de la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia e impunidad, y la afectación particular a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país como las personas en situación de pobreza y/o en zonas marginadas, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, entre otros.[2]

Hay que recordar que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada "guerra contra el narcotráfico", las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.[3]

A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y

---

[1] Gaceta del Senado de la República, 4 de noviembre de 2016, ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1991, 23 de noviembre de 2016.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Situación de Derechos Humanos en México", Informe 2015, ver: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf, 22 de noviembre de 2016.

[3] Ibídem.

tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra.[4]

La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también resultaron heridas y asesinadas otras personas, constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el Estado de Guerrero. Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado.[5]

III.2. El 6 de junio de 2011, se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos Dicha reforma reconoce los derechos humanos recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como garantiza su interpretación a la luz de dichos instrumentos y favoreciendo la mayor protección a la persona. Además, establece que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Asimismo, dispone que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, entre otras importantes modificaciones.

Ahora bien, resulta fundamental que para atender las víctimas derivadas de la violación de derechos humanos es preciso referirnos al concepto de reparación integral. Tal concepto, derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial, y el otorgamiento de medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.[6]

Por otro lado, un precedente fundamental en la materia de la reparación integral constituye la Resolución de las Naciones Unidas de 2005 sobre los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"

Dicha resolución dispone que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de

---

[4] Ibídem.

[5] Ibídem.

[6] Jorge F. Calderón Gamboa, "La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano", Biblioteca virtual del IIJ-UNAM, pág. 148 ver: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/11.pdf

violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva [...] en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición" (Principio No. 18).

El antecedente de dichos principios corresponde a su borrador elaborado por los profesores Theo van Boven y Cherif Bassiouni, quienes desde el seno de la ONU y recogiendo las experiencias de la CoIDH y Comisiones de la Verdad o programas de reparación internos, cristalizaron las demandas de miles de organizaciones de víctimas en todo el mundo.

III.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha desarrollado una importante jurisprudencia en materia de reparaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos. Haya que recordar que con la creación del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos tiene por objetivo no únicamente velar por la salvaguarda de los derechos humanos a través de acciones preventivas sino también a través del reconocimiento de la existencia de violaciones de dichos derechos que, cumplidos los requisitos, pueden incluso determinar la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia y ordenar la reparación del daño.

Ahora bien, la jurisprudencia de la CoIDH en materia de reparaciones ha sido prolija y en constante evolución; sin embargo, para ordenar la reparación es necesario primero determinar una violación a una obligación internacional en materia de derechos humanos y en consecuencia la responsabilidad internacional del Estado.

Hay que recordar que, la CoIDH ha ordenado medidas emblemáticas para muchos países de la región, las cuales han colaborado en la consolidación del Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos. Dichas medidas en su dimensión individual han beneficiado a miles de personas en la región a través de otorgamiento de becas educativas, atención médica y psicológica, actos de conmemoración, búsqueda de desaparecidos, y compensaciones económicas. En su dimensión colectiva la CoIDH ha ordenado tales medidas con impacto social a la mayoría de Estados parte de la Organización de Estados Americanos, tales como reformas legislativas, campañas de concientización social, implementación de programas sociales a grupos en vulnerabilidad, sanción a responsables de violaciones a derechos humanos, entre otras. Seguido a ello, la Corte IDH tiene la facultad de supervisar el cumplimiento por parte del Estado de estas medidas y monitorear su debida implementación. La jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, constituye uno de los avances más importantes en el desarrollo internacional de la reparación integral.

A la fecha la CoIDH ha emitido más de 155 sentencias de reparaciones con destino a 22 Estados miembros de la OEA. Si bien el cumplimiento y debida implementación de las reparaciones de la CoIDH aún representa un desafío, cada vez se incrementa el efectivo cumplimiento por parte de los Estados, a través de la incorporación de diferentes mecanismos de implementación doméstica, alcanzando cambios sustanciales en sus sociedades.

III.4. En este sentido, el presente VOTO PARTICULAR tiene por objeto proponer importantes cambios y modificaciones de la Minuta en estudio, los cueles son los siguientes:

a) Ampliar el concept de víctima a familiares de personas, que como resultado de hechos victimizantes, hubieren fallecido o se encuentren desaparecidos.

b) Establecer que la reparación integral se hará de manera adecuada, efectiva, expedita tener por finalidad la justicia, y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
c) Introducir un mecanismo de designación con consulta abierta y plural en el proceso de designación del Comisionado Ejecutivo, y sin injerencia del Ejecutivo Federal.
d) Reconocimiento de los derechos de las personas víctimas de desplazamientos interno forzado como violación de múltiples derechos humanos
e) Exclusión de los comisionados de la actual CEAV y funcionarios de presidir la que habrá de ser la nueva CEAV
f) Reconocimiento pleno y recursos para peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

VOTO PARTICULAR:

De la Opinión de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas que presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de conformidad con el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- Se modifican, reforman y adicionan los artículos de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, para quedar como siguen:

Adición al Artículo 6.

Texto de la Minuta	Texto Propuesto
Artículo 6.... **I. Asesor Jurídico:** Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas; II. ... **III. Comisiones de víctimas:** Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México;	**Artículo 6....** I. ... II. ... III. ...
IV. a VIII.... **IX. Fondo estatal:** El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa; **X. Hecho victimizante:** Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; **XI. Ley:** Ley General de Víctimas;	IV. a VIII.... IX. ... X. ... XI. ...

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;	XII. ...
XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;	XIII. ...
XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;	XIV. ...
XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;	XV. ...
XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;	XVI. ...
XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;	XVII. ...
XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;	XVIII. ...
XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;	**XIX. Víctima:** Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, **o bien, los familiares de personas que, como resultado de hechos victimizantes, hubieren fallecido o se encuentren desaparecidos. También se consideran las personas por desplazamientos interno forzado;**
XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y	XX. ...
XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con [illegible]	XXI. ...

Artículo 12.

Texto de la Minuta	Texto Propuesto
Artículo 12. ... **I. a III....** IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; **V. a XIII....** La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.	**Artículo 12. ...** **I. a III....** IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; **V. a XIII....** La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia, o **cuando por causas de interés público o por la trascendencia del caso así lo amerite. La contratación de expertos independientes o peritos internacionales se hará mediante solicitud de las víctimas o de quienes integran el Sistema Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva resolverá, de manera expedita, dichas solicitudes.**

Artículo 85.

Texto de la Minuta	Texto Propuesto
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.	Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, **de los candidatos que resulte de una consulta pública y plural** a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Artículo 93.

Texto de la Minuta	Texto Propuesto
Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades: I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;	Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades: I. ...
II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;	II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento. **En los proyectos la reparación integral deberá ser adecuada, efectiva, expedita tener por finalidad la justicia, y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.**
III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y	III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y
IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.	IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Quinto Transitorio.

Texto de la Minuta	Texto Propuesto
Transitorios QUINTO.-Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durara en el cargo tres años.	Transitorios QUINTO.-Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, **la Cámara de Senadores, emitirá la bases para realizar consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para que se postulen candidatos y se elija al Comisionado Ejecutivo, quien durara en el cargo tres años. No podrán postularse los comisionados actuales.**
En adelante la designación del Comisionado Ejecutivo se realizara de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.	...
Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.	...
En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo	...

Suscribe,

Diputado Alberto Martínez Urincho

VOTO PARTICULAR

HONORABLES INTEGRANTES DE LA COMISON DE DERECHOS HUMANOS

Los suscritos, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración de los integrantes de la misma, nuestro voto particular con respecto a la opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, remitida por la Cámara de Senadores a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dictamen

I. Antecedentes

1. En fecha 8 de noviembre de 2016, en sesión celebrada por el pleno de la cámara de diputados, se dio cuenta que el senado de la república remitió a esta instancia legislativa la

minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas (LGV).

2. En esa misma fecha, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

3. La minuta en comento fue recibida en la Comisión de Derechos Humanos el mismo día 8 de noviembre de 2016.

II. Descripción de la minuta

La Minuta plantea modificaciones a un total de 72 artículos de la Ley General de Víctimas, distribuidas de la siguiente manera: reforma 39 artículos; realiza adiciones a 34 preceptos –entre las que se encuentran adiciones de nuevos artículos-; y deroga disposiciones en nueve preceptos.

Es importante señalar que el Proyecto de Decreto versa sobre un total de 12 iniciativas mediante las cuales se propusieron diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, mismas

que fueron presentadas, ya sea de manera individual o de forma conjunta, por las siguientes Senadoras y Senadores:

1) Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks (14 de septiembre de 2016)

2) Cristina Díaz Salazar (8 de septiembre de 2016);

3) Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez (8 de septiembre de 2016);

4) Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter (14 de abril de 2016);

5) Mónica Arriola Gordillo (29 de septiembre de 2015);

6) Angélica de la Peña Gómez (12 de marzo de 2015);

7) Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo (19 de febrero de 2015);

8) Diva Hadamira Gastélum Bajo (27 de noviembre de 2014);

9) Adriana Dávila Fernández (14 de octubre de 2014);

10) Adriana Dávila Fernández (9 de septiembre de 2014);

11) Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Lucero Saldaña Pérez (5 de diciembre de 2013), y

12) Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández (2 de diciembre de 2013).

III. Consideraciones

A) Obligaciones del Estado Mexicano para la prevención, investigación, sanción y reparación de actos en materia de derechos humanos.

El artículo 1º de la Carta Magna, establece las obligaciones del Estado mexicano tratándose de derechos humanos y a la letra indica:

> "***Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos *de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

...

..."

Así mismo, el artículo 20 inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el marco constitucional de protección a las víctimas y a la letra dicen:

*"**Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

A...

B...

***C.** De los derechos de la víctima o del ofendido:*

***I.** Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*

***II.** Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.*

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. *Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;*

IV. *Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.*

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. *Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del*

juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. *Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y*

VII. *Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.".*

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado en claro, a través del control de convencionalidad, las

obligaciones que imponen a nuestro país el hecho de suscribir un tratado internacional en materia de derechos humanos.

México, como Estado parte de un tratado internacional, el cual le es jurídicamente vinculante[1], tiene necesariamente la obligación de acatar las disposiciones que ahí se encuentran plasmadas.

Es ampliamente aceptado por la jurisprudencia internacional, y en concordancia con el principio maximizador previsto en nuestro artículo 1º constitucional, que la interpretación auténtica realizada por los órganos facultados resulta ser obligatoria. En este sentido, se reconoce también el carácter vinculante de esas observaciones para nuestro Estado.

Respalda ese argumento la opinión del ex Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién refiriéndose al ámbito americano señala:

> *"Sustento mi punto de vista en la consideración de que los Estados partes en la Convención Americana –y otras– han acogido este instrumento soberanamente, como parte de la preceptiva nacional, asumiendo los deberes*

[1] Diario Oficial de la federación 20 de mayo de 1981, vinculante para el Estado Mexicano a partir de su adhesión el 23 de marzo de 1981.

que asigna y afrontando los derechos personales que reconoce. Y esos mismos Estados han aceptado –también soberanamente, al constituirse en partes de la CADH– que la CorteIDH, tribunal supranacional, es el órgano judicial llamado a interpretar las disposiciones convencionales. Por lo tanto, la interpretación de la Corte establece formal y oficialmente el alcance de tales disposiciones y, en consecuencia, la medida de los deberes de los Estados y los derechos de los particulares. Así, no es posible sostener que las interpretaciones establecidas por la CorteIDH constituyan un punto de vista atendible o desatendible, y no un acto de necesaria observancia... Implican, como prefiero decir, una interpretación vinculante de textos normativos asimismo vinculantes para los Estados, que deben ser entendidos y aplicados interiormente en los términos de la interpretación formal y final dispuesta por la Convención y ejercida por la Corte"[2]

Además, en apoyo de lo anterior, cabe citar la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:

[2] GARCÍA Ramírez, Sergio. "El control judicial interno de convencionalidad". En: *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*. México, Año V, No. 29, Julio-Diciembre de 2011. Pág. 138-139.

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. *Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen."*[3]

Se suma a lo anterior que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Cabrera García y Montiel Flores Vs. México", señaló:

[3] Tesis XI.1o.A.T.47 K. Aislada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito. No. de registro 164611. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010. Página 1932.

"Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana" [4].

Como es sabido, en materia de derechos humanos existen tres obligaciones básicas para los estados: 1. Respetar los derechos; 2. Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y 3. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos.

Las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y ejercicio, constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos[5].

Ciertamente, la obligación de respetar los derechos humanos por parte de los estados deriva del propio respeto a la dignidad inherente al ser humano, cuestión ésta que determina que los derechos humanos sean superiores al poder de todo Estado y, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH):

> [...] la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la

[4] Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México.* Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 225.
[5] PINTO, Mónica. *Temas de derechos humanos:* Editores del Puerto. Buenos Aires, 2009.Pág. 47.

> existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.[6]

De igual modo, Luigi Ferrajoli, jurista eminente de nuestro siglo, ha indicado que:

> En particular y, sobre todo, después de su formulación en convenciones internacionales recibidas por las constituciones estatales o en todo caso suscritas por los Estados, se han transformado en derechos supraestatales: límites externos y ya no sólo internos a los poderes públicos y bases normativas de una democracia internacional muy lejos de ser practicada pero normativamente prefigurada por ellos.[7]

---

[6] La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).

Ahora bien, la obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos implica:

> [...] el deber para los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos y procurar, además, si es posible, **el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.**[8]

La CoIDH en su sentencia recaída al caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (criterio obligatorio para el Estado Mexicano conforme a la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) señaló:

---

[7] FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil.* Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Págs. 42-43.

[8] CoIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988. Párrafo 166.

> [...] la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos

> El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales [...].[9]

[9] Ídem.

En ese contexto los estados, además de estar obligados a no violentar los derechos humanos de toda persona, también deben velar porque tales derechos no sean vulnerados, lo que acarrea el deber de prevención y, en su caso, el de investigación y sanción de las violaciones ocurridas.

En la misma sentencia, la CoIDH indicó:

> Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a *prevenir,* investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede

> acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para *prevenir* la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.[10]

Además:

> El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima **una adecuada reparación.**[11]

De lo anterior se desprende que un estado es responsable por incumplir sus deberes básicos no solamente cuando por su proceder vulnera un derecho humano, sino también cuando no realiza lo conducente para prevenir violaciones cometidas por agentes estatales o, incluso por particulares. En este

[10] Ibídem. Párrafo 172.
[11] Ibídem. Párrafo 174.

último caso, es responsable cuando no despliega el aparato gubernamental para investigar y sancionar a los responsables.

De este modo, frente al supuesto de una violación a un derecho humano por alguna de las razones antes señaladas, tal situación acarrea diversas circunstancias: el deber de investigar y sancionar la violación al derecho humano conculcado; la exigencia de otorgar garantías de no repetición; el deber de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho violentado y, la reparación integral de los daños producidos por dicha violación.[12]

Es precisamente el tema de la reparación debe ser el eje que articule las propuestas de modificación normativa.

En ese sentido, el deber del Estado se actualiza cuando este no ha cumplido con alguna de sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos y, derivado de ello, se materializa una violación a un derecho de orden fundamental.

B) La respuesta del Estado Mexicano al deber de reparar: La Ley General de Víctimas.

En cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y del artículo 1° constitucional que establece, entre

[12] Ibídem. Párrafo 166.

otras obligaciones del Estado, la de reparar las violaciones a los derechos humanos, el 9 de enero de 2013, se expidió la Ley General de Víctimas.

Esta Ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, obligando a los tres Poderes y órdenes de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a prestarles asistencia y proporcionarles una reparación integral.

La Ley contempla la creación de diversas instancias, incluyendo una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como el órgano operativo y de control de la Ley. La Comisión contempla la participación de los representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley prevé la creación de las siguientes instancias:

1. Sistema Nacional de Víctimas: máxima institución en materia de atención a víctimas que establecerá y supervisará los programas y acciones para apoyar a las víctimas en los tres órdenes de gobierno.
2. Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas: órgano operativo y de control de la ley, en él participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones

de la sociedad civil. La Comisión Ejecutiva está facultada para emitir recomendaciones vinculantes a los integrantes del Sistema.

3. Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas: depende directamente de la Comisión Ejecutiva y su objeto es que los afectados cuenten con un profesional de derecho que los represente y defienda legalmente.
4. Registro Nacional de Victimas: facilitará el acceso a la ayuda que faculta la Ley.
5. Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral: encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas del delito.

No obstante lo anterior, a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley en mención, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y, en general, el Sistema Nacional de Víctimas han advertido, sobre la práctica, la existencia de vacíos legales (lagunas jurídicas), así como contradicciones normativas (antinomias) y obstáculos diversos que dificultan la atención inmediata y oportuna a las víctimas de los delitos.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tal y como lo reconocen los principales instrumentos internacionales sobre la materia y los marcos constitucionales de la Región. Hacer efectivo este derecho implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados.

El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las personas conozcan de los derechos que son titulares y sobre todo, cuenten con los mecanismos para exigirlos.

Las víctimas en general y de delitos en particular, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad sigue evidenciando obstáculos para que accedan al sistema judicial y obtener de él una respuesta efectiva.

El trato revictimizante que con frecuencia reciben, sumado a los retrasos injustificados en las investigaciones de los delitos, la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, la poca credibilidad hacia su testimonio,

interrogatorios culpabilizadores, minimización de la gravedad de la agresión, así como la resistencia a conceder órdenes de protección, son ejemplo de ello. Hasta ahora, la participación y las necesidades de las víctimas no son consideradas de manera integral por los sistemas judiciales nacionales.

A pesar de las importantes reformas procesales para la tutela de los derechos de las víctimas en el proceso penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibro entre las partes, con detrimento de los derechos de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones de violencia. La participación en el proceso judicial no puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima.

Un ejemplo de la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano, como el mismo Dictamen indica es que, entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contó con 1,536 millones de pesos, de los cuales sólo se han erogado recursos equivalentes a un 3%. Este importe se destinó a la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios,

médicos y de alimentación (2.6%). Sin embargo, a marzo de este año, 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

Uno de los principales obstáculos que se observan para poder acceder al Fondo, y a sus beneficios, son los múltiples trámites administrativos que se requieren y que, muchas veces pesan sobre las propias víctimas. Cumplimentando el principio de máxima protección a la persona dispuesto por nuestro texto fundamental, se coincide plenamente con la propuesta tendiente a una mayor flexibilización de los mecanismos de acceso al Fondo, así como en el reforzamiento que se hace respecto de las medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

Así, el Senado de la República define como recursos de ayuda, a diversos gastos, entre otros: alimentación, hospedaje y trasportación, que deben ser concebidos como

gastos operativos ordinarios a fin de que las víctimas puedan obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

De igual modo, se destaca que de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los delitos cometidos en nuestro país corresponden al orden local y no al federal. Esta consideración resulta de fundamental importancia porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dispone de competencia para atender y reparar exclusivamente a las víctimas de los delitos de competencia federal y de violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por autoridades del orden federal. Adicionalmente, diversos Congresos locales no han legislado aún conforme a lo dictado en la vigente Ley General de Víctimas y, en muchos casos, se carece incluso de Comisiones Estatales de Atención a las Víctimas (sólo once comisiones estatales de atención a víctimas se han establecido y, de estas, sólo seis cumplen con lo que la Ley General de Víctimas establece).

Ante ello, derivado de una omisión legislativa que corresponde a los órdenes locales, resulta imposible cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de reparar a las

víctimas del delito y a las de violaciones a sus derechos fundamentales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del total de víctimas de delitos cometidos en 2012, 93.2% correspondieron al ámbito local y 6.8% al federal. Para 2013, 94.5% correspondieron al orden local y 5.5% al federal. Para 2014, 94.2% y 5.8%, respectivamente; y, en 2015, 94% del orden local frente a 6% del orden federal.

Como se aprecia dichos datos arrojan, claramente, que es en el ámbito de las entidades federativas donde se cometen la mayor cantidad de ilícitos, por lo que en ese sentido, las entidades federativas deben asumir una mayor responsabilidad al respecto. Adicionalmente, en términos de la Ley General de Víctimas, se tiene una importante implicación, ya que del universo de víctimas en nuestro país, sólo un porcentaje ínfimo puede acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previstos en la LGV.

Así analizado la minuta que aquí se presenta **NO CUMPLE CON EL PARAMETRO INTERNACIONAL** al que el Estado

Mexicano está sujeto, toda vez que libre y soberanamente decidió incorporarlo como parte de su normativa interna, asumiendo los deberes que asigna, ROMPE CON EL ESPÍRITU DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 en materia de derechos humanos, de la cual deviene la obligación de crear esta norma, y CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS que establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de *"promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".*[13]

Con toda razón, la Corte de San José ha sostenido que en *"una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros".*[14]

C) Sobre el articulado de la Minuta:

[13] Artículo 1 párrafo tercero, reformado Diario oficial de la Federación 10 de junior de 2011.
[14] Corte IDH. "Opinión consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987..." Ob. Cit. Párrafo 26.

Enumerar las múltiples deficiencias de que adolece esta minuta equivaldría a rehacer la ley, y eso es materia de una iniciativa nueva. Baste señalar los principales puntos:

Debe modificarse el artículo 4 para incorporar la definición del Derecho Internacional Humanitario sobre Víctimas que otorga una protección más amplia.

A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150 para incluir a las víctimas de **desplazamiento interno forzado** aun cuando en tres artículos se incorporan ya la frase de "desplazamiento interno", pero no en el 6, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

En los artículos 15 y 23 se debe incorporar el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, derecho que ahora es negado toda vez que el artículo 12 se especifica que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales, a menos que no haya peritos nacionales capaces.

Asimismo, se es necesaria la modificación a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las

víctimas y para las víctimas, y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui géneris, lo cual contraviene los artículos 1o., 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. De igual manera la incorporación de la junta de gobierno, o la designación del Comisionado Presidente, por el Ejecutivo Federal atentan contra el propio esperiritu dela norma que es atender a las víctimas y no dar más facultades al ejecutivo federal

En el artículo 85 la integración del CEAV, como un Consejo Directivo y un Comisionado Presidente, así como un procedimiento para su elección, además se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley.

En el artículo 86 no se debe quitar el candado de dos años para servidores públicos, quienes deben contar con un candado de perfil, de no haber sido señalado por

recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En el artículo 88 referido a las facultades del Consejo Directivo, consideramos que con la Junta de Gobierno se está violentando el principio universal de no progresividad en materia de derechos. las propuestas de los artículos 84, del proyecto de dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso, como una traición a las demandas del propio movimiento.

Se lesiona la plena autonomía de la Comisión Ejecutiva y esto es un retroceso grave violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

La presentación para su dictamen de la esta Minuta con proyecto de decreto por la que se Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas nos lleva a plantearnos si está basada en los criterios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano

es parte, y que los hace vinculantes con las legislación interna.

La respuesta simplemente es **NO**.

La minuta contraviene el espíritu de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, misma que es el antecedente inmediato y origen de la Ley General de Víctimas que aquí se discute, la cual tenía por objetivo precisamente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en general, y de las víctimas en particular. En este sentido, la minuta que se pone a consideración, es una Ley regresiva hacia los derechos de las víctimas.

La minuta que se presenta es omisa y adolece de una serie de problemas fundamentales que no aborda o deja intocados y que dista de ser el instrumento idóneo dirigido al mejoramiento de la atención hacia las víctimas. Entre estas omisiones se encuentran las siguientes:

PRIMERO. Garantía de autonomía plena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En este sentido debe eliminarse el término "Junta de gobierno", que actualmente incluye el dictamen, y en su lugar sustituirse por el "Consejo Directivo" tal y como fue propuesto por la sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado el 13 de abril de 2016.

Este Consejo Directivo estaría formado por víctimas, expertos en su atención de la sociedad civil y la academia, con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades de ejercicio presupuestal y el informe anual de la persona titular de la CEAV.

SEGUNDO. Consulta abierta y plural como mecanismo de elección y designación. No es aceptable la designación directa por parte del Ejecutivo, incluso con la ratificación senatorial. Lo que se requiere es la adopción de un mecanismo de designación semejante al de la CNDH en el cual el Senado realiza una consulta y convocatoria amplias y luego de un ejercicio de auscultación se determina quién se estima el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la CEAV.

TERCERO. Reconocimiento de los derechos de las personas víctimas de desplazamientos interno forzado como violación autónoma de múltiples derechos humanos.

Es imperativo el reconocer la situación de desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante dentro de la Ley, e incluir la definición propuesta por la sociedad civil en la iniciativa de reforma que deberá constar explícitamente en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas.

CUARTO. Prohibición de reelección de los actuales comisionados de la CEAV y establecimiento de requisitos de independencia a militantes de partidos políticos y funcionarios que deseen competir para presidir la que habrá de ser la nueva CEAV.

Es imprescindible que se mantenga el impedimento que actualmente figura en la Ley que excluye de la titularidad de CEAV a quienes hubieran sido servidores públicos o dirigentes partidistas durante los dos años previos a su designación.

QUINTO. Establecer un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fijo.

Se debe establecer un porcentaje fijo como dotación presupuestaria anual al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación se conserve fija con un monto mínimo equivalente a 0.014% del Gasto Programable, sin condicionar ni reducir su entrega por parte del Ejecutivo, como una medida de anular su autonomía.

Sexto. Reconocimiento pleno y recursos para peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia.

La Ley debe reconocer plenamente el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal, e indicar que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes

independientes elaborados por personas expertas nacionales y extranjeras, así como materiales, instrumental y laboratorios basados en sociedad civil y/o instituciones educativas.

Séptimo. Establecer sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores o negligentes.

Se debe incluir el capítulo de sanciones administrativas y penales que se incluyó en la iniciativa de reforma presentada por grupos de víctimas y sociedad civil el 13 de abril de 2016, que contempla un conjunto de supuestos de omisión, negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos, cuando de ellas se desprende daño a la vida, integridad, salud, libertad o acceso efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete al pleno de esta Comisión de Derechos Humanos la siguiente:

OPINIÓN

Primero. Se considera improcedente la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas citada en el proemio de la presente Opinión.

Segundo. Remítase la presente opinión a la Comisión de Justicia a efecto de que sea analizada en el proceso de dictaminación que realice esa Comisión y, en su momento, sea anexada al dictamen que se emita, conforme a lo previsto por el artículo 69, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. Remítase copia de la presente opinión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Cuitláhuac García Jiménez

Roberto Alejandro Cañedo Jiménez

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de noviembre de 2016.

VOTO PARTICULAR

HONORABLES INTEGRANTES DE LA COMISON DE JUSTICIA

Los suscritos, integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración de los integrantes de la misma, nuestro voto particular con respecto a la opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, remitida por la Cámara de Senadores a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dictamen

I. Antecedentes

1. En fecha 8 de noviembre de 2016, en sesión celebrada por el pleno de la cámara de diputados, se dio cuenta que el senado de la república remitió a esta instancia legislativa la minuta con

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas (LGV).

2. En esa misma fecha, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

3. La minuta en comento fue recibida en la Comisión de Derechos Humanos el mismo día 8 de noviembre de 2016.

II. Descripción de la minuta

La Minuta plantea modificaciones a un total de 72 artículos de la Ley General de Víctimas, distribuidas de la siguiente manera: reforma 39 artículos; realiza adiciones a 34 preceptos –entre las que se encuentran adiciones de nuevos artículos-; y deroga disposiciones en nueve preceptos.

Es importante señalar que el Proyecto de Decreto versa sobre un total de 12 iniciativas mediante las cuales se propusieron diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, mismas

que fueron presentadas, ya sea de manera individual o de forma conjunta, por las siguientes Senadoras y Senadores:

1) Mariana Gómez del Campo, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks (14 de septiembre de 2016)

2) Cristina Díaz Salazar (8 de septiembre de 2016);

3) Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez (8 de septiembre de 2016);

4) Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter (14 de abril de 2016);

5) Mónica Arriola Gordillo (29 de septiembre de 2015);

6) Angélica de la Peña Gómez (12 de marzo de 2015);

7) Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo (19 de febrero de 2015);

8) Diva Hadamira Gastélum Bajo (27 de noviembre de 2014);

9) Adriana Dávila Fernández (14 de octubre de 2014);

10) Adriana Dávila Fernández (9 de septiembre de 2014);

11) Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Lucero Saldaña Pérez (5 de diciembre de 2013), y

12) Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández (2 de diciembre de 2013).

III. Consideraciones

A) Obligaciones del Estado Mexicano para la prevención, investigación, sanción y reparación de actos en materia de derechos humanos.

El artículo 1º de la Carta Magna, establece las obligaciones del Estado mexicano tratándose de derechos humanos y a la letra indica:

> ***"Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos *de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

...

..."

Así mismo, el artículo 20 inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el marco constitucional de protección a las víctimas y a la letra dicen:

*"**Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

A...

B...

***C.** De los derechos de la víctima o del ofendido:*

***I.** Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*

***II.** Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.*

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. *Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;*

IV. *Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.*

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. *Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su*

protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. *Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y*

VII. *Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño."*

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado en claro, a través del control de convencionalidad, las

obligaciones que imponen a nuestro país el hecho de suscribir un tratado internacional en materia de derechos humanos.

México, como Estado parte de un tratado internacional, el cual le es jurídicamente vinculante[1], tiene necesariamente la obligación de acatar las disposiciones que ahí se encuentran plasmadas.

Es ampliamente aceptado por la jurisprudencia internacional, y en concordancia con el principio maximizador previsto en nuestro artículo 1º constitucional, que la interpretación auténtica realizada por los órganos facultados resulta ser obligatoria. En este sentido, se reconoce también el carácter vinculante de esas observaciones para nuestro Estado.

Respalda ese argumento la opinión del ex Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién refiriéndose al ámbito americano señala:

"Sustento mi punto de vista en la consideración de que los Estados partes en la Convención Americana –y otras– han acogido este instrumento soberanamente, como parte de la preceptiva nacional, asumiendo los deberes que asigna

[1] Diario Oficial de la federación 20 de mayo de 1981, vinculante para el Estado Mexicano a partir de su adhesión el 23 de marzo de 1981.

y afrontando los derechos personales que reconoce. Y esos mismos Estados han aceptado –también soberanamente, al constituirse en partes de la CADH– que la CorteIDH, tribunal supranacional, es el órgano judicial llamado a interpretar las disposiciones convencionales. Por lo tanto, la interpretación de la Corte establece formal y oficialmente el alcance de tales disposiciones y, en consecuencia, la medida de los deberes de los Estados y los derechos de los particulares. Así, no es posible sostener que las interpretaciones establecidas por la CorteIDH constituyan un punto de vista atendible o desatendible, y no un acto de necesaria observancia... Implican, como prefiero decir, una interpretación vinculante de textos normativos asimismo vinculantes para los Estados, que deben ser entendidos y aplicados interiormente en los términos de la interpretación formal y final dispuesta por la Convención y ejercida por la Corte[2]

Además, en apoyo de lo anterior, cabe citar la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:

[2] GARCÍA Ramírez, Sergio. "El control judicial interno de convencionalidad". En: *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*. México, Año V, No. 29, Julio-Diciembre de 2011. Pág. 138-139.

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. *Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen."*[3]

Se suma a lo anterior que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Cabrera García y Montiel Flores Vs. México", señaló:

[3] Tesis XI.1o.A.T.47 K. Aislada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito. No. de registro 164611. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010. Página 1932.

"Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana"[4].

Como es sabido, en materia de derechos humanos existen tres obligaciones básicas para los estados: 1. Respetar los derechos; 2. Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y 3. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos.

Las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y ejercicio, constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos[5].

Ciertamente, la obligación de respetar los derechos humanos por parte de los estados deriva del propio respeto a la dignidad inherente al ser humano, cuestión ésta que determina que los derechos humanos sean superiores al poder de todo Estado y, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH):

[4] Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México.* Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 225.
[5] PINTO, Mónica. *Temas de derechos humanos.* Editores del Puerto. Buenos Aires, 2009.Pág. 47.

> [...] la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.[6]

De igual modo, Luigi Ferrajoli, jurista eminente de nuestro siglo, ha indicado que:

> En particular y, sobre todo, después de su formulación en convenciones internacionales recibidas por las constituciones estatales o en todo caso suscritas por los Estados, se han transformado en derechos supraestatales: límites externos y ya no sólo internos a los poderes públicos y bases normativas de una democracia internacional muy

[6] La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).

> lejos de ser practicada pero normativamente prefigurada por ellos.[7]

Ahora bien, la obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos implica:

> [...] el deber para los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos y procurar, además, si es posible, **el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.**[8]

La CoIDH en su sentencia recaída al caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (criterio obligatorio para el Estado Mexicano

[7] FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil.* Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Págs. 42-43.
[8] CoIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988. Párrafo 166.

conforme a la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) señaló:

> [...] la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos

> El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de

> indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales [...].[9]

En ese contexto los estados, además de estar obligados a no violentar los derechos humanos de toda persona, también deben velar porque tales derechos no sean vulnerados, lo que acarrea el deber de prevención y, en su caso, el de investigación y sanción de las violaciones ocurridas.

En la misma sentencia, la CoIDH indicó:

> Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a *prevenir,* investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a

[9] Ídem.

> un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para *prevenir* la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.[10]

Además:

> El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima **una adecuada reparación**.[11]

De lo anterior se desprende que un estado es responsable por incumplir sus deberes básicos no solamente cuando por su proceder vulnera un derecho humano, sino también cuando no

[10] Ibídem. Párrafo 172.
[11] Ibídem. Párrafo 174.

realiza lo conducente para prevenir violaciones cometidas por agentes estatales o, incluso por particulares. En este último caso, es responsable cuando no despliega el aparato gubernamental para investigar y sancionar a los responsables.

De este modo, frente al supuesto de una violación a un derecho humano por alguna de las razones antes señaladas, tal situación acarrea diversas circunstancias: el deber de investigar y sancionar la violación al derecho humano conculcado; la exigencia de otorgar garantías de no repetición; el deber de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho violentado y, la reparación integral de los daños producidos por dicha violación.[12]

Es precisamente el tema de la reparación debe ser el eje que articule las propuestas de modificación normativa.

En ese sentido, el deber del Estado se actualiza cuando este no ha cumplido con alguna de sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos y, derivado de ello, se materializa una violación a un derecho de orden fundamental.

[12] Ibidem. Párrafo 166.

B) La respuesta del Estado Mexicano al deber de reparar: La Ley General de Víctimas.

En cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y del artículo 1° constitucional que establece, entre otras obligaciones del Estado, la de reparar las violaciones a los derechos humanos, el 9 de enero de 2013, se expidió la Ley General de Víctimas.

Esta Ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, obligando a los tres Poderes y órdenes de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a prestarles asistencia y proporcionarles una reparación integral.

La Ley contempla la creación de diversas instancias, incluyendo una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como el órgano operativo y de control de la Ley. La Comisión contempla la participación de los representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley prevé la creación de las siguientes instancias:

1. Sistema Nacional de Víctimas: máxima institución en materia de atención a víctimas que establecerá y

supervisará los programas y acciones para apoyar a las víctimas en los tres órdenes de gobierno.

2. Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas: órgano operativo y de control de la ley, en él participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Ejecutiva está facultada para emitir recomendaciones vinculantes a los integrantes del Sistema.
3. Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas: depende directamente de la Comisión Ejecutiva y su objeto es que los afectados cuenten con un profesional de derecho que los represente y defienda legalmente.
4. Registro Nacional de Victimas: facilitará el acceso a la ayuda que faculta la Ley.
5. Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral: encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas del delito.

No obstante lo anterior, a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley en mención, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y, en general, el Sistema Nacional de Víctimas han advertido, sobre la práctica, la existencia de vacíos legales

(lagunas jurídicas), así como contradicciones normativas (antinomias) y obstáculos diversos que dificultan la atención inmediata y oportuna a las víctimas de los delitos.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tal y como lo reconocen los principales instrumentos internacionales sobre la materia y los marcos constitucionales de la Región. Hacer efectivo este derecho implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados.

El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las personas conozcan de los derechos que son titulares y sobre todo, cuenten con los mecanismos para exigirlos.

Las víctimas en general y de delitos en particular, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad sigue evidenciando obstáculos para que accedan al sistema judicial y obtener de él una respuesta efectiva.

El trato revictimizante que con frecuencia reciben, sumado a los retrasos injustificados en las investigaciones de los delitos, la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, la poca credibilidad hacia su testimonio, interrogatorios culpabilizadores, minimización de la gravedad de la agresión, así como la resistencia a conceder órdenes de protección, son ejemplo de ello. Hasta ahora, la participación y las necesidades de las víctimas no son consideradas de manera integral por los sistemas judiciales nacionales.

A pesar de las importantes reformas procesales para la tutela de los derechos de las víctimas en el proceso penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibro entre las partes, con detrimento de los derechos de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones de violencia. La participación en el proceso judicial no puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima.

Un ejemplo de la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano, como el mismo Dictamen indica es que, entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contó con 1,536 millones de pesos, de los cuales sólo se han erogado recursos equivalentes a un 3%.

Este importe se destinó a la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%). Sin embargo, a marzo de este año, 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

Uno de los principales obstáculos que se observan para poder acceder al Fondo, y a sus beneficios, son los múltiples trámites administrativos que se requieren y que, muchas veces pesan sobre las propias víctimas. Cumplimentando el principio de máxima protección a la persona dispuesto por nuestro texto fundamental, se coincide plenamente con la propuesta tendiente a una mayor flexibilización de los mecanismos de acceso al Fondo, así como en el reforzamiento que se hace respecto de las medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

Así, el Senado de la República define como recursos de ayuda, a diversos gastos, entre otros: alimentación, hospedaje y trasportación, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios a fin de que las víctimas puedan obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

De igual modo, se destaca que de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los delitos cometidos en nuestro país corresponden al orden local y no al federal. Esta consideración resulta de fundamental importancia porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dispone de competencia para atender y reparar exclusivamente a las víctimas de los delitos de competencia federal y de violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por autoridades del orden federal. Adicionalmente, diversos Congresos locales no han legislado aún conforme a lo dictado en la vigente Ley General de Víctimas y, en muchos casos, se carece incluso de Comisiones Estatales de Atención a las Víctimas (sólo once comisiones estatales de atención a víctimas se han establecido y, de estas, sólo seis cumplen con lo que la Ley General de Víctimas establece).

Ante ello, derivado de una omisión legislativa que corresponde a los órdenes locales, resulta imposible cumplir a cabalidad con

el mandato constitucional de reparar a las víctimas del delito y a las de violaciones a sus derechos fundamentales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del total de víctimas de delitos cometidos en 2012, 93.2% correspondieron al ámbito local y 6.8% al federal. Para 2013, 94.5% correspondieron al orden local y 5.5% al federal. Para 2014, 94.2% y 5.8%, respectivamente; y, en 2015, 94% del orden local frente a 6% del orden federal.

Como se aprecia dichos datos arrojan, claramente, que es en el ámbito de las entidades federativas donde se cometen la mayor cantidad de ilícitos, por lo que en ese sentido, las entidades federativas deben asumir una mayor responsabilidad al respecto. Adicionalmente, en términos de la Ley General de Víctimas, se tiene una importante implicación, ya que del universo de víctimas en nuestro país, sólo un porcentaje ínfimo puede acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previstos en la LGV.

Así analizado la minuta que aquí se presenta **NO CUMPLE CON EL PARAMETRO INTERNACIONAL** al que el Estado

Mexicano está sujeto, toda vez que libre y soberanamente decidió incorporarlo como parte de su normativa interna, asumiendo los deberes que asigna, ROMPE CON EL ESPÍRITU DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 en materia de derechos humanos, de la cual deviene la obligación de crear esta norma, y CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS que establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de *"promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".*[13]

Con toda razón, la Corte de San José ha sostenido que en *"una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros".*[14]

[13] Artículo 1 párrafo tercero, reformado Diario oficial de la Federación 10 de junior de 2011.
[14] Corte IDH. "Opinión consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987..." Ob. Cit. Párrafo 26.

C) Sobre el articulado de la Minuta:

Enumerar las múltiples deficiencias de que adolece esta minuta equivaldría a rehacer la ley, y eso es materia de una iniciativa nueva. Baste señalar los principales puntos:

Debe modificarse el artículo 4 para incorporar la definición del Derecho Internacional Humanitario sobre Víctimas que otorga una protección más amplia.

A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150 para incluir a las víctimas de **desplazamiento interno forzado** aun cuando en tres artículos se incorporan ya la frase de "desplazamiento interno", pero no en el 6, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

En los artículos 15 y 23 se debe incorporar el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, derecho que ahora es negado toda vez que el artículo 12 se especifica que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales, a menos que no haya peritos nacionales capaces.

Asimismo, se es necesaria la modificación a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas, y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui géneris, lo cual contraviene los artículos 1o., 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. De igual manera la incorporación de la junta de gobierno, o la designación del Comisionado Presidente, por el Ejecutivo Federal atentan contra el propio esperiritu dela norma que es atender a las víctimas y no dar más facultades al ejecutivo federal

En el artículo 85 la integración del CEAV, como un Consejo Directivo y un Comisionado Presidente, así como un procedimiento para su elección, además se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley.

En el artículo 86 no se debe quitar el candado de dos años para servidores públicos, quienes deben contar con un candado de

perfil, de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En el artículo 88 referido a las facultades del Consejo Directivo, consideramos que con la Junta de Gobierno se está violentando el principio universal de no progresividad en materia de derechos. las propuestas de los artículos 84, del proyecto de dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso, como una traición a las demandas del propio movimiento.

Se lesiona la plena autonomía de la Comisión Ejecutiva y esto es un retroceso grave violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

La presentación para su dictamen de la esta Minuta con proyecto de decreto por la que se Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas nos lleva a plantearnos si está basada en los criterios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y que los hace vinculantes con las legislación interna.

La respuesta simplemente es **NO**.

La minuta contraviene el espíritu de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, misma que es el antecedente inmediato y origen de la Ley General de Víctimas que aquí se discute, la cual tenía por objetivo precisamente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en general, y de las víctimas en particular. En este sentido, la minuta que se pone a consideración, es una Ley regresiva hacia los derechos de las víctimas.

La minuta que se presenta es omisa y adolece de una serie de problemas fundamentales que no aborda o deja intocados y que dista de ser el instrumento idóneo dirigido al mejoramiento de la atención hacia las víctimas. Entre estas omisiones se encuentran las siguientes:

PRIMERO. Garantía de autonomía plena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En este sentido debe eliminarse el término "Junta de gobierno", que actualmente incluye el dictamen, y en su lugar sustituirse

por el "Consejo Directivo" tal y como fue propuesto por la sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado el 13 de abril de 2016.

Este Consejo Directivo estaría formado por víctimas, expertos en su atención de la sociedad civil y la academia, con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades de ejercicio presupuestal y el informe anual de la persona titular de la CEAV.

SEGUNDO. Consulta abierta y plural como mecanismo de elección y designación. No es aceptable la designación directa por parte del Ejecutivo, incluso con la ratificación senatorial. Lo que se requiere es la adopción de un mecanismo de designación semejante al de la CNDH en el cual el Senado realiza una consulta y convocatoria amplias y luego de un ejercicio de auscultación se determina quién se estima el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la CEAV.

TERCERO. Reconocimiento de los derechos de las personas víctimas de desplazamientos interno forzado

como violación autónoma de múltiples derechos humanos.

Es imperativo el reconocer la situación de desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante dentro de la Ley, e incluir la definición propuesta por la sociedad civil en la iniciativa de reforma que deberá constar explícitamente en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas.

CUARTO. Prohibición de reelección de los actuales comisionados de la CEAV y establecimiento de requisitos de independencia a militantes de partidos políticos y funcionarios que deseen competir para presidir la que habrá de ser la nueva CEAV.

Es imprescindible que se mantenga el impedimento que actualmente figura en la Ley que excluye de la titularidad de CEAV a quienes hubieran sido servidores públicos o dirigentes partidistas durante los dos años previos a su designación.

QUINTO. Establecer un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fijo.

Se debe establecer un porcentaje fijo como dotación presupuestaria anual al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación se conserve fija con un monto mínimo equivalente a 0.014% del Gasto Programable, sin condicionar ni reducir su entrega por parte del Ejecutivo, como una medida de anular su autonomía.

Sexto. Reconocimiento pleno y recursos para peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia.

La Ley debe reconocer plenamente el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal, e indicar que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes independientes elaborados por personas expertas nacionales y extranjeras, así como materiales, instrumental y laboratorios basados en sociedad civil y/o instituciones educativas.

Séptimo. Establecer sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores o negligentes.

Se debe incluir el capítulo de sanciones administrativas y penales que se incluyó en la iniciativa de reforma presentada por grupos de víctimas y sociedad civil el 13 de abril de 2016, que contempla un conjunto de supuestos de omisión, negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos, cuando de ellas se desprende daño a la vida, integridad, salud, libertad o acceso efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete al pleno de esta Comisión de Derechos Humanos la siguiente:

OPINIÓN

Primero. Se considera improcedente la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas citada en el proemio de la presente Opinión.

Segundo. Remítase la presente opinión a la Comisión de Justicia a efecto de que sea analizada en el proceso de dictaminación que realice esa Comisión y, en su momento, sea

anexada al dictamen que se emita, conforme a lo previsto por el artículo 69, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. Remítase copia de la presente opinión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Alfredo Basurto Román

Jesús Emiliano Álvarez López

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 diciembre de noviembre de 2016.

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- **Se REFORMAN** el primero y tercer párrafos del artículo 1; las fracciones I, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 6; las fracciones XXI, XXX y XXXIV del artículo 7; el primero, segundo y cuarto párrafos del artículo 8; la fracción IV del artículo 12; el segundo párrafo del artículo 28; el artículo 29; el último párrafo del artículo 30; el artículo 31; el primer párrafo del artículo 33; las fracciones I y II del artículo 34; el artículo 36; el artículo 38; la denominación del CAPÍTULO III del TÍTULO TERCERO para quedar como "MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO"; el primero y el último párrafos del artículo 40; el artículo 42; el artículo 45; el artículo 46; el artículo 47; el artículo 52; el artículo 54; el artículo 57; las fracciones I y VI del artículo 61; el primero y último párrafos del artículo 67; el artículo 68; el artículo 70; el artículo 71; el segundo, cuarto y quinto párrafos del artículo 79; el artículo 80; las fracciones I, III, XVI y XVII del artículo 81; el inciso b) de la fracción IV del artículo 82; el sexto párrafo del artículo 83; el primero y quinto párrafos del artículo 84; el artículo 85; el primer párrafo, las fracciones III y IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; las fracciones XIV, XXII, XXV, XXXV y XXXVI del artículo 88; el artículo 89; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 93; el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX, XII y XIII del artículo 95; el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 96; la fracción III del primer párrafo del artículo 97; el primer párrafo del artículo 98; la fracción IV del artículo 100; las fracciones IV y V del artículo 110; la fracción VI del artículo 114; la fracción X del artículo 116; el primer párrafo del artículo 117; las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 125; el primer párrafo del artículo 130; la fracción I del artículo 132; el artículo 134; el artículo 135; el artículo 136; el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 138; el artículo 145; el cuarto párrafo del artículo 164; el segundo párrafo del artículo 166; el primer párrafo del artículo 168. **Se ADICIONAN** el principio de "Interés superior de la niñez" al artículo 5, entre los principios de "Integralidad, indivisibilidad e interdependencia" y de "Máxima protección" recorriéndose los subsecuentes; las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 7; cinco últimos párrafos al artículo 8; un último párrafo al artículo 9; dos párrafos finales al artículo 12; dos párrafos al artículo 15; el párrafo quinto, recorriéndose los anteriores quinto a séptimo para ser sexto, séptimo y octavo del artículo 21; un último párrafo al artículo 27; un último párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 34; el artículo 39 Bis; dos últimos párrafos al artículo 64; dos últimos párrafos al artículo 79; la fracción XVIII al artículo 81; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 84, recorriéndose los actuales segundo, tercero, cuarto y quinto para ser quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente; el artículo 84 Bis; el artículo 84 Ter; el artículo 84 Quáter; el artículo 84 Quinquies; el artículo 84 Sexies; el artículo 84 Septies; el artículo 84 Octies; la fracción V al artículo 86; la fracción XXXVII al artículo 88; el artículo 88 Bis; la fracción XIV al artículo 95; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 110; las fracciones XI y XII al artículo 116; el artículo 125 Bis; un CAPÍTULO V "DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA" al TÍTULO OCTAVO, con los artículos 157 Bis, 157 Ter, 157 Quáter y 157 Quinquies. **Se DEROGAN** los artículos 16; la fracción XXX del artículo 88; 92; 94; la fracción VII del artículo 125; los artículos 175; 176; 177 y 178; de la Ley de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

...

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

...

Artículo 5. ...

Dignidad.- ...

Buena fe.- ...

Complementariedad.- ...

Debida diligencia.- ...

Enfoque diferencial y especializado.- ...

Enfoque transformador.- ...

Gratuidad.-...

Igualdad y no discriminación.- ...

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- ...

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- ...

Mínimo existencial.- ...

No criminalización.- ...

Victimización secundaria.- ...

Participación conjunta.- ...

Progresividad y no regresividad.- ...

Publicidad.- ...

Rendición de cuentas.- ...

Transparencia.- ...

Trato preferente.- ...

Artículo 6. ...

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas;

II. **...**

III. Comisiones de víctimas**:** Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México;

IV. a **VIII. ...**

IX. Fondo estatal: El fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa;

X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

XI. Ley: Ley General de Víctimas;

XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;

XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XV. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda;

XVI. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas;

XVIII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XIX. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XX. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y

XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XXII. ...

Artículo 7. ...

...

I. a **XX. ...**

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;

XXII. a **XXIX. ...**

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;

XXXI. y **XXXII. ...**

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de esta Ley, y

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

...

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva deberá cubrir, con cargo al Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 9. ...

...

...

...

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 12. ...

I. a **III. ...**

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. a **XIII. ...**

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15. ...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Derogado.

Artículo 21. ...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 27. ...

I. a **VI. ...**

...

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o a los Fondos Estatales, según corresponda.

Artículo 28. ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas Federales, de las entidades federativas y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30. ...

I. a **X. ...**

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, las entidades federativas o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

Artículo 33. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

...

Artículo 34. **...**

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, de las entidades federativas y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

II. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. a **VI. ...**

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 36. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO

Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que las Comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo.

Las Comisiones de víctimas deberán reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, de las entidades federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artículo 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 52. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 54. Los Gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

Artículo 57. La Federación, las entidades federativas y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 61. **...**

...

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

II. a **V. ...**

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;

VII. y **VIII. ...**

...

Artículo 64. **...**

I. a **VIII. ...**

...

...

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley y la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) ...

b) ...

...

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo, cuando la Comisión de víctimas de la entidad federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.

Artículo 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo o los Fondos Estatales, según corresponda, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 71. La Federación a través de la Comisión Ejecutiva o las entidades federativas, según corresponda, tendrán la obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo o a los Fondos Estatales los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 79. ...

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

...

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 80. El Gobierno Federal, de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 81. ...

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. ...

III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a su equivalente en las entidades federativas.

IV. a **XV. ...**

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo:

a) La obligación de las Comisiones de víctimas de entregar por escrito a la Comisión Ejecutiva la solicitud fundada y motivada de apoyo para la atención de la víctima;

b) La obligación de las Comisiones de víctimas de acompañar a cada solicitud de apoyo copia certificada del estado financiero que guarda su Fondo Estatal en el que demuestre que no cuenta con recursos suficientes para la atención de la víctima;

c) El plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y

d) La obligación de la Comisión Ejecutiva de dar aviso a la Auditoria Superior de la Federación en caso de incumplimiento de pago de la entidad federativa, y

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 82. **...**

I. ...

a) ...

b) ...

c) ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) ...

III. ...

a) ...

IV. ...

a) ...

b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

V. ...

Artículo 83. ...

...

...

...

...

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

...

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 95 de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

...

...

...

Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un Fondo estatal en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

I. Un representante de las siguientes secretarías de Estado:

a) Gobernación quien la presidirá;

b) Hacienda y Crédito Público;

c) Educación Pública;

d) Salud;

II. Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y

III. El titular de la Comisión Ejecutiva.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

Artículo 84 Quinquies. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

Artículo 84 Sexíes. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 84 Septies. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado Ejecutivo;

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y

V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 84 Octies. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.

La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se requiere:

I. y **II. ...**

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su designación;

IV. Contar con título profesional, y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. ...

I. a **XIII. ...**

XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

XV. a **XXI. ...**

XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;

XXIII. y **XXIV. ...**

XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal;

XXVI. a **XXIX. ...**

XXX. Derogado.

XXXI. a XXXIV. ...

XXXV. Hacer públicos los informes anuales sobre el funcionamiento del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;

XXXVI. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y

XXXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con el Fondo respectivo o carezca de fondos suficientes;

II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;

III. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en el ámbito de sus competencias;

IV. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste;

V. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por estar involucradas autoridades de diversas entidades federativas, o cuando aquél posea trascendencia nacional por cualquier otro motivo, y

VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos de derechos humanos locales, las Comisiones de víctimas locales, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus representantes. La determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados al Fondo Federal, por la Comisión de víctimas local con cargo al Fondo Local correspondiente, en cuanto éste cuente con los recursos para tal efecto, o por la entidad federativa, con cargo a su presupuesto, en caso de que aún no exista la Comisión de víctimas local o se haya constituido el Fondo Local.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homologas de las entidades federativas, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 90. ...

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta del Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 92. Derogado.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94. **Derogado**.

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;

III. ...

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

V. a **VIII. ...**

IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. ...

XI. ...

XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva;

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva en términos de la legislación aplicable.

Artículo 96. ...

...

El Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro federal.

...

Artículo 97. **...**

I. ...

II. ...

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, de las entidades federativas o municipal, así como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

...

...

...

Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva y sus correlativos de las entidades federativas, según corresponda de acuerdo a la competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.

...

...

...

...

Artículo 100. **...**

I. a **III. ...**

IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de las entidades federativas según la competencia;

V. a **XI. ...**

...

Artículo 110. ...

I. a **III. ...**

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva, y

VIII. El Ministerio Público.

...

Artículo 114. **...**

I. a **V. ...**

VI. Realizar a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el apoyo de las Comisiones de las entidades federativas, y de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

VII. a **XIII. ...**

Artículo 116. **...**

I. a **IX. ...**

X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas, en términos de esta Ley, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

...

...

...

...

...

Artículo 117. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno Federal y a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

Artículo 125. **...**

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;

II. **...**

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

VII. **Derogada**.

Artículo 125 Bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

Artículo 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

...

Artículo 132. ...

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido.

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;

II. a **VIII. ...**

...

...

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, en términos de lo establecido en el Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción III podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 93, fracción I de la Ley.

Artículo 136. El Fondo será administrado por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 138. El titular de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo, deberá:

I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

II. **...**

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, y

IV. **...**

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.

CAPÍTULO V

DE LOS FONDOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA

Artículo 157 Bis. El Fondo estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo estatal respectivo, para alcanzar el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 39 Bis, 68 y 88 Bis de esta Ley.

Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 164. ...

...

...

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando en el Gobierno Federal o en los gobiernos de las entidades federativas no cuenten con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

Artículo 166. ...

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta Ley.

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Federal.

...

...

Artículo 175. Derogado.

Artículo 176. Derogado.

Artículo 177. Derogado.

Artículo 178. Derogado.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley.

Quinto.- Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años.

En adelante la designación del Comisionado Ejecutivo se realizará de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley.

Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013.

En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.

Sexto.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octies de la Ley.

Séptimo.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

Octavo.- Las erogaciones que, en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales en el ejercicio fiscal correspondiente.

Noveno.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

Décimo.- Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

Décimo Primero.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Décimo Segundo.- El Sistema Nacional de Atención a Víctimas promoverá la celebración de los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo.

Décimo Tercero.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento.

Décimo Cuarto.- En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Décimo Quinto.- Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el Comisionado Ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

Décimo Sexto.- Constituida la Asamblea Consultiva, deberá elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno dentro de los diez días siguientes.

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.- Sen. **Pablo Escudero Morales**, Presidente.- Dip. **Edmundo Javier Bolaños Aguilar**, Presidente.- Sen. **Lorena Cuellar Cisneros**, Secretaria.- Dip. **Alejandra Noemí Reynoso Sánchez**, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Miguel Ángel Osorio Chong**.- Rúbrica.